

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico:
¿alternativa para un sistema de justicia criminal?: un
análisis comparado entre España, Puerto Rico y los Estados
Unidos de América**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

José Efraín Hernández Acevedo

DIRECTOR

Julio Banacloche Palao

Madrid

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO**



TESIS DOCTORAL

**LA REINSTALACIÓN DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN PUERTO RICO:
¿ALTERNATIVA PARA UN SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL?: UN
ANÁLISIS COMPARADO ENTRE ESPAÑA, PUERTO RICO Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR
JOSÉ EFRAÍN HERNÁNDEZ ACEVEDO

DIRECTOR
PROF. DR. JULIO BANACLOCHE PALAO

Madrid, 2019



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

**DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS
PRESENTADA PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR**

D./Dña. José Efraín Hernández Acevedo,
estudiante en el Programa de Doctorado en Derecho,
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid, como autor/a de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor y
titulada:

La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico: ¿alternativa para un sistema de justicia criminal?:
un análisis comparado entre España, Puerto Rico y los Estados Unidos de América

y dirigida por: Prof. Dr. Don Julio Banacloche Palao

DECLARO QUE:

La tesis es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los derechos de propiedad industrial u otros, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, en particular, la Ley de Propiedad Intelectual (R.D. legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en particular, las disposiciones referidas al derecho de cita.

Del mismo modo, asumo frente a la Universidad cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la autoría o falta de originalidad del contenido de la tesis presentada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En Madrid, a 4 de septiembre de 2019

**José Efraín
Hernández
Acevedo**
Fdo.: _____

Digitally signed by
José Efraín
Hernández Acevedo
Date: 2019.09.04
10:33:34 -04'00'

Esta DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD debe ser insertada en
la primera página de la tesis presentada para la obtención del título de Doctor.

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO DE DERECHO COMPARADO**



TESIS DOCTORAL

La reinstalación de la prisión provisional en Puerto Rico: ¿alternativa para un sistema de justicia criminal?: un análisis comparado entre España, Puerto Rico y los Estados Unidos de América

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR
José Efraín Hernández Acevedo**

Director
Prof. Dr. Julio Banacloche Palao

Madrid, 2019

© José Efraín Hernández Acevedo, 2019

AGRADECIMIENTOS

A mi esposa María de Lourdes Ginés y a mi hija Andrea Margarita por haberme apoyado durante esta ardua empresa durante los pasados años.

Al profesor Dr. Julio Banacloche Palao por todo su esfuerzo y dedicación para que saliera lo mejor de mí en esta investigación y que la misma sirva como una aportación para la ciencia jurídica.

Al Dr. José Ignacio Rubio San Román y a la Dra. Rosa María Moreno Flores quienes a través del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid han dejado una huella indeleble en la historia del derecho puertorriqueño.

A la Universidad Interamericana de Puerto Rico y a su presidente Lcdo. Manuel J. Fernós López-Cepero por haberme apoyado a alcanzar mi grado de doctor.

A mi madre Ibis que siempre me estimuló a seguir adelante en mi carrera académica hasta lograr todas mis metas.

A todos muchas gracias.

J.E.H.A.

SUMARIO

<u>CAPÍTULO PRELIMINAR.....</u>	1
1. Introducción: planteamiento general, origen, razones y necesidad del trabajo.....	1
2. Definición de objetivos.....	2
3. Estructura y contenidos del presente trabajo.....	3
<u>CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA.....</u>	5
1.1 La Prisión Provisional antes del siglo XIX.....	5
1.2 La Constitución Española de 1812.....	6
1.3 Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia de 1835.....	7
1.4 Ley Provisional Reformada de 1848.....	8
1.5 Las Constituciones de 1837 y 1845.....	9
1.6 La Constitución de 1869.....	9
1.7 Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872.....	10
1.8 Constitución Española de 1876.....	11
1.9 Compilación General de Enjuiciamiento Criminal de 1879.....	13
1.10 Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.....	14
1.11 La Constitución de 1978.....	18
1.12 Ley 16/1980, de 22 de abril.....	19
1.13 Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril.....	22
1.14 Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre.....	24
1.15 Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo.....	27
1.16 Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre.....	28
<u>CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN PUERTO RICO.....</u>	35
2.1 Comienzos del siglo XIX.....	35
2.2 El Estatuto de Bayona de 1808.....	36
2.3 La Constitución de Cádiz de 1812.....	38
2.4 El Estatuto Real de 1834.....	41
2.5 La Constitución de 1837 y el comienzo de las “Leyes Especiales”.....	42
2.6 La Constitución de 1845.....	47
2.7 La Constitución de 1869.....	49
2.8 Constitución de 1876.....	51
2.9 Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal o Reglas para la Aplicación del Código Penal en las Islas de Cuba y Puerto Rico de 1879.....	52
2.10 Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico de 1888.....	54
2.11 La Carta Autonómica de 1897.....	60
2.12 Instauración del Gobierno Militar Estadounidense en Puerto Rico (1898 – 1900)	64

2.13	La derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1888 y la “americanización” del Derecho Procesal Penal Puertorriqueño.....	74
2.14	Las Comisiones Revisoras y su efecto en el Derecho Procesal Penal Puertorriqueño.....	81
2.15	El Código de Enjuiciamiento Criminal y la Detención Preventiva.....	93
2.16	La Detención Preventiva y la Pena de Muerte (1902 – 1929).....	34
2.17	La abolición de la Pena de Muerte y su efecto en la Detención Preventiva (1929 – 1951)	103

CAPÍTULO 3 ANTECEDENTES DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL ESTADOUNIDENSE EN PUERTO RICO..... **107**

3.1	Las Comisiones Militares (1898 – 1899)	107
3.2	La Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento De Puerto Rico (1899 – 1900)	111
3.3	El Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (1900 al presente)	115

CAPÍTULO 4 LA PRISIÓN PROVISIONAL EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD..... **119**

4.1	Concepto.....	119
4.2	Fundamento.....	123
4.3	Finalidad.....	124
4.4	Naturaleza jurídica.....	131
4.5	Clases.....	131
4.6	Presupuestos.....	133
4.7	Requisitos de tiempo.....	136
4.8	Procedimiento.....	139
4.9	Efectos de la prisión provisional.....	142

CAPÍTULO 5. LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL PUERTORRIQUEÑO EN LA ACTUALIDAD..... **149**

5.1	Concepto.....	149
5.2	Fundamento.....	150
5.3	Finalidad.....	187
5.4	Naturaleza jurídica.....	188
5.5	Clases.....	188
5.6	Presupuestos.....	189
5.7	Requisitos de tiempo.....	189
5.8	Procedimiento.....	197
5.9	Efectos de la detención preventiva.....	214

<u>CAPÍTULO 6 LA DETENCIÓN PREVENTIVA (“PRE-TRIAL DETENTION”) EN EL SISTEMA FEDERAL ESTADOUNIDENSE EN LA ACTUALIDAD.....</u>	217
6.1 Concepto.....	217
6.2 Fundamento.....	219
6.3 Finalidad.....	255
6.4 Naturaleza jurídica.....	256
6.5 Clases.....	256
6.6 Presupuestos.....	257
6.7 Requisitos de tiempo.....	258
6.8 Procedimiento.....	261
6.9 Efectos de la detención preventiva (“pre-trial detention”).....	262
<u>CAPÍTULO 7: LA RELACIÓN ENTRE PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SU EFECTO EN LOS DERECHOS DEL ACUSADO.....</u>	265
7.1 Los Casos Insulares y sus efectos en los derechos de los acusados en Puerto Rico.....	265
7.2 La protección de los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos de América a los acusados en Puerto Rico a nivel local.....	268
7.3 El caso: Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle y sus posibles efectos en cuanto a la detención de acusados en Puerto Rico.....	274
<u>CAPÍTULO 8: LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y FIANZA EN PUERTO RICO Y LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO ALTERNATIVA.....</u>	281
8.1 Los aspectos que hacen inconstitucional el actual sistema de detenciones y fianzas en Puerto Rico.....	281
8.1.1 La relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y su efecto en los derechos de los acusados frente al sistema de detención y fianza.....	281
8.1.2 El sistema de detención y fianza de Puerto Rico vulnera las doctrinas establecidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en <i>Stack v. Boyle</i> y en <i>Bell v. Wolfish</i>	282
8.1.3 El proceso de fianza y detención en Puerto Rico es incompatible con lo establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en <i>United States v. Salerno</i>	285
8.2 Alternativas a la inconstitucionalidad.....	287
8.2.1 Fortalezas y debilidades de los sistemas de detención preventiva y prisión provisional de España, los Estados Unidos y Puerto Rico.....	287
8.2.2 El regreso de prisión provisional como alternativa a la crisis constitucional.....	291
<u>CONCLUSIONES.....</u>	295
<u>“ABSTRACT”</u>	299

<u>RESUMEN.....</u>	301
<u>ANEXO.....</u>	303

ABREVIATURAS

BOE	Boletín Oficial del Estado
CE	Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978
DPR	Decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico
LECRIM	Ley de Enjuiciamiento Criminal de España
LPRA	Leyes de Puerto Rico Anotadas
REV. COL. ABOG. P.R.	Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico
REV. JUR. UPR	Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico
REV. JUR. UIPR	Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional de España
TSPR	Tribunal Supremo de Puerto Rico

CAPÍTULO PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN

A través de esta investigación realizamos un análisis de la prisión provisional y la detención preventiva en España, Puerto Rico y los Estados Unidos, buscando demostrar que son medidas cautelares necesarias dentro del proceso penal. Para acreditarlo utilizamos el caso de Puerto Rico, quien tuvo la prisión provisional en su ordenamiento hasta 1902 y la detención preventiva hasta que abolió la pena de muerte en 1929. A través de dos decisiones, una de 1919 y otra de 1950, el Tribunal Supremo de Puerto Rico entendió que al quedar abolida la pena de muerte se extendía el derecho a quedar en libertad bajo fianza a todos los acusados. Esto luego fue llevado a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 a pesar de las advertencias realizadas por los expertos. Esto provoca que, hasta la fecha, Puerto Rico sea la única jurisdicción estadounidense que prohíbe la detención preventiva como medida cautelar y extiende el derecho a la libertad bajo fianza a todos los acusados.

Esta situación anómala podría desembocar en una crisis constitucional debido a que los jueces puertorriqueños, al no contar con la prisión provisional o la detención preventiva como medida cautelar, recurren a la imposición de fianzas excesivas para lograrlo. En cualquier momento esta práctica podría ser impugnada en los tribunales ya que violenta no sólo la Constitución del Estado Libre Asociado, sino también la de los Estados Unidos de América que también se aplica en Puerto Rico. Esto podría ocurrir si un acusado al que se le imponga una fianza excesiva lleva un caso ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, alegando que se le está violando su derecho a que no se le impongan fianzas excesivas. Además, puede alegar que se vulnera el derecho al debido proceso al no cumplirse en Puerto Rico con lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para llevar a cabo detenciones de acusados antes del juicio. Aunque el caso se podría llevar en los tribunales puertorriqueños alegando que se viola la prohibición de fianzas excesivas de la Constitución local, hemos visto que el Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha validado la práctica de la imposición de fianzas excesivas para lograr la detención de acusados. Al no contar con un sistema regulado de prisión o detención como el español o el estadounidense, muchos acusados en Puerto Rico terminan en la cárcel al no poder prestar la fianza impuesta.

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha decidido si la prohibición de fianzas excesivas de la Constitución Federal es un derecho fundamental que se extiende a los puertorriqueños. Esto debido a que, por la condición política actual de territorio no incorporado, en Puerto Rico, la Constitución estadounidense no se aplica en su totalidad. Según la doctrina de los casos insulares, en los territorios no incorporados como Puerto Rico sólo se aplican aquellos derechos que el tribunal determine que son fundamentales. Y esto se decide caso a caso.

Para evitar esta crisis, se propone como alternativa que Puerto Rico regrese al modelo de prisión provisional español, tal y como este ha sido reformado hasta la fecha. La prisión provisional española podría muy bien ajustarse al sistema puertorriqueño, sin que entre en conflictos con la norma federal estadounidense. De igual manera, se podría adoptar una normativa similar a la federal estadounidense o a la de los Estados que permiten la detención preventiva de los acusados.

A. Definición de objetivos

A través de esta investigación, estudiaremos a fondo la prisión provisional en España y la detención preventiva en Puerto Rico y en el sistema federal de Estados Unidos de América. El estudio nos ayudará a identificar las fortalezas y debilidades de cada sistema, para luego proponer soluciones a los problemas que se identifiquen. Pretendemos como producto de esta investigación esbozar propuestas que mantengan un balance entre los derechos los individuos y los de la ciudadanía, sin vulnerar las disposiciones constitucionales, y utilizando las experiencias adquiridas y discutidas en este trabajo.

B. Estructura y contenidos de presente trabajo

La investigación constará de una introducción, siete capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo estudiaremos la evolución de la prisión provisional como medida cautelar en el Derecho procesal penal español. En el segundo capítulo se exponen los antecedentes de la prisión provisional y la detención preventiva en Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el 1951. En el tercer capítulo se presentan los antecedentes de la jurisdicción federal estadounidense en Puerto Rico. En el cuarto capítulo se explica la evolución de la prisión provisional en el sistema procesal penal español a partir de la Constitución del 1978. En el quinto capítulo se desarrolla el sistema puertorriqueño de fianza y detención de acusados a partir de la puesta en vigor de la Constitución del Estado Libre Asociado en 1952. El sexto capítulo aborda el sistema de detención preventiva en el sistema federal estadounidense a través de leyes federales de reforma a la fianza de 1966 y 1984 y las decisiones del Tribunal Supremo. En el séptimo capítulo se analiza la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América y el posible efecto que esta pueda tener en el sistema de detención de acusados en la Isla. En el octavo capítulo exponemos el por qué consideramos inconstitucional el sistema de fianza y detención en Puerto Rico. Además, comparamos las fortalezas y debilidades del sistema de detención preventiva estadounidense y el de prisión provisional español y proponemos una alternativa a la crisis en Puerto Rico. Por último, se incluyen las conclusiones de la investigación y las posibles soluciones a los problemas planteados.

CAPÍTULO 1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PRISIÓN PROVISIONAL EN ESPAÑA

1.1 La Prisión Provisional antes del siglo XIX.

La prisión como medida cautelar es una institución que ha estado presente durante siglos en el Derecho procesal español. Como destaca RAMOS VÁZQUEZ, *“históricamente el apresamiento se había utilizado en el ámbito civil para garantizar el pago de deudas y en el ámbito penal para acusados de delito donde se presumía la culpabilidad del acusado”*.¹ Proviene del sistema inquisitorio que regía en el proceso penal español hasta principios del siglo XIX. Según MORÁN MARTÍN, el objetivo de este sistema era el de tratar *“de conseguir por todos los medios la confesión del reo”*.²

Para TOMÁS Y VALIENTE, durante los siglos XIII al XVIII el proceso penal respondía a una preocupación principal: *“la de facilitar el castigo penal de los posibles autores de hechos delictivos”*.³ TOMÁS Y VALIENTE destaca que el *“movimiento liberal comenzó a permear el Derecho español y en específico el Derecho procesal, mucho más tarde que en el resto de Europa”*.⁴

¹ Isabel Ramos Vázquez, *Arrestos, Cárceles y Prisiones en los Derechos Históricos Españoles*, pág. 57, (Madrid, 2008).

² Remedios Morán Martín, *Historia del Derecho Privado, Penal y Procesal*, pág. 475, (Madrid, 2002).

³ Francisco Tomás y Valiente, *Manual de Historia del Derecho Español*, 531, (Madrid, 1983).

⁴ *“El pensamiento de la Ilustración reaccionó en toda Europa contra ese tipo de proceso penal y desde la segunda mitad del siglo XVIII se generalizó una campaña contra el proceso penal inquisitivo y contra sus piezas básicas: contra la tortura, el secreto de la acusación y la total y parcial indefensión del reo. Es entonces cuando realmente se acepta el principio de la presunción de inocencia en favor de cualquier ciudadano y es también a partir de las primeras declaraciones de derechos y las más tempranas Constituciones cuando se institucionalizan las normas básicas de un nuevo tipo de proceso penal, con la preocupación fundamental de que el desarrollo del mismo no conculque nunca las garantías constitucionales en favor de los derechos del individuo.*

En España tardó mucho en realizarse una reforma profunda del proceso penal. La Constitución de 1812 contenía algunos preceptos básicos en esta materia, tales como la prohibición de tortura y de otros apremios y la recomendación de que el proceso penal fuese público a partir de la tomar de confesión del “tratado como reo”. Pero ni bajo la vigencia de dicha Constitución ni en

1.2 La Constitución Española de 1812.

No es hasta la llegada de la Constitución Española de 1812 que comienzan a brindársele tímidamente algunos derechos a los acusados y que pudieron haber tenido un efecto en el manejo de esta medida cautelar, aunque continuaba teniendo una visión punitiva. España comienza – por lo menos en el papel – a abandonar el sistema inquisitorio que reinaba en su sistema procesal penal. Sobre esto nos dice SÁNCHEZ ARCILLA:

*“Aparte de las normas de rango constitucional, las Cortes de Cádiz hicieron una profunda reforma de la administración de la justicia (Reglamento de Audiencias y Juzgados de primera instancia, responsabilidad de los jueces y el Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia). Pero hasta la muerte de Fernando VII y la consolidación del régimen liberal no se inició la transformación definitiva del sistema del Antiguo Régimen”.*⁵

Entre los derechos que estaban en la nueva constitución se encontraba el de obtener procesos breves y sin vicios para que los delitos fuesen prontamente castigados (art. 286).⁶ Este artículo *“ordenaba la redacción de un texto procesal penal que erradicara los vicios y errores del Antiguo Régimen y adoptara los principios liberales en materia procesal criminal”*.⁷ También se estableció que, antes de ser llevado a prisión, el arrestado tenía que ser presentado ante un juez, y que, de haber algún inconveniente, esto se tendría que hacer en un término de veinticuatro horas (art. 290).⁸ El detenido tendría derecho a saber el nombre de su acusador y a conocer el contenido de los documentos relacionados a su caso,

las décadas centrales del siglo se llevó a cabo la redacción de un Código procesal penal regulador de un proceso adecuado a los principios constitucionales de un Estado liberal. También en este aspecto el retraso de la codificación procesal penal tiene un matiz político y se debe, más allá de cualquier explicación superficial, a la escasa sinceridad del liberalismo español en cuanto hiciera referencia a la defensa de los derechos del individuo frente al Estado”. TOMÁS Y VALIENTE, supra nota 3, en la pág. 532.

⁵ José Sánchez-Arcilla Bernal, *Historia del Derecho*, pág. 361, (Madrid, 2008).

⁶ Constitución Política de la Monarquía Española, pág. 74, (Cádiz, 1812).

⁷ Javier Alvarado Planas, Jorge J. Montes Salguero, *Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones*, pág. 699, (Madrid, 1999).

⁸ Constitución Política de la Monarquía Española, *supra* nota 6 en la pág. 75.

las declaraciones de los testigos y sus nombres (arts. 300 y 301).⁹ Se exigía el auto motivado para cada preso, y sin esto no se le admitiría en cárcel (art. 293).¹⁰ Y permitía la libertad bajo fianza en ciertos casos (arts. 295 – 296).¹¹ Por último es importante destacar en nuestra investigación que la Constitución de Cádiz establecía que el Código criminal sería el mismo para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias pudieran hacer las Cortes.¹²

1.3 Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia de 1835.

Estos derechos se vieron reflejados en el Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia de 1835. Aunque el mismo no utiliza el término de prisión provisional, sí establece los derechos y el procedimiento a seguir con acusados que serían tratados como reos. En su artículo 300 se establecía que, *“dentro de veinticuatro horas, se le informara de la causa de su prisión y que se acreditara en el sumario el delito por el cual se le acusaba”*.¹³ También tenía derecho a que se le leyeran las declaraciones y documentos en que se fundara la acusación, y los nombres de los testigos de los que debía dársele *“cuantas señas quepan y basten para que pueda venir en conocimiento de quienes son”* (art. 9).¹⁴ Dicho artículo también señalaba que la acusación se limitaría a los cargos que efectivamente resultaran del sumario. El artículo 11 decía que se tenía que liberar al reo *“en cualquier estado de la causa en que resulte ser inocente”*.¹⁵

⁹ Constitución Política de la Monarquía Española, *supra* nota 6 en la pág. 77.

¹⁰ *Id.* en la págs. 75-76.

¹¹ *Id.* en la pág. 76.

¹² *Id.* en la pág. 67.

¹³ Florencio García Goyena, *Febrero librería de Jueces, Abogados y Escribanos, comprensiva de los códigos Civil, Criminal y Administrativo tanto en la parte teórica como en la práctica con arreglo en un todo a la legislación hoy vigente*, pág. 148, (Madrid, 1843).

¹⁴ *Id.* en la pág. 60.

¹⁵ *Id.*

1.4 Ley Provisional Reformada de 1848.

El Código Penal de 1848 contenía una Ley Provisional Reformada, prescribiendo tan sólo diez reglas para su aplicación. En esta ley no se establecía norma alguna para aplicar a los “tratados como reos”. En 1850 se reforma el Código Penal y esta vez se incluye una Ley Provisional Reformada para su aplicación con cincuenta y siete reglas. Esta nueva ley, que advertencia de que iba a regir hasta que se publicara un código de procedimientos, sí contenía algunas disposiciones sobre la detención de acusados. La regla vigesimoquinta establecía que, para proceder a la prisión de una persona, es preciso que el delito que se le atribuya tenga señalada una pena más grave que la de confinamiento menor o arresto mayor.¹⁶ La pena del arresto mayor duraba de uno a seis meses y la de arresto menor de uno a quince días.¹⁷ Se exceptuaba el delito de vagancia, *“del que siempre habrá lugar a la prisión, cualquiera que sea la pena señalada por el Código”*.¹⁸ Vemos en esta regla que se establecía que, para poder decretar la prisión, la persona tenía que estar acusada de un delito cuya pena superara la de confinamiento menor¹⁹ o arresto mayor conforme a las escalas del artículo 79 del Código Penal.²⁰

La ley además establecía que el detenido tenía que ser llevado ante un juez dentro de un término de veinticuatro horas para que este determinara “prisión o soltura”.²¹ La trigésimo primera proveía para que el juez pudiera ordenar la prisión, cuando tuviera motivo racionalmente fundado para creer a una persona culpable de delito que merezca pena más grave que la expresada en la regla 25ª. Aquella se decretaría por el Juez en auto motivado y se expediría mandamiento por escrito. El nuevo Código dejaba al albedrío del juez la

¹⁶ Código Penal de España, pág. 123 (1850).

¹⁷ Gaceta de Madrid, 22 de marzo de 1848, en la pág. 1.

¹⁸ Código Penal de España, *supra* nota 16, en la pág. 123.

¹⁹ *Id.* en la pág. 133.

²⁰ Art. 79: En los casos en que la ley señala una pena inferior o superior en uno o más grados a otra determinada, se observaran para su graduación las reglas prescritas en el artículo 66.

²¹ Código Penal de España, *supra* nota 16, en la pág. 133.

determinación de cárcel para algunos acusados de ciertos delitos, mientras había otros donde el mandamiento a prisión era automático.²²

1.5 Las Constituciones de 1837 y 1845.

Las Constituciones españolas de 1837 y 1845 que rigieron durante la vigencia del Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia de 1835 y la Ley Provisional Reformada del Código Penal de 1848, nada establecían sobre el proceso a seguir con los detenidos. Ambas se limitaban a decir en el artículo siete que ningún español sería detenido o preso sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.²³

Es importante destacar, para efectos de nuestra investigación, que es a partir de la Constitución de 1837 cuando se comenzó a incluir un artículo que indicaba que las provincias de ultramar serían gobernadas por leyes especiales. Esta disposición constitucional dice DELGADO CINTRÓN *“le negó a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas su legítima representación en las Cortes o legislaturas españolas en Madrid”*.²⁴ Puerto Rico no tuvo, pues, desde esa fecha hasta 1870, diputados que representasen sus posiciones ante los poderes metropolitanos.

1.6 La Constitución de 1869.

Señala TOMÁS Y VALIENTE que, *“a raíz del movimiento liberal que trajo la revolución española de 1868, surge la Constitución de 1869; de esta, la Ley*

²² 34ª En los delitos que el Código señale prisión correccional o presidio de igual clase, permanecerá el reo en libertad, al prudente arbitrio del Juez, según las circunstancias del hecho, si diere fianza de 100 a 500 duros depositados en el Banco español de San Fernando, o de 500 a 2,00 duros en fincas bajo la responsabilidad del escribano que otorgue la escritura.

35ª Se exceptúan de lo dispuesto en la regla precedente y en la 25ª los delitos de robo, hurto y estafa, y los de atentado y desacato contra la Autoridad, en los cuales habrá lugar siempre a la prisión del reo, y será efectiva, cualquiera que sea la pena que merezca.

Permanecerán también en prisión los reos de lesiones graves o menos graves, mientras no resulte la sanidad del ofendido.

²³ Constitución de la Monarquía Española, art. 7 (1837) y Constitución de la Monarquía Española, art. 7 (1845).

²⁴ Carmelo Delgado Cintrón, *Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico (1898–2015)*, pág. 56, (2015).

Orgánica del Poder Judicial de 1870; y de ambas, la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872".²⁵ Esta nueva Constitución contenía una serie de artículos en el título I que tendrían su impacto en la Prisión Provisional que establecería la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal.²⁶

1.7 Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872.

La Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 es el primer cuerpo de ley procesal penal que utiliza el término de prisión provisional para identificar la encarcelación de un acusado que se encuentra detenido mientras se ve en el tribunal una causa en su contra. La ley regulaba la prisión provisional en sus artículos 395 al 398.²⁷

²⁵ Tomás y Valiente, *supra* nota 3, en la pág. 533.

²⁶ Artículo 4: Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de Juez competente. El auto por el cual se haya dictado el mandamiento se ratificará o repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión. Artículo 8: Todo auto de prisión, de registro de morada o de detención de la correspondencia escrita o telegráfica, será motivado. Cuando el auto carezca de este requisito, o cuando los motivos en que se haya fundado se declaren en juicios ilegítimos o notoriamente insuficientes, la persona que hubiere sido presa, o cuya prisión no se hubiere ratificado dentro del plazo señalado en el Artículo 4, o cuyo domicilio hubiere sido allanado, o cuya correspondencia hubiere sido detenida, tendrá derecho a reclamar del Juez que haya dictado el auto una indemnización proporcional al daño causado, pero nunca inferior a 500 pesetas. Los agentes de la Autoridad pública estarán asimismo sujetos a la indemnización que regule el Juez cuando reciban en prisión a cualquiera persona sin mandamiento en que se inserte el auto motivado, o cuando la retengan sin que dicho auto haya sido ratificado dentro del término legal. Artículo 10: Tendrá asimismo derecho a indemnización, regulada por el Juez, todo detenido que dentro del término señalado en el Artículo 3 no haya sido entregado a la Autoridad judicial. Si el Juez, dentro del término prescrito en dicho Artículo, no elevare a prisión la detención, estará obligado para con el detenido a la indemnización que establece el Artículo 8. Artículo 11: Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal a quien en virtud de leyes anteriores al delito, compete el conocimiento y en la forma que éstas prescriban. No podrán crearse Tribunales extraordinarios ni comisiones especiales para conocer de ningún delito. Artículo 12: Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en esta Constitución, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier español. La ley determinará la forma de proceder sumariamente en este caso, así como las penas personales y pecuniarias en que haya de incurrir el que ordenare, ejecutare o hiciere ejecutar la detención o prisión ilegal.

²⁷ Art. 395. Mientras que la causa se hallare en estado de sumario, solamente podrá decretar prisión provisional el Juez de instrucción o el que formare las primeras diligencias. Cuando se entrare en el periodo del juicio oral, la prisión, como la libertad provisional, serán decretadas solamente por tribunal competente. Art. 396. Para decretar la prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes: 1. Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente caracteres de delito. 2. Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión mayor, según la escala general comprendida en el Código Penal, o bien que, aunque tenga señalada pena inferior, considere necesaria el Juez la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que presente la fianza que señalare. 3. Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Art. 397. Procederá también la prisión provisional

La nueva ley también formalizaba el proceso mediante el cual un acusado podía quedar en libertad mediante la prestación de una fianza. Esto se reguló a través de los artículos 405 al 426. Podía quedar en libertad bajo fianza el acusado por un delito cuya pena fuera inferior a la de presidio mayor. Quedaba a discreción del juez si el procesado había de dar o no fianza para quedar en libertad provisional. El artículo 406 determinaba los criterios que debía seguir el juez a la hora de fijar una fianza a un acusado: para determinar la calidad y cantidad de la fianza se tomarían en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado, y todas las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o mejor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial.²⁸ El artículo 407 indicaba la finalidad de la fianza: se destinaría a responder de la comparecencia del procesado cuando fuese llamado por el Juez o Tribunal que conociere de la causa.²⁹ La fianza podía ser personal, hipotecaria, en metálico o en efectos públicos al precio de cotización.³⁰

En opinión de SAINZ GUERRA, la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 “*estaba excesivamente apegada a las concepciones procesales del Antiguo Régimen*”.³¹

1.8 Constitución Española de 1876.

Los artículos relativos a las detenciones se mantuvieron prácticamente inalterados en comparación con las constituciones del 1837 y 1845, lo que

cuando concurran la primera y segunda circunstancias del artículo anterior, y el procesado no hubiese comparecido al primer llamamiento del Juez o Tribunal que conociere la causa. Art. 398. Para llevar a efecto el auto de prisión se expedirá un mandamiento, cometido a alguacil del Juzgado o portero del Tribunal, o al funcionario de policía judicial que hubiere de ejecutarlo, y otro al Alcaide de la cárcel que hubiere de recibir al preso. En estos mandamientos se insertará a la letra el auto de prisión.

²⁸ Ley de Enjuiciamiento Criminal, anotada y seguida de los artículos de la Constitución y de los de la Ley Provisional sobre la organización del Poder Judicial que están relacionados con ella, pág. 97 (1873).

²⁹ *Id.*

³⁰ *Id.*

³¹ Juan Sainz Guerra, *Historia del Derecho Español*, pág. 517 (Madrid, 2008).

mantenía también sin cambios las disposiciones sobre la prisión provisional en la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872:

“Para decretar la prisión provisional serán necesarias las siguientes circunstancias: 1.a Que conste la existencia del delito. 2.a Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión mayor, y aunque la tenga inferior, crea la juez necesaria la prisión, teniendo en cuenta los antecedentes del procesado. 3.a Que aparezcan motivos suficientes para creer responsable de delito a la persona contra quien sea haya de dictar auto de prisión”.³²

En esta época los tratadistas comenzaban a resaltar la diferencia entre la detención preventiva “de los delincuentes” y la prisión provisional. MARÍA RUIZ Y RODRÍGUEZ, en su Tratado General de Procedimientos Criminales de 1878, destacaba a la prisión provisional como una medida excepcional cuya intención era evitar la “rebeldía” del acusado.

“[L]a detención de los delincuentes, que es una medida preventiva, tomada en caso de necesidad, y cuya duración des por consiguiente, muy breve. Otra cosa más formal es la prisión, aunque sea provisional, aunque sea provisional; medida que sólo puede adoptarse en casos determinados, y cuyos efectos son más sensibles. Llamase provisional, porque solo dura mientras se sustancia la causa y porque no se impone como pena, sino que tiene por objeto evitar la rebeldía del procesado”.³³

LASTRES Y JUÍZ destaca que determinación de prisión provisional “podía ser cambiada en cualquier momento durante el procedimiento: los autos de prisión y libertad provisionales y de fianzas eran reformables de oficio o a instancia de parte, durante todo el curso de la causa; en su consecuencia, el procesado podía ser preso y puesto en libertad cuantas veces se considerara procedente”.³⁴

³² Francisco Lastres y Juíz, *Procedimientos Civiles y Criminales*, pág. 329 (Madrid, 1877).

³³ Hermenegildo María Ruiz y Rodríguez, *Tratado General de Procedimientos Criminales*, pág. 263 (Madrid, 1878).

³⁴ Francisco Lastres y Juíz, *La Fianza y la Prenda*, págs. 144-145 (Madrid, 1879).

1.9 Compilación General de Enjuiciamiento Criminal de 1879.

SÁNCHEZ-ARCILLA destaca que con la Restauración y la Constitución de 1876 *“fue necesaria la revisión de las leyes procesales, y la Comisión General de Codificación procedió a realizar un nuevo Código en 1879 (Compilación General sobre el procedimiento criminal), que recibió muy duras críticas de sus contemporáneos”*.³⁵ SAINZ GUERRA, por su parte concluye que esta compilación *“también reestablecía normas del Antiguo Régimen”*.³⁶ Según la ley de 30 de diciembre de 1878, *“se autorizaba al Ministro de Gracia y Justicia para que, previa consulta a la Comisión de Códigos, publicara una compilación general, articulada y metódica en la que se refundieran las disposiciones que regían en ese momento”*.³⁷

Relata SÁNCHEZ-ARCILLA que, debido a las críticas, *“se autorizó en 1881 al gobierno para que redactara una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la base de la Compilación de 1879 que, al aprobarse su texto, se convirtió en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que, con enmiendas, aún sigue vigente en España”*.³⁸

En cuanto a la prisión provisional, en esta nueva compilación surgen unos cambios en comparación con la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872. La compilación regula la prisión provisional en sus artículos 655 al 665.³⁹

³⁵ Sánchez-Arcilla, *supra* nota 5, en la pág. 363.

³⁶ Sainz Guerra, *supra* nota 31, en la pág. 518.

³⁷ Hermenegildo María Ruiz y Rodríguez, *Compilación General de las Disposiciones Vigentes sobre el Enjuiciamiento Criminal*, pág. 16 (Madrid, 1880).

³⁸ Sánchez-Arcilla, *supra* nota 5, en la pág. 363.

³⁹ Art. 655. Para decretar prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes: 1ª. Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2ª. Que éste tenga señalada una pena superior a la de prisión mayor según la escala general comprendida en el Código penal, o bien que aunque tenga señalada pena inferior, considere necesaria el Juez la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que presente la fianza que le señalare. 3ª. Que aparezcan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya dictado el auto de prisión.

Mientras la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 exigía la existencia del delito para decretar la prisión provisional, la Compilación General de Enjuiciamiento Criminal de 1879 exigía la existencia de un hecho que presentara los caracteres de delito. También la ley de 1872 establecía que se podía decretar la prisión provisional cuando el delito tuviera una pena inferior a la de prisión mayor si el juez la entendía necesaria, tomando en cuenta los antecedentes del procesado. Ahora, el juez debería considerar también las circunstancias del hecho y no solo los antecedentes del procesado.

1.10 Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

En 1882 se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley de avanzada que ha subsistido en España por más de cien años, superando guerras y regímenes de gobierno totalmente antagónicos. Esta era una obra nueva, distinta en muchos puntos fundamentales a la Ley de 1872.⁴⁰ A juicio de TOMÁS Y VALIENTE, esta ley *“es de muy clara orientación liberal y destierra el predominio de los principios inquisitivos del proceso penal”*.⁴¹ Otros como SAÍZ GUERRA argumentan que el sistema unió lo mejor del sistema inquisitivo y del acusatorio: *“trató de sistematizar un proceso penal que, con las ventajas de uno y otro sistema, no tuviera, a ser posible, sus inconvenientes”*.⁴²

La regulación de prisión provisional en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se presenta en la edición del domingo 17 de septiembre de 1882 de la Gaceta de Madrid. En su Exposición de Motivos se incluyen detalles sobre cómo se llevaba el proceso penal en aquel momento y los perjuicios que sufrían los acusados, incluyendo largas estancias en prisión provisional en lo que se dilucidaba su caso.⁴³

⁴⁰ Tomás y Valiente, *supra* nota 3, en la pág. 534.

⁴¹ *Id.*

⁴² Sainz Guerra, *supra* nota 31, en la pág. 520.

⁴³ *“Sin desconocer que la Constitución de 1812, el reglamento provisional para la Administración de la Justicia de 1835 y otras disposiciones posteriores mejoraron considerablemente el procedimiento criminal, sería temerario negar que aún bajo la legislación vigente no es raro que un sumario dure ocho o más años, y es frecuente que no dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por todo este tiempo la prisión preventiva⁴³ de los acusados; y aún podría añadirse, para completar el cuadro, que tan escandalosos procesos solían no ha mucho terminar por una*

La prisión provisional fue regulada en el capítulo III, artículos 502 al 519.⁴⁴

absolución de la instancia, sin que nadie indemnizara en este caso a los procesados de las vejaciones sufridas en tan dilatado periodo, y lo que es más, dejándoles por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa, bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento de día que por malquerencia se prestaba a declarar contra ellos cualquier vecino rencoroso o vengativo. Esta práctica abusiva y atentatoria de los derechos del individuo pugna todavía por mantenerse con este o el otro disfraz en nuestras costumbres judiciales; y es menester que cese para siempre porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar las faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o egoísmo del Estado.

...

El extranjero que estudia la organización de nuestro sistema justicia criminal, al vernos apegados a un sistema ya caduco y desacreditado en Europa y América, tiene por necesidad que formar una idea injusta y falda de la civilización y cultura españolas.

*Lo que hay que examinar, por tanto, es si el adjunto proyecto de Código remedia, si no todos, al menos los más capitales defectos de que adolece la vigente organización de la justicia criminal. Es preciso en primer término sustituir la marcha perezosa y letal del actual procedimiento por un sistema que, dando amplitud a la defensa y garantías de acierto al fallo, asegure sin embargo la celeridad del juicio para la realización de dos fines a cual más importantes: uno, que la suerte del ciudadano no esté indefinidamente en lo incierto ni se le causen vejaciones que las absolutamente indispensables para la averiguación del delito y el descubrimiento del verdadero delincuente; y otro, que la pena siga de cerca a la culpa para su debida eficacia y ejemplaridad".*Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1882, en la pág. 19.

⁴⁴ Art. 502. Mientras que la causa se halle en estado de sumario sólo podrá decretar la prisión provisional el Juez de instrucción o el que forme las primeras diligencias, o el que, en virtud de comisión o interinamente, ejerza las funciones de aquel. Art. 503. Para decretar la prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes: 1ª Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2ª Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión correccional, según la escala general comprendida en el Código penal, o bien que, aun cuando tenga señalada una pena inferior, considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que preste la fianza que le señale. 3ª Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se hay de dictar el auto de prisión. Art. 504. Procederá también la prisión provisional cuando concurren la primera y tercera circunstancia del artículo anterior y el procesado no hubiese comparecido sin motivo legítimo al primer llamamiento del Juez o Tribunal que conociere de la causa. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, aunque el delito tenga señalada pena superior a la de prisión correccional, cuando el procesado tenga buenos antecedentes o se pueda creer fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia, y cuando además el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia, podrá el Juez o Tribunal acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado. Art. 505. Para llevar a efecto el auto de prisión se expedirán dos mandamientos: uno cometido al alguacil del Juzgado o portero del Tribunal o al funcionario de policía judicial que haya de ejecutarlo, y otro al Alcaide de la cárcel que deba recibir al preso. En el mandamiento se consignará a la letra el auto de prisión, el nombre, apellido, naturaleza, edad, estado y domicilio del procesado, si constaren; el delito que de lugar al procedimiento; si se procede de oficio o a instancia de parte, y si la prisión ha de ser con comunicación o sin ella. Los Alcaldes de las cárceles no recibirán a ninguna persona en clase de preso sin que se les entregue mandamiento de prisión. Art. 506. La incomunicación de los detenidos o presos sólo podrá durar el tiempo absolutamente preciso para evacuar las citas hechas en las indagatorias relativas al delito que haya dado lugar al procedimiento, sin que por regla general deba durar más de cinco días. El incomunicado podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias periciales en que le de intervención esta ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la incomunicación. Art. 507. Si las citas hubieren de evacuarse fuera del territorio de la Península, o a larga distancia, la incomunicación podrá durar el tiempo

PARRA IBÁÑEZ, en su *Curso Elemental de Derecho Procesal Español*, publicado poco después de la puesta en vigor de la nueva ley, destacaba la visión cautelar de la detención y las precauciones que había que tener para no vulnerar derechos de la persona:

“La privación de libertad de los procesados tiene por objeto asegurar las personas de estos, con el fin de hacer efectiva en su día la responsabilidad en que puedan haber incurrido, en cuanto esta sea de índole personal. Desde luego se comprende que esta privación de libertad, como quiera que no tiene aún carácter definitiva, puesto que el juicio oral aún no se ha verificado ni menos se ha pronunciado la sentencia, debe decretarse con bastante parsimonia, y sólo en los casos que taxativamente marca la ley, es decir, cuando la naturaleza del delito que se supone cometido aconseje esta

prudencialmente preciso para evitar la confabulación. Art. 508. El Juez o Tribunal que conozca de la Causa podrá bajo In responsabilidad mandar que vuelva a quedar incomunicado el preso aun después de haber sido puesto en comunicación, si la causa ofreciere méritos para ello; pero la segunda incomunicación no excederá nunca de tres días, salvo lo dispuesto en el artículo precedente. Se instruirá al procesado de la parte dispositiva del auto motivado en que se decreta la, nueva incomunicación. Art. 509. Se permitirán al preso incomunicado los libros y efectos que él se proporcione si no ofrecieren inconveniente, a juicio del Juez instructor. Art. 510. También podrá el Juez instructor permitir que se facilite al incomunicado; si lo pidiere, recado de escribir cuando, a su juicio, no ofrezca inconveniente este permiso; pero en la providencia en que lo conceda, adoptará las medidas oportunas para evitar que se frustren los efectos de la incomunicación. Art. 511. El preso incomunicado no podrá entregar ni recibir carta ni papel alguno, sino por conducto y con licencia del Juez instructor, el cual se enterará de su contenido para darles o negarles curso. Art. 512. Si el presunto reo no fuere habido en su domicilio y se ignorase su paradero, se expedirá requisitoria a los Jueces de instrucción en cuyo territorio hubiese motivos para sospechar que aquél se halle; y en todo caso se publicará aquélla en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia respectiva, fijándose también copias autorizadas, en forma de edicto, en el local del Juzgado Tribunal que conociere de la causa y en el de los. Jueces de instrucción a quienes se hubiese requerido. Art. 513. En la requisitoria se expresarán el nombre y apellido, cargo, profesión u oficio, si constaren, del procesado rebelde, y las señas en virtud de las que pueda ser identificado, el delito por que se le procesa, el territorio donde sea de presumir que se encuentra y la cárcel a donde deba ser conducido. Art. 514. La requisitoria original y un ejemplar de cada periódico en que se hubiese publicado, se unirán a la causa. Art. 515. El Juez o Tribunal que hubiese acordado la prisión del procesado rebelde y los Jueces de instrucción a quienes se enviaren las requisitorias, pondrán en conocimiento de las Autoridades y agentes de policía judicial de sus respectivos territorios las circunstancias mencionadas en el artículo 513. Art. 516. El auto se ratificará en todo caso o se repondrá, oído el presunto reo, dentro de las setenta y dos horas siguientes al acto de la prisión. Art. 517. El auto ratificando el de prisión y de soltura del preso, se notificarán a las mismas personas que el de prisión. Contra ellos podrá interponerse recurso de apelación. Inmediatamente después de dictados y dentro de las mismas setenta y dos horas, se expedirá al Alcaide de la cárcel en que se hallare el preso el correspondiente mandamiento, en la forma expresada en el art. 505. Art. 518. Los autos en que se decreta o deniegue la prisión o excarcelación serán apelables sólo en el efecto devolutivo. La tramitación se ajustará a lo dispuesto en el título X del libro primero de esta ley. Art. 519. Todas las diligencias de prisión provisional se sustanciarán en pieza separada.

*medida de precaución; pues de lo contrario, en muchos casos, constituiría un verdadero ataque al derecho de personalidad”.*⁴⁵

Otros tratadistas de la época como MARCO TULLIO tenían una visión punitiva y prejuizada sobre la medida cautelar: *“Llámesese prisión provisional a la que sufre el presunto culpable hasta que por auto se declare definitiva”.*⁴⁶

El primer inciso del artículo 503 limitaba la imposición de la prisión provisional a conducta tipificada como delito. En el segundo inciso se establecía que dicho delito debía ser uno grave y que, de ser uno menos grave, se podría aplicar la prisión provisional si el magistrado así lo entendía, luego de revisar los antecedentes del acusado. Dicho inciso no deja claro si *“los antecedentes del imputado”* se refieren únicamente a otras convicciones del acusado, o se podían tomar en consideración otros factores como la conducta o la reputación del imputado. El inciso también brinda la flexibilidad al magistrado de suspender la prisión provisional si entendía que las condiciones que llevaron a su imposición habían cambiado. El tercer y último inciso del artículo dejaba al arbitrio del magistrado la imposición de prisión provisional utilizando el estándar de *“motivos bastantes para creer”* que el imputado había cometido el delito.

La normativa sobre la prisión provisional se mantuvo prácticamente inalterada durante el transcurso del siglo XX hasta la llegada de la democracia. Entre los cambios realizados se encuentra una enmienda introducida al artículo 503 de la Ley para añadir un párrafo adicional que imponía la prisión provisional cuando se apreciara la existencia de delitos contra el Jefe del Estado y otros funcionarios.⁴⁷

⁴⁵ D. F. S. Parra Ibáñez, *Curso Elemental de Derecho Procesal Español Civil, Penal, Administrativo y Canónico*, pág. 3884 (Madrid, 1889).

⁴⁶ Marco Tulio, *Procedimientos Judiciales*, vol. II, pág. 3884 (Madrid, 1889).

⁴⁷ 4.ª Cuando de la causa resulte la existencia de delito comprendido en el Título II del Libro del Código Penal⁴⁷, sea cualquiera la pena señalada al delito y mientras la situación alterada por él no haya sido completamente normalizada, se decretará la prisión provisional, sin que en ningún caso pueda exceder ésta de la duración de la pena señalada al delito que la motiva.

En todo caso de decretará la prisión provisional cuando se aprecie la existencia de delitos contra el Jefe del Estado, el Consejo de Ministros o sus miembros y la forma de Gobierno, o consistan

1.11 La Constitución de 1978.

Apenas cuatro años antes de la puesta en vigor de la Constitución, el juez gozaba de amplia discreción a la hora de decretar la prisión provisional. Así lo señalaban VIADA LÓPEZ PUIGCERVER y ARAGONESES: *“concede un amplio arbitrio judicial respecto a la adopción de medidas de aseguramiento de la persona del encausado.”*⁴⁸ La alarma social y la frecuencia del delito imputado en donde se cometió todavía justificaban la prisión provisional.⁴⁹

Con la llegada de la democracia y la puesta en vigor de la Constitución de 1978, se introdujeron cambios que tuvieron efecto en la prisión provisional. A través del artículo 17 se eleva a rango constitucional el derecho a la libertad del individuo.⁵⁰ Este artículo de la Constitución española imprime la primacía del Derecho a la libertad en el sistema procesal penal. Esto provoca que la detención de un acusado en prisión provisional en España sea un acto excepcional. La Constitución obliga a que todo proceso donde se pueda privar de la libertad a un acusado, pase por el cedazo del artículo 17. Esto es, que la libertad siempre debe ser la primera opción. El Estado está obligado a evaluar todas las opciones

en la celebración de reuniones o manifestaciones no pacíficas o en la realización de propagandas ilegales. Decreto – Ley de 22 de marzo de 1957 y por Decreto-Ley de 23 de noviembre de 1957.

⁴⁸ Carlos Viada López-Puigcerver & Pedro Aragonese Alonso, *Curso de Derecho Procesal Penal*, pág. 43 (1974).

⁴⁹ *Id.* en la pág. 42.

⁵⁰ 1. *Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.*

2. *La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.*

3. *Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.*

4. *La ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.*⁵⁰

antes de encerrar a un ciudadano. El artículo regula estrictamente la detención preventiva de sospechosos y deja en manos de los congresistas la regulación mediante ley de la prisión provisional para los imputados de delito.

Sin duda alguna el Derecho a la libertad del individuo siempre será lacerado de alguna manera cuando hay una determinación de prisión provisional. Pero ese daño debe ser superado en el balance de intereses con el fin que se pretende obtener con la privación de libertad del acusado.

Sobre el artículo 17 de la Constitución y el análisis a realizar cuando se pretenda privar de la libertad a un individuo, nos dice GARCÍA MORILLO:

“La consagración del derecho a la libertad y seguridad implica, como ha dicho el Tribunal Constitucional, la necesidad de cumplir, para privar de libertad a alguien, en primer lugar, el principio de legalidad punitiva (tipicidad) – esto es, que sólo cabe la privación de libertad cuando la conducta de la persona en cuestión está previamente recogida en una ley como causa de esa privación-; y, en segundo lugar, el principio de legalidad procesal, de suerte que la privación de libertad sólo es constitucionalmente admisible si se sigue, para llevarla a cabo, el procedimiento legamente establecido. Toda privación de libertad que no cumpla ambos principios de legalidad, punitivo y procesal, supone una vulneración del derecho a la libertad personal reconocida en el artículo 17.1 de la CE.”⁵¹

1.12 La ley 16/1980, de 22 de abril.

A partir de la década de los ochenta comienzan a realizarse algunas reformas a las disposiciones sobre la prisión provisional en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contravenían la nueva Constitución. La primera de estas reformas se realizó a través de la Ley 16/1980, de 22 de abril, por la que se enmendaron los artículos 503, 504 y 505 de la Ley de Enjuiciamiento

⁵¹ Joaquín García Morillo, Los derechos de libertad (I). La Libertad Personal, en *Derecho Constitucional*, vol. I, 232 (2016).

Criminal.⁵² Estos cambios no fueron del agrado de algunos: por ejemplo, MUÑOZ CONDE los catalogó como una involución, ya que cambiaba: “*para decretar serán necesarias*”, por “*el juez decretará*”.

*“El cambio es, a nuestro modo de ver, sustancial. De la facultad que se atribuye al órgano jurisdiccional para decretar la prisión provisional, se pretende pasar, se va a pasar a imponerle la obligación de acordar el auto de prisión, con sólo la concurrencia de unos datos en principio objetivos y de los que no cabe valoración, por tanto; es decir, la prisión provisional opera, a tenor del Proyecto, de forma automática”.*⁵³

MUÑOZ CONDE también criticaba el cambio que proponía prisión provisional de forma automática cuando la pena del delito imputado excediera los seis meses.⁵⁴ Según MUÑOZ CONDE, la propuesta expresaba una

⁵² Art. 503: El juez decretará la prisión provisional cuando concurren las circunstancias siguientes: primero: que conste en la causa la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito; segundo: que tenga señalada pena superior a la de arresto mayor y tercero: que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Art. 504: No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, aunque el delito tenga señalada una pena superior a arresto mayor, cuando el inculcado no tenga antecedentes penales o se pueda creer fundamentalmente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia y cuando, además el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia, podrá el Juez o Tribunal acordar con o sin fianza la libertad del inculcado con expresión de las razones que lo justifiquen. Concurriendo las circunstancias primera y tercera, aunque la pena no exceda de arresto mayor teniendo en cuenta la alarma que haya podido producir el hecho, los antecedentes y circunstancias del inculcado o el fundado temor de que no comparezca al llamamiento de la autoridad judicial, podrá decretarse la prisión con expresión igualmente de las razones en que se justifique. En ningún caso la prisión provisional podrá exceder de la mitad del tiempo que presuntivamente pueda corresponder al delito imputado. A estos efectos se entenderá como pena la que con razón de las posibles circunstancias modificativas pueda corresponder al inculcado. No existiendo éstas a juicio de la autoridad judicial se computará como tiempo el que corresponda al grado medio. Art. 505: Para llevar a efecto el auto de prisión preventiva se expedirán dos mandamientos: uno cometido al alguacil del Juzgado o portero del Tribunal o al funcionario de la Policía Judicial que haya de ejecutarlo y otro al director del establecimiento que deba recibir al preso. Los Jueces podrán acordar la prisión atenuada cuando por razón de enfermedad del inculcado el internamiento entrañe grave peligro para su salud. En el mandamiento se consignará a la letra el auto de prisión, el nombre, apellidos, naturaleza, edad, estado y domicilio del procesado, si constaren, el delito que dé lugar al procedimiento; si se procede de oficio o a instancia de parte y si la prisión ha de ser con comunicación o sin ella. Los Directores de los establecimientos no recibirán a ninguna persona en clase de preso sin que se les entregue mandamiento de prisión.

⁵³ Francisco Muñoz Conde y Víctor M. Moreno Catena, *La prisión provisional en España*, en *La Reforma Penal y Penitenciaria*, págs. 364 – 365, (1980).

⁵⁴ *Id.* en la pág. 368.

desconfianza hacia el Poder judicial al eliminar la discreción a los jueces a la hora de hacer sus determinaciones:

“Pero en el proyecto parece existir una desconfianza hacia el poder judicial y por esto extiende la prisión provisional como regla general no ya cuando la pena a imponer sea superior a seis años, sino cuando sea superior a seis meses, impidiendo cualquier valoración del órgano jurisdiccional acerca de las circunstancias del hecho y los antecedentes del inculpado”.⁵⁵

También criticó el que propusiera la prisión provisional cuando existiera el temor fundado de que el procesado no compareciera. Catalogó la propuesta en cuanto a la prisión provisional como una *“evidente involución y en una intromisión en la esfera de libertad del individuo”*.⁵⁶ Su valoración sobre la propuesta llega al punto de catalogar la misma como una reforma inconstitucional, por hacerse mediante Decreto–ley cuando está afectando un derecho fundamental.⁵⁷

Para ÁLVAREZ CONDE esto no implicó ningún avance hacia el desarrollo de los principios constitucionales, sino más bien una “clara involución” ya que estableció, entre otras innovaciones, la obligatoriedad de decretar la prisión

⁵⁵ Muñoz Conde y Moreno Catena, *supra* nota 53, en las págs. 369 – 370.

⁵⁶ *Id.* en la pág. 373.

⁵⁷ *“Este Real Decreto–ley, ya discutible por lo que de involución representa, debe ser rechazado de plano por otra razón mucho más poderosa: su inconstitucionalidad. No cabe duda que la prisión provisional supone la privación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución: el derecho a la libertad personal, y que pugna con el derecho a la presunción de inocencia que encuentra oportuno amparo en el texto constitucional.*

...

*De este modo, poniendo en relación el art. 17.1 (derecho a la libertad personal) y el art. 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), con los artículos 53.1 (sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de derechos fundamentales), 81, 1 (las leyes relativas al desarrollo de los derechos fundamentales son leyes orgánicas), pero sobre todo con lo que dispone el art. 86.1 – preceptos todos ellos de la Constitución – cuando dice que “los Decretos – leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”, resulta obvia la inconstitucionalidad del Decreto – ley que estamos comentando; el decir que la prisión provisional es una simple medida cautelar no quita para que esa medida cautelar constituya una privación de la libertad individual”. Muñoz Conde y Moreno Catena, *supra* nota 53, en las págs. 376 – 377.*

provisional en la mayoría de los supuestos. Para COBO DEL ROSAL *“también intentó que el instituto cumpliera con una función de prevención”*.⁵⁸

1.13 La ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril.

A través de la Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril, se enmiendan nuevamente los artículos 503 y 504 para atemperarlos al artículo 17.4 de la Constitución. También se aprovechó la oportunidad para aclarar que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional y que la misma no es una pena anticipada. Así, en su Exposición de Motivos establece:

“El objeto de la presente Ley consiste en cumplir el mandato recogido en el artículo 17.4, último inciso, de la Constitución, que establece: «por Ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, y recoger el principio de que la situación de prisión provisional debe tener carácter excepcional, no pudiendo convertirse en una ejecución anticipada de la pena, ni tener carácter obligatorio según se desprende de la Recomendación del Consejo de Europa 80 (11), de 27 de junio de 1980, y que ha encontrado reflejo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, sentencia 41, de 2 de julio de 1982”.⁵⁹

Con ello se pretendió sustituir el sistema que limitaba el arbitrio judicial, introducido por la Ley 16/1980, de 22 de abril.

Se establece un sistema de fijación de límites para la duración de la prisión provisional, consistente en seis meses cuando el delito imputado lleve aparejado pena igual o inferior a prisión menor, y de dieciocho meses en los demás casos. A tales límites se establecen dos excepciones: la prolongación del límite a los treinta meses, cuando el delito imputado afecte gravemente a los intereses colectivos, tenga consecuencias de ámbito nacional, se cometa fuera de éste o la instrucción de la causa padezca de una gran complejidad; y también podrá

⁵⁸ Manuel Cobo del Rosal; Manuel Quintanar Díez y Carlos Zabala López-Gómez, *Derecho Procesal Penal Español*, pág. 439 (2006).

⁵⁹ Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril.

extenderse a la mitad de la pena impuesta en una sentencia, si ésta hubiese sido recurrida.

Asimismo, el proyecto trata de evitar las dilaciones indebidas, producto de la actitud de los procesados, no computándose los plazos en tales supuestos de retraso. Por otra parte, se intenta dar tiempo a los tribunales para que procedan al señalamiento y celebración de los correspondientes juicios orales en aquellas causas en las que existen presos, dilatando la entrada en vigor de los plazos tres meses a partir de la publicación de la Ley.⁶⁰

Sobre la Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril, ASENSIO MELLADO indicó que esta *“redujo considerablemente los plazos de duración de la prisión preventiva, señalando un marco que iba desde los seis meses para los delitos castigados con pena de prisión menor, hasta los treinta en los casos que presentaran una especial gravedad o cuya instrucción fuera de extraordinaria complejidad”*.⁶¹ Sobre la recepción pública a estos cambios, Asencio Mellado

⁶⁰ Los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedan redactados como sigue: Art. 503: Para decretar la prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes: 1.^a Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.^a Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión menor, o bien, que aun cuando tenga señalada pena de prisión menor, considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado, hasta que preste la fianza que se le señale.

3.^a Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra la que se haya de dictar el auto de prisión, Artículo 504. Procederá también la prisión provisional cuando concurren la primera y la tercera circunstancia del artículo anterior y el inculcado no hubiera comparecido, sin motivo legítimo, al primer llamamiento del Juez o Tribunal, o cada vez que éste lo considere necesario. No obstan lo dispuesto en el artículo anterior Aunque el delito tenga señalada pena superior a la de prisión menor, cuando el inculcado carezca de antecedentes penales, o éstos deban considerarse cancelados, y se pueda crear fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia y, además, el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio donde el Juez o el Tribunal que conociere de la causa ejerce su jurisdicción, podrán éstos acordar, mediante fianza, la libertad del inculcado. La duración máxima de la prisión provisional será de seis meses cuando la pena señalada al delito imputado sea igual o inferior a 1a de prisión menor, y de dieciocho en los demás casos. El Juez o Tribunal podrá ordenar excepcionalmente la prolongación de la prisión provisional hasta el límite de treinta meses, cuando el delito hubiere afectado gravemente a intereses colectivos, o cuando hubiere producido graves consecuencias en el ámbito nacional, o cuando se hubiere cometido fuera de éste, o bien, la instrucción de la causa fuere de extraordinaria complejidad. Asimismo, podrá el Juez o Tribunal ordenar excepcionalmente la prolongación de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia, si ésta hubiese sido recurrida. En los plazos establecidos en este artículo no se computará el tiempo en que la causa sufre dilaciones indebidas imputables al inculcado.

⁶¹ José María Asencio Mellado, *La Prisión Provisional*, pág. 258 (1987).

indicó que *“no fueron muy bien recibidos por ciertos sectores de la sociedad; de hecho, fue muy duramente criticada por los sectores más conservadores, que culparon de ser la causante del incremento de la inseguridad ciudadana con motivo de que su vigencia supuso la excarcelación, por otra parte lógica, de una gran cantidad de presos preventivos que llevaban un largo periodo en esta situación en espera de la celebración del juicio correspondiente”*.⁶² Según GÓMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA, esta reforma del artículo 504 fue criticada porque *“su consecuencia inmediata fue poner en libertad a delincuentes profesionales que enseguida volvieron a delinquir”*.⁶³

SANGUINÉ por su parte señala que: *“[l]a llamada “Reforma Ledesma”, cuyos objetivos era reducir el número de presos preventivos y agilizar la celebración de los juicios, elevó a más de 6 años la pena correspondiente al delito cometido para decretar prisión provisional, salvo que el imputado dejase de comparecer sin motivo a cualquier llamamiento judicial”*.⁶⁴

1.14 La ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre.

En 1985, los artículos 503 y 504 sufren su tercera enmienda a partir de la entrada en vigor de la Constitución. PRIETO CASTRO y GUTIÉRREZ DE CABIEDES justificaron estas nuevas reformas argumentando *“que la prisión provisional es una medida cautelar de difícil regulación, porque entran en colisión los derechos de la defensa de la sociedad y los del individuo”*.⁶⁵ Y que esta es la justificación para que haya habido diversos tanteos, *“reforma y reforma de la reforma”*.⁶⁶ En esta reforma de la reforma se establece que la decisión de imponer prisión provisional al acusado la realizará un juez y que este tomará su decisión según las circunstancias del caso y la duración de la misma.

⁶² José María Asencio Mellado, *La Prisión Provisional*, pág. 258 (1987).

⁶³ Emilio Gómez Orbaneja y Vicente Herce Quemada, *Derecho Procesal Penal*, págs. 211 – 212 (1987).

⁶⁴ Odone Sanguiné, *Prisión provisional y derechos fundamentales*, pág. 42 (2003).

⁶⁵ Leonardo Prieto – Castro y Fernández y Eduardo Gutiérrez de Cabiedes y Fernández de Heredia, *Derecho Procesal Penal*, pág. 258 (1989).

⁶⁶ *Id.*

Según SANGUINÉ, esta fue “la reforma de la reforma” o “contrarreforma”⁶⁷, citando a Serrano Butragueño:

*“...modificó, de nuevo los artículos 503 y 504 de la LECrim, dejándolos con su actual redacción, y mantenido los conceptos jurídicos indeterminados de “circunstancias del hecho”, “alarma social”, “frecuencia”, etc., atendió a criterios conservadores de seguridad ciudadana y amplió los motivos para decretar la prisión provisional”.*⁶⁸

La Exposición de Motivos de la “reforma de la reforma” expone los detalles de sus objetivos, entre estos, atemperar la prisión provisional a los dictámenes del Tribunal Constitucional.⁶⁹

⁶⁷ Sanguiné, *supra* nota 64, en la pág. 43.

⁶⁸ *Id.*

⁶⁹ “En primer lugar, dar una nueva formulación a los supuestos en que puede decretarse la prisión provisional, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional de que la medida no ha de aplicarse con automatismo, sino que la autoridad judicial tomara su decisión «teniendo en cuenta las circunstancias del caso». El proyecto ratifica, pues, el abandono del sistema instaurado en la Ley de 22 de abril de 1980 para permitir que sea el órgano jurisdiccional quien valore, en la tensión dialéctica entre los principios de libertad personal y presunción de inocencia y aseguramiento del proceso, cuándo debe decretar la prisión preventiva y cuándo la libertad provisional del imputado, con o sin fianza. Las interpretaciones dispares que se hablan producido en la práctica acerca del alcance del último inciso de la circunstancia segunda del artículo 503, de las que se ha hecho eco la doctrina, obligan al legislador a pronunciarse para evitar divergencias hermenéuticas. Por otra parte, promulgada y vigente la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal, en la que se modifica extensamente el sistema penológico, parece procedente incluir las penas de prisión menor e inferiores en la circunstancia segunda del artículo 503, con la correspondiente adecuación del artículo 529 a la modificación operada.

El segundo objetivo de este proyecto es el de resolver ciertos problemas que la práctica ha revelado en torno a la duración máxima de la situación de prisión preventiva. Nuestro sistema constitucional impone, como es sabido, dos límites temporales a esa situación. Uno, derivado del principio de presunción de inocencia, está presente en el artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («la prisión provisional sólo durará lo que subsistan los motivos que la hayan ocasionado»); parece conveniente completar la declaración del artículo citado, otorgando el máximo rango legislativo al derecho del inculcado en situación de prisión a que su causa sea atendida con especial diligencia por los órganos del Poder Judicial. Paralelamente, el proyecto, que hace suya la vieja declaración de la exposición de motivos del Real Decreto aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado»), establece que en el cómputo de la duración de la prisión provisional no se sumarán los períodos en que la causa sufra dilaciones no imputables a los mismos órganos a quienes antes ha exigido esa especial diligencia, esto es, a los órganos Jurisdiccionales. Aunque una aplicación de la doctrina del fraude a la Ley pudiera haber bastado para llegar a los mismos resultados que ahora explícitamente se formulan, en materia como ésta, en que las cautelas interpretativas son ciertamente lógicas, resulta conveniente desvanecer toda duda que favorezca resultados contrarios a los perseguidos por el ordenamiento. No hace el proyecto, por lo demás, sino acoger razonamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Tribunal Constitucional”.

BARONA VILAR cataloga estas tres reformas producidas en cinco años como *“un tejer y destejer”*; reformas que han pretendido buscar en la prisión provisional la medida de salvación a una situación socialmente crítica,

El otro límite, vinculado al derecho a la libertad personal más directamente, está acogido en el artículo 504. Las experiencias recogidas en la aplicación de este último precepto, en tanto que impone los límites temporales máximos de la situación de prisión preventiva, manifiestan la necesidad de prever un sistema de prórrogas vinculado a situaciones objetivas que permitan conjugar el principio de libertad personal con el aseguramiento del proceso penal sin que, en ningún caso, la prisión preventiva llegue como pena anticipada ni, en general, como medida criminológica tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional. Por ello se prevé que la medida de prolongación se adopte en resolución motivada contra la que se podrán utilizar los recursos de reforma y de apelación, que supondrán una garantía que evite que la medida cautelar derive hacia fines distintos de los constitucionalmente previstos. B.O.E., Núm. 3, de 3 de enero de 1985, págs. 72 - 73.

* Los artículos 503 y 504 tras esta nueva enmienda quedaron redactados de la siguiente manera: Art. 503: Para decretar la prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes; 1.^a Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.^a Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión menor, o bien que, aun cuando tenga señalada pena de prisión menor o inferior, considere el Juez necesaria la prisión provisional, atendidos los antecedentes del imputado, las circunstancias del hecho, la alarma social que su comisión haya producido o la frecuencia con la que se cometan hechos análogos. Cuando el Juez haya decretado la prisión provisional en caso de delito que tenga prevista pena inferior a la de prisión mayor, podrá, según su criterio, dejarla sin efecto, si las circunstancias tenidas en cuenta hubiesen variado, acordando la libertad del inculcado con o sin fianza. 3.^a Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Art. 504. Procederá también la prisión provisional cuando concurren la primera y la tercera circunstancia del artículo anterior y el inculcado no hubiera comparecido, sin motivo legítimo, al primer llamamiento del Juez o Tribunal o cada vez que éste lo considere necesario. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, aunque el delito tenga señalada pena superior a la de prisión menor, cuando el inculcado carezca de antecedentes penales o éstos deban considerarse cancelados y se pueda creer fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia y, además, el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio donde el Juez o Tribunal que conociere de la causa ejerce su jurisdicción, podrán éstos acordar, mediante fianza, la libertad del inculcado. El inculcado retenido en prisión provisional tiene el derecho a que su caso sea atendido de forma prioritaria y con especial diligencia. El Juez o Tribunal que conozca de la causa y el Ministerio Fiscal, cada uno dentro de sus funciones, cuidaran bajo su responsabilidad de que la prisión provisional no se prolongue más allá de lo necesario. La situación de prisión provisional no durará más de tres meses cuando se trate de causa por delito al que corresponda pena de arresto mayor, ni más de un año cuando la pena sea de prisión menor o de dos años cuando la pena sea superior. En estos dos últimos casos, concurriendo circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en estos plazos y que el inculcado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión podrá prolongarse hasta dos y cuatro años, respectivamente. La prolongación de la prisión provisional se acordará mediante auto, con audiencia del inculcado y del Ministerio Fiscal. Una vez condenado el inculcado, la prisión provisional podrá prolongarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia cuando ésta hubiere sido recurrida. No se tendrá en cuenta, para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, el tiempo en que la causa, sufre dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. Contra los autos que decreten la prisión provisional o los que dispongan su prolongación o libertad provisional podrán ejercitarse los recursos de reforma y apelación. Concedida la libertad por transcurso de los plazos máximos previstos para la prisión provisional será también de aplicación lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.⁶⁹

introduciendo parches en la regulación de la misma, desvirtuando el sentido y función de la prisión provisional".⁷⁰

1.15 La ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo.

En 1995 se presenta una cuarta reforma, esta vez con el objetivo de incorporar una audiencia con el Ministerio Fiscal, las partes y el imputado asistido de letrado, inspirada en el principio acusatorio y suprimiendo la exigencia de ratificación del auto de prisión.⁷¹ En esta reforma se incorpora un nuevo artículo 504 bis 2.⁷²

A juicio CAMPOS SÁNCHEZ, esta nueva reforma supuso *"una limitación del hasta entonces desmesurado arbitrio judicial en materia de prisión preventiva, al acondicionar la adopción de la medida a la previa petición de las partes acusadoras"*.⁷³ Para GIMENO SENDRA, con esta enmienda *"se garantiza la imparcialidad en el proceso de imponer la prisión provisional al acusado al no quedar esta decisión únicamente al arbitrio del juez y estableciendo el requisito de que la misma sea solicitada"*.⁷⁴ Otros como MÁLAGA DIÉGUEZ planteaban

⁷⁰ Sanguiné, *supra* nota 64, en la pág. 44.

⁷¹ B.O.E., Núm. 122, de 23 de mayo de 1995, págs. 15001 - 15021.

⁷² Art. 504 bis 2. Desde que el detenido es puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa, éste convocará a audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal, demás partes personadas y al imputado, que deberá estar asistido de Letrado por él elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido de su letrado, tendrán obligación de comparecer. En dicha audiencia podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin rebasar en ningún caso las setenta y dos horas antes indicadas. Si en tal audiencia alguna parte lo interesase, oídas las alegaciones de todas las que concurrieren, el Juez resolverá sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisionales. Si ninguna de las partes lo instase, el Juez necesariamente acordará la cesación de la detención e inmediata puesta en libertad del imputado. Si por cualquier razón la comparecencia no pudiera celebrarse, el Juez acordará la prisión o libertad provisional, si concurrieren los presupuestos y estimase riesgo de fuga; pero deberá convocarla nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplinarias a que hubiere lugar en relación con la causa de no celebración de la comparecencia. Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

⁷³ Manuel Campos Sánchez, *La Reforma de la Prisión Preventiva*, pág.17 (1998).

⁷⁴ *"Precisamente para garantizar la imparcialidad del juzgador, la LO/5 1995, consciente de la función inquisitiva del juez de instrucción y de la gravedad que entraña la prisión provisional, introdujo un nuevo precepto, el art. 504 bis 2, en cuya virtud, como es sabido, estableció, en tanto que requisito previo de esta medida, los principios de "justicia rogada" (de suerte que es preciso que las partes acusadoras insten expresamente esta medida contra un imputado determinado) y de "oralidad", pues, a la adopción de esta resolución, ha de preceder siempre la realización de*

que “la única solución posible era incardinar la modificación de la prisión provisional dentro de una reforma total de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal”.⁷⁵ Criticaba que los cambios a la ley se hicieran de forma aislada y no a través de una reforma total de la ley:

“[L]a introducción de todas esas nuevas medidas provisionales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no debería efectuarse de forma aislada, como por desgracia ha ocurrido en tiempos recientes, sino que debe ir acompañada de una revisión del sistema que lo dote de uniformidad y coherencia, unifique reiteraciones innecesarias y permita integrar las eventuales lagunas normativas”.⁷⁶

1.16 La ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre.

En 2003 se da la quinta y hasta la fecha última reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a la prisión provisional. En su Exposición de Motivos la nueva enmienda expone su fin de atemperar una vez más las disposiciones relativas a la prisión provisional a la Constitución, a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Convenio Europeo para la

una audiencia en la que las partes expondrán sus alegaciones y prueba de los hechos que fundamentan sus respectivas peticiones, decidiendo el juez al término de la misma con la imparcialidad de la que carecía en el régimen anterior (en el que la prisión solía adoptarse de oficio con la sola lectura del atestado y tras el oportuno interrogatorio judicial)”. Vicente Gimeno Sendra, La Necesaria Reforma de la Prisión Provisional, DIARIO LA LEY, 5 de noviembre de 2001, en la pág. 2.

⁷⁵ *“En los albores del siglo veintiuno, nuestro vigente sistema de tutela provisional en el proceso penal puede calificarse sin titubeos de obsoleto, pobre, defectuoso e incluso contradictorio, por lo que se encuentra urgentemente necesitado de una profunda revisión. Las causas de esta insostenible situación son muy variadas, pero entre ellas ocupa un lugar preeminente la ausencia, hasta el momento, de una reforma global de nuestra antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal; una reforma que, amén de mejorar y completar la arcaica regulación de las medidas cautelares contenida en ese cuerpo legal desde el punto de vista técnico, podría y debería haber incorporado al mismo una nueva concepción de fondo más acorde con nuestra Constitución, los textos internacionales ratificados por nuestro país, las recomendaciones del Consejo de Europa y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En los últimos años, han sido varias las leyes procesales y sustantivas que han introducido modificaciones en nuestro ordenamiento cautelar penal, pero se ha tratado siempre de reformas parciales y aisladas que, a cambio de la pretendida mejora de algún aspecto concreto del articulado, han generado una progresiva alteración del sistema e introducido en el mismo un sinfín de disfunciones, lagunas y problemas interpretativos”. Francisco Málaga Diéguez, El fundamento de la tutela provisional en el proceso penal, págs. 1-2, en REVISTA DE DERECHO PROCESAL (2002).*

⁷⁶ Málaga Diéguez, *supra* nota 75, en la pág. 3

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Con esta nueva ley orgánica se pretendió *“dar respuesta a esa necesidad imperiosa de adecuar nuestra ley procesal penal a las exigencias constitucionales”*.⁷⁷ Para ARMENTA DEU esta nueva ley brinda una configuración respetuosa con la doctrina constitucional:

“[E]l 24 de octubre de 2003, atendiendo al mandato del Tribunal Constitucional (Caso Sotos) y con carácter previo a la resolución de la repetida autocuestión de inconstitucionalidad, se aprobó la Ley Orgánica 13/2003, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, y la LO 15/2003, de reforma del Código Penal, que configura una regulación respetuosa con la doctrina constitucional”.⁷⁸

La nueva ley aprovecha la oportunidad para recalcar la característica de excepcionalidad que debe tener esta medida cautelar: *“La excepcionalidad de la prisión provisional significa que en nuestro ordenamiento jurídico la regla general ha de ser la libertad del imputado o acusado durante la pendencia del proceso penal y, consecuentemente, que la privación de libertad ha de ser la excepción”*.⁷⁹ Asimismo, indica que prisión provisional tiene que estar acorde con el principio de proporcionalidad.⁸⁰

⁷⁷ B.O.E., Núm. 257, de 27 de Octubre de 2003, págs. 38241 - 38246.

⁷⁸ Teresa Armenta Deu, *Lecciones de Derecho Procesal Penal*, pág. 178 (2013)

⁷⁹ Exposición de Motivos, Ley Orgánica 13/2003.

⁸⁰ *“Este principio reclama que las normas legales restrictivas de derechos fundamentales -y, en lo que ahora importa, la prisión provisional, en cuanto restrictiva de los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia- deban tener un contenido tal que la limitación de los derechos fundamentales que esta institución comporta sea proporcionada a los fines que con ella se pretenden alcanzar.*

....

*[L]a proporcionalidad exige no sólo que la medida sea adecuada al cumplimiento de un fin constitucionalmente legítimo, sino que el sacrificio que a la libertad de la persona se impone sea razonable en comparación con la importancia del fin de la medida (proporcionalidad en sentido estricto).*⁸⁰

Esta nueva reforma restringe aún más la imposición de la prisión provisional indicando claramente cuáles son las situaciones de riesgo que podrían llevar a un magistrado a imponerla. Además, se recalca que ese “riesgo” tiene que ser “concreto”:

...el artículo 503 establece con precisión cuáles son los fines legítimos que justifican la prisión provisional. Ésta ha de conjurar en cada caso concreto uno de estos riesgos: que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia; que el imputado oculte, altere o destruya pruebas; o que el imputado cometa nuevos hechos delictivos. En este último caso, el principio de proporcionalidad

La Ley Orgánica 13/2003 reforma de manera “profunda” la regulación de la duración de la prisión provisional.⁸¹ De esta manera se buscaba que la legislación estuviera acorde con el artículo 17.4 de la Constitución. El enmendado artículo 504 regulará la duración máxima y el cómputo de la prisión preventiva, ya que un sujeto no puede permanecer indefinidamente privado de libertad sin haber sido declarada su culpabilidad, aun cuando subsistan los riesgos que el artículo 503 establece.⁸²

impone que la prisión provisional no pueda acordarse por riesgos genéricos de que el imputado pueda cometer cualquier hecho delictivo.

Por exigencia de la presunción de inocencia, esta medida debe limitarse a aquellos casos en que dicho riesgo sea concreto. La ley contribuye a objetivar este requisito, incrementando así las garantías procesales del imputado”. Exposición de Motivos, Ley Orgánica 13/2003.

⁸¹ *Id.*

⁸² Los artículos 502 al 505 quedaron enmendados de la siguiente manera: Artículo 502. 1. Podrá decretar la prisión provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa. 2. La prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. 3. El juez o tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. 4. No se adoptará en ningún caso la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación. Artículo 503. 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurren los siguientes requisitos: 1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. Si fueran varios el hecho imputado se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del título III del libro I del Código Penal. 2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. 3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines: a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley. Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado. b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto. No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a

la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo. c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 153 del Código Penal. En estos casos, no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado. 2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad. Artículo 504. 1. La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción. 2. Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en el párrafo a) del ordinal 3.º del apartado 1 o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años. No obstante, cuando concurrieren circunstancias que hicieren prever que la causa no podrá ser juzgada en aquellos plazos, el juez o tribunal podrá, en los términos previstos en el artículo 505, acordar mediante auto una sola prórroga de hasta dos años, si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses, si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años. Si fuere condenado el imputado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida. 3. Cuando la prisión provisional se hubiere acordado en virtud de lo previsto en el apartado 1. 3.º b) del artículo anterior, su duración no podrá exceder de seis meses. No obstante, cuando se hubiere decretado la prisión incomunicada o el secreto del sumario, si antes del plazo establecido en el párrafo anterior se levantara la incomunicación o el secreto, el juez o tribunal habrá de motivar la subsistencia del presupuesto de la prisión provisional. 4. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión provisional no impedirá que ésta se acuerde en el caso de que el imputado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del juez o tribunal. 5. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo se tendrá en cuenta el tiempo que el imputado hubiere estado detenido o sometido a prisión provisional por la misma causa. Se excluirá, sin embargo, de aquel cómputo el tiempo en que la causa sufre dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. Artículo 505. 1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza. En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV de esta ley, este trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiera celebrado con anterioridad. 2. La audiencia prevista en el apartado anterior deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al imputado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del imputado no detenido o su libertad provisional con fianza. 3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza, podrán quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas antes indicadas en el apartado anterior. 4. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del imputado que estuviere detenido. 5. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de

Es importante resaltar que esta última reforma elimina los conceptos de alarma social y la frecuencia como justificativos para la imposición de la prisión provisional. Ambos conceptos venían arrastrándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde su puesta en vigor en 1882. Hasta ese momento podía bastar la existencia del hecho delictivo y la existencia de motivos bastantes para que el juez considerara necesaria la prisión, atendiendo a la alarma social provocada por el delito, aunque éste estuviese castigado con una pena inferior a prisión menor. Lo mismo ocurría señala HERNÁNDEZ GÓMEZ *“en relación a la frecuencia con que se cometían hechos análogos en el Partido Judicial, para que el Juez, discrecionalmente, pudiera acordar la Prisión provisional”*.⁸³

Sobre la alarma social dice ASECIO MELLADO que era un *“concepto indeterminado, que parecía hacer referencia... a la irritación social, a la inseguridad ciudadana provocada por la comisión de un hecho, pero que, en cualquier caso, era y lo es un concepto que no presenta un claro y específico contenido”*.⁸⁴ Sobre la frecuencia dijo que se trataba de: *“la reiteración o reproducción de forma continuada de los mismos hechos, de manera tal que se produce una reacción social contra su comisión, obligando a la autoridad a actuar en un sentido determinado para erradicar la alarma provocada con ello”*.⁸⁵ Es por esta razón que señala ASECIO MELLADO que la alarma social y la frecuencia *“se complementaban”*.⁸⁶

celebración de la primera audiencia. 6. Cuando el detenido fuere puesto a disposición de juez distinto del juez o tribunal que conociere o hubiere de conocer de la causa, y el detenido no pudiese ser puesto a disposición de este último en el plazo de 72 horas, procederá el primero de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, una vez que el juez o tribunal de la causa reciba las diligencias, oirá al imputado, asistido de su abogado, tan pronto como le fuera posible y dictará la resolución que proceda.

⁸³ Isabel Hernández Gómez, *Prisión Provisional y Garantías*, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, nº 16/17, pág. 54 (2011 / 2012).

⁸⁴ José María Asencio Mellado, *La prisión provisional*, pág. 125, (Valencia, 2010).

⁸⁵ *Id.* en la pág. 129.

⁸⁶ *Id.*

Esto conceptos ya no se ajustaban a la norma constitucional ya que la prisión provisional se fundamentaba en hechos ajenos a la conducta imputada al acusado. Sobre esto nos dice MÁLAGA DIEGUEZ:

*“[S]e trata de parámetros difícilmente compatibles con nuestra Constitución; pero no porque carezcan de naturaleza cautelar, lo que a priori resulta irrelevante, sino sencillamente porque permiten la adopción de medidas coercitivas con base en circunstancias por completo ajenas al imputado, lo que a su vez las priva de toda justificación. En efecto, si las medidas provisionales persiguen evitar que el encausado incurra en determinadas actuaciones que se estiman dañosas, es evidente que su objetivo no concurre cuando se recurre a estos criterios, puesto que la alarma social no comporta de por sí un peligro de reiteración delictiva, pudiendo producirse por factores tan aleatorios como lo aparatoso del delito, su cobertura mediática o la notoriedad de sus autores, y la frecuencia tampoco permite relacionar ese peligro con el inculcado, por lo que la medida adoptada con base en este criterio nunca podría tener por finalidad impedir conductas imputables al mismo. Hay que concluir, en definitiva, que los dos criterios mencionados no justifican en modo alguno la adopción de medidas provisionales de tipo personal o patrimonial, porque otorgan a estas últimas una finalidad ejemplarizante o de escarmiento que no es de recibo en un sistema procesal avanzado”.*⁸⁷

MÁLAGA DIÉGUEZ destaca que esta reforma se ajustaba a decisiones recientes del Tribunal Constitucional, que indicaban: *“que los únicos fines constitucionalmente legítimos que justifican la adopción de la prisión provisional son el riesgo de fuga, la obstrucción de la instrucción penal y la reiteración delictiva, sin perjuicio de acudir a la mera gravedad de la pena en un primer momento procesal”.*⁸⁸

⁸⁷ Málaga Diéguez, *supra* nota 75, en la pág. 3

⁸⁸ *Id.*

CAPÍTULO 2.

ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN PUERTO RICO

2.1 Comienzos del siglo XIX.

Aunque Puerto Rico fue parte de España desde el siglo XV, centraremos nuestro análisis a partir del siglo XIX, pues es en esta centuria donde se forja la nación puertorriqueña. De igual manera es el siglo donde se forma lo que eventualmente vamos a conocer como el Derecho puertorriqueño. Sobre el siglo XIX puertorriqueño, nos indica BLANCO GÉIGEL:

“Cuajaba ya la voluntad de pensar y actuar por cuenta propia y se tomaba partido y decisiones como pueblo y no como meros agentes del Gobierno central, ni como pasivos súbditos de la Corona”.⁸⁹

En cuanto al sistema legal imperante en la isla en el siglo XIX, FIGUEROA MERCADO señala: *“Durante esta época la legislación vigente eran las Leyes de India y la Novísima Recopilación de 1795.”⁹⁰* También *“las leyes de la península se aplicarían siempre y cuando se ajuste a las necesidades del país, si así lo juzgaban las autoridades locales”.⁹¹* Durante este siglo también la Isla va creando su propio sistema de Derecho como reseña DELGADO CINTRÓN:

“El siglo XIX fue para Puerto Rico la forja de nuestra nacionalidad, en él se consolida nuestra personalidad de pueblo,

⁸⁹ Tomás Blanco, *Prontuario Histórico de Puerto Rico*, pág. 56, (1935).

⁹⁰ Loida Figueroa Mercado, *Puerto Rico ante la oferta de Leyes Especiales por España 1808 – 1887*, pág. 3 (Madrid, 1963).

⁹¹ *Id.* en la pág. 618.

*nuestra raza puertorriqueña. También es el momento de la fundación de nuestro moderno ordenamiento jurídico. Se inicia el proceso con el establecimiento en 1832 de un nuevo sistema judicial: un tribunal de apelaciones y tribunales de primera instancia, es decir, la Audiencia y las Alcaldías Mayores, todos regentados por jueces con formación jurídica. Luego poco a poco se irá formando a lo largo de las décadas del siglo XIX el Derecho hispano puertorriqueño”.*⁹²

2.2 El Estatuto de Bayona de 1808.

El Estatuto de Bayona⁹³ de 1808 pretendió ser la Constitución bajo el reinado de Jose Bonaparte en su intento de gobernar a España durante la invasión francesa. Aunque autores como SÁNCHEZ-ARCILLA ⁹⁴ declaran que su vigencia fue nula, esta fue importante para Puerto Rico y el resto del Imperio Español, porque proponía igualdad de derechos entre todos sus ciudadanos. El artículo 87 del Título X “*De los Reinos y Provincias españolas de América y Asia*” del Estatuto de Bayona proponía que los reinos y provincias españolas de América y Asia gozaran de los mismos derechos que la Metrópoli.

Historiadores del Derecho puertorriqueño destacan que el Estatuto de Bayona y específicamente el artículo 87 fue un referente al momento de redactar la Constitución de Cádiz de 1812. Según TRÍAS MONGE -

⁹² Carmelo Delgado Cintrón, *Derecho y Colonialismo*, pág. 47, (1988).

⁹³ El catedrático de Historia de Derecho Dr. José Sánchez-Arcilla Bernal señala que los tratadistas actuales de Derecho Constitucional niegan valor de auténtica constitución al texto aprobado en Bayona, y así hablan del Estatuto de Bayona o de la “Carta otorgada de Bayona”.

⁹⁴ “*La vigencia de la Constitución de Bayona fue, de hecho, nula. Algunos órganos constitucionales se llegaron a poner en práctica y tuvieron intensa actividad, como es el caso del Consejo de Estado. Las Cortes, a pesar de los intentos de convocatoria, jamás se llegaron a reunir. Obviamente, las circunstancias de la guerra fueron un serio obstáculo para la vigencia de la Constitución; si a ello se añade que la autoridad de José I se limitaba a los territorios ocupados – a veces transitoriamente – por las tropas francesas, en los que los generales dependían más de las ordenes de Napoleón que de las de José, se comprenderá como el texto de Bayona más que una Constitución efectiva no pasó de ser un programa político*”. José Sánchez-Arcilla Bernal, *Historia de las Instituciones Político-Administrativas Contemporáneas (1808-1975)*, pág. 7, (1994).

quien consideraba el Estatuto de Bayona como una “*constitución*” - señala que la importancia del artículo 87 radica en la igualdad que ofreció a los ciudadanos españoles habitantes en todas las tierras del Imperio Español, propuesta que cuatro años después fue adoptada por la Constitución de Cádiz. Según TRÍAS MONGE, la asimilación formaba parte de una antigua política ultramarina francesa.⁹⁵

El Estatuto, a través del artículo 96 del Título XI “*Del orden judicial*”, también proponía igualdad en la aplicación de la ley: “*Las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales*”. Sobre este aspecto destaca D’ALZINA GUILLERMETTY: “*más que buscar una aproximación jurídica, que sería lo propio de una política asimilista, se intentaba establecer el mismo ordenamiento legal para todo el territorio español*”.⁹⁶

Otros autores como CRUZ MONCLOVA, destacan que los estatutos españoles publicados antes de 1812 también proponían igualdad, específicamente reconociendo a las colonias como parte integral del reino:

“[L]a Junta Suprema y Gubernativa de España e Indias constituida en reemplazo de las juntas provinciales y presidida por el conde de Floridablanca, correspondiendo a las demostraciones de adhesión y generosos donativos de los dominios, procedía a

⁹⁵ “El llamado Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808 ha recibido escasa atención usualmente, quizás debido en especial a las circunstancias de su proclamación y su pronta suplantación por las actividades de las Cortes de Cádiz. La Constitución de Bayona, sin embargo, junto a otras constituciones francesas, afectaría profundamente la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812. Y repercutiría también en las instituciones de la España ultramarina después de las guerras de independencia”. El Estatuto de Bayona disponía que “Los reinos y provincias españolas de América y Asia gozaran de los mismos derechos que la metrópoli”. Esta declaración encarnaba, por supuesto, la antigua política ultramarina francesa de asimilación, todavía vigente en Guadalupe, Martinica⁹⁵ y otras colonias. Las Cortes de Cádiz les ofrecerían también a las colonias españolas la igualdad y la condición de provincias, aunque demasiado tarde. José Trías Monge, *El Sistema Judicial de Puerto Rico*, pág. 15, (1978).

⁹⁶ Carlos D’Alzina Guillermety, *Evolución y Desarrollo del Autonomismo Puertorriqueño Siglo XIX*, pág. 139, (1995).

expedir un decreto, fecha 22 de enero de 1809, por virtud del cual se reconocía a todas las colonias, juntamente con la categoría de parte integrante de la monarquía española, el derecho de representación en el seno de la propia Junta Suprema".⁹⁷

Pero D'ALZINA GUILLERMETY señala categóricamente que esta propuesta de la Junta Suprema y Gubernativa de España e Indias fue la respuesta al Estatuto de Bayona. En Puerto Rico no rigió el Estatuto de Bayona, pues todos los intentos realizados por los emisarios de José I y de su hermano Napoleón para que se le reconociera como soberano fueron rechazados.⁹⁸

Por esta razón podemos argumentar sin lugar a duda que la primera constitución que rigió sobre Puerto Rico fue la de Cádiz de 1812, donde incluso hubo participación de los puertorriqueños en su redacción.

2.3 La Constitución de Cádiz de 1812.

La Constitución de 1812, conocida comúnmente como la Constitución de Cádiz o *"la Pepa"*, por haber sido establecida el 19 de marzo, día de San José, es considerada como la primera Constitución española ya que fue redactada por españoles reunidos en las Cortes de Cádiz durante la invasión francesa. Esta Constitución no diferenciaba entre los españoles a ambos lados del Atlántico, igualándolos en términos de derechos. En su artículo primero, la Constitución declaraba que la nación española la componían los españoles de ambos hemisferios. Pero es importante aclarar que no todos los habitantes del Imperio Español serían considerados *"españoles"*.

⁹⁷ Lidio Cruz Monclova, *Historia de Puerto Rico* (Siglo XIX), tomo I, pág. 6, (1979).

⁹⁸ *"Como Puerto Rico era la primera colonia con que se topaba el viajero que venía de España, fue aquí donde llegaron primero las noticias del levantamiento español procediéndose de inmediato, a tenor con la línea de acción seguida en la Península, a proclamar como rey a don Fernando VII. Poco después llegó el emisario de José I, el rey impuesto por Napoleón, a quien hubo de proteger don Toribio Montes de la furia del pueblo, que pretendía arrebatárle la vida"* Loida Figueroa Mercado, *Breve Historia de Puerto Rico*, vol. I, pág. 139, (1979).

“Por este postulado [el artículo I de la Constitución de 1812] serían españoles los indígenas, los negros y los mulatos libres. Para excluir a los negros y los mulatos libres, ya que no había modo de excluir a los indígenas, se determinó en la Constitución que serían ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traían su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y que estuviesen vecindados en cualquier pueblo de esos dominios”.⁹⁹

Al igual que el Estatuto de Bayona, la igualdad también se estableció a través del art. 258 de la Constitución, que establecía que el Código civil, el criminal y el de comercio serían los mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias pudieran hacerle las Cortes.

La Constitución de Cádiz fue proclamada “*con gran pesar*” por el gobernador de Puerto Rico Salvador Meléndez Bruna el 14 de julio de 1812.¹⁰⁰ La igualdad de derechos se mantuvo durante la vigencia de la Constitución de 1812 y durante la intermitencia en que estuvo vigente hasta 1836. Ese sentimiento de “*gran pesar*” por la puesta en vigor de la Constitución del representante de la Corona en Puerto Rico también lo compartía el rey Fernando VII (primero llamado “el deseado” por su elección como rey y luego “el felón” por abjurar de la Constitución) y todos los defensores del antiguo régimen absolutista, que se resistían a perder su poder y sus influencias.¹⁰¹

⁹⁹ Figueroa, *supra* nota 98, en las págs. 143- 144.

¹⁰⁰ *Id.* en la pág. 148.

¹⁰¹ Sobre este aspecto Jorge de Esteban señala: “La Constitución de Cádiz, como era lógico, no fue fácilmente aceptada ni por Fernando VII, que veía recortados tajantemente sus poderes, ni por las clases reaccionarias, que poseían tradicionalmente el poder. La consecuencia fue que desde 1812 a 1837 únicamente estuvo en vigor por seis años no sucesivos. En los intervalos de su vigencia se recurrió, primero, a la restauración del absolutismo y, después de la muerte de Fernando VII, a un remedo pseudo constitucional que se concretaría en el Estatuto Real de 1834, el cual surge como “la convocatoria de las Cortes Generales del Reino”. El turno entre las dos Españas se inicia así, en el campo constitucional stricto sensu, desde ese momento, mediante el procedimiento de abolir la Constitución vigente para sustituirla por otra de signo ideológico o partidista opuesto. Las Constituciones en España no serán, por tanto, el resultado de un pacto entre las distintas fuerzas sociales y políticas, sino la imposición partidista de una fracción de la

RAMOS GONZÁLEZ señala que para los sectores intelectuales liberales el régimen constitucional representó lo que iba a ser: se abría la puerta al ejercicio de poderes políticos en espacios nunca antes conocidos, pero ciertamente reclamados o anhelados a distintos niveles de conciencia".¹⁰² Ramos González señala que la puesta en práctica de estos derechos fue sabotada por las autoridades y sus defensores.¹⁰³

La ilusión de los puertorriqueños de haber alcanzado la igualdad jurídica se esfumó cuando el rey Fernando VIII abjura la Constitución y se reinstala el sistema absolutista en 1814. En Puerto Rico la derogación de la Constitución no trajo como consecuencia ningún acto de sangre, como sucedió en la Península.¹⁰⁴ Pero señala DÍAZ SOLER que la situación fue difícil:

*“Pasar del liberalismo, que propició el régimen constitucional, al conservadurismo absolutista, era un cambio harto difícil para la isla de Puerto Rico, sobre todo cuando habría de continuar al frente del gobierno el incumbente que había ocupado el cargo antes, durante y después del primer régimen constitucional. Aunque dicho régimen parecía que había tenido corta duración, hay que señalar que realmente el liberalismo había iniciado sus gestiones gubernativas en España desde 1809. Puerto Rico disfrutó del régimen liberal por espacio de cinco años”.*¹⁰⁵

clase dominante sobre las otras.” Jorge De Esteban, *Las Constituciones de España*, págs. 28 - 29, (2000).

¹⁰² Carlos E. Ramos González, *La Constitución de Cádiz en el Imaginario Constitucional Puertorriqueño*, 47 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 975, pág. 976 (2012).

¹⁰³ “[L]as autoridades coloniales, en alianza con los conservadores esquivaron y hasta sabotearon tanto en Puerto Rico como en el resto de las colonia- algunos de los principios esenciales de Cádiz en tanto implicaban pérdida de poderes para controlar. En la metrópolis, los conservadores monárquicos enemigos naturales de la constitución liberal y sus aliados europeos les servían de apoyo ideológico”. *Id.* en la pág. 977.

¹⁰⁴ Figueroa Mercado, *supra* nota 98, en la pág. 152.

¹⁰⁵ Luis M. Díaz Soler, *Puerto Rico: desde sus orígenes hasta el cese de la dominación española*, pág. 393, (Río Piedras, 1995).

El 15 de mayo de 1820 se volvió a proclamar la Constitución en Puerto Rico y se mantuvo en vigor durante el llamado Trienio Liberal. Como señala DÍAZ SOLER, Puerto Rico recobraba la categoría de provincia y se constituía en parte integrante de la monarquía constitucional española. Los puertorriqueños “*quedaron investidos con los derechos inherentes a la ciudadanía española*”.¹⁰⁶

2.4 El Estatuto Real de 1834.

El 10 de abril de 1834 se promulgó un documento que se conoció como el Estatuto Real, que a juicio de DÍAZ SOLER “*intentaba frenar el liberalismo y afirmar el absolutismo*”.¹⁰⁷ Su objetivo principal era convocar unas Cortes, fundamentándose en las leyes tradicionales de la Monarquía (Partidas y Nueva Recopilación) e ignoraba las bases liberales que habían establecido los constituyentes de Cádiz.¹⁰⁸ El Estatuto Real fue publicado en Puerto Rico el 19 de julio de ese mismo año. El mismo no contenía disposiciones específicas para las posesiones del Ultramar. Para D'ALZINA GUILLERMET, “*la inclusión del territorio puertorriqueño en el Estatuto Real y el empeño del Gobierno peninsular por mantener vivo el síndrome revolucionario fueron preludio del trato discriminatorio que le esperaba durante la mayor parte del siglo XIX*”.¹⁰⁹

Sobre las reacciones de los puertorriqueños al Estatuto Real, FIGUEROA MERCADO destaca que los conservadores “*cantaron loas hacia esta*”.¹¹⁰ En cuanto a los liberales, señala que estos “*creyeron que las facultades omnímodas (aquellas que permitían al gobernador actuar como en plaza sitiada) serían derogadas y se volvería nuevamente a un*

¹⁰⁶ Díaz Soler, *supra* nota 105, en la pág. 396.

¹⁰⁷ *Id.* en la pág. 432.

¹⁰⁸ D'Alzina, *supra* nota 96, en la pág. 31.

¹⁰⁹ *Id.* en la pág. 35.

¹¹⁰ Figueroa Mercado, *supra* nota 98, en la pág. 191.

periodo liberal en el que privaría el asimismo progresista propio de la Constitución de Cádiz, pero no ocurrió así".¹¹¹

Dos años después, o sea, en 1836, vuelve a proclamarse la Constitución de 1812 pero una Real Orden afirmaba que en Ultramar seguirían rigiendo las leyes antiguas y que se elaborarían nuevas, luego de un informe de las autoridades locales con la mira puesta en su tranquilidad y fomento.

2.5 La Constitución de 1837 y el comienzo de las "Leyes Especiales".

Con la derrota de los ejércitos realistas en la batalla de Ayacucho en 1824, se esfuman las esperanzas de España poder recuperar el vasto imperio que una vez tuvo. El miedo a perder el remanente que les quedaba lleva los políticos peninsulares a tomar medidas extraordinarias. Una de esas medidas fue incluir unos artículos en la Constitución que indicaba que a Puerto Rico, Cuba y las Filipinas se les gobernaría a través de leyes especiales *"análogas a su respectiva situación y circunstancias y propias para hacer su felicidad"*.¹¹² PICÓ BAUERMEISTER resalta que con la implementación de las Leyes Especiales *"quedó patente la relación colonial que en lo sucesivo marcó la situación de los únicos dominios españoles remanentes en América"*.¹¹³

DE DIEGO GARCÍA resume cómo se llevó a cabo el proceso de aprobación de esta disposición constitucional sobre las leyes especiales:

"Las posesiones ultramarinas tuvieron pronto en las Cortes de 1837 un tratamiento diferencial, como problema aparte del resto del territorio nacional. En sesión secreta, D. Víctor Sánchez propuso, el 16 de enero, a las Comisiones de Ultramar y

¹¹¹ D'Alzina, *supra* nota 96, , en la pág. 34.

¹¹² Miguel Blanco Herrero, *Política de España en Ultramar*, pág. 357 (Madrid, 1888).

¹¹³ Fernando Picó, *Historia General de Puerto Rico*, pág. 183, (San Juan, 2006).

Constitución que se aprobase un dictamen por el cual Cuba, Puerto Rico y Filipinas fuesen objeto de una legislación distinta que las otras provincias españolas. El 12 de febrero comenzó a discutirse dicho dictamen medio de gran polémica y profunda división entre las principales figuras de aquella Cámara. Los debates fueron arduos hasta que el 16 de abril concluyeron con la aprobación de una doble propuesta:

- a) Las posesiones americanas y asiáticas serian regidas por leyes especiales;*
- b) Los diputados insulares, representantes de aquellos territorios no tenían ninguna misión en la tarea parlamentaria y debían ser suspendidos de sus funciones”.¹¹⁴*

Para FIGUEROA MERCADO, estos cambios en cuanto a la política Ultramarina se venían incubando desde hace algún tiempo:

“[S]egún explicó en Cortes el presidente del Ministerio de Gobernación y Ultramar, don Vicente Sancho, doceañista por más señas. Sancho había manifestado que las provincias ultramarinas no debían tener la mismas Constitución que España, habiéndose indicado en la reunión que también debía verse si era conveniente o no que estuviesen representadas en aquellas y futuras Cortes.

Después de los consabidos estudios se acordó proponer que las aludidas provincias fuesen gobernadas por leyes especiales porque de no hacerlo así parecía imposible regirlas y gobernarlas con la inteligencia y la vigilancia que reclamaba su situación y mucho menos conservarlas unidas a la Metrópoli”.¹¹⁵

¹¹⁴ Emilio de Diego García, *Puerto Rico bajo la administración española durante la primera mitad del s. XIX*, pág. 158, (1983).

¹¹⁵ Figueroa Mercado, *supra* nota 98, en la pág. 206.

El profesor y periodista de la época ACOSTA Y CALVO expresó en aquel momento que el artículo de las leyes especiales era *“un error funesto, y de copia más o menos completa del sistema establecido por algunas naciones extranjeras para sus relaciones con las colonias, y calificaba el régimen de las leyes especiales de sistema bastardo, perturbador y despótico”*.¹¹⁶ Otro que expresó su sentir sobre las leyes especiales fue DE LABRA CADRANA:

“Las leyes especiales de 1837, son un adelanto. En todas partes la legislación especial se ha abierto paso. Pero las leyes especiales (no hay que engañarse) son una puerta para establecer la dictadura y la opresión o para inaugurar una serie de evoluciones en el sentido de la descentralización y de la libertad. Las leyes especiales tienen por objeto crear en las Colonias o en las Provincias de Ultramar (llamadas como queráis) un régimen distinto de la unidad nacional; un régimen más expansivo o menos expansivo, más liberal o menos liberal”.¹¹⁷

Según PICÓ BAUERMEISTER, otros ciudadanos también expresaron su sentir sobre las leyes especiales, pero de manera violenta. La no puesta en vigor en Puerto Rico de la Constitución fue el detonante para que un grupo de militares intentara derrocar el gobierno local para establecer una república. Sobre esto nos dice CRUZ MONCLOVA:

“La desilusión que estos eventos provocaron en Puerto Rico desembocaron en la conspiración llamada “del Regimiento de Granada”. Un grupo de hacendados y militares criollos, en compañía de algunos peninsulares, tramaron apoderarse de las fortalezas en San Juan y proclamar la república independiente”.¹¹⁸

¹¹⁶ Lidio Cruz Monclova, *Historia de Puerto Rico (Siglo XIX)*, tomo II, segunda parte, pág. 583, (1979).

¹¹⁷ *Id.* en la pág. 584.

¹¹⁸ Cruz Monclova, *supra* nota 116, en la pág. 583.

Para poder administrar las posesiones en lo que se aprobaban las “leyes especiales”, se firmó un Real Decreto donde se le “*concedieron al Capitán General amplias facultades para mantener la seguridad de la Isla, hasta que las nuevas leyes estuvieran elaboradas*”.¹¹⁹ Esto fue la causa de grandes problemas para los puertorriqueños. El tiempo que hubo que esperar para que llegaran las prometidas “*leyes especiales*” unido a las “*amplias facultades*”, conocidas como las “*omnímodas*”, llevó a varios Capitanes Generales a cometer graves injusticias, excesos y arbitrariedades contra la población. Más de veinte años tuvieron que esperar los puertorriqueños para que se comenzaran a conceder las prometidas leyes especiales. Sobre la tardanza en la llegada de las leyes especiales, nos dice el profesor DE DIEGO GARCÍA:

*“El descontento que originaba la tardanza de la puesta en vigor de prometido régimen legal especial, crecía con facilidad por la situación discriminatoria en la que aparecían las posesiones de Ultramar, respecto a las demás provincias españolas. A medida que transcurría el tiempo el sentimiento de animadversión resultaba más amplio, pues claramente se advertía un abandono por parte de la Metrópoli”.*¹²⁰

Efectivamente, era una situación discriminatoria a los habitantes de las provincias de ultramar, ya que las “*leyes especiales*” chocaban con lo establecido en el artículo número 4 de la Constitución, que establecía que en la nación se utilizaría los mismos códigos:

*“Art. 4 Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales”.*¹²¹

¹¹⁹ De Diego García, *supra* nota 114 en la pág. 148.

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ Iñigo Cavero Lataillade y Tomás Zamora Rodríguez, *Constitucionalismo Histórico de España*, pág. 142, (Madrid, 1995).

Estas disposiciones constitucionales eventualmente dieron pie al surgimiento de lo que se conoció como el Derecho Ultramarino. DELGADO CINTRÓN lo definió siguiente manera:

“El Derecho Ultramarino es el conjunto de normas jurídicas, códigos, leyes de todas clases que pautan y rigen la vida social en las últimas posiciones de España en América: Cuba y Puerto Rico y en Oriente; en el Archipiélago de las Filipinas y otras islas menores”.

*“El Derecho Ultramarino será preparado y legislado en España, siguiendo de cerca los desarrollos y trayectorias del Derecho español al momento. El procedimiento que se sigue es el de tomar base el área del Derecho español que se quiere trasladar a Ultramar y atemperarlo, es decir, adaptarlo a las especiales condiciones y necesidades de las colonias españolas. De esta forma Puerto Rico recibe un sistema de Derecho basado en los Códigos y Leyes españolas”.*¹²²

Esta especialidad del Derecho que aplicó a las islas de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas surge a partir de las leyes que se crearon al amparo de estas disposiciones constitucionales. Estas fueron creando un régimen legal distinto o especializado para las posesiones españolas allende los mares.

A pesar del revuelo causado, este periodo constitucional y las prometidas leyes especiales para gobernar las provincias de Ultramar no llegaron.

¹²² Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 74.

2.6 La Constitución de 1845.

La disposición sobre las leyes especiales de la Constitución de 1837 se repitió en la de 1845.¹²³ También incluía un artículo sobre la unidad del derecho en España, pero esta vez un poco más escueto, si lo comparamos con la de 1837: *“unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía”*.

Bajo este periodo constitucional las leyes especiales tampoco llegaron. FERNÓS LÓPEZ-CEPERO explica el porqué:

“El largo reinado de Isabel II vio a Europa cambiar bajo Garibaldi y Bismark (unificación italiana y de los estados alemanes), América (expansión de los Estados Unidos, y luego su guerra entre los estados confederados y la unión federal). También moverse lenta pero inevitablemente por el camino de la codificación y las leyes especiales. Por esos códigos y leyes no llegaban a las provincias de ultramar que seguían siendo aparte”.¹²⁴

Es importante destacar que, durante la vigencia de la Constitución de 1845, nació el Ministerio de Ultramar. En su exposición a la S.M. la Reina Isabel II, el Presidente del Consejo de Ministros, don Manuel Pando Fernández de Pinedo, justificaba la creación del Ministerio:

“[L]a extensión y desarrollo de los dominios de Ultramar hayan crecido de una manera tan visible, que desde estos últimos años se ha reconocido la imperiosa necesidad de concentrar los de su administración y gobierno en una sola dependencia”.¹²⁵

¹²³ Constitución de la Nación Española 1845, art. 80 (Madrid, 1845).

¹²⁴ Antonio Fernós López-Cepero, *¡Ser Nosotros Mismos!*, pág. 21, (2003).

¹²⁵ Gaceta de Madrid, núm. 141 del 21 de mayo de 1863.

A juicio de DELGADO CINTRÓN, con la creación del Ministerio de Ultramar *“comienza la modernización del Derecho en Puerto Rico”*.¹²⁶ DELGADO CINTRÓN destaca que fue bajo los auspicios del Ministerio de Ultramar como se fue creando un Derecho penal y procesal penal para Puerto Rico, a través de una serie de comisiones que se crearon para lograr dicho propósito:

“En materia penal se recurre a la creación de comisiones especiales codificadores que bajo el amparo del Ministerio del ramo intentaran la codificación. No se le encargará pues tan delicada e importante tarea a la Comisión General de Codificación, se prefiere para ello la creación de una Comisión especial”.¹²⁷

Señala MALARET JORDÁN que durante este periodo, en materia procesal se hicieron extensivas a Puerto Rico las reglas 12 y 22 de la Ley provisional reformada para la aplicación del Código Penal en la Península.¹²⁸

Después de haberse constituido varias comisiones con el fin de lograr dicho propósito y haber fracasado en el intento, finalmente la comisión creada en 1874 alcanza su objetivo. El Decreto de 9 de febrero de 1874 consigna lo siguiente:

“Los males gravísimos originados por la anarquía que reina en el Derecho penal vigente en nuestras provincias ultramarinas, ha venido preocupando de antiguo a los gobiernos de la Península”. Esta Comisión cumplirá la encomienda después de cinco años de trabajo. También entrega al Gobierno una Ley Provisional adjetiva para la aplicación de las disposiciones del mismo Código Penal para Cuba y Puerto Rico. El Real Decreto de 23 de mayo de 1879 dispone que el

¹²⁶ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 93.

¹²⁷ *Id.*

¹²⁸ Augusto Malaret, *Desarrollo del Derecho Escrito en Puerto Rico*, pág. 135, (1908).

Código Penal reformado se publique y observe en Cuba y Puerto Rico".¹²⁹

2.7 La Constitución de 1869.

La Constitución de 1869 incluyó un título exclusivamente para las Provincias de Ultramar. Esta prometía en su artículo 108 que las Cortes Constituyentes reformarían su sistema de gobierno cuando tomaran asiento los Diputados de Cuba o Puerto Rico, para extender a las mismas, con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución.¹³⁰ De esta Constitución se hizo extensivo a Puerto Rico el Título 1º en 1873:

“[E]l 4 de septiembre (1873), el General Primo de Rivera procedía a promulgar una nueva Ley aprobada por las Cortes el 6 de agosto anterior a instancias del Ministro del Ultramar en el Gabinete de Pi y Margall, don Francisco Suñer Capdevila, a quien el General Prim llamaba el santo que no cree en Dios, y por virtud de la cual se hacía extensivo a la Isla de Puerto Rico el Título 1º de la Constitución Española de 1869”.¹³¹

Sobre la importancia de la extensión del título 1º de la Constitución nos dice FIGUEROA MERCADO:

“Al extenderse este título superaban los estadistas peninsulares todos los prejuicios habidos hacia América desde 1812 hasta esa fecha, pues la Constitución de 1869 no hacía diferencia entre español y ciudadano como la de 1812 ni disponía

¹²⁹ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 93.

¹³⁰ Constitución Española de 1869, art. 108 (Madrid, 1869).

¹³¹ Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), tomo II, primera parte, pág. 330, (1979).

que las provincias de Ultramar se gobernarán por leyes especiales como la de 1837 y 1845".¹³²

FIGUEROA MERCADO reseña que la alegría para los puertorriqueños duró poco, pues el gobernador y capitán general de Puerto Rico don José Laureano Sanz y Posse, el "2 de febrero de 1874 suspendió las garantías constitucionales".¹³³

Durante este periodo se consideró una versión revisada de la Constitución para Puerto Rico, al amparo del artículo 108, pero el proyecto se malogró. Según indica la FIGUEROA MERCADO: *"el primero de diciembre de 1869 se presentó a las Cortes un proyecto de Constitución para Puerto Rico"*.¹³⁴ En el mismo, según Figueroa Mercado, consideraría a Puerto Rico *"parte integrante de la monarquía y regiría la Constitución de 1869"*, aunque *"lo sería con modificaciones"*.¹³⁵ En cuanto a los derechos individuales, destaca FIGUEROA MERCADO que *"tendrían algunas limitaciones importantes, entre estos el de imprenta, el derecho a inspección del gobierno y el de asociación"*.¹³⁶ También proponía el sufragio *"limitado a los que supieran leer y escribir, no poniéndose traba económica alguna"*. Sobre los libertos proponía que *"entrarían en posesión de estos derechos al mismo tiempo que adquiriesen su libertad"*.¹³⁷ La propuesta también implicaba la separación de la Iglesia y el Estado.¹³⁸ Pero finalmente el proyecto se malogró. Culmina FIGUEROA MERCADO diciendo que: *"[la] Constitución de Puerto Rico se mató por la vía del silencio"*.¹³⁹

¹³² Figueroa Mercado, *supra* nota 90, en la pág. 536.

¹³³ *Id.*, en la pág. en la pág. 558.

¹³⁴ *Id.*, en la pág. 450.

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ Figueroa Mercado, *supra* nota 90,

¹³⁷ *Id.*

¹³⁸ *Id.*

¹³⁹ *Id.* en la pág. 495.

2.8 La Constitución de 1876.

La Constitución de 1876 incluyó volver a incluir otro artículo específico para las Provincias de Ultramar en el Título XIII. El artículo 89 del mencionado Título repetía que las provincias de Ultramar serían gobernadas por leyes especiales, pero esta vez autorizaba al Gobierno a aplicar las leyes de la península, notificándolo antes a las Cortes:

“Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península.

*Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las provincias”.*¹⁴⁰

En la Gaceta de Madrid núm. 99, del 9 de abril de 1881, se informa de la extensión de la Constitución de 1876 a Cuba y Puerto Rico.¹⁴¹ A juicio de FRAGA IRIBARNE, es a partir de este momento que se fueron

¹⁴⁰ Constitución Española de 1876, título XIII, art. 89 (Madrid, 1876).

¹⁴¹ “A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º Los Gobernadores generales de las islas de Cuba y Puerto Rico promulgarán en las Gacetas oficiales de las provincias de su mando la Constitución de la Monarquía.

Art. 2º Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la observancia y cumplimiento de la ley de 13 de febrero de 1880, y de las demás especiales que rigen en Cuba y Puerto Rico, de conformidad con lo prevenido en el art. 89 de la Constitución.

Dado en Palacio a siete de abril de mil ochocientos ochenta y uno.

ALFONSO.

El Ministro de Ultramar

Fernando de León y Castillo”

Gaceta de Madrid núm. 99 del 9 de abril de 1881

dictando “una serie de disposiciones que poco a poco fueron creando un sistema aceptable de Derecho Público”.¹⁴²

2.9 Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal o Reglas para la aplicación del Código Penal en las Islas de Cuba y Puerto Rico de 1879.

Una de las disposiciones que surgió a través del citado artículo 89 de la Constitución de 1876 fue el Real Decreto de 23 de mayo de 1879, que estableció un Código Penal para las Provincias de Cuba y Puerto Rico. El mismo no se diferencia esencialmente del de 17 de junio de 1870 que regía en España, pero destaca DELGADO CINTRÓN que generó críticas “por razón de las diferencias establecidas”.¹⁴³

El Código también incluyó unas reglas para su aplicación, que fueron incluidas al final del Código Penal de 1879 para las Provincias de Cuba y Puerto Rico bajo el título de Ley Provisional para la aplicación de las disposiciones del Código Penal.

Estas reglas serían el equivalente a la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872 de la península. La gran diferencia era que las reglas de aplicación en la Península e islas adyacentes tenían 962 artículos, y las de Cuba y Puerto Rico tenía 94. Estas reglas las podemos considerar como el primer cuerpo de Derecho procesal penal en Puerto Rico.

MALARET JORDÁN reseñó en un artículo de 1908 cómo se aplicaba en la Isla el Derecho procesal penal en el siglo XIX. Destaca MALARET JORDÁN que antes de la puesta en vigor de estas reglas

¹⁴² Manuel Fraga Iribarne, *Sociedad Política y Gobierno en Hispanoamérica*, pág. 567, (Madrid, 1962).

¹⁴³ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 93.

locales se venían utilizando las de la Península de manera supletoria, y que estas se continuaron utilizando:

*“[S]e mandó a observar en Puerto Rico en 1879 la ley adjetiva para la aplicación de las disposiciones del Código Penal, que establecía el recurso de apelación y declaraba que seguirían aplicándose con el carácter de supletorias y como doctrina respetable las leyes procesales vigentes en la Península”.*¹⁴⁴

La prisión provisional se reguló a través de las reglas 32 a la 36 de la ley.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Malaret, *supra* nota 128, en la pág. 137.

¹⁴⁵ “32.a Para decretar la prisión provisional, serán necesarias las circunstancias siguientes:

- 1.a Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito.
- 2.a Que este tenga señalada pena superior a la de prisión mayor, según la escala general comprendida en el Código penal, o bien que, aunque tenga señalada pena inferior, considere necesaria el Juez la prisión provisional, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del procesado, hasta que presente la fianza que se le señalare.
- 3.a Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

33.a Procederá también la prisión provisional cuando concurran la primera y segunda circunstancias de la regla anterior, y el procesado no hubiere comparecido al primer llamamiento del Juez o Tribunal que conociere de la causa.

34.a Permanecerán en prisión, aunque ofrecieren fianza:

- 1.º Los reos de robo, los de hurto y estafa a que la ley señalare pena de presidio correccional en cualquiera de sus grados, o que fueren reincidentes, y los de atentado contra 3a Autoridad, concurriendo las circunstancias numeradas en los artículos 259 y 266.
- 2.º Los de lesiones calificadas de peligrosas, ínterin no desaparezca el peligro.

35.a Para llevar a electo el auto de prisión, se expedirá un mandamiento cometido á alguacil del Juzgado o portero del Tribunal, o al funcionario de policía judicial que hubiere de ejecutarlo, y otro al Alcaide de la cárcel que hubiere de recibir al preso. En estos mandamientos se insertará a la letra el auto de prisión.

36.a Cuando el procesado lo fuere por delito á que estuviere señalada pena inferior a la de presidio mayor, según la escala general, y no estuviere por otra parte comprendido en el número 3.º de la regla 28.a, o en la regla 33.a, el Juez o el Tribunal que conociere de la causa decretará si el procesado ha de fiar o no fianza para continuar en libertad provisional. En el mismo auto, si el Juez decretare la fianza, habrá de fijarse la calidad y cantidad de la que se hubiere de prestar. Este auto habrá de ponerse en conocimiento del Ministerio fiscal y notificarse al querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, y será apelable.” Código Penal para las Provincias de Cuba y Puerto Rico y Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal, Real Decreto de 23 de mayo de 1879.

2.10 Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico de 1888.

Diez años después nuevamente al amparo de las Leyes Especiales del artículo 89 de la Constitución Española de 1876, se promulgó una Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico.¹⁴⁶

En esta ocasión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico de 1888 no era muy distinta a la que ya regía en la península desde 1882:

“De tan poca monta son las modificaciones introducidas en la ley de Enjuiciamiento Criminal que con general aplauso viene rigiendo en la Península desde 15 de octubre de 1882, al aplicarla a las Islas de Cuba y Puerto Rico por Real decreto de 19 de octubre de 1888, que la Comisión de Códigos del Ministerio de Ultramar ha prescindido de razonar aquellas como hasta aquí venía haciendo en el acostumbrado informe, y el Ministro ha hecho lo propio, limitándose a reproducir, no sólo el texto de la ley con ligeras variantes exigidas por el diverso valor de la moneda, denominación de las autoridades, Ministerio de que dependen, etc., etc., sino que hasta el Real decreto poniendo en vigor la ley es reproducción del que en 14 de septiembre de 1882 refrendó el a la sazón Ministro

¹⁴⁶ “Ministerio De Ultramar, Real Decreto” Llevadas a cabo por la Comisión de Códigos del Ministerio de Ultramar las modificaciones necesarias para que pueda aplicarse en Cuba y Puerto Rico la ley vigente en la Península sobre procedimiento criminal, de acuerdo con aquella Corporación, a propuesta del Ministro de Ultramar, y en virtud de la autorización que concede a mi Gobierno el art. 89 de la Constitución de la Monarquía; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1. ° Se aprueba para la isla de Cuba y Puerto Rico la ley de Enjuiciamiento criminal vigente en la Península, en virtud del Real decreto de 14 de septiembre de 1882, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Códigos de Ultramar.

Art. 2. ° La nueva ley comenzará a regir en Cuba y Puerto Rico el día 1. ° de Enero de 1889, en que empezarán a funcionar las Audiencias de lo criminal”.

Gaceta de Madrid núm. 304 del 30 de octubre de 1888.

de Gracia y Justicia, señor Alonso Martínez, aprobando y declarando la fecha desde que empezaría a regir el que, con fundamento, denominó Código de Enjuiciamiento criminal".¹⁴⁷

Como señalan SÚÑEZ TEJERA y DÁVILA CABEZAS, la ley estaba *"inspirada en las corrientes de la época, y estipulaba un procedimiento con garantías para la detención y aseguramiento del acusado"*.¹⁴⁸ El tratadista puertorriqueño de la época MUÑOZ MORALES evaluó la nueva ley reseñando lo siguiente:

"Esta ley corrigió defectos sustanciales de las anteriores y al efecto introdujo, entre otras modificaciones, las siguientes: 1, la sustitución de los dos grados de jurisdicción por la instancia única; 2, la oralidad del juicio; 3, la separación de lo civil y lo criminal en cuanto al Tribunal sentenciador; 4, igual separación en cuanto a los jueces instructores en ciertas ciudades populosas en donde hay más de un Juez de 1ª instancia y es mucha la criminalidad; 5, multitud de reglas de detalle para que los Jueces instructores en el examen de los testigos y en la práctica de los demás medios de investigación, se ciñan sólo a lo que sea útil y permanente; y 6, por último, la intervención del procesado en todas las diligencias del sumario tan pronto como el juez estime que la publicidad las actuaciones no compromete la causa pública ni estorba el descubrimiento de la verdad".¹⁴⁹

MALARET JORDÁN también destacó las bondades de la nueva ley procesal y su extensión a la isla:

¹⁴⁷ Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en Cuba y Puerto Rico anotada por la redacción de los Tribunales, V - VI (1888).

¹⁴⁸ Yoruanys Suñez Tejera y Dunia Dávila Cabezas, *Los Efectos Negativos que causa para el Acusado la Prisión Provisional*, pág. 18, (2012).

¹⁴⁹ Luis Muñoz Morales, *Reseña de la Legislación Procesal en Puerto Rico*, pág. 81, (1945).

*“La Ley de Enjuiciamiento Criminal se modificó en 1882, haciéndose extensiva a nuestra Isla en 1889 con las reformas conducentes a facilitar algunos procedimientos y suplir como en las cuestiones perjudiciales algún vacío sustancial por donde era frecuente el arbitrio un tanto desmedido y, más que desmedido, contradictorio, de la jurisprudencia, y corregir los vicios de nuestro sistema tradicional de enjuiciar”.*¹⁵⁰

Los cambios en la ley para Cuba y Puerto Rico en esencia consistían en atemperar detalles geográficos o administrativos a la situación isleña. Ejemplo de esto lo vemos en el capítulo III sobre la prisión provisional, que se mantuvo inalterado a excepción del artículo 507. En la ley de 1882 el artículo 507 indica *“Si las citas hubieren de evacuarse fuera del territorio de la Península...”*, y en la ley de 1888 dice: *“Si las citas hubieren de evacuarse fuera del territorio de la Isla...”*.

Durante este periodo histórico también comienzan a aparecer escritos donde se destacan las lamentables condiciones de la prisión provisional en Puerto Rico. Hasta el propio ministro de Ultramar denunciaba el mucho tiempo que pasaban en prisión preventiva algunos acusados:

*“Lamentaba el entonces Ministro de Ultramar la existencia de sumarios que durasen ocho años, durante los cuales sufría el reo la prisión preventiva, terminando en muchos casos por la absolución de la instancia, y dejando al tratado como reo pendiente de una nueva abertura del proceso”.*¹⁵¹

Un artículo de GONZÁLEZ FAGUNDO publicado en la Revista de Derecho, Legislación y Jurisprudencia de 1937, nos explica cómo

¹⁵⁰ Malaret, *supra* nota 128, en la pág. 137.

¹⁵¹ *Id.*

funcionaba la libertad bajo fianza y la prisión provisional en Puerto Rico durante el siglo XIX:

*“En nuestro antiguo sistema de enjuiciar, el Juez de primera instancia tenía más discreción (en comparación con el sistema vigente en 1937). En todos los casos en que la pena señalada al delito fuere inferior a la de prisión correccional, el Juez debía señalar fianza al acusado para permanecer en libertad, durante la sustanciación del proceso, pero si el delito era de los que se cometían con frecuencia en el territorio juzgado, o existía motivo fundado para creer que trataría el acusado de eludir la acción de la justicia, en ese caso podría decretarse la prisión provisional sin fianza. De modo que un Juez podía tener la Cárcel llena de acusados en prisión provisional, siempre que a su juicio existieran los motivos antes indicados.”*¹⁵²

Otra evidencia de las condiciones de la provisional en esta época la encontramos en el alegato que hiciera el abogado Manuel García Salgado en su defensa de Federico Bellón ante la Real Audiencia de Puerto Rico. Bellón había sido acusado del asesinato de José Pérez Moris, un comerciante miembro del Partido Incondicionalmente Español del Viejo San Juan.¹⁵³ El relato nos refleja cómo se utilizaba la prisión provisional como pena anticipada contra algunos acusados en esa época.

154

¹⁵² Francisco González Fagundo, *Las Fianzas en Casos Criminales*, Revista de Derecho, Legislación y Jurisprudencia, pág. 29, (1937).

¹⁵³ [E]l historiador José Curet, quien escribió la novela histórica "Crimen en la Calle Tetuán", sobre el asesinato del ultra-conservador José Pérez Moris. "Desde Salcedo no se había matado a alguien" que ostentaría un cargo de tan alta jerarquía en el gobierno. Ello nos afirmó Curet, en referencia a Diego Salcedo, el conquistador que habría de constituir el primer magnicidio en la Historia de Puerto Rico, cuando, según varios cronistas, fue ahogado por indígenas boricuas que iniciaron la Rebelión Taína de 1511. Tomado de Noticel, 29 de septiembre de 2011, http://www.noticel.com/la-calle/qu-pas-hoy_20171130075033664/664784583

¹⁵⁴ "He dicho y vuelvo a repetir que un deber de humanidad es el que me trae a este sitio. En efecto: no se trata en este acto de si Bellón es culpable o inocente, no se trata de rebatir los cargos que puedan resultarle en la causa que contra él se instruye, no se trata de si debe imponérsele esta o la otra pena. De lo que se trata, Excmo. Sr., es de las penas, los tormentos que se vienen haciendo sufrir al procesado antes de habérsele declarado culpable, antes de

GARCÍA SALGADO en su alegato ante la Real Audiencia señala que a Bellón sólo se le permitía la visita de su abogado y de un antiguo patrono. Esas visitas eran vigiladas de cerca por los guardias de la cárcel. Este caso era excepcional, pues se acusaba a Bellón de asesinar a un líder prominente del Partido Incondicionalmente Español que para entonces contaba con el apoyo del gobierno. Denuncia GARCÍA SALGADO que el tratamiento que se le da a su representado contrastaba con el que se le brindaba a otros reos, incluso ya convictos, a los que se le permitía la visita de familiares, médicos y sacerdotes. También, según señala GARCÍA SALGADO, *“se les permitía pasear por sitios destinados a este objeto”*.¹⁵⁵ Resalta GARCÍA SALGADO en más de una ocasión en su alegato que *“no se le puede llamar a Bellón culpable por no haber sido sentenciado”*.¹⁵⁶ Y que a pesar de esto *“llevaba ya cuatro meses cargado de grillos y de cadenas, encerrado en una mezquina bartolina, sin*

habérsele oído; se trata de las torturas, de que viene siendo víctima un presunto y supuesto reo sometido a una prisión provisional: torturas contra las cuales se revela la conciencia humana, y los sentimientos de todo hombre medianamente culto y civilizado: torturas que recuerdan los tenebrosos y oscuros tiempos de la Edad Media y los ominosos de la fatídica Inquisición que parece haber resucitado en Puerto Rico con la muerte del Sr. Pérez Moris. Se trata, Excmo. Sr., de evitar que la opinión pública que penetra hasta en la oscura y lóbrega bartolina del procesado, pueda decir que todos esos actos inhumanos e ilegales, se efectúan a ciencia y paciencia de nuestros Tribunales de derecho, a ciencia y paciencia del Ministerio Fiscal, encargado en primer término de velar por la exacta observancia de las Leyes: a ciencia y paciencia del Abogado defensor que no puede menos de clamar y protestar con toda su alma, con todas sus fuerzas, contra esos abusos, contra esas ilegalidades arbitrarias terminantemente prohibidas en nuestras Leyes de procedimientos y en la Ley fundamental del Estado sancionada en el Código Penal .

Habiéndoseme turnado este incidente, me constituí hacen dos meses en la Cárcel para recibir instrucciones del procesado, en el que creía y esperaba encontrar un hombre joven y vigoroso, que estaría tratando con toda la consideración que siempre inspira la desgracia, sobre todo la desgracia que proviene de una voluntad torcida e inconforme con el Derecho. Y, cual no sería mi sorpresa, al encontrarme con un hombre débil, notablemente encanecido, signo seguro de una edad avanzada, encerrado en una mezquina bartolina, cargado de grillos y cadenas, durmiendo sobre el duro suelo. Ni un catre se le proporcionó hasta aquel día, en que las muestras y protestas de mi profundo desagrado ante tamaña injusticia, hicieron comprender en la cárcel que el defensor de Bellón reprobaba aquellos actos incalificables.

...

Hace cuatro meses, que por indicios más o menos graves se redujo a prisión al procesado como presunto asesino del que fue director del Boletín Mercantil. Se le condujo al Castillo del Morro y allí permaneció encerrado en un calabozo, cargado de grillos y de cadenas, y en una mezquina bartolina en la que se le hacen experimentar los horrores de la soledad y aislamiento del régimen celular”. Manuel García Salgado, Discurso Pronunciado ante la Excelentísima Real Audiencia de Puerto Rico, págs. 6 - 8, (1882).

¹⁵⁵ García Salgado, supra nota 154, en la pág. 8.

¹⁵⁶ *Id.*

ventilación, donde no podía moverse ni podía realizar la digestión ni demás funciones de la vida orgánica".¹⁵⁷ Indica que "estas condiciones ya le han afectado su salud".¹⁵⁸

Alertaba GARCÍA SALGADO sobre la eficacia legal de una confesión por parte de Bellón por las condiciones en que se encontraba. Finaliza su alegato comparando el trato recibido por Bellón, que era peor que el que recibiera el asesino del presidente de los Estados Unidos James Garfield o quien intentó asesinar al rey Alfonso XII:

"Ni en una causa por regicidio se hubiera visto lo que se está viendo en ésta. Recuerde V.E. las atenciones y consideraciones con que fue tratado hasta última hora el regicida Otero: contemple V.E. las atenciones que en la vecina república se dispensan al asesino del Presidente Garfield. En ambas causas, de mucha más importancia que la que nos ocupa, tenemos ejemplos notabilísimos de todo el respeto con que se deben cumplir las leyes".¹⁵⁹

Otro caso documentado sobre las condiciones de los detenidos en Puerto Rico es el de los más de quinientos arrestados tras las revueltas del Grito de Lares del 23 de septiembre de 1868. Un grupo de los presos murieron debido a las condiciones insalubres y de hacinamiento en las prisiones donde se encontraban en espera de juicio. Los que sobrevivieron estas condiciones y una epidemia de fiebre amarilla eventualmente fueron liberados o indultados.

Antes de terminar este periodo es importante resaltar que años después de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para Cuba y Puerto Rico se aprobó la Compilación de las Disposiciones Orgánicas

¹⁵⁷ García Salgado, supra nota 154, en la pág. 9.

¹⁵⁸ *Id.*

¹⁵⁹ *Id.* en la pág.13.

de la Administración de la Justicia en las Provincias y Posesiones de Ultramar que organizó la jurisdicción de los tribunales en la isla.¹⁶⁰

2.11 La Carta Autonómica de 1897.

Luego de años de lucha, los autonomistas puertorriqueños liderados por Luis Muñoz Rivera lograron que se le concediera a Puerto Rico la Carta Autonómica de 1897. Dicha carta les brindaba a los puertorriqueños la oportunidad de tener su propio gobierno primera vez en su historia. FRAGA IRIBARNE nos brinda un resumen de la importante legislación:

“Un Real Decreto de 25 de noviembre de 1897 (1) dispuso la plenitud de la vigencia constitucional, aclarando que el título I de la de 1876 se aplicaría sin restricciones de ninguna clase a las Antillas; es decir, que la liberalísima declaración de derechos y de garantías (tomada de la Constitución de 1869) (2) de la Constitución de la Monarquía, se aplicaba en su totalidad a Puerto Rico, y lo mismo la totalidad de las leyes de Enjuiciamiento Criminal...”¹⁶¹

Lamentablemente, el sueño autonómico duró muy poco, ya que el 25 de abril de 1898 los Estados Unidos le declara la guerra a España utilizando como excusa la misteriosa explosión del acorazado Maine, que se encontraba en visita “amistosa” en la bahía de La Habana. Pero dicha explosión fue la excusa perfecta para apoderarse de las Antillas Españolas, sueño que siempre tuvieron desde prácticamente el nacimiento de la nación estadounidense. Sobre el interés de los Estados Unidos en el Caribe nos señala DELGADO CINTRÓN:

“Cuando se iniciaron las guerras de independencia de las provincias españolas de América hispana, Estados Unidos se aseguró una política que tuviera como base que España retuviera Cuba y

¹⁶⁰ Gaceta de Madrid, tomo I, pág. 135, 12 de enero de 1891.

¹⁶¹ Fraga Iribarne, *supra* nota 142, en la pág. 577.

*Puerto Rico.*¹⁶² *Son los Estados Unidos los que impiden los planes del Libertador General Simón Bolívar de independizar las Antillas españolas. Es obvio que las Antillas en poder de una España en decadencia garantizaban a los norteamericanos su eventual obtención*".¹⁶³

Aunque el interés principal de los Estados Unidos de América fue Cuba, eventualmente Puerto Rico también estaría dentro de sus planes imperialistas. Su interés en la isla era para que sirviera de estación carbonera para sus barcos y como parte de la primera línea de defensa para el Canal de Panamá, proyecto que ambicionaban tomar tras el fracaso de los franceses. El propio presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, William McKinley, había expresado su interés sobre la isla desde antes de comenzar la guerra.¹⁶⁴

Para los puertorriqueños, la Guerra del 98 fue un acontecimiento traumático, pues en esta tierra el último evento de guerra había ocurrido hacia 1797 con la invasión de los ingleses. También hay que recordar que Puerto Rico no se contagió con las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX. En Puerto Rico tampoco se dieron las condiciones para que se iniciara un movimiento independentista. Hubo varios factores que contribuyeron a esto, como, por ejemplo: la llegada de realistas a la Isla durante las guerras de independencia, en especial la de Venezuela; la llegada de españoles fieles a la corona; y la misma naturaleza de bastión militar que tuvo la Isla. A eso hay que añadir que el puertorriqueño siempre se sintió español y su liderato político siempre se

¹⁶² Delgado Cintrón, *supra* nota 24, en la pág. 71.

¹⁶³ *Id.*

¹⁶⁴ "Puerto Rico estaba en los planes de adquisiciones del Presidente McKinley, desde antes de la guerra y se puso en función durante esta. En una carta de 3 de junio de 1898 a Lord Salisbury, el Ministro británico, el Presidente se lo comunicó que la Isla de Puerto Rico era uno de los objetivos de la guerra. Ello derrotaba sus taimadas palabras de que la guerra hispanoamericana se llevaba a cabo por razones humanitarias". Delgado Cintrón, *supra* nota 24, en la pág. 71.

movió entre alcanzar la igualdad con el resto de las provincias o lograr el mayor grado de autonomía posible dentro de la soberanía española.¹⁶⁵

Sobre la actitud de los puertorriqueños ante la guerra, reseña DÍAZ SOLER que: *“la gran mayoría de los puertorriqueños mostraban lealtad a la Madre Patria, calificando de criminal la acción estadounidense; ofrecían vidas y haciendas en defensa de la nación española”*.¹⁶⁶

La garantía de derechos constitucionales alcanzada mediante el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897 antes reseñado llegó a su fin el 22 de abril de 1898. En esa fecha el gobernador de Puerto Rico Don Manuel Macías y Casado decretaba suspendidas las garantías individuales.¹⁶⁷

Aunque hubo unos ataques previos el 12 de mayo de 1898 y el 26 de junio de 1898, la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico ocurrió el 25 de julio de 1898. Es importante destacar que al momento de la invasión, ya España había hecho un acercamiento para lograr la paz. Pero Puerto Rico también se encontraba en los planes de conquista de los Estados Unidos.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Sobre la situación puertorriqueña al momento de la invasión nos dice el historiador Juan Carlos Losada: *“En Puerto Rico nunca hubo una guerra de independencia comparada con la cubana. Era una sociedad muy españolizada, con pocos esclavos, y solo en septiembre de 1868 se había producido un intento insurreccional, conocido como el Grito de Lares, que aconteció el día 23, impulsado por miembros de la élite criolla. Unos pocos cientos de portorriqueños se alzaron en armas ese día, pero su resistencia fue ahogada en pocas horas, siendo muertos unos y presos otros”*. JUAN CARLOS LOSADA, HISTORIA DE LAS GUERRAS DE ESPAÑA, pág. 755, (Barcelona, 2015).

¹⁶⁶ Díaz Soler, *supra* nota 105, en la pág. 708.

¹⁶⁷ *“Quedan suspendidas las garantías constitucionales por Decreto de ayer, y en previsión de acontecimientos que pudieran poner en peligro la seguridad del territorio, o de que, lo que no es de esperar, intentara alterar el orden público en estos momentos, por más que abrigo el convencimiento de que si tal caso ocurriera, los leales habitantes de esta isla sabrían impedirlo, demostrando así que son dignos descendientes de los que en otro tiempo supieron luchar y derramar su sangre en defensa de la integridad nacional”*. Ángel Rivero Méndez, *Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico*, pág. 38, (1972).

¹⁶⁸ *“El 22 de julio de 1898, el Gobierno de España, solicitó el concierto de un armisticio para tratar sobre los términos de la paz. Esa nota fue recibida por McKinley cuatro días después; el 3 de agosto respondió aceptando la propuesta, con la condición de que España cediera a Puerto Rico y las otras islas que poseía en el Caribe”*. Díaz Soler, *supra* nota 105, en la pág. 710.

Tras la invasión de los estadounidenses se llevaron a cabo en Puerto Rico varios combates, pero ya la suerte estaba echada. España pierde la guerra y es obligada a firmar el Tratado de París. En el tratado se le impone a España, a pesar de sus objeciones, la cesión de Puerto Rico. De esta manera se puso fin a 405 años de soberanía española sobre Puerto Rico.¹⁶⁹

Con el Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, conocido comúnmente como el Tratado de París de 1898, se puso fin a poco más de cuatro siglos de soberanía española sobre la isla de Puerto Rico. El proceso de firma y ratificación del tratado fue desde el 10 de diciembre de 1898 hasta el 11 de abril de 1899. La cesión de Puerto Rico a los Estados Unidos se dio sin consultar al recién instaurado gobierno autonómico. Dicha cesión comenzó a levantar cuestionamientos y dudas sobre su legalidad. Entre los que denunciaron su legalidad destaca el educador Eugenio María de Hostos.¹⁷⁰

Como resume FRAGA IRIBARNE, su teoría se basaba en que *“una vez en vigor la Carta Autonómica de 1897, España no podía ceder (por lo menos sin utilizar los mecanismos creados por la propia Carta) lo que ya*

¹⁶⁹ “Artículo II: España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones”. Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, art. V, (1898).

¹⁷⁰ “Desde el primer momento de su firma, patriotas puertorriqueños colocaron en entredicho la legalidad del Tratado de París sobre Puerto Rico. Entre los primeros en cuestionar tal legalidad se encontró Eugenio María de Hostos quien decía que dicha Guerra, al no ser hecha por Puerto Rico, ni contra Puerto Rico, ni con el concurso de Puerto Rico, privaba a España de la facultad para disponer a su antojo de nosotros mediante la cesión de nuestro país y sus habitantes, ya que para entonces Puerto Rico contaba y así lo reconocía la propia Carta Autonómica, personalidad jurídica propia. Hostos insistía en que la cesión como resultado de una conquista mediante la guerra era contraria a la tradición jurídica de Estados Unidos como pueblo, por lo que, en consecuencia, señalaba la necesidad de que Puerto Rico designara quiénes, a nombre del país, reclamaran de Estados Unidos el reconocimiento de nuestra personalidad jurídica. Para Hostos, lo negociado entre el Reino de España y Estados Unidos no podía obligar a Puerto Rico por ser “un tratado de paz hecho en París sin conocimiento ni aquiescencia de Puerto Rico”. Para Hostos, el Tratado cuestionaba en sí mismo la imposición de un gobierno militar sin consentimiento de los gobernados con las instituciones de gobierno de Estados Unidos”. Alejandro Torres Rivera, El Tratado de París de 1898, https://www.ecured.cu/Nulidad_del_Tratado_de_Par%C3%ADs

era un país autónomo".¹⁷¹ Tampoco se siguió lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Española de 1876, que establecía que el Rey necesitaba estar autorizado por una ley especial para enajenar, ceder o permutar cualquiera parte del territorio español. Por lo tanto, señala Fraga: *"la cesión fue inconstitucional y sin efectos jurídicos y la situación del ocupante un puro hecho de fuerza"*.¹⁷²

Con la invasión estadounidense se hirió de muerte el recién inaugurado gobierno autonómico cuando estos impusieron para Puerto Rico un Gobierno Militar que duró desde 18 de octubre de 1898 hasta el 30 de abril de 1900.

2.12 Instauración del Gobierno Militar Estadounidense en Puerto Rico (1898 – 1900).

Dos días después de haber liderado la invasión estadounidense en Puerto Rico a través de las costas de Guánica, el General Nelson Miles emitió una proclama donde, entre otras cosas, afirmaba que la invasión no tenía: *"el propósito de intervenir en las leyes y costumbres existentes que fueren sanas y beneficiosas para vuestro pueblo, siempre que se ajusten a los principios de la administración militar, del orden y de la justicia"*.¹⁷³

A pesar de las promesas de Miles de "justicia y humanidad" se instauró en Puerto Rico un gobierno militar que, entre sus primeras acciones, estuvo abolir mediante una *Orden General* el primer gobierno criollo instaurado a través de la Carta Autonómica de 1897 que lideraba don Luis Muñoz Rivera. En este periodo hubo tres gobernadores Generales del ejército estadounidense: Mayor General John R. Brooke, Mayor General

¹⁷¹ Fraga Iribarne, *supra* nota 142, en la pág. 584 (nota a pie de página).

¹⁷² *Id.*

¹⁷³ Bolívar Pagán, *Historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, 1898-1956*, vol. I, págs. 23 - 24, (1972).

Guy V. Henry y Brigadier General George W. Davis.¹⁷⁴ Los dos primeros gobernadores mantuvieron la administración tal y como la recibieron y, poco a poco, fueron realizando los cambios necesarios para atemperarlo a los usos y costumbres estadounidenses. Sobre la administración de los dos primeros, Brooke y Henry, nos dice el capitán WILSON en su libro *Political Development of Porto Rico* de 1905, lo siguiente:

“Durante la administración de estos dos oficiales, se mantuvo el antiguo orden de cosas, aunque hicieron cambios de vez en cuando, cuando se encontraban con leyes y costumbres en conflicto con las queridas teorías y usos de los Estados Unidos”.¹⁷⁵ (traducción nuestra).

Esta justificación fue la que utilizó el gobernador Henry para abolir el gobierno autonómico el 6 de febrero de 1899. En su Orden General núm. 12 del 6 de febrero de 1899 el gobernador Henry indicó:

“Quedando plenamente demostrado, después de dos meses de concienzuda prueba, que la organización creada bajo el sistema español continuada por los representantes del Gobierno de los Estados Unidos bajo la designación de Gabinete Insular, no es compatible con los métodos y progresos americanos”.¹⁷⁶

Mediante esta orden se puso fin al nuevo gobierno autonómico el cual prácticamente no se pudo estrenar. Como reseñara el profesor GOULD, *“no hubo actos de gobierno, ni decisiones judiciales, ni prácticas*

¹⁷⁴ Roberto H. Todd, *Desfile de Gobernadores de Puerto Rico: 1898 a 1943*, pág. 3 (1943).

¹⁷⁵ *“During the administration of these two officers, the old order of things was maintained, though they made changes from time to time, as they found the laws and customs were in conflict with the cherished theories and usages of the United States”.* Edward S. Wilson, *Political Development of Porto Rico*, pág. 54 (1905).

¹⁷⁶ Todd, *supra* nota 174, en la pág. 6.

administrativas, ni formación de costumbres y usos bajo la constitución autónoma que permitiesen juzgar su valor o interpretar sus cláusulas".¹⁷⁷

Debido a que el Congreso de los Estados Unidos aún no había legislado para el Gobierno Puerto Rico, las únicas instrucciones con que contaban los gobernadores militares provenían del Presidente.¹⁷⁸ Específicamente estas provenían de la *General Orders No. 101*. Dicha orden firmada por el presidente William McKinkey, entre otras cosas indicaba que: *"los poderes de la ocupación militar son absolutos y supremos y operaran inmediatamente sobre la condición política de los habitantes"*.¹⁷⁹

Según TRÍAS MONGE, tales instrucciones y dicha orden *"constituyeron la única base legal para la ocupación y el gobierno militar de Puerto Rico"*.¹⁸⁰ Esta acción fue validada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Santiago v. Nogueras*, 214 U.S. 260 (1909):

"La autoridad para gobernar dicho territorio cedido se encuentra en las leyes aplicables a la conquista y cesión. Esa autoridad es el poder militar, bajo el control del Presidente como Comandante en Jefe".¹⁸¹ (traducción nuestra).

¹⁷⁷ Lyman J. Gould, *La Ley Foraker: Raíces de la política colonial de los Estados Unidos*, págs. 19 - 20 (1975).

¹⁷⁸ *Id.*

¹⁷⁹ *The powers of the military occupant are absolute and supreme and immediately operate upon the political condition of the inhabitants.* War Department. General Orders, No. 101, 1898, <http://hawaiiankingdom.org/pdf/General%20Orders%20No.%20101.pdf>, (visitado el 11 de mayo de 2016).

¹⁸⁰ José Trías Monge, *Historia Constitucional de Puerto Rico*, vol. I, pág. 165, (1980).

¹⁸¹ *The authority to govern such ceded territory is found in the laws applicable to conquest and cession. That authority is the military power, under the control of the President as Commander in Chief.* *Santiago v. Nogueras*, 214 U.S. 260, 265 (1909).

A juicio de TRÍAS MONGE, los límites de la autoridad militar en Puerto Rico nunca fueron enteramente precisados.¹⁸² Señala Trías Monge que incluso las actuaciones de los gobernadores militares, muchas veces iban por encima de lo dispuesto en las *General Orders No. 101*.

Las funciones de los gobernadores militares iban más allá de lo administrativo, realizando también funciones legislativas. Como señala Gould, los gobernadores militares “*legislaron*” para la Isla: “*se hicieron algunos cambios radicales como la implantación del juicio por jurado y el recurso de Habeas Corpus*”.¹⁸³ Subraya TRÍAS MONGE que los gobernadores militares “*no tenían una conciencia muy precisa sobre la distinción entre administrar y legislar*”.¹⁸⁴ Como ejemplo, señala Trías Monge que el brigadier general George W. Davis, quien gobernó la isla de 1899 a 1900, “*creía que tenía la facultad de legislar y a base de ello actuó, para hacer los cambios necesarios en las leyes para adaptar la forma de gobierno en Puerto Rico a la correspondiente a los territorios de los Estados Unidos*”.¹⁸⁵ Dice TRÍAS MONGE que esas actuaciones “*iban por encima de las recomendaciones de su asesor legal que le indicaba que la facultad de legislar para los civiles en Puerto Rico recaía sobre el Congreso*”.¹⁸⁶ TRÍAS MONGE destaca que el poder de los gobernadores militares que rigieron en Puerto Rico de 1898 hasta 1900 era mayor que el de los que regían bajo la soberanía española: “*[l]os gobernadores militares gozaban aun de mayores poderes que los viejos capitanes generales bajo la Carta Autonómica y parecían ser, a los ojos de muchos, tan autoritarios e imperiosos como aquellos*”.¹⁸⁷

¹⁸² Trías Monge, *supra* nota 180, en la pág. 162.

¹⁸³ Gould, *supra* nota 178, en la pág. 68.

¹⁸⁴ Trías Monge, *supra* nota 180, en la pág. 165.

¹⁸⁵ *Id.*

¹⁸⁶ Trías Monge, *supra* nota 180, en la pág. 170.

¹⁸⁷ *Id.* en la pág. 164.

Es a través de estas órdenes como el gobierno castrense comienza a realizar cambios profundos en nuestro sistema de Derecho. A través de este proceso, denominado por estudiosos del tema como la “transculturación del Derecho puertorriqueño”, comienzan a introducirse conceptos y estatutos estadounidenses ajenos a nuestra cultura jurídica. Aunque se prometió respetar el sistema legal puertorriqueño, los cambios poco a poco se fueron introduciendo. Una descripción de lo ocurrido durante este periodo nos la brinda TORRES en su artículo: *Puerto Rico Penal Code of 1902 – 1975: a case of American Legal Imperialism*:

“Los gobernadores militares dirigían la isla de manera autoritaria. Las promesas se hacían y se rompían fácilmente. Una de esas promesas, emitida en la Orden General N° 1, era la de respetar la estructura básica del sistema legal:

IX. Las leyes provinciales y municipales, en la medida en que afecten la liquidación de los derechos privados de las personas y la propiedad y prevean el castigo del delito, se aplicarán a menos que sean incompatibles con las condiciones cambiantes de Puerto Rico, en cuyo caso se podrán cumplir. Suspendido por el comandante del departamento. Se administrarán sustancialmente como estaban antes de la cesión de los Estados Unidos.

Sin embargo, poco a poco, el sistema legal fue esculpido. Siempre parecía haber alguna base de "incompatibilidad" sobre la cual colgar un nuevo decreto. Durante los casi 18 meses de gobierno militar, los comandantes a cargo emitieron un total de 375 órdenes generales, 268 circulares y más de órdenes simples, todas con fuerza de ley”.¹⁸⁸ (traducción nuestra)

¹⁸⁸ “[M]ilitary governors ran the island in authoritarian fashion. Promises were easily made and easily broken. One such promise, issued in General Order No. 1, was to respect the basic structure of legal system: IX. The provincial and municipal laws, in so far as they affect the settlement of private right of persons and property and provide for the punishment of crime, will be enforced unless they are incompatible with the changed conditions of Puerto Rico, in which event they may be suspended by the department commander. They will be administered substantially as they were before the cession of the United States. Yet, little by little, the legal

La opinión que tenían los estadounidenses sobre el sistema legal imperante en la Isla fue recogida en el primer censo que realizaran tras la ocupación en el 1899. A juicio de estos investigadores los cambios realizados fueron *“importantes y saludables”*.¹⁸⁹

Una de las prácticas en el campo procesal que fue eliminada a través de estas órdenes fue la de mantener a los acusados detenidos e incommunicados durante periodos indefinidos.¹⁹⁰ También se derogó el secreto del sumario. El gobierno militar tampoco veía con buenos ojos la prisión provisional:

“Nuestras cárceles no tienen en absoluto condiciones higiénicas y se hallan atestadas de hombres en su mayor parte presos provisionalmente. Eso es atentatorio a la salud pública y para armonizar lo que esta exige con lo que exige la recta administración de justicia ya que con la rapidez necesaria no es posible que se reformen nuestros establecimientos penales, es preciso, en la instrucción de los sumarios, prescindir de trámites inútiles y sobre todo economizar la prisión preventiva”.¹⁹¹

system was carved away. There always seemed to be some basis of “incompatibility” on which to hang a new decree. During the nearly 18 months of military government a total of 375 general orders, 268 circulars and more than simple orders, all having the force of law, were issued by the commanders in charge”. Eulalio A. Torres, *Puerto Rico Penal Code of 1902 – 1975: a case of American Legal Imperialism*, 45 Rev. Jur. U.P.R. 1, págs. 3 – 4 (1976).

¹⁸⁹“Desde que los Estados Unidos ocuparon la isla se han introducido muchas medidas importantes y saludables en lo tocante al sistema judicial español, según existía en Puerto Rico, incluyendo la abolición de la teoría de la culpabilidad de una persona acusada de haber cometido un crimen, lo mismo de las investigaciones ex parte y del sistema de incommunicación. Se ha introducido el juicio por medio de jurados, y el sistema de habeas corpus para proteger aquellas personas que puedan haber sido injustamente encarceladas. En el mes de agosto de 1899, atendiendo a una recomendación de la junta judicial, el Gobernador General Davis reorganizó los tribunales, redujo el número de distritos judiciales de doce a cinco, introduciendo gradualmente el sistema de procedimiento americano, observado en lo general en los tribunales de los Estados Unidos”. J.P. Sanger, Henry Gannett, Walter F. Willcox, *Censo de Puerto Rico*, pág. 23, (1899).

¹⁹⁰ Torres, *supra* nota 188, en la pág. 4.

¹⁹¹ Salvador Amell y Masó, *Órdenes Judiciales dictadas por el Comandante en Jefe del Departamento, Secretario de Justicia, Corte Suprema de Justicia; Junta Judicial y Procurador General*, pág. 15 (1900).

Aunque la orden denunciaba las condiciones en que se encontraban los detenidos, no se eliminó esa medida cautelar, sino que se modificó estableciendo que sólo se podría decretar *“cuando comprobada la existencia del delito y formulándose cargos contra determinada persona o existiendo indicios racionales de su culpabilidad tenga aquel señalada pena superior a la de prisión correccional”*.¹⁹² También se estableció un proceso para llegar a los *“indicios racionales de culpabilidad”*.¹⁹³

Asimismo, se emitió la Orden General 228 del 23 de diciembre de 1899 que buscaba agilizar los procedimientos criminales con el objetivo específico de reducir el término de las prisiones provisionales.¹⁹⁴ Entre las disposiciones de esta orden se destaca la que indicaba que se tenía que establecer día y hora para dar principio a las sesiones del juicio oral. También establecía una multa para los acusados si dejaban de comparecer. Además, abría la puerta para que los acusados fueran representados por abogados en la etapa preliminar, aunque advertía que no era necesaria. Ocho días antes del juicio el abogado o el acusado podían presentar *“conclusiones correlativas a las acusaciones”* y presentara pruebas. De no ser presentadas se entraba al juicio únicamente con las de la acusación. El abogado o en ausencia de este el propio acusado, podrían hacer preguntas y repreguntas a los testigos. Las preguntas capciosas o sugestivas no serían permitidas.

¹⁹² *“3ª La prisión preventiva solo se decretará cuando comprobada la existencia del delito y formulándose cargos contra determinada persona o existiendo indicios racionales de su culpabilidad tenga aquel señalada pena superior a la de prisión correccional. Esto, sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 2º del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”*. Amell y Masó, *supra* nota 191, en la pág. 15.

¹⁹³ *“[E]n cuanto al procedimiento criminal se encomendaba a los jueces municipales la instrucción de las primeras diligencias tendientes a la averiguación y comprobación del hecho punible y la detención o prisión de su autor los que deberían verificar en término de seis días después de recibido aviso de la comisión del hecho. Estas diligencias sumarias debían remitirse al Fiscal de la Corte del Distrito, quien expedirá el mandamiento para el ingreso de los presos en la cárcel correspondiente y en el término de diez días debía formular el escrito de conclusiones o pedir el sobreseimiento. La defensa tenía cinco días para formular sus conclusiones, y proponer su prueba, después de lo cual el Tribunal resuelve sobre la admisión de las pruebas, señala día y hora para el juicio oral, del cual se levanta acta, y contra las sentencias dictadas por las Cortes de Distrito se admite recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma...”* Muñoz Morales, *supra* nota 149, en la pág. 32.

¹⁹⁴ Amell y Masó, *supra* nota 191, en la pág. 92.

Las condiciones de los detenidos en aquella época también quedaron plasmadas en el único caso que trata sobre la prisión provisional que llegó discusión en el entonces novel Tribunal Supremo de Puerto Rico (también creado por las *General Orders*). Este caso fue *Ex Parte Leroy* del 3 de noviembre de 1911. En este caso el convicto Carlos Leroy cumplía una condena de treinta años que le impuso la Corte de Distrito de Ponce el 24 de octubre de 1905. El 25 de septiembre de 1909 la condena fue “conmutada” por la de diez años a virtud de decreto del Gobernador de esta Isla, Regis Henri Post.¹⁹⁵ En este caso el convicto solicitaba que se le contara el tiempo que pasó en prisión preventiva.¹⁹⁶

Más adelante, en su decisión, el Tribunal Supremo cita una Orden Judicial emitida el 10 de febrero de 1899, donde evidencia las condiciones carcelarias en Puerto Rico tras el cambio de soberanía, y donde hace especial énfasis en la gran cantidad de acusados que se encontraban en prisión provisional:

“En cuanto a la orden judicial de 10 de febrero de 1899, basada en que nuestras cárceles no tenían en absoluto condiciones higiénicas y se hallaban atestadas de hombres, en su mayor parte presos provisionalmente, fue dictada con el fin de simplificar la instrucción de los sumarios y economizar sobre todo la prisión preventiva, a cuyos fines contiene varias reglas modificando algunos preceptos de la ley que entonces regía”.¹⁹⁷

Según un reporte de 1900 del Gobernador Militar, al momento de la invasión en Puerto Rico había once cárceles y una penitenciaría. Según este

¹⁹⁵ *Ex Parte Leroy*, 17 D.P.R. 1047, (1911)

¹⁹⁶ “Con fecha 7 de agosto último solicitó Leroy del Juez Asociado de esta Corte Suprema, Sr. MacLeary, la expedición de auto de habeas corpus para obtener su inmediata libertad, alegando al efecto, que su prisión era ilegal en cuanto había dejado de abonársele la prisión provisional que había sufrido desde 24 de noviembre de 1904 en que fué arrestado hasta el 24 de octubre de 1905 en que fué condenado, o sean once meses de prisión preventiva, con cuyo abono su condena estaría extinguida”. *Id.* en la pág. 1048.

¹⁹⁷ *Ex Parte Leroy*, 17 D.P.R. 1047, 1048 (1911)

informe, el número de personas confinadas era de más de 3.000 presos, de los cuales muchos nunca habían tenido una audiencia.¹⁹⁸

El censo realizado por los estadounidenses en el 1899 también resaltaba las condiciones de los que supuestamente se encontraban los prisioneros tras la invasión. Alegaban que las condiciones habían cambiado desde su llegada, o sea, en poco más de un año de su llegada:

*“Como aconteció en Cuba, se encontró en Puerto Rico que las cárceles estaban llenas de prisioneros que habían permanecido allí por años sin haber sido sometidos a juicio o sentenciados, y la condición de los mismos era degradante desde el punto de vista material y moral. Todo esto ha cambiado y las instituciones penales de Puerto Rico pueden compararse favorablemente, tanto en lo relativo a las medidas sanitarias como a la buena administración, con cualesquiera instituciones de otros países tropicales”.*¹⁹⁹

Un informe del gobernador militar sobre asuntos civiles describe el sistema penal en general y las condiciones de los confinados en Puerto Rico al momento de la ocupación. El mismo señala que las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba. También destaca que habían detenidos a los que nunca se le había celebrado una audiencia.

“Al momento de la ocupación estadounidense de Puerto Rico había once cárceles y una penitenciaría. El número de personas confinadas ascendía a más de 3,000, de las cuales muchas nunca tuvieron una audiencia.

El inadecuado sistema de administración penitenciaria y las condiciones miserables e inhumanas a las que fueron sometidos los

¹⁹⁸ Annual Reports of the War Department, part. 13, *Report of the Military Governor of Porto Rico on Civil Affairs*, págs. 102 - 103 (1900).

¹⁹⁹ Sanger, Gannett y Willcox, *supra* nota 189, en la pág. 23.

reclusos de estos establecimientos fue llevado temprano a la atención del gobernador militar. El abogado militar del departamento [de Guerra de los Estados Unidos] hizo una investigación cuidadosa de la administración de la cárcel y sacó a la luz un estado de situación impactante, confirmando plenamente los informes, reclamos y las protestas que se habían recibido anteriormente con respecto a la mala gestión, el trato brutal y la mala administración. El resultado inmediato de estas revelaciones fue el nombramiento de un inspector de la cárcel, con el propósito especial de hacer conocer casos particulares para tomar acciones correctivas. El informe recibido mostraba que el estado de situación de todas las cárceles que era altamente deplorable.

Las hostilidades acababan de terminar, y la condición todos los asuntos era muy inestable. Las demoras en la administración judicial eran tan notorias que no había esperanza justificada que asegurara la acción de los tribunales durante muchos meses en casos donde ya habían estado esperando por la investigación. Las cárceles estaban abarrotadas de prisioneros de ambos sexos y de todas las edades y clases, la mayor parte de los cuales habían estado reclusos durante largos períodos, muchos durante años, por cargos menores o insignificantes, o ninguno, y los reclamos de las víctimas por juicios rápidos fueron ignorados.”²⁰⁰
(traducción nuestra)

²⁰⁰ “At the time of American occupation of Porto Rico there were eleven jails and one penitentiary. The number of persons confined therein numbered over 3,000, of whom a great many never had a hearing.

The inadequate system of prison administration and the miserable and inhuman conditions to which the inmates of these establishments were subjected was early brought to the attention of the military governor. The judge-advocate of then department made careful investigation into the jail administration and brought to light a most shocking state of affairs, fully confirming the reports, prayers and protest that had previously been received respecting mismanagement, brutal treatment and maladministration. The immediate result of these revelations was the appointment of a jail inspector, for the special purpose of making know particular cases for corrective action. The report received showed a state of affairs in all of the jails which was highly deplorable. Hostilities had just ended, and all affairs were in a very unsettled condition. The procrastinations in judicial administration were so notorious that hope was not justified of securing action by the courts for many months in cases that had already been long awaiting investigation. The jails were crowded with prisoners of both sexes and all ages and classes, the greater portion of whom had been held for long periods, many for years, on petty or trifling charges, or none at all, and prayers of victims for speedy trials were ignored. Reference of the report of inspector to the head of the department of justice brought the statement of the native secretary at the head of that department to the military governor, in effect, that the reports were either false or exaggerated, and that there

Las detenciones por largos periodos y las condiciones de los detenidos era una de las situaciones que más se repetía como crítica al sistema penal de la época. En cuanto a la prisión preventiva en Puerto Rico durante esta época, nos dice LEBRÓN en 1916:

“España tenía en su código penal las prisiones preventivas, y esto es una rémora para la libertad del individuo: porque pone en manos de ministerio público todos los poderes, arrebatándoselos al ciudadano, y en muchas ocasiones un hombre es privado de su libertad y sometido a los rigores de un proceso, resultando luego inocente, sin que pueda hallar quien le indemnice la lesión moral y los perjuicios materiales sufridos durante su cautiverio”.²⁰¹

2.13 La derogación de la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1888 y la “americanización” del Derecho Procesal Penal Puertorriqueño.

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses al establecerse en Puerto Rico fue documentar el estado de situación de la Isla. Para llevar a cabo esta labor se organizaron unas comisiones que irían alrededor de la isla recopilando toda la información para luego emitir unos informes. El reverendo Henry K. Carroll había recibido la encomienda por parte del presidente estadounidense William McKinley de visitar la Isla para hacer recomendaciones.

En su informe emitido en 1899, CARROLL describe en detalle el funcionamiento del proceso penal en Puerto Rico a través de entrevistas y visitas a juzgados. Detalla el sentir del pueblo hacia el sistema penal, describe cómo

were no prisoners in jails who should not be there, but, notwithstanding, the same secretary, of his own motion, ordered extensive jail deliveries, and several hundred prisoners, many guilty of grave crimes, were set at liberty without any hearing whatever. Annual Reports of the War Department”, supra nota 199, en la pág. 103.

²⁰¹ Ramón Lebrón, *Esbozo Histórico del Derecho Penal: desde la edad media hasta los presentes días*, pág. 21, (1916).

operaba la presunción de inocencia, la detención, la acusación y los juicios de casos graves y menos graves:

“La actitud de la ley española hacia las personas acusadas difiere de la que caracteriza la jurisprudencia anglosajona. Bajo nuestra ley se les considera inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad; bajo la ley española, según el juez Fulladosa, son considerados culpables hasta que se demuestren inocentes. La denuncia en la cual se basa la detención generalmente puede ser hecha por una persona privada o por el fiscal. La orden de arresto no indica la acusación. Después de la detención el acusado es interrogado en privado por el juez, y se mantiene incomunicado durante la primera etapa del proceso inquisitivo, no se permite que nadie lo vea ni hable con él durante dos o tres días. No se le permite estar presente mientras el juez examina a los testigos, también en privado, sólo atiende a un testigo a la vez. Habiendo preguntado el Comisario²⁰² por qué no se informaba al acusado de la acusación en su contra cuando es arrestado, el juez de primera instancia de Humacao le contestó: "porque podría prepararse para una defensa de antemano; podría ponerse en comunicación con las personas con ese fin; son muy inteligentes aquí. Después de que se entera de lo que se le acusa de que puede nombrar a un abogado, pero el abogado no tiene control sobre los procedimientos secretos. Ningún testigo se le permite revelar ni ningún periódico publicar cualquiera de los testimonios. El caso cuando se completa se pasa a la audiencia para el juicio. El sumario es examinado por el Tribunal, que certifica que ha sido debidamente radicado; el fiscal entonces lo examina y lo pasa al abogado (del acusado) para la defensa. En el juicio, el juez que preside hace a cada testigo las preguntas habituales, sobre su edad, lugar de nacimiento, etc., y luego permite que la Fiscalía y la defensa examinen.

Primero llaman a los testigos para el procesamiento (testigos de cargo), luego los de la defensa. El testimonio ante el Tribunal puede ser

²⁰² El autor, Rev. Henry K. Carroll.

el contrario de lo que se ha dado en los procedimientos preliminares; pero esta contradicción no implica perjurio. Esto sólo se considera como evidencia concluyente que se ofrece en el juicio. Se trata de una disposición relativamente reciente de la ley, la razón por la que se hace es porque la gente le tenía tanto terror a la Guardia Civil que darían falso testimonio ante el juez de primera instancia para conciliar con la versión de la guardia, que parece metía hombres a la cárcel bajo la más mínima sospecha. Eso solo se considera evidencia concluyente que se brinda en el juicio. Esta es una disposición de ley comparativamente reciente, por la que se dice que la gente estaba tan aterrorizada ante la guardia civil que daban falso testimonio ante el juez de primera instancia para conciliar a la guardia, lo que parece haber sido Arremetió a los hombres a prisión por la más mínima sospecha.

El Comisionado asistió a una sesión de la audiencia criminal en Mayagüez, cuando cinco hombres estaban en juicio por la quema una finca en Rincón y disparar a la esposa del propietario. Dos abogados se sentaron con los tres jueces, todos vestidos de negro, con encaje blanco en las muñecas. La poca latitud parecía ser permitida al abogado para la defensa, el presidente llamándolos a la orden con frecuencia, sonando una pequeña campana, y descartando sus preguntas, aunque ninguna objeción fue levantada por el fiscal. El testimonio de la esposa del propietario era contradictorio de la de su marido en puntos menores. Dijo que no había luz en la casa cuando se hizo el ataque; ella dijo que fue; dijo que los acusados estaban delante de un grupo de árboles cuando dispararon; dijo que estaban detrás de los árboles.

El propio presidente recibió explicaciones breves de los dos testigos, y se negó a permitir que el abogado de la defensa para entrar en el asunto en absoluto. La corte ejerció poderes más grandes que los acostumbrados en los Estados Unidos, haciendo muchas preguntas y limitando las funciones tanto de la Fiscalía y la defensa. El caso se concluyó con los argumentos escritos de los abogados de ambos bandos.

Hay una fuerte demanda de reformas en los tribunales. El señor Aguayo, un juez capaz y erguido de primera instancia, en una declaración al comisionado, instó a que se eliminara todo secreto en la investigación preliminar. Señala como el mayor mal del sistema que el secretismo "produce en la conciencia pública una especie de terror" y, por regla general, "los testigos deben testificar por la fuerza". Insiste en que hacerlo público aseguraría la cooperación general; que los que tengan conocimiento del caso se presentarían a testificar; que sería "una garantía contra la venalidad de los jueces", y que el acusado pueda producir todas las pruebas a su favor. Él introduciría el sistema del jurado, que está en uso en España, inmediatamente. El tiempo ocupado para hacer el Sumario, es regularmente de un mes o más, estaba casi perdido, ya que no era concluyente, incluso en los casos en que el sumario mostró que la convicción era improbable. Debe, en todo caso, subir a la audiencia ser juzgado o desestimado.

Los abusos, dijo el Comisionado, eran numerosos. Los retrasos son largos y vejatorios. Después de que el Sumario, consistente de 500 a 1,000 hojas, está en manos de la corte, pueden pasar seis meses o más antes de que comience el juicio. A veces el prisionero es puesto en libertad antes de que su caso comience, luego de haber sido demostrada su inocencia a satisfacción del juez de primera instancia; sin embargo, la corte puede proceder con el caso. Hombres con intenciones maliciosas tienen, se dicho, una amplia oportunidad para asegurar el encarcelamiento de personas inocentes durante un mes o más, y sin embargo escapar del enjuiciamiento por hacer acusaciones falsas.

El enjuiciamiento de delitos menores se hizo difícil por las distancias que el querellante tenía a menudo que recorrer, la horrible condición de las carreteras, y el tiempo y los gastos que conllevaba. Un caso ilustrativo fue dado a Comisionado por un granjero alemán que vivía en Gobo, que tenía parte de su granja en el distrito municipal de Utuado y en parte en la de Arecibo. Un hombre con el que había tenido problemas le robó su caballo. Él lo persiguió y consiguió el caballo. Inmediatamente hizo una denuncia

ante el Comisario del distrito, y al día siguiente fue ante el juez de primera instancia en Arecibo. Demostró que era el propietario del caballo y lo recibió en depósito. Entonces se descubrió que el crimen se cometió realmente en el distrito de Utuado, y tuvo que ir a ese lugar, casi hasta Arecibo. Allí se le dijo que el juicio se llevaría a cabo en Mayagüez seis o siete meses después. Tendría que ir a Mayagüez con sus testigos, consumiendo dos días en cada sentido, además del tiempo que durara el juicio. La ley provee para los gastos de los testigos, pero se afirma que es tan difícil obtenerlos que las reclamaciones se venden a menudo con un descuento considerable. El caballo fue valorado en \$25. El alemán ya había perdido dos días, esperaba perder una semana más en el juicio, y pagar \$50 en gastos. En tales circunstancias, los delitos, en muchos casos, no se denuncian y quedan impunes.”²⁰³ (traducción nuestra).

²⁰³ “The attitude of the Spanish law toward accused persons differs from that which characterizes Anglo-Saxon jurisprudence. Under our law they are regarded as innocent until proved guilty; under the Spanish law, according to Judge Fulladosa, they are regarded as guilty until proved innocent. The denuncia on which arrest is usually based may be made by a private person or by the fiscal. The order of arrest does not state the charge. After arrest the accused is questioned privately by the judge, and is held incomunicado in the first stage of the inquisitorial proceedings, no one being allowed to see him or talk with him for two or three days. He is not permitted to be present while the judge examines the witnesses, also in privacy, only one witness being present at a time. Asked by the commissioner why the accused is not informed of the charge against him when he is arrested, the judge of first instance at Humacao replied: “Because he might prepare himself for a defense beforehand; he might put himself in communication with persons for that purpose; they are very clever here.” After he learns what he is accused of he may name a lawyer, but the lawyer has no control over the secret proceedings. No witness is allowed to disclose and no newspaper to print any of the testimony. The case when completed is passed on to the audiencia for trial. The summary is examined by the court, which certifies that it has been properly drawn; the fiscal then examines it and passes it to the counsel for the defense. On the trial the presiding judge asks each witness the usual questions as to his age, birthplace, etc., and then allows the prosecution and the defense to examine. The witnesses for the prosecution are first called, then those for the defense. The testimony before the court may be the very opposite of that given in the preliminary proceedings; but this contradiction does not involve perjury. That only is regarded as conclusive evidence which is given on the trial. This is a comparatively recent provision of law, the reason for which is said to be, that people were so much in terror of the civil guard that they would give false testimony before the judge of first instance to conciliate the guard, which seems to have haled men to prison on the barest suspicion. The commissioner attended one session of the audiencia criminal at Mayaguez, when five men were on trial for burning ash estate in Rincon and shooting the wife of the proprietor. Two lawyers sat with the three judges, all wearing black gowns, with white lace at the wrists. Little latitude seemed to be allowed to the counsel for the defense, the president calling them to order frequently, by ringing a small bell, and ruling out their questions, though no objection was raised by the fiscal. The testimony of the wife of the proprietor was contradictory of that of her husband on minor points. He said there was no light in the house when the attack was made; she said there was; he said the accused were in front of a group of trees when they shot; she said they were behind the trees. The president himself got brief explanations from the two witnesses, and refused to allow the counsel for the defense to go into the matter at all. The court exercised larger powers than is customary in the United States, asking many questions itself and limiting the functions both of the prosecution and the defense. The case was concluded with the written arguments of the lawyers on both sides.

Al establecerse el gobierno militar, estos decidieron mantener en vigor todas las leyes vigentes en ese momento, siempre y cuando no fueran incompatibles con la ocupación. Pero poco tiempo después se fueron organizando unas comisiones que propondrían revisar todo el ordenamiento para adaptarlos a las costumbres legales estadounidenses hasta donde fuese posible. Esto a pesar de que los códigos y leyes vigentes eran catalogados por abogados y jueces de la época como “*equitativos, adecuados y efectivos*” según CARROLL.²⁰⁴

El 30 de octubre de 1898 se llevó a cabo un congreso donde, según el comisionado Carroll, “*se contó con representación de los elementos más*

There is a strong demand for reforms in the courts. Senor Aguayo, an able and upright judge of first instance, in a statement to the commissioner, urged that all secrecy in the preliminary investigation be removed. He points out as the greatest evil of the system that the secrecy "produces in the public conscience a sort of terror," and, as a rule, "witnesses have to be made to testify by force." He insists that publicity would insure general cooperation; those having knowledge of the case would come forward to testify; that it would be "a guaranty against the venality of judges," and that the defendant could produce all the proof on his side. He would have the jury system which is in use in Spain introduced immediately. The time occupied in making the sumario, ordinarily a month or more, was well nigh wasted, since it was not conclusive, even in cases where the summary showed that conviction was improbable. It must, in any event, go up to the audiencia to be tried or dismissed. Abuses, the commissioner was told, were numerous. The delays are long and vexatious. After the sumario, consisting of from 500 to 1,000 sheets, is in the hands of the court, it may be six months or more before the trial begins. Sometimes the prisoner is set at liberty before his case comes on, his innocence having been demonstrated to the satisfaction of the judge of first instance; nevertheless, the court may proceed with the case. Men with malicious intent have, it was said, abundant opportunity to secure the imprisonment of innocent persons for a month or more, and yet escape prosecution for making false charges. The prosecution of minor offenses was made difficult by the distances the complainant often had to go, the horrible condition of the roads, and the time and expenses involved. A case in illustration was given the commissioner by a German farmer living at Gobo, having his farm partly in the municipal district of Utuado and partly in that of Arecibo. A man with whom he had had trouble stole his horse. He pursued, him and got the horse. He immediately made complaint before the comisario of the district, and next day went before the judge of first instance in Arecibo. He proved his ownership of the horse and received him in deposito. Then it was discovered that the crime was really committed in the district of Utuado, and he had to go to that place, almost as far as to Arecibo. There he was told that the trial would take place at Mayaguez six or seven months later. He would have to go to Mayaguez with his witnesses, consuming two days each way, besides the time occupied in the trial. The law provides for the expenses of witnesses, but it is claimed that it is so difficult to collect them that the claims are often sold at a considerable discount. The horse was valued at \$25. The German had already lost two days, expected to lose a week more at the trial, and to pay \$50 in expenses. Under such circumstances crimes would, in many instances, go unreported and unpunished." Henry K. Carroll, Report of Porto Rico, págs. 25 - 26, (1899).

²⁰⁴ *Id.* en la pág. 24.

representativos de la sociedad puertorriqueña".²⁰⁵ En dicho congreso se emitieron una serie de recomendaciones que serían transmitidas por Carroll al presidente McKinley. Entre las peticiones que se realizaron, se encontraban algunas relacionadas al proceso penal.

El Secretario de Justicia de entonces, Herminio Díaz Navarro, presente en dicho congreso, emitió sus recomendaciones de cambio de los procedimientos criminales. Estas fueron, en primer lugar, "*que se hiciera público el proceso desde su inicio y que no se mantuviera al acusado incomunicado*".²⁰⁶ También recomendó que "*se permitiera el "Habeas Corpus" en casos de prisión preventiva y que se estableciera el juicio por jurado*".²⁰⁷ Díaz Navarro defendió la permanencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirmando que no eran tan deficiente como afirmaban algunos, sin haberla estudiado con detenimiento. Lo que procedía era atemperarla a la nueva realidad política y adoptar ciertas reformas que incorporaran el pensamiento jurídico más avanzado.²⁰⁸

Finalmente, el comisionado Carroll envía sus recomendaciones al Presidente McKinley, donde propone que "*se mantengan en vigor los Códigos Penal, Civil y de Comercio en tanto sean compatibles con la Constitución de los Estados Unidos, y hasta que una comisión nombrada por el Presidente considere, revise y enmiende los mismos, y el Congreso apruebe dicha revisión*".²⁰⁹ Aunque no menciona específicamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presumimos que también avaló su permanencia con las mismas recomendaciones.²¹⁰ Según TRÍAS MONGE, la propuesta "*de que se nombrase*

²⁰⁵ Luis González Vales, *Apuntes para una historia del proceso de adopción del Código Penal luego del cambio de soberanía*, Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, vol. I, núm. I, págs. 149 - 150 (1989).

²⁰⁶ *Id.* en la pág. 150

²⁰⁷ *Id.*

²⁰⁸ González Vales, *supra* nota 205, en la pág. 150.

²⁰⁹ Carroll, *supra* nota 203, en la pág. 64.

²¹⁰ That the penal, civil, and commercial codes be continued in force, in so far as they are consistent with the Constitution of the United States, until a commission, to be appointed by the President, shall consider, revise, and amend them, and Congress shall have approved such revision.

*una comisión para revisar los códigos del país fue muy mal recibida en Puerto Rico porque se entendía que este era un asunto de determinación local”.*²¹¹

2.14 Las Comisiones Revisoras y su efecto en el Derecho Procesal Penal Puertorriqueño.

En el 1900 los Estados Unidos aprueban para Puerto Rico la Ley Foraker, que sustituye el gobierno militar por uno civil nombrado por la metrópoli. Dicho Estatuto contenía dos artículos sobre el sistema legal imperante en Puerto Rico en aquel momento. El primer artículo establecía que las leyes y ordenanzas vigentes en la isla en aquel momento y que no fueran alteradas por la nueva ley orgánica, continuarían vigentes.²¹² El segundo artículo establecía que se crearía una comisión, con al menos un puertorriqueño, cuyos miembros serían nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado federal para “para revisar las leyes de Puerto Rico, como también los varios códigos de procedimientos”.²¹³ El presidente de los Estados Unidos, William McKinley, designó miembros de la *Commission to review and compile the Laws*

²¹¹ Trías Monge, *supra* nota 95, en la pág. 56.

²¹² *Ley Orgánica Foraker de 1900, Art. 8, Leyes y ordenanzas de Puerto Rico continuarán vigentes:* Las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta Ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos.

²¹³ *Ley Orgánica Foraker de 1900, Art. 40: “Comisión para compilar y revisar leyes: Una comisión compuesta de tres miembros, siendo por lo menos uno de ellos ciudadano natural de Puerto Rico, será nombrada por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado, para revisar las leyes de Puerto Rico, como también los varios códigos de procedimientos y sistemas de gobierno municipal actualmente en vigor; para formular y proponer las leyes que fueren necesarias para formar un gobierno sencillo, armónico y económico; establecer justicia y asegurar su pronta y eficaz administración; inaugurar un sistema general de educación e instrucción pública, proveer edificios y fondos para la misma; igualar y simplificar el sistema de tributación, así como todos los métodos para obtener rentas, y dictar las demás disposiciones que sean necesarias para asegurar y extender los beneficios de una forma de gobierno republicano a todos los habitantes de Puerto Rico. Todos los gastos que origine dicha Comisión, incluyendo los empleados y demás auxiliares necesarios que ella emplee, y un sueldo a cada miembro, a razón de 5,000 dólares al año, se autorizarán pagándose de la Tesorería de Puerto Rico como parte de los gastos del Gobierno de Puerto Rico. Y dicha Comisión presentará al Congreso un informe minucioso y definitivo, en los idiomas inglés y español, de sus revisiones, compilaciones y recomendaciones, con notas explicativas en cuanto a los cambios y justificación de éstos, dentro de un año de la adopción de la presente Ley”.*

of Porto Rico²¹⁴ a los abogados norteamericanos Joseph Daly, ex Juez, residente en Nueva York, y a Leo Rowe, de Pennsylvania, y al puertorriqueño ex secretario de Justicia, el abogado Juan Hernández López.²¹⁵

El doctor ROWE, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania, en su libro: *The United States and Puerto Rico*, resalta que para el Gobierno Militar dos de los tres asuntos más importantes eran la organización judicial de la isla y el sistema de procedimiento criminal.²¹⁶ (traducción nuestra).

Sobre el procedimiento criminal dijo:

*“El sistema de procedimiento criminal fue utilizado durante la dominación española como medio para intimidar a la población nativa. Permitió al juez municipal o al policía magistrado mantener al acusado en completo aislamiento durante el período prescrito por la ley, y someterlo a una serie de exámenes inquisitoriales con el fin de obtener una confesión. Esto era conocido como el “incomunicado”.”*²¹⁷ (traducción nuestra).

ROWE destacó que “[l]os asuntos relacionados a la revisión de los códigos de procedimiento presentaban una dificultad considerable”.²¹⁸ (traducción nuestra). Indicó que: “[m]ucho se ha dicho y escrito para condenar el procedimiento penal español, pero estos ataques radicales han sido, por lo general, fuera de lugar”.²¹⁹ (traducción nuestra).

²¹⁴ Comisión para la revisión y compilación de las leyes de Puerto Rico.

²¹⁵ Delgado Cintrón, *supra* nota 24, en la pág. 252.

²¹⁶ “The three most important questions to which the military government addressed itself were the judicial organization of the island, the system of criminal procedure, and the system of taxation”. Leo S. Rowe, *The United States and Porto Rico*, págs.124 - 125, (New York, 1904).

²¹⁷ “The system of criminal procedure had been used during Spanish domination as a means of intimidating the native population. It enabled the municipal judge or police magistrate to keep the accused in complete isolation during a period prescribed by law, and to subject him to a series of inquisitorial examinations for the purpose of extracting a confession. This was known as the “incomunicado.” Rowe, *supra* nota 216, en la pág. 125.

²¹⁸ “The questions involved in the revision of the codes of procedure presented considerable difficulty.” *Id.* en la pág 159.

²¹⁹ “Much has been said and written in condemnation of the Spanish criminal procedure, but these sweeping attacks have usually been wide of the mark.” *Id.*

ROWE adjudicó la fama del sistema español a su mala administración:

“Incluso con sus defectos, el sistema no habría despertado la desconfianza de la población nativa si no se hubiera administrado adecuadamente. Su mala fama se debió en gran parte a prácticas desconocidas por la ley o en violación directa de la misma”.²²⁰ (traducción nuestra).

Esa supuesta desconfianza del pueblo, alega ROWE, fue una de las razones que llevó a la comisión a llevar a cabo una “revisión radical” del sistema imperante hasta ese momento:

“[L]a manifiesta desconfianza de la población nativa hacia el sistema español, condujo a la adopción de un plan que implicaba una revisión radical del código de procedimiento penal. Los códigos de procedimiento penal de California y Montana fueron modificados para adaptarlos a las condiciones locales y de esta forma fueron propuestos a la Asamblea Legislativa de la isla como un sustituto del código español. En la sesión de enero de 1902, se adoptó el nuevo código de procedimiento y el primer día de julio del mismo año entró en vigor”.²²¹ (traducción nuestra).

Señala TRÍAS MONGE que la comisión “recomendó la sustitución de tres códigos: el penal, el de Enjuiciamiento Criminal y el de Enjuiciamiento Civil”.²²² También “concluyeron que todas las materias que le fueron confiadas caen

²²⁰ “Even with its defects the system would not have aroused the distrust of the native population had it been properly administered. Its bad reputation was largely due to practices either unknown to the law or in direct violation of it.” *Id.* en la pág. 160.

²²¹ “[T]he manifest distrust of the native population toward the Spanish system, led to the adoption of a plan which involved a radical revision of the code of criminal procedure. The codes of criminal procedure of California and Montana were so modified as to adapt them to local conditions and in this form they were proposed to the Legislative Assembly of the island as a substitute for the Spanish code. At the session of January, 1902, the new code of procedure was adopted and on the first day of July of the same year it went into effect.” Rowe, *supra* nota 225, en la pág. 160 - 161.

²²² José Trías Monge, *El choque de dos culturas jurídicas*, pág. 94, (Hato Rey, 1991).

dentro de la competencia de la Asamblea Legislativa local".²²³ Señala GONZÁLEZ VALES que, a juicio de los Comisionados, *"la revisión de los códigos criminal, civil y de comercio y la de las leyes de enjuiciamiento era muy difícil porque conllevaba el examinar instituciones íntimamente identificadas con las tradiciones, hábitos de vida del pueblo y en cierto modo nacidos de éstos"*.²²⁴ Esto llevó a la presentación por José Celso Barbosa ante el Consejo Ejecutivo de un anteproyecto de ley para la creación de un segundo cuerpo a tal propósito, la Comisión Codificadora de Puerto Rico.

El 31 de enero de 1901 la Asamblea Legislativa estableció una Comisión Codificadora de Puerto Rico la cual se dedicaría a revisar, compilar y codificar el Derecho Puertorriqueño, entregando al Gobernador un Informe Oficial con sus recomendaciones al término de su encomienda.²²⁵ Esta nueva comisión se constituyó con los anteriores miembros Joseph Daly y Juan Hernández López y John M. Keedy en sustitución de Leo Rowe. La revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedó en manos de Keedy.

Eulalio A. TORRES en su artículo: *The Puerto Rico Penal Code f 1902-1975: a case study of American Legal Imperialism*, describe a Keedy como *"el más opaco y sin distinciones de todos los comisionados designados para estudiar las leyes de Puerto Rico"*.²²⁶ (traducción nuestra).

MUÑOZ MORALES catalogó el trabajo de Keedy como *"un fraude, ya que en vez de revisar la entonces vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal o de proponer un nuevo estatuto procesal para la Isla, procedió a copiar el Código de Enjuiciamiento Criminal del estado de California, hecho que ocultó"*.²²⁷ MUÑOZ DE FRONTERA por su parte resalta que en sus *Comentarios al Código Penal y*

²²³ Trías Monge, *supra* nota 222 en la pág. 262.

²²⁴ González Vales, *supra* nota 205, en la pág. 156.

²²⁵ Torres, *supra* nota 188, en la pág. 263.

²²⁶ *"By all accounts he seems to have been the most opaque and undistinguished of all the commissioners ever designated to study the laws of Puerto Rico."* Torres, *supra* nota 188, en la pág. 16.

²²⁷ Muñoz Morales, *supra* nota 149, en la pág. 33.

a la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluidos en el Informe de la Comisión Codificadora, Keedy *“hace creer que todo fue obra suya”*. MUÑOZ DE FRONTERA señala que *“en California había un solo código dividido en tres partes: 1) delitos y castigos, 2) procedimiento criminal y 3) prisiones o cárceles”*.²²⁸ Añade MUÑOZ DE FRONTERA que en Puerto Rico se decidió que *“se dividiría el material en dos códigos [Penal y de Enjuiciamiento Criminal], siguiendo el método al que el pueblo estaba acostumbrado durante la soberanía española”*.²²⁹

Sobre su propuesto Código de Enjuiciamiento Criminal, el comisionado KEEDY sólo indica en el informe lo siguiente:

“Siendo el procedimiento la forma empleada para aplicar la ley, el que ahora se propone difiere naturalmente del sistema hoy vigente, y desde luego los jueces y abogados a quienes incumbe administrarla, se verán en la necesidad de estudiar el cambio propuesto. Hemos procurado que el sistema fuese fácilmente comprendido, y esperamos que en la aplicación de los principios no habrá dificultad alguna”.²³⁰

La propuesta de Keedy de derogar en su totalidad nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal fue censurada por el único comisionado puertorriqueño don Juan HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien condenó el hecho de una sustitución completa y derogación absoluta de nuestros códigos.²³¹

“Presentado este proyecto por el Comisionado norteamericano, Mr. Keedy, con un brevísimo informe, no mencionó que tal proyecto había sido copiado en su totalidad de los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal del Estado de California, prescindiendo en absoluto de todo lo hasta entonces vigente en la isla”.²³²

²²⁸ Néida Muñoz de Frontera, *Historia del Derecho Puertorriqueño*, 178, (Hato Rey, 2002).

²²⁹ *Id.*

²³⁰ *Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico*, pág. 36 (1902).

²³¹ *Id.*

²³² *Id.*

La propuesta fue criticada por destacados miembros de la clase togada puertorriqueña. Según ROWE los abogados se oponían a cualquier cambio radical.²³³

“El conservadurismo natural de los abogados se vio reforzado por la sensación de que cualquier modificación del sistema legal desorganizaría la profesión y colocaría a sus miembros bajo la necesidad de comenzar nuevamente sus estudios legales”.²³⁴ (traducción nuestra).

...

Esta repentina introducción de un sistema de procedimiento penal totalmente diferente de todo lo que había existido previamente en la isla fue visto con mucha preocupación por los elementos más conservadores de la población”.²³⁵ (traducción nuestra).

Entre los abogados que expresaron su rechazo a los cambios estaba don José de Diego y Martínez, quien fuera Sub-Secretario de Gracia, Justicia y Gobernación durante el breve gobierno autonómico y futuro presidente de la Cámara de Delegados. De Diego, quien también era poeta, plasmó en su poema *El Fuero Juzgo* su rechazo a la adopción de los códigos estadounidenses:

“A fines del año 1898, ocurrió en Puerto Rico el cambio de soberanía, cuando se hundió en el Caribe, como naufragio de un sol, la bandera española, y a principios del año 1902, los Códigos de Montana y California sustituían a los de España, eran traducidos del inglés al castellano, eran impuestos por el conquistador a la obligada mansedumbre del pueblo conquistado”.

²³³ Rowe, *supra* nota 216, en las págs. 159, 215 - 216

²³⁴ “The natural conservatism of the bar was reinforced by the feeling that any recasting of the legal system would disorganize the profession and place its members under the necessity of beginning their legal, studies anew”. Rowe, *supra* nota 216, en la pág. 159.

²³⁵ “This sudden introduction of a system of criminal procedure totally different from anything that had previously existed in the island was viewed with much concern by the more conservative elements of the population”. ROWE, *supra* nota 216, en las págs. 215 - 216.

*“Lo que pasó naturalmente en dos siglos, se pretendió que aquí pasara en dos años: lo que se elaboró por la continuidad de una transformación progresiva, se intentó aquí por la súbita fuerza del desplazamiento. Ahí está el hecho en apariencia realizado: los Códigos de California y Montana rigen en Puerto Rico, se ahorca por el procedimiento de Montana, se enjuicia por el procedimiento de California”.*²³⁶

En el Consejo Ejecutivo, el único que se opuso a la aprobación de los códigos fue el destacado jurista don Rosendo Matienzo Cintrón. MATIENZO CINTRÓN lo hizo alegando que las modificaciones eran *“perjudiciales al país, por no estar en armonía con la opinión pública ni favorecidas por ésta”*.²³⁷ También alegaba que *“habían sido redactadas aprisa, sin haber tomado en consideración las condiciones en las que se hallaba el país”*.²³⁸ Señaló además que *“el pueblo no estaba representado en la Cámara de Delegados, de donde estaba ausente el elemento federal y calificó la Ley Foraker de ratonera”*.²³⁹

Es importante destacar que, en esa época, la Cámara de Delegados sólo tenía miembros del Partido Republicano liderado por el anexionista²⁴⁰ Dr. José Celso Barbosa. El Partido Federal liderado por Don Luis Muñoz Rivera se había abstenido de participar en la contienda electoral. Sobre la actitud colaboracionista de los republicanos con el gobierno estadounidense y en especial sobre la derogación del derecho puertorriqueño, nos dice TRÍAS MONGE:

²³⁶ José De Diego, *Nuevas Campañas*, págs. 13 - 14, (1916).

²³⁷ Luis M. Díaz Soler, *Rosendo Matienzo Cintrón: Orientador y Guardián de una Cultura*, vol. I, pág. 229, (1960).

²³⁸ *Id.* en la pág. 229.

²³⁹ *Id.*

²⁴⁰ En Puerto Rico se utiliza el término “anexionista” para identificar a aquellas personas que abogan o favorecen la anexión de la isla como un estado federado de los Estados Unidos de América.

“Los republicanos en la Cámara y en el Consejo Ejecutivo de estos primeros tiempos no se doblegaron siempre a la voluntad oficial, pero la actitud básica fue de aquiescencia, lo que permitió la radical transformación del derecho sustantivo hacia metas asimilistas. El gobernador Hunt alababa el producto de las deliberaciones legislativas. “hay toda tendencia a proteger el capital”,²⁴¹ comentaba, “sin embargo, la elevación del trabajo no ha sido pasada por alto.” (traducción nuestra).²⁴²

La consecuencia para el desarrollo del derecho puertorriqueño fue la festinada importación en masa de códigos y leyes norteamericanas de escasa relación con el medio local. A recomendación de dos comisiones codificadoras que contaron tan sólo con un puñado de meses para evaluar sus recomendaciones, la Asamblea Legislativa aprobó el 1 de marzo de 1902, con los pocos cambios que una consideración superficial permitía, un nuevo Código Penal, otro de Enjuiciamiento Criminal y un Código Político. El primero se tomó de Montana, y los otros dos de California. Diez días más tarde se aprobó un Código de Enjuiciamiento Civil, calcado del de Idaho”.²⁴³

A pesar de todos los señalamientos hechos por abogados y por la opinión pública, el Consejo Ejecutivo aprobó el 1 de marzo de 1902 la sustitución del Derecho puertorriqueño por códigos norteamericanos.²⁴⁴ La Cámara de Delegados hizo lo propio días más tarde.²⁴⁵ De esta manera, como señala OLESA MUÑIDO, Puerto Rico adoptó un código *“fruto de la dominación estadounidense y totalmente divorciado de la cultura hispanoportorriqueña”*.²⁴⁶

El gobierno estadounidense en la isla, que había fomentado entre los legisladores la adopción de nuevas leyes afines con el régimen, aplaudió la

²⁴¹ *“There is every tendency to protect capital”.*

²⁴² *“[Y]et the elevation of labor has not been overlooked”.*

²⁴³ Trías Monge, *supra* nota 95, en la pág. 67.

²⁴⁴ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 69.

²⁴⁵ *Id.* en las págs. 69 – 70.

²⁴⁶ Octavio Pérez Vitoria, *Las Medidas de Seguridad*, págs. 293 - 294, (1951).

aprobación. Así quedó plasmado en el reporte anual del gobernador de Puerto Rico William H. Hunt al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt:

“Se han obtenido ahora nuevos y buenos códigos sobre leyes penales y procedimientos criminales y han comenzado en vigor el 1 de julio de 1902.

...

El Procurador General Harlan, en su informe, describe los códigos como "esencialmente estadounidenses en forma y sustancia". En general se entiende que los códigos penales, con los cambios necesarios para adaptarlos al sistema de leyes vigente en Puerto Rico, son sustancialmente como los vigentes en el estado de California. Fue un gran paso adelante adoptar un nuevo código penal".²⁴⁷ (traducción nuestra).

El gobernador Hunt había avalado públicamente los cambios propuestos por la Comisión Codificadora. En su mensaje a la sesión conjunta de la Asamblea Legislativa el 2 de enero de 1902, o sea, dos meses antes de la aprobación de los códigos, alabó la labor realizada por la comisión destacando que la misma había trabajado lealmente y de manera primorosa.²⁴⁸ Impulsó entre los legisladores la aprobación del trabajo de la comisión argumentando que: *“las ventajas de los métodos americanos no pueden obtenerse en su plenitud, sino por medio de una legislación que barra con los principios que no son americanos, e implante los legítimos de América en su lugar”*.²⁴⁹ El 12 de enero de 1903 en su segundo mensaje alabó la aprobación de los nuevos códigos e indicó que los mismos ya eran aplaudidos:

²⁴⁷ *“New and good codes on penal laws and criminal procedure now obtain in the island, having become effective July 1, 1902. ... Attorney – General Harlan, in his report, writes of the codes as “essentially American in form and substance.” It is generally understood that de penal codes, with such changes as were necessary to adapt them to the system of laws in force in Porto Rico, are substantially like those in force in the State of California. It was a great step onward to adopt a new criminal code”*. Second Annual Report of the Governor of Porto Rico covering the period from May 1, 1901, to July 1, 1902, pág. 56 (1902).

²⁴⁸ Primera Asamblea Legislativa, Segunda Sesión, 1 de enero de 1902 a 1 de marzo de 1902, sesión del 2 de enero de 1902.

²⁴⁹ *Id.*

*“Me complace daros la bienvenida anunciando que los asuntos públicos se hallan en excelente estado, que los códigos y las Leyes que votó la precedente Asamblea Legislativa son ya aplaudidos, reconociéndose que se han inspirado en sanos principios y que son liberales y adaptables en su forma al estado de transición en que nos encontramos. En ellos hay progreso que habrá de redundar cada vez más en beneficio de todo el pueblo”.*²⁵⁰

HELFELD resalta que, lo que realmente estaba detrás de estos cambios a nuestro sistema político y legal, era la imposición del dominio imperial estadounidense sobre Puerto Rico:

*“Quizás las diferencias más significativas entre la Carta Autonómica, y el Acta Foraker arrancaban de la historia y de la cultura. La Carta era la culminación de 400 años de administración colonial: representaba el reconocimiento por la Madre Patria de las aspiraciones autonomistas de la Isla. Como España y Puerto Rico eran coparticipes en la misma cultura, la concesión de gobierno propio no implicaba cambios fundamentales en la ley y la sociedad de Puerto Rico. El Acta Foraker, a pesar de ciertas medidas de gobierno propio, venía impuesta sobre la Isla por un poder imperial con la intención de realizar drásticos cambios legales y políticos. Ninguna medida o ley del gobierno territorial tendría vigencia a menos que armonizase con la práctica y la ley norteamericana. Ni estaba esta imposición basada en otra cosa que la fuerza, pues el dominio por los americanos nunca fue sometido a plebiscito popular”.*²⁵¹

Treinta y un años después de su adopción todavía generaba críticas la adopción de un Código de Enjuiciamiento Criminal ajeno a nuestra tradición jurídica y sin pasar por un proceso de enmiendas de manera paulatina. El entonces reconocido fiscal Rafael V. Pérez Marchand, que llevó la acusación en el famoso caso de la Masacre de Ponce, escribió un artículo para la Revista

²⁵⁰ Segunda Asamblea Legislativa, Primera Sesión, 2 de enero de 1903 a 12 de marzo de 1903, sesión del 13 de enero de 1903.

²⁵¹ David M. Helfeld, *El prelude histórico a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, 21 Rev. Jur. UPR 182, pág.189, (1952).

Jurídica de la Universidad de Puerto Rico donde le adjudicaba los problemas presentes, en aquel entonces, en el proceso penal a la adopción sin ponderación del Código de Enjuiciamiento Criminal de California.²⁵²

En la década de los sesenta los problemas aun persistían y se adjudicaban a la adopción sin ponderación de los códigos estadounidenses. En su escrito para la Reforma Penal en Puerto Rico, el criminólogo LÓPEZ-REY Y ARROJO señalaba como todavía persistían problemas relacionados a la adopción de los códigos de California:

“Aunque en 1902 el derecho penal y el procesal penal fueron separados en dos códigos diferentes siguiéndose en esto la tradición

²⁵² “Quizás esta inquietante situación que hoy prevalece en Puerto Rico en materia de justicia penal es sólo el resultado de la impremeditación con que nuestros mayores promulgaron en 1902, como código de enjuiciamiento criminal para esta isla, una transcripción de las leyes procesales de California y de Montana, con muchos de cuyos preceptos nuestras tradiciones y nuestra herencia todavía chocan en lo fundamental. Y tal vez sería otra nuestra situación si los americanistas incondicionales hubiesen advertido oportunamente que no se trataba entonces del contacto de un pueblo primitivo (el nuestro) con una civilización muy avanzada (E. U. A.) y si del encuentro de dos grandes civilizaciones, de las cuales una había sufrido marcada retardación en su desarrollo.

Probablemente tendríamos hoy menos confusión que lamentar si aquellos legistas que tan pronta e inconsultamente trasplantaron a este suelo e incorporaron a nuestro sistema de justicia penal las reglas de conducta y de procedimiento de los Estados del Norte, hubiesen esperado a que la adaptación sobreviniese por la influencia reciproca de la vida institucional de los pueblos allende y aquende los mares. Pero el entusiasmo con que fué acogido en Puerto Rico el cambio de soberanía seguramente impidió que se oyese las voces conservadoras de algunos de nuestros juristas, que recomendaban hacer un juicioso análisis de los equivalentes de raza; y de fijar una distinción oportuna entre lo que son condiciones sociales primitivas y aquello que sólo era una accidental retardación de progreso, para resolver entonces sobre los principios de orden público a preferir en el ajuste de las costumbres en la vida institucional de los habitantes de esta isla.

Hay que recordar, como ya dije antes, que Estados Unidos no encontró aquí un pueblo en estado de atraso moral sino un estado cultural muy distinto del suyo, dentro de un avance relativamente corto en las prácticas institucionales de su libertad; porque los puertorriqueños ya teníamos un concepto integral de ciencias y artes y las costumbres hogareñas peculiares y propias de una raza avanzada. En otras palabras, ya este pueblo tenía su vida modelada por la tradición.

Lo que aquí sucedía era que Puerto Rico llevaba cuatro centurias bajo la influencia de una administración judicial altamente centralizada, y ésta resultaba el antípoda del nuevo sistema de enjuiciamiento, incorporado a la organización del país como un eco del cambio de soberanía; por lo que hubiese sido preferible que la transición que Puerto Rico había de experimentar viniese como una gradual adaptación de nuestras reglas procesales a las de aquellas comunidades norteadas donde prevalecen todavía, con mayor fuerza que en California y en Montana, los conceptos románicos de la Conquista y el ambiente de raza del pueblo español; pueblos aquellos que han sido el crisol de los ideales anglo-franco-hispanos que han hecho grande este Nuevo Mundo, y que han conservado celosamente sus conceptos y sus tradiciones en la legislación de Nuevo Méjico, Tejas y Luisiana”. Rafael V. Pérez Marchand, La justicia penal en Puerto Rico y su necesaria evolución, 3 Rev. Jur. UPR 96, págs. 97 - 99 (1933-1934).

*española, lo cierto es que el vigente código penal todavía contiene disposiciones de índole procesal cuya justificación en su texto es, por demás dudosa. Tal confusión se explica, aunque hoy día no puede justificarse, porque pese al gran número de reformas, el vigente código penal de Puerto Rico es esencialmente el de California de 1873 que cualesquiera que sean sus méritos era inferior al de 1879 vigente en Puerto Rico”.*²⁵³

Sobre este proceso de transculturación y sustitución del derecho español en Puerto Rico por el derecho estadounidense años después, también se expresó TRÍAS MONGE:

“El problema fue que, en los años críticos de la recepción del derecho norteamericano en Puerto Rico, grandes segmentos del celebrado derecho romanogermánico, en que se funda el derecho de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Suiza, Holanda, Escocia, los países escandinavos, la América Latina y otras regiones tan apartadas como Grecia y Turquía, Indonesia y Japón, no se consideraron sanos y beneficiosos para este pueblo o acordes con los principios del orden y la justicia.

No se consideró sana la Carta Autonómica, que le concedía tales atributos de gobierno propio a este país que aún no han podido alcanzarse varios de ellos. Se le sustituyó en vez por la Ley Foraker, escuálido estatuto colonial, parcialmente repudiado en 1917 ante la creciente protesta de este pueblo. No se estimó beneficioso nuestro respetado Código Penal, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni la de Enjuiciamiento Civil, ni el principio de la inamovilidad de los jueces, ni la propia organización de los tribunales. Se resolvió que en bien de la justicia era indispensable aun suprimir o reemplazar diversas disposiciones de nuestro Código Civil.

²⁵³ Manuel López-Rey y Arrojo, *La Reforma Penal en Puerto Rico*, 36 Rev. Jur. UPR 419, pág. 424 (1967).

*El proceso de transculturación jurídica no se limitó al campo legislativo. Nuestro Tribunal Supremo de aquellos años fue arrastrado en tal forma por la corriente de los tiempos que el fervor asimilista alcanzó en su seno intensidad no soñada”.*²⁵⁴

2.15 El Código de Enjuiciamiento Criminal y la Detención Preventiva.

Destaca TRÍAS MONGE que con “*la aprobación del nuevo Código Penal y el de Enjuiciamiento Criminal quedó eliminada la teoría de la culpabilidad de una persona acusada de haber cometido un delito, las investigaciones ex parte y el sistema de incomunicación*”.²⁵⁵ La nueva ley ahora contaba con la detención como medida cautelar para los acusados de delito cuya pena pudiera conllevar la muerte. El resto de los acusados en el nuevo sistema podía quedar en libertad mediante la prestación de una fianza.

La finalidad de la fianza, según el nuevo Estatuto, era la de servir de garantía de la comparecencia del acusado en todas las etapas del juicio. Se entiende por toma de fianza la aceptación por el tribunal competente de la obligación que el acusado otorgue con suficiente garantía para asegurar su comparecencia, de conformidad con las condiciones estipuladas, y que en su defecto pagará al pueblo de Puerto Rico cierta cantidad de dinero.²⁵⁶ Veamos qué opinaba MALARET JORDÁN, sobre cómo funcionaba el sistema de fianzas en esos primeros años de implantado el Código de Enjuiciamiento Criminal:

“Cambió con la bandera nuestro antiguo sistema de enjuiciar y vino el respeto a la libertad. Ningún acusado debe estar preso si puede prestar fianza. Desde entonces todos los acusados prestan fianzas y todo el mundo sirve de fiador. Conozco personas insolventes en la verdadera acepción de la palabra, que están pendientes de cualquier amigo o

²⁵⁴ José Trías Monge, *El Derecho en Puerto Rico*, 12 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 7, pág. 12 (1977-1978).

²⁵⁵ Malaret, *supra* nota 128, en la pág. 143.

²⁵⁶ Código de Enjuiciamiento Criminal, 1904.

*correligionario en desgracia para fiarlo y muchas veces tienen fianzas prestadas por diez mil dollars, cuando la casita que poseen no vale dos y está hipotecada por el doble de su valor”.*²⁵⁷

El nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal adoptaba la prohibición de fianzas excesivas, conforme a lo establecido en la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América que, aunque no establece un derecho absoluto a la fianza, prohíbe la fijación de fianzas excesivas.²⁵⁸ Conforme a esta disposición, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en el caso de *Pueblo v. Pillot* las consideraciones que se habría de tener a la hora de fijar una fianza, considerando la prohibición de fianzas excesivas como un derecho constitucional de los acusados.²⁵⁹

2.16 La Detención Preventiva y la Pena de Muerte (1902 – 1929).

La versión del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1904 mantuvo la detención como medida cautelar para los acusados de delitos cuya pena podría ser la muerte. Esto se viabilizó mediante los artículos 382 y 383, que establecían el proceso a seguir para acusados de delitos que incluían la pena de muerte y los que no. A los acusados que no enfrentaban la pena de muerte se les brindaba la oportunidad de quedar en libertad bajo prestación de fianza. A los que

²⁵⁷ González Fagundo, *supra* nota 154, en las págs. 29 – 30.

²⁵⁸ U.S. Const. Amend. VIII.

²⁵⁹ “Es un principio bien establecido el de que no deben exigirse fianzas excesivas, porque con ello equivaldría a impedir el cumplimiento de la ley que permite la libertad provisional de los acusados, con la excepción que la misma ley establece. El hecho de que no se exigirá al acusado una fianza excesiva constituye una garantía constitucional. La fianza no deberá fijarse en una suma excesiva pues de ser así, eso equivaldría en substancia a una negativa de dicha fianza de acuerdo con el precepto constitucional, y deberán tenerse en cuenta las condiciones y recursos de que dispone el detenido, así como también su estado de pobreza, todo en relación con la magnitud del delito, lo ignominioso del mismo y el castigo que lleva consigo. Además, se ha resuelto que al fijar la corte la cuantía de la fianza deberá considerar la naturaleza del delito imputado y examinar todo el caso teniendo presente las probabilidades de culpabilidad que puedan existir, así como el sexo, rango, y relaciones del acusado, en todo aquello en que dichas circunstancias puedan estar relacionadas con la posibilidad de que dicho acusado completamente inadecuada al delito imputado ni su cuantía indebidamente crecida”. *Pueblo v. Pillot*, 19 D.P.R. 264, págs. 268 - 269 (1913).

enfrentaban la pena de muerte, se establecía que debían permanecer bajo custodia.²⁶⁰

En 1917, el Congreso de los Estados Unidos de América autoriza una nueva ley orgánica para Puerto Rico. Esta se conoció como la Ley Jones, en referencia a su promotor el congresista William Atkinson Jones. Además de reformar la estructura gubernamental imperante hasta aquel momento, la Ley Jones impuso la nacionalidad estadounidense a los puertorriqueños. La ley también contenía una declaración de derechos similar a la de la Constitución de los Estados Unidos, pero con algunos cambios. Sobre esta nos indica HELFELD:

*“Sustancialmente se incluyeron en el Acta Orgánica, bajo la forma de una Declaración de Derechos, todos los derechos civiles y políticos contenidos en la Constitución Federal, y esta Declaración de Derechos se hacía de observancia estricta por parte del gobierno de Puerto Rico. Las únicas omisiones fueron la exigencia de acusación por un gran jurado en todos los casos de crímenes, y el derecho a un juicio por jurado en casos civiles y criminales”.*²⁶¹

Una de las garantías que se incluyó en dicha Carta de Derechos fue el de quedar en libertad bajo fianza. El artículo 2 se establecía que *“toda persona podría, antes de ser convicta, prestar fianza con suficiente garantía, excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande”*. También incluía la prohibición de fianzas excesivas: *“No se exigirán fianzas desproporcionadas, ni se impondrán multas excesivas ni castigos crueles e inusitados.”*²⁶² Como veremos más adelante, esta disposición es similar a la que

²⁶⁰ Código de Enjuiciamiento Criminal de 1904, art. 382: *“Cuando el delito que se persigue no aparece la pena de muerte, el oficial o funcionario judicial encargado de hacer cumplir el mandamiento de arresto, debe, si así fuere requerido, llevar al acusado ante un juez de paz del distrito en que el mandamiento fuere librado, o en el que se efectuare el arresto, con objeto de que el acusado preste fianza. Art. 383: Si el delito que se persigue es de los que aparecen pena de muerte, el oficial que haya arrestado al acusado debe entregarlo para que sea custodiado, a la autoridad competente, de conformidad con los términos del mandamiento de arresto.”*

²⁶¹ Helfeld, supra nota 251, en la pág. 192.

²⁶² Sobre esta disposición de la Ley Jones, Ismael Betancourt y Lebrón resalta lo siguiente: *“La materia relativa a la fianza anterior a la convicción no es nueva en Puerto Rico. De hecho, desde 1917, cuando se aprobó la Ley Jones, se dio carácter constitucional al derecho a la fianza antes de la convicción, cuando por virtud de la Sección 2, es decir, de la Carta de Derechos de la referida Ley Jones, se dispuso que toda persona tenía derecho a prestar fianza para permanecer*

aún hoy día tienen muchas de las constituciones de los Estados que conforman los Estados Unidos y sus territorios. Señalan WHITEBREAD y SLOBOGIN de la Constitución de California que fue copiada por muchos Estados de los Estados Unidos.²⁶³

La nueva ley orgánica mantuvo la pena de muerte como parte de nuestro sistema penal, a pesar de prohibir los castigos crueles e inusitados. La pena de muerte, que siempre había formado parte de nuestro sistema penal, se aplicó ininterrumpidamente hasta 1917, cuando un caso que causó la indignación popular llevó a la legislatura a imponer una moratoria. CÓRDOVA CHIRINO en su obra *“Los que murieron en la horca”* relata el suceso:

“El ajusticiamiento de Rufino Izquierdo en 1917 levantó en Puerto Rico una ola de sentimiento, justo y humanitario, contra el sistema penal vigente, que permitía que el Pueblo de Puerto Rico como castigo en casos de asesinato en primer grado, enviase a la horca al culpable que cometiese el mismo delito de arrancar la vida a un semejante.

En la prensa de aquel entonces se escribieron editoriales solicitando la abolición de la pena capital. Instituciones cívicas, logias masónicas, instituciones religiosas y prestigiosos escritores realizaron una feliz campaña. La Legislatura de Puerto Rico en 1917 (la primera bajo el Acta Jones) aprobó una ley (número 36) para abolir temporalmente la pena de muerte. La Ley, que tenía carácter retroactivo, entró en vigor el 30 de noviembre y la abolición de extendía hasta el 30 de abril.

En el 1921, la Cámara de Representantes pasó el proyecto número 9 del Senado aboliendo definitivamente la pena de Muerte. El Gobernador

en libertad provisional antes de la convicción, excepto en crímenes capitales, cuando la prueba fuera evidente o la presunción grande. Esta excepción desapareció en Puerto Rico cuando se abolió la pena de muerte en el año 1929”. Ismael Betancourt y Lebrón, Los Derechos del Acusado, Editorial del Colegio de Abogados de Puerto Rico, pág. 214 (1975).

²⁶³ Charles H. Whitebread y Christopher Slobogin, *Criminal Procedure: an analysis of cases and concepts*, pág. 570 (2008)

Towner dejó expirar el período de treinta días que especifica la Carta Orgánica matando el proyecto con un veto de bolsillo”.²⁶⁴

Destaca CÓRDOVA CHIRINO que segundo proyecto de ley fue radicado en 1923 para abolir la pena capital, pero corrió la misma suerte, al ser vetado nuevamente por el gobernador estadounidense de entonces, Horace Mann Towner:

“En 1923, la Cámara y el Senado aprobaron otro proyecto aboliendo definitivamente la pena de muerte, y el Gobernador Towner lo devolvió sin su aprobación. Dijo el Gobernador Towner en comunicación oficial:

Este proyecto, que concierne quizás al más importante y grande cambio afectante a las leyes penales de Puerto Rico que pueda presentarse para consideración necesita la más cuidadosa investigación y consideración de mi parte, antes que yo pueda sentirme justificado en dar mi aprobación.

Durante el largo periodo de dominación española, y durante cerca de veinticinco años de administración americana, la presente ley ha permanecido en vigor con la excepción de su suspensión de noviembre de 1917 a abril de 1921. Una aprobación a cambio tan drástico en la ley vigente con una ligera oportunidad para considerarlo difícilmente estaría justificada”.²⁶⁵

Dicha amnistía de noviembre de 1917 a abril de 1921, creó confusión en los tribunales, ya que la ley no decía nada en cuanto al derecho a la libertad bajo fianza de los acusados de asesinato. Tampoco indicaba si se mantenía la detención preventiva como medida cautelar. La controversia llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de *Juan Rodríguez Barreal v. Labiosa*,

²⁶⁴ Jacobo Córdova Chirino, *Los que Murieron en la Horca*, pág. 230 (1970).

²⁶⁵ *Id.* en las págs. 230 – 231.

Alcaide de la Cárcel del Distrito de Mayagüez, de 1919. En este caso el juez de distrito entendía que, aunque ya no se aplicaría la pena de muerte, el derecho a la fianza quedaba a discreción del magistrado.²⁶⁶

Como el derecho a la fianza estaba condicionado a que el delito no conllevara la aplicación de la pena de muerte, el Tribunal Supremo tenía que interpretar si al ser abolida temporalmente, se otorgaría el derecho a la fianza a estos acusados. El Tribunal Supremo determinó lo siguiente:

“Como en este particular pensamos como el juez inferior lo único que hay que considerar, es si no estando el peticionario acusado de pena capital tiene derecho a que se le fije fianza o si la concesión de fianza es discrecional.

No tenemos que considerar ahora si el artículo 373 del Código de Enjuiciamiento Criminal sostiene o no la conclusión del juez inferior pues la actual Ley Orgánica de esta isla, que empezó a regir el 2 de marzo de 1917, dispone claramente en su artículo 2º, entre otras cosas, que toda persona podrá, antes de convicta, prestar fianza con suficiente garantía excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grave.

De acuerdo con este precepto y no estando el peticionario acusado de delito que apareje pena de muerte, tiene derecho a que se le fije una fianza para estar en libertad mientras se celebre el juicio por el delito de que se le ha acusado.

*Nos parece que, en un caso como el presente, una fianza de quinientos pesos es suficiente”.*²⁶⁷

²⁶⁶ *Barreal v. Alcaide*, 27 D.P.R. 46, pág. 47 (1919).

²⁶⁷ *Id.*

La importancia de este caso de *Rodríguez Barreal* estriba en que es a través de una decisión del Tribunal Supremo, y no mediante una ley, que se extiende la obligación de los jueces imponer una fianza a todos los acusados.

Poco después, en 1922, regresa la controversia al Tribunal Supremo en el caso de *Pedro Flores v. El Pueblo*. En este caso se acusaba al señor Pedro Flores de asesinar a la señora Fernanda Brito el 6 de noviembre de 1921, o sea, siete meses después de que se reinstalara la pena de muerte. El tribunal de primera instancia decidió mantener al acusado en detención por “entender que había causa bastante para tenerlo detenido sin que pudiera obtener su libertad mediante fianza”. El tribunal tomó su decisión al amparo del artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que establecía que: “*ningún acusado a quien se impute la comisión de un crimen que apareje pena de muerte, podrá prestar fianza, cuando sea evidente la prueba y grande la presunción de su culpabilidad*”. El señor Flores no estuvo de acuerdo porque alegaba “que en modo alguno se demostró que existiera prueba evidente y grande presunción de su culpabilidad como autor de un delito de asesinato en primer grado”.

A diferencia de lo establecido en *Rodríguez Barreal*, y teniendo en consideración que se había reinstalado la pena de muerte, el Tribunal Supremo decide mantener al señor Flores detenido y negarle la imposición de fianza. Para justificar su decisión, esta vez Tribunal Supremo utiliza la decisión de caso *The People v. Tinder and Smith*, decidido por el Tribunal Supremo del Estado de California. No olvidemos que de ese Estado fue donde se copió la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico. También la disposición constitucional sobre la fianza del Estado de California era igual a la de Puerto Rico: “*todas las personas tienen derecho a prestar fianza suficiente, a menos que se trate de delitos capitales, cuando la prueba sea evidente o la presunción sea grande*”.

Dice el Tribunal Supremo de Puerto Rico:

“La jurisprudencia de California tiene ya resuelto claramente el punto en controversia. En el caso de People v. Tinder, 19 Cal. 539, se establece la siguiente doctrina:

“Una acusación bajo nuestra Ley de Práctica Criminal es algo más que una mera acusación basada en causa probable. Es una acusación basada en declaraciones legales de un directo y positivo carácter y es la sentencia concurrente de por lo menos doce de los miembros del Gran Jurado de que bajo la evidencia presentada a ellos el acusado es culpable.”

“Una acusación por un delito de pena capital supone en sí misma una presunción de la culpabilidad del acusado, demasiado grande para justificar la concesión de fianza como materia de derecho bajo nuestra constitución, o como materia de discreción bajo la legislación del Estado. Crea una presunción de culpabilidad para todo, excepto en cuanto al juicio ante un pequeño jurado.”

“Ni affidávits ni testimonio oral con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado pueden ser recibidos para repeler la presunción de culpabilidad que se levanta de la acusación en casos de pena capital, excepto bajo especiales y extraordinarias circunstancias”.²⁶⁸

La versión de 1926 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico mantuvo la posibilidad de detener a acusados de delito capital cuando existiera *“presunción de culpabilidad”*.²⁶⁹ En 1927 el Tribunal Supremo utiliza la presunción de culpabilidad como justificación para denegar la libertad bajo fianza y mantener a dos acusados de asesinato en detención. En el primer caso, *Florentino Rodríguez v. Andrés Lugo, alcaide*, un acusado de asesinato solicitaba mediante un *habeas corpus* su libertad mediante la prestación de fianza alegando:

²⁶⁸ *Flores v. El Pueblo*, 30 D.P.R. 583, pág. 584 (1922)

²⁶⁹ Artículo 452: *“Ningún acusado a quien se impute la comisión de un crimen que apareje pena de muerte, podrá prestar fianza cuando sea evidente la prueba o grande la presunción de culpabilidad. El hecho de presentarse una acusación no da más fuerza a la prueba ni a la presunción que de ésta pueda deducirse”*. Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1926.

[Q]ue su prisión es ilegal porque viola el derecho constitucional del peticionario de poder estar en libertad provisional prestando una fianza, no existiendo en su contra una prueba que sea evidente o que levante una presunción grande de su culpa”.²⁷⁰

El recurso fue declarado “ha lugar” y el peticionario fue excarcelado luego de que prestara cinco mil dólares de fianza. El fiscal no estuvo de acuerdo con la decisión y la apeló al Tribunal Supremo. Para revocar la decisión el fiscal presentó las declaraciones de varios testigos que confirmaban la imputación de asesinato. El Tribunal Supremo apoyó la posición del fiscal manteniendo al acusado en detención utilizando como justificación la presunción de culpabilidad. Dice el Tribunal Supremo:

“La intención del acusado de matar con premeditación y deliberación está demostrada por las circunstancias en que realizó los hechos, y aun si su intención no fue querer las consecuencias que tuvieron tales hechos, en nada influye en la calificación del delito.

Por las razones expuestas, debe revocarse la resolución apelada y ordenarse la prisión del acusado sin fianza, no debiendo entenderse, sin embargo, que la apreciación que hemos hecho de la prueba prejuzgue el caso en sus méritos”.²⁷¹

En el segundo caso, *Cardona v. Lugo*, la determinación del Tribunal Supremo fue similar:

“Por cuanto la malicia, la premeditación y la deliberación pueden deducirse del hecho de la muerte de una persona cuando se intenta matar a otra, vistos en otros 29 C.J. 1092;

²⁷⁰ *Rodríguez v. Lugo*, 36 D.P.R. 560 (1927).

²⁷¹ *Id.* en la pág. 563.

*Por cuanto según el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal una persona acusada de asesinato en primer grado no tiene derecho a estar en libertad provisional mediante fianza cuando la presunción de culpabilidad es grande; y vista la jurisprudencia sentada en los casos de El Pueblo v. Ortiz, 18 D.P.R. 833 y Ex parte Florentino Rodríguez, de 7 de abril de 1927 (pág. 560)".*²⁷²

En 1928 llega al Tribunal Supremo el caso de *Molina de Manzanares v. Andrés Lugo*, donde una mujer acusada de asesinato alega que: “la prueba aportada por el fiscal no demuestra la existencia de un delito de asesinato en primer grado, ni que sea evidente o grande la presunción de culpabilidad” y que, por ende, tenía derecho a que se le impusiera una fianza. El Tribunal Supremo difiere de la acusada y abraza la teoría del fiscal, señalando lo siguiente:

“Analizada la prueba aportada por el fiscal en este caso a la luz de la ley vigente tal como ha sido interpretada por la Corte Suprema de California, es necesario concluir que actuó derechamente la corte de distrito al negar la solicitud de la apelante.

A los efectos de la formación de nuestro criterio debe partirse de la base de la certeza de la declaración del testigo Montañez. Puede que sea deficiente en algunos extremos, susceptible de crítica en otros, pero hay que reconocer que guarda relación con el dictamen facultativo y que contiene imputaciones directas contra la apelante que, de ser creídas por un jurado, le permitirían llegar a un veredicto de culpable de asesinato en primer grado”.²⁷³

El Tribunal Supremo finaliza este caso aclarando que, aunque llega a la determinación de mantener en detención a la acusada, por ser evidente la prueba y grande la presunción de su culpabilidad, no está prejuzgando el caso:

²⁷² *Cardona v. Lugo, Alcaide*, 36 D.P.R. 984, pág. 985 (1927).

²⁷³ *Molina v. Lugo, Alcaide*, 38 D.P.R. 895, pág. 896 (1928).

“Nuestro criterio de ahora en nada prejuzga el caso ni puede ser invocado en forma alguna en contra de la apelante. La declaración de Montañez puede ser confirmada o destruida o explicada en otro sentido en el acto del juicio. La verdad puede ser otra que la expresada por Montañez. Sólo a virtud de la prueba que se practique por ambas partes en el acto de la vista, es que podrá ser juzgada definitivamente la apelante”.

2.17 La abolición de la Pena de Muerte y su efecto en la detención preventiva (1929 – 1951).

La pena de muerte en Puerto Rico llegó a su fin a través de la Ley Núm. 42 del 26 de abril de 1929. Al revisar el libro de *Leyes y Resoluciones de la Asamblea Legislativa* que contiene la aprobación de la *Ley para Abolir la Pena de Muerte en Puerto Rico de 1929*, vemos que sólo se limita a enmendar todas las disposiciones del Código Penal y del Código de Enjuiciamiento Criminal que trataban sobre la pena capital. Pero nada dispuso sobre la detención de acusados de delitos que anteriormente eran castigados con la muerte.

A partir de entonces, en los artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal donde se establecía la limitación a la libertad bajo fianza de los acusados de delito cuya pena podía conllevar la muerte, contenían una nota al pie de página que indicaba que la limitación había quedado: “tácitamente derogada por la ley de 1929”.²⁷⁴

En 1950, en un caso donde se impugnaba la potestad de un fiscal para imponer fianza, el Tribunal Supremo aprovecha para volver a adoptar la doctrina que estableciera en *Rodríguez Barreal*, interpretando que al quedar abolida la pena de muerte, se eliminó la detención preventiva como medida cautelar y que todos los acusados tendrían derecho a quedar en libertad bajo fianza:

“[E]n Puerto Rico la ley establece un derecho en favor de una persona acusada de delito para permanecer en libertad provisional, antes

²⁷⁴ Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935.

*de convicción, sin que tenga que hacerse una determinación judicial de si concurren en el caso las circunstancias que le hagan acreedora a tal derecho, como ocurría antes de ser abolida la pena capital, en delitos que aparejaban esa pena. La ley, hoy día, no da discreción alguna a ese respecto”.*²⁷⁵

El reconocido fiscal de aquella época Lcdo. Rafael V. Pérez Marchand se oponía a esta interpretación del Tribunal Supremo. En un artículo escrito cuatro años después de esta decisión PÉREZ MARCHAND criticaba el que se le tuvieran que fijar fianzas a todos los acusados, incluyendo a los acusados de asesinato.

*“Aceptamos que en nuestras actuales circunstancias seamos remisos para sostener que conviene aplicar aquí las normas preventivas de la democrática Francia, que no admite la fianza para el goce de la libertad provisional en los delitos de sangre; pero ¿a título de qué y por qué razonamiento jurídico se consiente en Puerto Rico que se fijen fianzas discrecionales para la libertad provisional del delincuente hasta en los crímenes extremos de asesinato en primer grado?”*²⁷⁶

En ese mismo artículo, PÉREZ MARCHAND fue más allá, abogando por la reinstalación de la pena de muerte y la negación de la fianza y la libertad provisional a los acusados de asesinato y a los reincidentes acusados de delito grave.

*“Abolición de la fianza y negación del beneficio de libertad provisional en los casos de asesinato en primer grado. Ninguna persona que haya cumplido una previa sentencia por delito grave tendrá derecho al beneficio de la libertad provisional en un subsiguiente caso de “felony”.*²⁷⁷

²⁷⁵ *Jiménez v. González*, 71 D.P.R. 118, págs. 122 - 123 (1950).

²⁷⁶ Pérez Marchand, *supra* nota 252, en la pág. 125.

²⁷⁷ Pérez Marchand, *supra* nota 252, en la pág. 130. (*felony*: delito grave).

Un año después, en 1951, el Tribunal Supremo revivió “las probabilidades de convicción”, ahora para determinar si la fianza impuesta en un caso era excesiva o no. En *Pérez v. Tribunal de Distrito* el Tribunal Supremo dijo:

*“En varios casos hemos resuelto que para determinar si la fianza exigida en un caso es excesiva o no, deben tomarse en consideración: (a) la naturaleza y gravedad del delito imputado; (b) la capacidad económica del acusado para prestarla; (c) las probabilidades de convicción y (d) la severidad de la pena que apareja el delito”.*²⁷⁸

La Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en Puerto Rico fue una de las primeras víctimas del proceso de americanización implantado tras el establecimiento del régimen estadounidense. A diferencia del Código Civil, que sólo sufrió unas enmiendas mínimas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue suplantado por un código ajeno a la cultura jurídica puertorriqueña.

De los informes de estado de situación preparados por los estadounidenses tras la cesión de la Isla se desprende que existía una grave situación en las cárceles. En estos informes, además de denunciar el hacinamiento y los malos tratos, se señala que existía un gran número de personas detenidas a las que nunca se les había celebrado una vista. Presumimos que estos presos se encontraban en prisión preventiva o prisión provisional. Pero a pesar de la alegada condición en la que se encontraban estos acusados, el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal impuesto bajo el régimen estadounidense mantuvo la posibilidad de detener a ciertos acusados. La única diferencia entre el nuevo código y la ley española era que se limitaba la detención para aquellos que pudieran enfrentar la pena de muerte cuando fuera evidente la prueba o grande la presunción de su culpabilidad.

Al repasar la bibliografía desde la aprobación de la nueva ley hasta el 1929, cuando quedó abolida por ley la pena de muerte, no encontramos críticas

²⁷⁸ *Pérez v. Tribunal de Distrito*, 72 D.P.R. 930 (1951).

o denuncias en contra de la detención preventiva. Por el contrario, sí aparece una fuerte oposición a la pena de muerte. Cuando examinamos los proyectos que intentaron abolir la pena de muerte de 1921 y 1923 y la ley que finalmente la abolió en 1929, nada encontramos sobre la detención. Debido a que en aquella época no se realizaba un Diario de Sesiones, desconocemos si la eliminación de la detención fue parte del debate legislativo.

Fue el activismo judicial del Tribunal Supremo en su decisión del caso de *Rodríguez Barreal* el que eliminó la detención como medida cautelar al quedar abolida la pena de muerte. Entendemos que la detención pudo haber sobrevivido a la pena de muerte, ya que una cosa no riñe con la otra. Ejemplo de esto los vemos en los Estados de los Estados Unidos que, aunque han abolido la pena de muerte, mantienen la detención preventiva de los acusados.

CAPÍTULO 3

ANTECEDENTES DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL ESTADOUNIDENSE EN PUERTO RICO

3.1 Las Comisiones Militares (1898 – 1899).

La intervención en el ámbito judicial de los Estados Unidos de América en Puerto Rico comienza mediante una Orden General del 8 de diciembre de 1898, que creó las Comisiones Militares. Como señala el doctor Fernando Picó en su obra clásica sobre el tema: *La Guerra después de la Guerra*, las Comisiones “eran una especie de corte marcial para civiles en territorio donde prevalecía un estado de guerra”.²⁷⁹

En el caso de Puerto Rico, el gobernador militar Guy Henry autoriza la creación de estas comisiones, con el objetivo de enjuiciar a los acusados de participar de las Partidas Sediciosas. Estas estaban compuestas por individuos que, tras el fin de la Guerra Hispanoamericana, buscaban revancha contra los peninsulares en la Isla. A estos grupos, compuestos por campesinos, también se les llamo “los tiznados”, pues pintaban su cara de negro con ceniza de carbón. Sobre las acciones de los tiznados nos dice BARALT:

“Por espacio de poco más de un año se cometieron atropellos y asesinatos contra los terratenientes y comerciantes españoles y sus familiares. Iniciada la invasión norteamericana por el poblado de Guánica, estas expresiones de rebeldía jíbara o campesina

²⁷⁹ Fernando Picó, *La guerra después de la guerra*, pág. 149, (Río Piedras, 2004).

constituyeron la más seria amenaza para la seguridad pública del país".²⁸⁰

De acuerdo con la mayoría de los historiadores, la razón para estos actos de violencia no fue el racismo, sino más bien una venganza de tipo económico. A juicio de BARALT, los tiznados: *"destruían los recuerdos de la explotación laboral en las haciendas donde residían, y, en especial, las libretas que registraban el asfixiante e interminable endeudamiento de los jornaleros a los hacendados y a los comerciantes propietarios de tiendas mixtas en la rularía puertorriqueña"*.²⁸¹

Para atajar la situación, el gobernador militar Guy V. Henry constituyó cuatro Comisiones Militares para tratar los delitos cometidos por las Partidas Sediciosas.²⁸² Señala DELGADO CINTRÓN que el gobernador Henry le quitó la jurisdicción a los tribunales sobre los delitos cometidos por las partidas y se la delegó a las Comisiones Militares, *"alegando entre otras cosas que los procesos a nivel local eran lentos"*.²⁸³

¿Realmente Puerto Rico estaba bajo condiciones que ameritaban estas Cortes Militares? La sección 168 del *Digest of Opinions of the Judge Advocate General of the Army*, en vigor en 1898, establecía cuándo podían constituirse las Comisiones Militares y cuál sería su jurisdicción:

"[E]jercen jurisdicción sobre dos clases de "ofensas", ya sean cometidas por civiles o por personal militar. Estas son: 1) violaciones de las leyes de la guerra y 2) delitos sancionados por las leyes civiles, los cuales –

²⁸⁰ Guillermo A. Baralt, *Historia del Tribunal Federal en Puerto Rico: 1899 - 1999*, pág. 85, (Hato Rey, 2004).

²⁸¹ *Id.*

²⁸² *Id.* en la pág. 88.

²⁸³ *"La primera medida que toma el Gobernador Militar en relación con los tribunales fue el quitarle jurisdicción a los mismos sobre los delitos cometidos por asaltantes y bandidos. La Orden Militar núm. 27 de 8 de diciembre de 1898: Siendo evidente que los juzgados civiles debido a sus procedimientos lentos y excesivos trabajos no actúan con la rapidez necesaria contra los bandidos que están todavía cometiendo crímenes de incendios y asesinatos en la isla, y no habiendo aún recaído fallo en ningún caso, cuando es necesario un escarmiento inmediato, se nombran Comisiones Militares para juzgar cuantos casos se traigan debidamente a ellas". Delgado Cintrón, supra nota 92, en la pág. 161.*

*por razón de estar cerrados los tribunales – no pueden juzgarse. Estas dos ofensas deben ser cometidas en el territorio enemigo durante su ocupación por el ejército y mientras permanezca bajo el gobierno militar o en una localidad que esté fuera del territorio enemigo, pero en el cual se ha declarado la ley marcial por autoridades competentes”.*²⁸⁴

DELGADO CINTRÓN señala que, al momento de establecerse las Comisiones Militares²⁸⁵, *“ya se había firmado el Tratado de Paz entre el Reino de España y los Estados Unidos, por lo que no procedía el establecimiento de las mismas”.*²⁸⁶ Por lo tanto, el establecimiento de las Comisiones Militares violentaba la norma establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prohibía el enjuiciamiento de civiles en comisiones militares²⁸⁷ durante tiempo de paz. Pero señala BARALT que *“a pesar de lo indicado por las normas y la jurisprudencia, el general Henry alegó que, aunque se había firmado el Protocolo de Armisticio, no se había hecho lo propio con un tratado de paz y por lo tanto el estado de guerra continuaba técnicamente”.*²⁸⁸ PICÓ BAUERMEISTER también afirmaba esto, señalando que Henry se amparó *“en el hecho de que el Senado de los Estados Unidos todavía no había ratificado el Tratado de París, y por lo tanto el estado de guerra técnicamente continuaba.”*²⁸⁹

También indica DELGADO CINTRÓN que, *“en ningún momento en Puerto Rico, durante los escasos 19 días de guerra, se cerraron los tribunales”.*²⁹⁰ Estos continuaron administrando la justicia normalmente. Tampoco, señala DELGADO CINTRÓN, se declaró la Ley Marcial.²⁹¹ Por lo tanto, conforme a lo establecido

²⁸⁴ Delgado Cintrón, *supra* nota 24, en la pág. 151.

²⁸⁵ La Orden General Núm. 27 estableciendo las Comisiones Militares se firma el 8 de diciembre de 1898 y el Tratado de París que pone fin a la Guerra Hispanoamericana se firmó el 10 de diciembre de 1898.

²⁸⁶ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 162.

²⁸⁷ *Ex parte Milligan*, 71 U.S. 4 Wall. 22 (1866)

²⁸⁸ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 88.

²⁸⁹ Picó, *supra* nota 279, en la pág. 149.

²⁹⁰ Delgado Cintrón, *supra* nota 24, en la pág. 151.

²⁹¹ *Id.* en la pág. 152.

en el *Digest of Opinions of the Judge Advocate General of the Army*, en vigor en 1898 antes citado, las Comisiones Militares no procedían en Puerto Rico. Fue una actuación *ultra vires*. A juicio de Delgado Cintrón, el gobernador militar Henry se valió de la confusión existente para decretar la creación de los tribunales militares.

Sobre el proceso para llevar un caso ante las Comisiones Militares en Puerto Rico, el propio gobernador militar Henry estableció cómo y cuándo se llevaría a un acusado ante las mismas:

*“Cuando los tribunales civiles se manifestaren remisos en proceder contra bandidos y asesinos, las causas de éstos serán juzgadas por comisiones militares que he organizado al efecto. Los alcaldes avisarán cuando ocurran estos casos, y los jefes militares remitirán los expedientes a este cuartel general, para que los resuelvan las comisiones militares. Es preferible empero que los reos sean juzgados por los tribunales civiles, antes de que por los constituidos militarmente”.*²⁹²

Sobre la composición de estas Comisiones, PICÓ BAUERMEISTER señala que *“cada tribunal estaba compuesto por tres oficiales del ejército que fungían como jueces, y un juez – abogado (judge – advocate) que actuaba como fiscal”*.²⁹³ Indica DELGADO CINTRÓN que durante estos juicios los acusados *“podían tener abogados para su defensa, representarse a sí mismos o solicitar que le designaran uno de oficio”*.²⁹⁴

Resalta DELGADO CINTRÓN que durante el periodo del Gobierno Militar, las leyes españolas en Puerto Rico *“se mantuvieron inalteradas, incluyendo el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1888”*.²⁹⁵ En cuanto al destino de los

²⁹² Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 162.

²⁹³ Picó, *supra* nota 279, en las págs. 149 – 150.

²⁹⁴ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 162.

²⁹⁵ *Id.*

acusados a los que se les encontró culpables señala BARALT que “ *fueron sentenciados a prisión en cárceles de los Estados Unidos*”.²⁹⁶

Seis meses después de establecidas se suprimen las Comisiones Militares, y el 24 de mayo de 1899 se emite una nueva orden traspasando la jurisdicción de sus casos a los jueces de instrucción y las Cortes de Justicia de la Isla. PICÓ BAUERMEISTER destaca que las Comisiones Militares “*juzgaron a 70 hombres entre febrero y abril de 1899*”.²⁹⁷

3.2 La Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico (1899 – 1900).

Poco tiempo después, cuando la permanencia de las Comisiones Militares se vuelve insostenible, crean la *Provisional Court of Porto Rico* el 27 de junio de 1899.²⁹⁸ BARALT reseña cómo se dio el proceso para su creación:

“Por encomienda del gobernador Davis, uno de los jueces de las Comisiones recomendó sustituirlas por una Corte Provisional a la cual se le daría un carácter federal, no sólo para acabar con las Partidas Sediciosas, sino para defender los intereses de los españoles, convertidos en extranjeros. La recomendación fue consultada con los jueces de la Corte Suprema y los abogados de la isla (se les consultó, pero ellos desaprobaban su creación). Por ello, en virtud de la autorización del Presidente de los Estados Unidos, transmitida bajo fecha del 14 de abril de 1899, por conducto del Secretario de la Guerra, el general Davis expidió la Orden General Núm. 88 del 27 de junio de 1899 que estableció una Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico”.²⁹⁹

La reacción de los puertorriqueños a la creación de la Corte Provisional estuvo dividida entre aquellos que favorecían el nuevo régimen y la aceptaban,

²⁹⁶ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 90.

²⁹⁷ Picó, *supra* nota 279, en la pág. 154.

²⁹⁸ Torres, *supra* nota 188, en la pág. 4.

²⁹⁹ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 92.

y aquellos que no veían con buenos ojos la americanización de Puerto Rico, que la rechazaban. Sobre esto nos dice DELGADO CINTRÓN:

“[S]u creación y vida institucional encontró la oposición de la prensa, con excepción del Partido Republicano³⁰⁰, El País y The San Juan News, portavoz de los intereses norteamericanos en Puerto Rico. Igualmente, la contra de la gran mayoría de los abogados y de la sociedad puertorriqueña. La tónica de este foro privilegiado y de excepción lo ofrece el Mayor Sharpe al manifestar: “La instalación de la alta Corte Federal es el paso de más trascendencia dado en el país en su camino de americanización”.³⁰¹

De ordinario, la jurisdicción de los tribunales federales está limitada a lo establecido en el artículo III sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dispone lo siguiente:

“El Poder Judicial, era en todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias que se relacionen con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias en que sean parte los Estados Unidos; en las controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros”.³⁰²

³⁰⁰ El Partido Republicano, liderado por el Dr. José Celso Barbosa, era defensor del proceso de americanización de las instituciones puertorriqueñas y abogaba por la admisión de Puerto Rico como un estado federado de los Estados Unidos de América.

³⁰¹ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en las págs. 168 - 169.

³⁰² Constitución de los Estados Unidos de América (1787).

Pero, para TRÍAS MONGE, la jurisdicción de la Corte Provisional era “*más amplia que la conocida por otros tribunales federales de distrito*”.³⁰³ Creía TRÍAS MONGE que este tribunal se creó para darle un foro a los estadounidenses que habían llegado a Puerto Rico.

Sobre las reglas y proceso que se utilizarían en la nueva corte, indica BARALT que “*se estableció que concordaran en lo posible con los observados en los Tribunales Federales. Los jueces ejercerían las mismas atribuciones que los de los Tribunales de Circuito o Distrito de los Estados Unidos. El fiscal de Distrito, por su parte, estaría facultado para presentar denuncias contra todos los infractores de estatutos u ordenanzas de los Estados Unidos. Las decisiones de Corte Provisional podían ser revisadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.*”³⁰⁴

Es importante resaltar que líderes políticos criollos como Luis Muñoz Rivera que, bajo la soberanía española, abogaba por la autonomía, rechazó el establecimiento de la Corte Provisional. La prensa y los abogados puertorriqueños en general se opusieron. Resulta interesante el hecho que destaca BARALT, que “*el establecimiento de la Corte Provisional fue acogido con júbilo por los ciudadanos españoles, que quedaron sometidos a su jurisdicción*”.³⁰⁵ Señala BARALT que los residentes españoles vieron en el nuevo tribunal: “*una salvaguarda contra los atropellos y desmanes de que supuestamente eran víctimas por parte de los puertorriqueños y contra las injusticias de los jueces del país de aquel entonces*”.³⁰⁶ También destaca BARALT que “*hasta festejaron la inauguración de la Corte Provisional con un banquete, donde el cónsul de España*”³⁰⁷, ofreciendo un brindis, donde este

³⁰³ Trías Monge, *supra* nota 222, en la pág. 76.

³⁰⁴ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 93.

³⁰⁵ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 98.

³⁰⁶ *Id.*

³⁰⁷ Según señala el Dr. Carmelo Delgado Cintrón las expresiones del cónsul de España Adolfo Martínez de Tudela causaron gran revuelo e indignación entre los puertorriqueños y españoles.

expresó que: *“ahora estarían mejor garantizados los elementos españoles en Puerto Rico”*.³⁰⁸

DELGADO CINTRÓN por su parte destaca el efecto que tuvo el establecimiento de la Corte Provisional de los Estados Unidos en Puerto Rico:

“El establecimiento de la Corte Provisional Federal, merma la jurisdicción de los tribunales puertorriqueños, crea desconfianza en el funcionamiento de estos, introduce procedimientos extraños a nuestro ordenamiento jurídico, crea un foro que usa únicamente el idioma inglés ajeno a los puertorriqueños, establece un centro de intereses al servicio de los abogados norteamericanos y forma un foro especial y privilegiado que cercena la dignidad y el decoro de nuestros tribunales puertorriqueños, quienes son altamente capaces de dirimir las controversias”.³⁰⁹

Para DELGADO CINTRÓN *“la Corte Provisional Federal seguía siendo un tribunal militar a pesar de su nombre y su estilo y la pretensión de similar a los tribunales federales norteamericanos”*.³¹⁰ Destaca DELGADO CINTRÓN que dos de sus jueces fueron oficiales del ejército, así como el resto del personal subalterno.³¹¹

De esta manera se estableció en Puerto Rico un sistema de justicia paralelo al local. Un sistema extraño a nuestra cultura jurídica, con sus propias reglas, leyes y jurisprudencia interpretativa. Los Estados Unidos crearon en Puerto Rico su propio foro donde dilucidar las controversias que surgieran de violaciones a las leyes federales o las controversias establecidas en el artículo III sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América. También se creó un foro afín a sus intereses imperialistas en la Isla y donde podían practicar cómodamente su profesión los abogados estadounidenses que llegaron tras la invasión.

³⁰⁸ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 98.

³⁰⁹ Delgado Cintrón, *supra* nota 92, en la pág. 232.

³¹⁰ *Id.* en la pág. 197.

³¹¹ *Id.*

Aunque no deja de resultar irónico que los derrotados en la guerra luego fueran los que aplaudieran el establecimiento del foro federal.

3.3 El Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (1900 al presente).

En 1900 el gobierno de los Estados Unidos de América aprobó una ley para proveer un gobierno civil a Puerto Rico. Esta ley se conoce como la Ley Foraker, debido a su principal patrocinador, el Senador Joseph Benson Foraker³¹². A juicio BARALT, esta fue la primera legislación colonial en la historia de los Estados Unidos.

El primer punto a destacar en nuestra investigación sobre la Ley Foraker es que, a través de su artículo 14, hace aplicable a Puerto Rico todas las leyes estadounidenses que no sean localmente inaplicables, y que estas tendrían la misma fuerza y validez que en los Estados Unidos, a excepción de las leyes de rentas internas.³¹³ Esta disposición sigue en Puerto Rico vigente al sol de hoy.

En cuanto al sistema judicial local, la ley estableció que seguiría igual, conforme a lo establecido en las Ordenes Generales. La única excepción que la Ley Foraker estableció fue que el presidente y los Jueces Asociados del Tribunal Supremo y el Marshall o Alguacil Mayor serían nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, con el concurso y consentimiento del Senado Federal.³¹⁴ El Gobernador propuesto en la Ley Foraker también era nombrado por el Presidente de los Estados Unidos y confirmado por el Senado Federal. El Gobernador permanecía en su puesto durante cuatro años hasta que se nombrara su sucesor.

La Ley Foraker también dispuso que los jueces de las Cortes de Distrito serían nombrados por el Gobernador, con el concurso y consentimiento del

³¹² Baralt, supra nota 280, en la pág. 98.

³¹³ Ley Orgánica Foraker, art. 14 (1900).

³¹⁴ *Id.* en el art. 33.

Consejo Ejecutivo.³¹⁵ A juicio de FERNÓS LÓPEZ-CEPERO la Ley Foraker “estableció una legislatura local con poderes limitados”.³¹⁶ Consistía en un Consejo Ejecutivo compuesto de once miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, por y con el consejo y con el consentimiento del Senado, y de una Cámara de Delegados compuesta por treinta y cinco miembros electos por el pueblo.³¹⁷ RAFFUCI DE GARCÍA nos señala que “*ambas Cámaras tenían facultad para iniciar leyes, pero los proyectos no se convertirían en ley hasta tanto fuesen aprobados por el gobernador*”.³¹⁸ “*Si el Gobernador no devolvía un proyecto aprobado por ambas cámaras en un plazo de diez días laborables, este se convertía en ley*”.³¹⁹ La Ley Foraker también le daba la potestad a esta Asamblea Legislativa de escoger a los empleados de las Cortes. También le dio la facultad de reorganizar dichas Cortes cuando lo estimara oportuno.³²⁰

La Ley Foraker de 1900 también transformó la Corte Provisional de los Estados Unidos para el Departamento de Puerto Rico creada en 1899 en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a través de su artículo 34. Los tribunales de distrito de los Estados Unidos son los tribunales de primera instancia del sistema judicial federal.³²¹ Dentro de los límites establecidos por el Congreso y la Constitución, los tribunales de distrito tienen jurisdicción para ver todo tipo de casos federales, incluyendo asuntos civiles y criminales.³²² Para la jurisdicción de Puerto Rico el Congreso de los Estados Unidos a través de la Ley Foraker estableció lo siguiente:

“Puerto Rico constituirá un distrito judicial que se denominará “El Distrito de Puerto Rico.” El Presidente, con el concurso y consentimiento del

³¹⁵ Ley Orgánica Foraker, art. 33 (1900).

³¹⁶ Fernós López-Cepero, *supra* nota 124, en la pág. 51.

³¹⁷ *Id.* en las págs. 51-52.

³¹⁸ Carmen I. Raffuci De García, *El Gobierno Civil y la Ley Foraker (Antecedentes Históricos)*, pág. 53 (1981).

³¹⁹ *Id.*

³²⁰ Ley Orgánica Foraker, art. 33 (1900).

³²¹ Federal Bar Association, http://www.fedbar.org/Public-Messaging/About-US-Federal-Courts_1.aspx (2017).

³²² *Id.*

Senado, nombrará un Juez de Distrito, un Fiscal de Distrito, y un Márshal para dicho distrito, cada uno por el término de cuatro años³²³, a menos que antes no sean destituidos por el Presidente. La Corte de Distrito para dicho distrito, se denominará "Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico" y tendrá la facultad de nombrar todos los empleados y ayudantes necesarios, incluyendo un Clerk (Secretario), un intérprete y los comisionados que sean necesarios, quienes tendrán las mismas atribuciones que los comisionados de las Cortes de Circuito de los Estados Unidos; y tendrá, además de la jurisdicción ordinaria de Corte de Distrito de los Estados Unidos, jurisdicción en todos los casos que sean de la competencia de las Cortes de Circuito de los Estados Unidos, y seguirá la misma tramitación que las Cortes de Circuito. Las leyes de los Estados Unidos referentes a apelaciones, recursos por causa de error, o por violación de ley, de certiorari, traslación de causas, y otros asuntos y procedimientos, que rigen para las Cortes de los Estados Unidos respecto a las Cortes de los distintos Estados, regirán también para todos los asuntos y procedimientos entre la Corte de los Estados Unidos y las Cortes de Puerto Rico. Los términos o sesiones regulares de dicha Corte se celebrarán en San Juan, empezando el segundo lunes de abril y octubre de cada año; y también en Ponce el segundo lunes de enero de cada año, y podrán celebrarse términos o sesiones especiales en Mayagüez en las épocas en que el Juez estimare convenientes. Todas las defensas y procedimientos de dicha Corte se harán en el idioma inglés".³²⁴

Indica BARALT que “en 1901 el Congreso de los Estados Unidos amplía la jurisdicción del Tribunal Federal para que atienda controversias en que las partes litigantes o alguna de ellas fuesen ciudadano de los Estados Unidos, o ciudadanos o súbditos de uno o más estados extranjeros, y en las cuales lo que fuese objeto de contienda, con exclusión de intereses o costas, fuese cantidad mayor de mil dólares, o algo que valiera más que dicha suma”.³²⁵

³²³ A partir de 1966 los Jueces del Tribunal Federal en Puerto Rico gozan nombramientos vitalicios.

³²⁴ Ley Orgánica Foraker, art. 34 (1900).

³²⁵ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 120.

Sobre el funcionamiento del nuevo tribunal federal nos dice BARALT:

“Este nuevo tribunal operaría con sus propias reglas, dejando atrás los procedimientos judiciales españoles y militares para adoptar los estadounidenses y civiles.³²⁶ Entre las reglas que se implantaron estaba la de que todos los alegatos, objeciones, mociones y procedimientos debían ser redactados en inglés, y que los documentos que se presentasen debían haber sido traducidos al inglés si fuese necesario.³²⁷ Los abogados³²⁸ podían dirigirse al Tribunal o al jurado en español; sus intervenciones serían traducidas al inglés.³²⁹ Reapareció el jurado o “petit jury”, base de la unanimidad de los veredictos para los juicios criminales y del Gran Jurado de la antigua tradición inglesa, para autorizar las acusaciones, de modo que el pueblo acusara y juzgara por su voluntad y criterio. Los miembros del jurado debían ser mayores de 21 años, rectos, sobrios, inteligentes y debían entender inglés.³³⁰ Estas reglas hoy en día en esencia permanecen inalteradas.”³³¹

³²⁶ Baralt, *supra* nota 280, en la pág. 123.

³²⁷ *Id.*

³²⁸ Sólo una minoría de los casi 20,000 abogados autorizados actualmente a ejercer la profesión practican en el Tribunal Federal.

³²⁹ *Id.*

³³⁰ *Id.*

³³¹ A pesar de que la Isla tiene dos idiomas oficiales, el Censo 2000 arrojó que solo un 14.3% de la población hablaba el inglés con fluidez, y el 71.9%, lo hablaba “menos que bien”. Para muchos puertorriqueños estos datos son una muestra de que el proyecto del “ciudadano bilingüe” ha fallado en Puerto Rico. El Nuevo Día, 21 de abril de 2013. <https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/fracasaelbilinguismoenpuertorico-1494801/>

El bilingüismo en Puerto Rico ha fracasado. Así lo revelan los últimos resultados del Censo del 2010, pues en los últimos diez años son menos las personas que dominan el inglés como segunda lengua. La exposición al inglés que se recibe a diario a través de los programas de televisión y al vertiginoso mundo de Internet parecen no ser suficientes para dominar el inglés. Actualmente, solo el 10% de la población lo domina. El Nuevo Día, 21 de mayo de 2013. <https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/serbilinguesasignacionpendiente-1514129/>

CAPÍTULO 4

LA PRISIÓN PROVISIONAL EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD

4.1 Concepto.

La prisión provisional es una medida cautelar personal del sistema procesal penal español donde, a petición del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, un juez o magistrado puede ordenar la detención de un investigado o acusado de delito mientras se lleva a cabo la investigación y eventualmente el juicio, si se cumplen con una serie de requisitos de estricto cumplimiento. Esta medida cautelar se puede adoptar en cualquier etapa del procedimiento.

Existen tres modalidades de prisión provisional: la “*comunicada*”, que es la ordinaria; la atenuada, también conocida como “*arresto domiciliario*”; y la incomunicada. Al tratarse de una medida cautelar, no se puede utilizar con el objetivo obtener una confesión o admisión del acusado, con un fin punitivo o para evitar la alarma social. Utilizar la prisión provisional con otro fin que no sea uno cautelar estaría violentando la norma constitucional.

El Tribunal Constitucional Español define la prisión provisional como:

*“[U]no medida cautelar de naturaleza personal, que tiene como primordial finalidad la de asegurar la disponibilidad física del imputado con miras al cumplimiento de la sentencia condenatoria, que eventualmente pueda ser dictada en su contra, impidiendo de este modo que dicho sujeto pasivo de la imputación pueda sustraerse a la acción de la justicia, de forma que no es en modo alguno una especie de pena anticipada”.*³³²

³³² STC 57 / 2008, 4 de junio.

La prisión provisional es uno de los temas más estudiados en el Derecho procesal español tras la puesta en vigor de la Constitución de 1978. ASENSIO MELLADO la define como *“una medida cautelar, de carácter personal, que se resuelve en la privación de la libertad de un sujeto imputado, y que se adopta en el seno de un proceso penal por la autoridad judicial a los efectos de garantizar fines adecuados a la Constitución y previstos expresamente por la Ley”*.³³³ PRIETO-CASTRO FERNÁNDEZ y GUTIÉRREZ DE CABIEDES Y FERNÁNDEZ DE HEREDIA la describen en su tratado de Derecho procesal penal como una *“medida cautelar de difícil regulación, porque entra en colisión los derechos de defensa de la sociedad y los del individuo”*.³³⁴ TOMÉ GARCÍA, por su parte, la define la prisión provisional como *“una medida cautelar de carácter personal, que consiste en la privación de libertad de una persona presunta responsable criminal de un delito, decretada por la autoridad judicial mediante una resolución motivada que ordena su internamiento en un centro penitenciario con la finalidad de asegurar la celebración del juicio oral y la ejecución de una futura sentencia de condena”*.³³⁵

Por su parte, ZARZALEJOS NIETO entiende la prisión provisional como *“una privación temporal de la libertad que se ejecuta en un centro penitenciario y que debe servir a unos determinados fines constitucionalmente legítimos relacionados con el desarrollo del proceso penal”*.³³⁶ GUDÍN RODRÍGUEZ destaca que la prisión provisional se diferencia de las penas de privación de la libertad *“por su carácter instrumental y su provisionalidad”*.³³⁷

GIMENO SENDRA la explica como *“una situación nacida de una resolución jurisdiccional, de carácter provisional y duración limitada, por la que*

³³³ José María Asencio Mellado, *Derecho Procesal Penal*, pág. 203, (Valencia, 2004).

³³⁴ Leonardo Prieto-Castro Fernández y Eduardo Gutiérrez de Cabiedes y Fernández de Heredia, *Derecho Procesal Penal*, pág. 258, (Madrid, 1989).

³³⁵ José Antonio Tomé García, *Curso de Derecho Procesal Penal*, pág. 292, (Madrid, 2016).

³³⁶ Julio Banacloche Palao & Jesús Zarzalejos Nieto, *Aspectos fundamentales de Derecho procesal penal*, pág. 221, (Madrid, 2015).

³³⁷ Faustino Gudín Rodríguez Magariños, *La paulatina metamorfosis del juez de instrucción como juez de garantías: pautas jurídicas para la pervivencia de una arraigada institución*, en *Revista Penal*, pág. 230, (Madrid, 2011).

*se restringe el derecho a la libertad de un imputado de la comisión de un delito de especial gravedad y en quien concurra un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que no acudirá a la llamada de la celebración del juicio oral, así como para conjurar los riesgos de reiteración delictiva, de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba y la puesta en peligro de la víctima”.*³³⁸ DE LA ROSA CORTINA, por su parte, la describe como *“la privación de libertad de una persona a la que se imputa una conducta delictiva cuando aún no ha sido condenada por sentencia firme, acordada por un órgano jurisdiccional del orden penal y orientada a asegurar su sujeción al proceso, evitar que destruya fuentes de prueba o impedir que cometa nuevos delitos”.*³³⁹ DE LA ROSA CORTINA describe su existencia en el sistema procesal penal español como *“turbulenta”*.³⁴⁰

COBO DEL ROSAL, un crítico de la prisión provisional, la cataloga como *“una condena adelantada: la prisión provisional, simple medida tutelar, nunca pena anticipada, funciona en la práctica, y es conveniente ya llamar las cosas por su nombre, como una verdadera condena adelantada (pena anticipada), conculcando el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad”.*³⁴¹ A juicio de IBÁÑEZ *“del principio al fin, la prisión provisional es siempre y ya definitivamente una pena”.*³⁴² Por su parte, ARMENTA DEU la describe *“como la medida cautelar más efectiva y a la vez más criticada, lo que no impide reconocer simultáneamente la dificultad de sustituirla por otra”.*³⁴³ ARANGÜENA FANEGO la define como *“la medida cautelar personal más grave del asistemático e insuficiente catálogo de medidas reguladas en la LeCrim consistente en la privación de libertad del investigado con carácter provisional y duración limitada en el tiempo, con la finalidad de asegurar la comparecencia en el juicio oral y la efectividad de la futura pena privativa de libertad que pudiera*

³³⁸ Vicente Gimeno Sendra, *Derecho Procesal Penal*, pág. 678, (Madrid, 2008).

³³⁹ José Miguel De La Rosa Cortina, *Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal*, pág. 48, (Barcelona, 2015).

³⁴⁰ *Id.*

³⁴¹ Manuel Cobo del Rosal, *Tratado de Derecho procesal penal*, pág. 534, (Madrid, 2015).

³⁴² Perfecto Andrés Ibáñez, *El Juez y la Prisión Provisional*, en *Crítica y Justificación del Derecho penal en el cambio de siglo*, pág. 29, (Cuenca, 2003).

³⁴³ Teresa Armenta Deu, *Lecciones de Derecho procesal penal español*, pág. 220, (Madrid, 2015).

*imponerse.*³⁴⁴ MORENO CATENA y CORTÉS DOMÍNGUEZ la describen como “*un mal necesario en todos los ordenamientos jurídicos*” y la “*más grave intromisión que puede ejercer el poder estatal en la esfera de libertad del individuo sin que medie todavía una sentencia penal firme que la justifique*”.³⁴⁵ SÁNCHEZ BARRIOS la describe como “*una de las instituciones más problemáticas del proceso penal, que ha sensibilizado – y sigue haciéndolo – a los legisladores y también a la sociedad en general, y no únicamente en España, sino también en el panorama internacional*”.³⁴⁶

La prisión provisional se encuentra regulada en el capítulo III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, específicamente en sus artículos 502 al 519. Se mantuvo prácticamente inalterada en el ordenamiento procesal penal español a través de toda su historia hasta la aprobación de la Constitución Española en 1978. A los pocos años después de la puesta en vigor de la Constitución, la prisión provisional comenzó a reformarse para atemperar a las disposiciones de sus artículos 17, sobre el derecho a la libertad³⁴⁷ y el 24, sobre la protección judicial de los derechos.³⁴⁸

³⁴⁴ Coral Arangüena Fanego, *La Prisión Provisional y la Incomunicación*, en *Nociones Preliminares de Derecho procesal Penal*, pág. 123, (Jordi Nieva Fernoll & Llorenç Bujosa Vadell, directores, 2016).

³⁴⁵ Víctor Moreno Catena & Valentín Cortés Domínguez, *Derecho procesal penal*, pág. 280, (Valencia, 2010).

³⁴⁶ María Inmaculada Sánchez Barrios, *La prisión provisional y la necesaria convocatoria de una audiencia previa para su adopción*, en *Diario la Ley*, pág. 1, (Madrid, 2015).

³⁴⁷ Artículo 17, C.E.: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

³⁴⁸ Artículo 24; C.E.: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables

4.2 Fundamento.

Podemos decir que la prisión provisional es parte integral del sistema procesal español. Sobre este aspecto, DAMIÁN MORENO destaca que la prisión provisional, junto con la detención, *“han formado durante siglos parte integrante del sistema punitivo medieval, concebidas durante mucho tiempo como puro instrumento de prevención social y, en muchos casos, como instrumento para la obtención de testimonios de carácter inculpatório”*.³⁴⁹

En la actualidad se regula en el capítulo III, artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Como ya se dijo, esta ley ha sido enmendada a través de los años para atemperarla a los tiempos.

Con la puesta en vigor de la Constitución Española de 1978 la prisión provisional ha sido poco a poco reformada para estar acorde con sus disposiciones. Estas reformas han sido impulsadas por decisiones del Tribunal Constitucional español quien, a través de sus decisiones, *“ha ido imponiendo requisitos -con el tiempo cada vez más claros y exigentes- para que la institución de la prisión provisional sea respetuosa con el contenido esencial del derecho a la libertad, tal y como viene consagrado en su artículo 17 de la Constitución, y del derecho a la presunción de inocencia, con sagrado en el artículo 24.2.”*³⁵⁰ Como reseña MONTÓN GARCÍA, el Tribunal Constitucional español también ha ido moldeando la prisión provisional conforme a las determinaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas determinaciones obligan a los países miembros de la Unión Europea:

“Hace ya mucho tiempo que el Tribunal Constitucional español, basándose en gran parte en diversas resoluciones del Tribunal Europeo de

y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

³⁴⁹ Juan Damián Moreno, *El sistema cautelar penal*, en Régimen jurídico de la prisión provisional, pág. 101, (Madrid, 2004).

³⁵⁰ Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la *Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional*.

*Derechos Humanos ha venido construyendo un amplio cuerpo de doctrina sobre los presupuestos, circunstancias y requisitos necesarios para que la prisión provisional se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad exigibles para justificar afecciones a cualquier derecho fundamental, máxime si este es el de la libertad individual de los ciudadanos.*³⁵¹

4.3 Finalidad.

Sobre los fines de la prisión provisional, la ley dispone que se busca asegurar la presencia del acusado *“cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga”*. Para llegar a tal conclusión la ley exige que valore conjuntamente *“la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse”*. Como señala BANACLOCHE PALAO, esta es *“la finalidad fundamental que el legislador toma en consideración para autorizar la adopción de una medida de prisión provisional es la de asegurar la comparecencia del imputado”*.³⁵² Según BANACLOCHE PALAO, para el legislador *“existe una relación directa entre la fuga y el posible castigo del culpable: a más pena señalada, más posibilidades teóricas de que el imputado tenga intención de fugarse, por lo que en tales casos hay que decretar la prisión provisional”*.³⁵³ ASENSIO MELLADO, por su parte, señala que el riesgo de fuga constituye: *“la principal de las causas que justifican el acuerdo de la prisión provisional.”*³⁵⁴ En iguales términos se expresa COBO DEL ROSAL, indicando que el *“riesgo de fuga es, sin duda, el único motivo sobre el que no se ciernen sombras de su poder de legitimación para adoptar la grave medida de prisión provisional.”*³⁵⁵ La adjudicación del peligro de fuga no debe estar basado solo en la gravedad del delito y la posible pena que se le pudiera aplicar al acusado. Como destacó el Tribunal Constitucional, hay que tomar otros factores en consideración:

³⁵¹ Mar Montón García, *Los actuales presupuestos fácticos de la Prisión Provisional*, Diario La Ley, año XXV, núm. 5972, pág. 2, marzo 2004.

³⁵² Julio Banacloche Palao, *La libertad personal y sus limitaciones*, pág. 380, (Madrid, 1996).

³⁵³ *Id.*

³⁵⁴ José María Asencio Mellado, *Derecho Procesal Penal*, pág. 209, (Valencia, 2004).

³⁵⁵ Manuel Cobo del Rosal et. als., *Derecho procesal penal español*, pág. 444, (Madrid, 2015).

*[L]a motivación de la constatación del peligro de fuga no puede derivar solo de la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le conmina, sino que debe tomar en consideración las circunstancias del caso y las personales del imputado.*³⁵⁶

También procederá la prisión provisional si contra al acusado hubieran “*sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores*”. Como advierte ZARZALEJOS NIETO, en estos “*casos se podrá decretar la prisión sin consideración a la pena del delito*”.³⁵⁷ GIMENO SENDRA apunta que, con esta disposición, “*el legislador creó una presunción legal de que el imputado se sustraerá de la acción de la justicia*”.³⁵⁸ DÍAZ MARTÍNEZ, por su parte, considera que esta disposición “*presenta serias dudas de constitucionalidad*”:

*“La redacción de dicho precepto, que obliga a la adopción de la prisión provisional cuando concorra este estándar legal, “haber sido dictadas al menos dos requisitorias”, presenta serias dudas de constitucionalidad, en la medida en que, de un lado, atenta directamente contra el principio de excepcionalidad, que, como es sabido, prohíbe cualquier criterio legal que autorice, de modo automático, la restricción de la libertad ante la aparición de meras situaciones fácticas que escondan presunciones legales y que, por tanto, no exijan una motivación razonada y suficiente atendiendo las circunstancias del hecho y de la persona imputada y, de otro supone una vulneración del principio de proporcionalidad, por cuanto no se hace referencia alguna a los delitos que estaban siendo enjuiciados en los procesos donde fueron dictadas las requisitorias, ni siquiera exige que fueran dolosos, lo que, unido a que se excepciona el límite de la pena de los dos años, permite calificar dicha cláusula como excesiva y desproporcionada”.*³⁵⁹

³⁵⁶ STC 29 / 2008, 29 de enero.

³⁵⁷ Zarzalejos Nieto, *supra* nota 338, en la pág. 223.

³⁵⁸ Gimeno Sendra, *supra* nota 340, en la pág. 686.

³⁵⁹ Manuel Díaz Martínez, *Prisión Provisional e intereses constitucionalmente protegidos*, Diario La Ley - Núm., año XXV, núm. 5931, enero 2004, pág. 3.

Otra finalidad de la prisión provisional es la de evitar la destrucción, ocultación o alteración de la prueba relacionada al caso y necesaria para su enjuiciamiento. La ley exige que una determinación basada en este aspecto debe estar fundamentada en *“un peligro fundado y concreto”*. Para llegar a una determinación de prisión provisional bajo esta causal la ley indica que el juez deberá considerar la *“capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”*. Hay que tener en cuenta el objetivo de esta finalidad es proteger la prueba, para que no sea destruida u ocultada por el acusado o a través de un tercero. Si se utilizara con un fin coercitivo para obtener pruebas sería inconstitucional. Así lo advirtió el Tribunal Constitucional: *“se proscribe la utilización de la prisión con la finalidad de impulsar la investigación del delito, obtener pruebas o declaraciones, etc., ya que utilizar con tales fines la privación de libertad excede los límites constitucionales”*.³⁶⁰

Por otro lado, la ley advierte que no procederá la decisión de prisión provisional *“cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación”*. Como parte de la evaluación que se llevará a cabo para determinar la procedencia de la prisión provisional, el juez deberá determinar si el acusado puede *“acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”*. Como nos dice ARMENTA DEU, un decreto de prisión provisional bajo este motivo no se refiere a detener al acusado en lo que se recopila toda la prueba que pueda existir en su contra sino *“aquellas relevantes para el enjuiciamiento”*.

“El fin no es preservar las fuentes de prueba general. Dicha configuración atentaría contra la exigencia de proporcionalidad. El objetivo se circunscribe a aquellas relevantes para el enjuiciamiento y sobre las

³⁶⁰ STC 128/1995 de 26 de julio.

*que se aprecie, además, la existencia de un peligro fundado y específico”.*³⁶¹

MONTÓN GARCÍA por su parte califica este supuesto como uno difícil de considerar:

“Nos encontramos ante un supuesto que, creemos, no es de fácil consideración judicial por una serie de razones:

a) Porque hay que tener un conocimiento muy definido de la existencia de fuentes de prueba y que éstas tienen carácter relevante para la configuración de los hechos delictivos.

*b) Porque debe concurrir un riesgo de desaparición o alteración en la eficacia de esos elementos probatorios. Un riesgo que, además, ha de trascender de lo puramente potencial o presuntivo para entrar, sin margen de duda, en el terreno de la certeza incontestable porque, de no ser así, rozaría una discrecionalidad atentatoria de la proporcionalidad que debe ser base esencial de una medida tan trascendente como es la prisión preventiva, como proclama el propio legislador.”*³⁶²

NAVARRO MASSIP difiere en cuanto a que se utilice la posible amenaza a testigos como justificativo de la prisión provisional:

*“En ocasiones se alude a que el imputado puede influir sobre los testigos, lo que ya «per se» es objeto de delito, por lo que no debe ser un criterio para estos supuestos. Además, en general, no suele valorarse «ad hoc» como exige el precepto, efectuándose una remisión genérica sin razonamiento concreto al caso”.*³⁶³

³⁶¹ Armenta Deu, *supra* nota 345, en la pág. 222.

³⁶² Montón García, *supra* nota 353, en la pág. 3.

³⁶³ Jorge Navarro Massip, *La regulación de la prisión provisional: presupuestos y fines*, en Revista Aranzadi Doctrinal, pág. 8, (Madrid, 2013).

Otro fin de la prisión provisional es el de evitar que el acusado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente en casos de delitos de violencia de género. TOMÉ GARCÍA critica este objetivo, señalando que el mismo *“no encaja con la finalidad genérica que se persigue con la prisión provisional que es la de asegurar la celebración del juicio oral y la ejecución de una futura sentencia de condena”*.³⁶⁴ Resalta TOMÉ GARCÍA que *“en estos casos no sería una medida cautelar sino más bien una medida preventiva justificada en gran medida en la presunción de que el investigado es culpable del delito que se le imputa en la causa en la que se ordena su ingreso en prisión provisional”*.³⁶⁵ ARMENTA DEU, por su parte, cataloga este supuesto como uno *“extravagante desde el punto de vista metodológico, en la medida en que constituye un supuesto especial insertado en una norma de carácter general”*.³⁶⁶

La ley también provee para que se pueda ordenar la prisión provisional *“para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos”*. Para concluir que existe un riesgo de reiteración delictiva, *“se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer”*. Se advierte que *“sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso”*. NAVARRO MASSIP cataloga esta finalidad como una medida de seguridad que atenta contra el derecho a la libertad: *“Dicha finalidad parece más una medida de seguridad, que podría atentar contra el derecho a la libertad, máxime si no se aportan criterios o datos sobre ese «pronóstico» de futuro”*.³⁶⁷

El estatuto además establece una excepción que indica que *“no será aplicable cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el investigado o encausado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada*

³⁶⁴ Tomé García, *supra* nota 337, en la pág. 295.

³⁶⁵ *Id.* en las págs. 295 – 296.

³⁶⁶ Armenta Deu, *supra* nota 345, en la pág. 223

³⁶⁷ Navarro Massip, *supra* nota 365, en la pág. 8.

para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad". COBO DEL ROSAL reprocha el que se pueda ordenar la prisión provisional por reiteración delictiva ya que *"se basaría, en el mejor de los casos, en la extrapolación de otros casos..."*³⁶⁸ Este autor en su crítica compara esta causal de prisión provisional con la antigua Ley de Vagos y Maleantes:

*"El denominado peligro de reiteración delictiva es un cuerpo extraño al sistema. Una prisión preventiva justificada en el peligro de reiteración delictiva, es una prisión preventiva imbuida de metas preventivas, en concreto, de prevención especial. Y, en verdad, todo este tipo de medidas – de querer ser aceptadas como fines de la pena, lo cual no nos corresponde tratar aquí –, presuponen la existencia de la culpabilidad del sujeto objeto de las mismas, lo que, evidentemente, a falta de sentencia condenatoria, no concurre en los supuestos de prisión provisional. Por ello, el criterio de la reiteración – fin preventivo especial – no puede ser acogido de ninguna forma. Peligros de reiteraciones delictivas, aun cuando se concretasen, nada tienen que ver con el aseguramiento del proceso o la posibilidad de ejecutar la pena. Fundamentar la prisión preventiva en el peligro de repetición del delito, no es sino la aplicación encubierta y sin base legal alguna, de una medida de seguridad, que sin duda, recuerda nuestra antigua Ley de Vagos y Maleantes. El Derecho procesal penal no es el sistema competente para la defensa ante hipotéticos posibles delitos."*³⁶⁹

Para ARMENTA DEU, esta disposición *"opera en la difícil línea divisoria entre la tutela cautelar y la tutela preventiva."*³⁷⁰ DÍAZ MARTÍNEZ, por su parte, tacha la prisión provisional por este motivo como claramente desproporcionada:

"[E]l art. 503.2 LECrim., a diferencia de la doctrina emanada del TC y TEDH, autoriza la prisión provisional ante la presencia de un riesgo de

³⁶⁸ Cobo del Rosal et. als., *supra* nota 357, en la pág. 445.

³⁶⁹ *Id.* en las págs. 445 - 446.

³⁷⁰ Teresa Armenta Deu, *Estudios de Justicia Penal*, pág. 285, (Madrid, 2014).

*reiteración delictiva genérico, no concreto, sin exigir relación alguna entre el hecho cometido y el que se pretender evitar, siendo suficiente, a juicio del legislador, atender a criterios tan vagos e imprecisos como los son las circunstancias del hecho y la gravedad de los que delitos que se pudieran cometer, todo ello unido a que, cuando el imputado pertenezca a una organización criminal o realice sus actividades delictivas con habitualidad, podrá se acordada la prisión provisional para evitar que el imputado cometa cualquier delito, sin importar cual sea su entidad, lo que resulta claramente desproporcionado.”*³⁷¹

Un aspecto muy importante en la decisión de ordenar la prisión provisional es que esta sea proporcional. Esto significa que sólo podrá ser decretará “*cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional*”. En consecuencia, el juez o magistrado ha de analizar todas las opciones posibles para mantener al acusado en libertad mientras se efectúa el juicio en su contra. Esto significa que, mientras haya otras opciones posibles en que pueden lograr el mismo propósito, la prisión provisional debe descartarse. Estas opciones podrían ser la detención en el hogar, la libertad provisional o la libertad bajo fianza del imputado. El Tribunal Constitucional ha resumido el raciocinio que debe llevar a cabo un juez antes de determinar si procede o no la prisión provisional:

*“En definitiva, la motivación será razonable cuando sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego la libertad de una persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la administración de la justicia penal y la evitación de hechos delictivos, por otro-- a partir de toda la información disponible en el momento en el que ha de adoptarse la decisión y del entendimiento de la prisión provisional como `una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines...”*³⁷²

³⁷¹ Díaz Martínez, *supra* nota 361, en la pág. 4.

³⁷² STC 47/2000, 17 de febrero.

4.4 Naturaleza jurídica.

La prisión provisional es una medida de naturaleza cautelar personal. Busca garantizar la presencia del acusado durante todo el enjuiciamiento y que se pueda hacer efectiva la futura sentencia que podría recaer en su contra. No importa las salvaguardas procesales; la medida siempre tendrá un efecto negativo en contra del acusado, ya que limita la libertad de una persona a la que se presume inocente. A juicio de BARONA VILAR, esta medida cautelar es *“la más gravosa del ordenamiento jurídico”*.³⁷³ ARMENTA DEU identifica su naturaleza cautelar como de *“particulares perfiles, en tanto incide sobre el derecho fundamental a la libertad de movimiento (art. 17 CE)”*. GUERRA PÉREZ la clasifica, entre las personales, como la más importante junto con la detención, por el efecto que tienen en la libertad del individuo.³⁷⁴

BANACLOCHE PALAO señala que su naturaleza jurídica *“va a depender de cuál sea la finalidad que se considera prioritaria de la prisión provisional”*.³⁷⁵ Este autor identifica tres finalidades, dos de estas son las cautelares: *“la de evitar la frustración del proceso imposibilitando la fuga del reo y permitiendo la eventual ejecución de la pena que se pueda acordar”* y la de *“asegurar el éxito de la instrucción e impedir la ocultación de los medios de prueba”*.³⁷⁶ A estas añade una tercera: *“la de ser una medida de seguridad o como una verdadera pena anticipada”*, cuando se busca evitar la reiteración delictiva o la derogada alarma social.³⁷⁷

4.5 Clases.

La prisión provisional comunicada, donde el acusado permanece encarcelado mientras subsistan las razones que lo llevaron a su detención,

³⁷³ Juan Montero Aroca, *et al.*, *Derecho Jurisdiccional III*, pág. 292, (Valencia, 2016).

³⁷⁴ Cristina Guerra Pérez, *La decisión judicial de prisión preventiva*, pág. 44, (Valencia, 2010).

³⁷⁵ Banacloche Palao, *supra* nota 354, en la pág. 378.

³⁷⁶ *Id.*

³⁷⁷ Banacloche Palao, *supra* nota 354, en la pág. 379.

*“representa esta el modo habitual de acordar la prisión provisional, ordenándose el internamiento del condenado en un centro penitenciario, y se rige por los preceptos relativos de la LeCrim y de la Ley General de Penitenciaria, procurando la separación de los presos preventivos de aquellos que están cumpliendo condena”.*³⁷⁸

La ley provee otros tipos de prisión provisional para casos especiales. Una medida extraordinaria dentro de la excepcionalidad de la prisión provisional es la del incomunicado. Esta es una medida que ha acompañado a la prisión provisional a través de su historia. ESCUDERO HERRERO brinda una descripción detallada del régimen de prisión provisional incomunicada:

*“La prisión provisional incomunicada supone un total aislamiento del sometido a esta medida respecto del mundo exterior, de modo que ni puede recibir visitas o salir del establecimiento penitenciario, ni puede recibir correspondencia o remitirla, y su función hay que buscarla básicamente en evitar el entorpecimiento de la investigación penal en curso”.*³⁷⁹

El artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece de manera taxativa los requisitos que se tienen que dar para que un juez pueda ordenar la prisión provisional del investigado o acusado de manera incomunicada. Estas son: *“evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona”* o *“la necesidad urgente de una actuación inmediata para evitar comprometer de modo grave el proceso penal”*. El auto con el que se adopte esta medida deberá justificar la razón para su adopción.

La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días con la posibilidad de extenderse otros cinco días adicionales. El artículo 509 lo complementa el artículo 527, que establece los derechos que podría perder el incomunicado mientras dure tal condición:

³⁷⁸ Concepción Escudero Herrera, *Derecho Procesal Penal*, pág. 169, (Madrid, 2015).

³⁷⁹ *Id.*

“a) Designar un abogado de su confianza.

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.

c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.

d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.” Tanto el estado de incomunicado como las restricciones antes señaladas tienen que ser “acordadas por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las excepciones al régimen general”.

El artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también provee para que el juez pueda ordenar la prisión provisional atenuada, también conocida como arresto domiciliario *“con las medidas de vigilancia que resulten necesarias”*, si el encarcelamiento puede afectar la salud del acusado. De igual manera, se puede llevar a cabo la detención en un centro de salud si el acusado está recibiendo tratamiento de desintoxicación. La ley, como señala Martín Ríos, no es clara en cuanto a si se puede ordenar la prisión atenuada de un acusado que no esté sufriendo un percance de salud.³⁸⁰

4.6 Presupuestos.

A través de la prisión provisional el Estado busca asegurar la presencia de ciertos acusados en situaciones extraordinarias. Para que proceda una determinación de prisión provisional, la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que debe haber *“uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de*

³⁸⁰ María del Pilar Martín Ríos, *Medidas Cautelares Personales: detención, libertad provisional y prisión preventiva*, pág. 148 (Lisboa, 2016).

cancelación, derivados de condena por delito doloso".³⁸¹ La ley también exige *"que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión"*.³⁸² Esto es, que el juez entiende que ocurrió un delito y que la persona que está acusada por el mismo probablemente lo cometió. Esta característica se le conoce como el *fumus delicti comissi*.

Como señala ARAGONESES MARTÍNEZ, tiene que haber *"razones suficientes para atribuir a un sujeto un hecho con apariencia delictiva; y que, existan sospechas fundadas de que dicho sujeto puede obstaculizar o impedir el normal desarrollo y terminación del proceso penal"*.³⁸³ De la misma manera, *"no sea adoptará la prisión provisional cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación"*.³⁸⁴ El Tribunal Constitucional exige que existan esos indicios racionales de criminalidad para que una determinación prisión provisional pueda pasar el crisol constitucional:

*"Más allá, pues, del expreso principio de legalidad (arts. 17.1 y 17.4 C.E.), debe consignarse que la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y, como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos."*³⁸⁵

Sobre el aspecto de los *"indicios racionales de la comisión de una acción delictiva"* el Tribunal Constitucional recalcó en ese mismo caso que no equivale

³⁸¹ Art. 503, inciso 1, Ley de Enjuiciamiento Criminal.

³⁸² *Id.* en el inciso 2.

³⁸³ Sara Aragonese Martínez et. als., *Derecho Procesal penal*, pág. 403, (Madrid, 2004).

³⁸⁴ Martín Ríos, *supra* nota 382, en la pág. 167.

³⁸⁵ STC 128/1995, de 26 de julio.

a una presunción de culpabilidad y que la determinación de prisión provisional no puede estar basada únicamente en este aspecto:

*“Debe aclararse al respecto que la apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación no significa, por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado; sino que únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida (STC 108/1994, de 11 de abril, FJ 3) por lo que ninguna objeción cabe hacer a dicha apreciación, en sí misma considerada. Y otra cosa es que si por meros indicios racionales de criminalidad se impusiera una privación de libertad, resultaría vulnerado el art. 24.2 CE en relación con el art. 17 CE.”*³⁸⁶

Otra característica que debe estar presente para que proceda una determinación de prisión provisional es que exista un riesgo de fuga y que sólo con esta medida extraordinaria se puede asegurar la presencia del acusado. Como señala BARONA VILAR, se tiene que *“conjurar en cada caso concreto uno de los siguientes riesgos: el riesgo de fuga, el riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, el riesgo de reincidencia o el riesgo de desprotección de las víctimas”*.³⁸⁷ Esta característica de la prisión provisional se le conoce como *periculum in mora* y *“[s]e configura como un peligro de daño jurídico concreto derivado de la tardanza en la tramitación de un procedimiento”*.³⁸⁸ Para MORENO CATENA y CORTÉS DOMÍNGUEZ *“a través del periculum in mora se establecen precisamente los fines que puede cumplir la prisión provisional, y representan la medida de su propia constitucionalidad, de modo que pues si los fines que persiguen con ella no se adecuan a las previsiones constitucionales, la medida cautelar resultará ilegítima”*.³⁸⁹

³⁸⁶ STC 128/1995, de 26 de julio.

³⁸⁷ Montero Aroca *et al.*, *supra* nota 375, en las págs. 292 – 293.

³⁸⁸ Agustín Jorge Barreiro, Cuadernos de derecho judicial, Nº. 18, pág. 56 (1996).

³⁸⁹ Moreno Catena y Cortés Domínguez, *supra* nota 347, en la pág. 285.

Sobre la relación entre la pena y el riesgo de fuga, nos dice TOMÉ GARCÍA: *“las posibilidades de que una persona encausada trate de sustraerse a la acción de la justicia son directamente proporcionales a la importancia de la pena previsible. A más pena, mayor es la posibilidad.”*³⁹⁰ También, como indica MÁLAGA DIÉGUEZ, el riesgo de fuga puede presumirse: *“a partir de una serie de indicios externos relacionados con la conducta del inculcado y sus circunstancias personales.”*³⁹¹

4.7 Requisitos de tiempo.

El artículo 17.4 de la Constitución Española de 1978 establece que *“por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”*. Este mandato de la Constitución se pone en vigor a través del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho artículo indica que la permanencia del acusado en prisión provisional se extenderá todo el tiempo que sea necesario para alcanzar cualquiera de los fines antes señalados y mientras subsistan los motivos que justificaron su adopción. Pero acto seguido la ley establece unos límites, indicando que no podrá exceder de un año si el delito imputado tiene una pena de cárcel igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena fuera superior a tres años. Sobre el porqué del término de dos años, nos dice DÍAZ MARTÍNEZ:

*“La determinación del límite penológico de los dos años, ha sido establecido atendiendo razones tanto procesales como materiales. Desde el punto de vista procesal, el legislador ha hecho coincidir el mínimo punitivo que permite la adopción de la prisión con el límite a partir del cual no es posible el juicio en ausencia del acusado, estimulando de esta manera, el cumplimiento del principio de que no pueda, como regla general, ser adoptada esta grave medida sin la audiencia previa del imputado.”*³⁹²

³⁹⁰ Tomé García, *supra* nota 337, en la pág. 293.

³⁹¹ Francisco Málaga Diéguez, *El fundamento de la tutela provisional en el proceso penal*, Revista de derecho procesal - Núm. 1-2/2002, octubre 2002, pág. 165.

³⁹² Díaz Martínez, *supra* nota 361, en la pág. 2.

Dicho término máximo podría prorrogarse hasta dos años adicionales si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años, si se prevé que la causa no podrá ser juzgada dentro del término original de prisión provisional. Si el acusado decide recurrir la sentencia dictada, la prisión provisional podría prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia. Sobre la prórroga, el Tribunal Constitucional ha dicho que la misma debe ser solicitada por el Fiscal antes de que transcurra el término original. De ser solicitada la prisión provisional luego de haber transcurrido el plazo original, se consideraría una *“vulneración constitucional de la garantía de la libertad personal”* no subsanable.³⁹³ Otro plazo establecido en el artículo 504 haciendo referencia al 503 es el de un máximo de seis meses de prisión provisional cuando se busca evitar *“la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto”*.³⁹⁴

La ley advierte al acusado que ha sido puesto en libertad por cumplirse los términos máximos de prisión provisional que podría ser puesto nuevamente tras las rejas si incumple con las órdenes del tribunal. Lo mismo debe ocurrir para el que queda en libertad por haber culminado las razones que obligaron a su encierro y desobedece alguna orden del tribunal. El artículo 507 de la ley dispone que cualquier determinación relacionada a la prisión provisional puede ser apelada y gozará de tramitación preferente, estableciendo que tendrá que resolverse en un plazo máximo de 30 días.

Sobre el cumplimiento de estos plazos ha dicho el Tribunal Constitucional:

“El respeto a los plazos legales máximos de prisión provisional constituye una exigencia constitucional, de forma que la superación de dichos plazos supone una limitación desproporcionada del derecho a la libertad, pues el plazo máximo de duración de la prisión provisional que el

³⁹³ STC 40/1987 de 23 de abril.

³⁹⁴ Art. 504, inciso 3 y art. 503, inciso 1.3.º b), Ley de Enjuiciamiento Criminal.

*legislador debe establecer por imperativo constitucional y como garantía de la mediación legislativa es asumido por la propia Constitución como tal plazo máximo, de forma que su ignorancia se traduce por fuerza en una vulneración del derecho fundamental a la libertad, al punto que, aun cuando esos plazos puedan variarse por el legislador, mientras la Ley fije unos es evidente que han de cumplirse y que ese cumplimiento, como se ha dicho, integra la garantía constitucional de la libertad proclamada en el art. 17 de la Constitución.”*³⁹⁵

A pesar de estos términos la prisión provisional puede ser una medida temporal, tan pronto terminen las circunstancias que llevaron a su decreto, el juez puede ordenar la libertad del imputado. Si esas circunstancias terminaron y el acusado o investigado permanece en prisión provisional se les estarían violentando sus derechos constitucionales. Como advierte GIMENO SENDRA *“se puede lesionar su derecho a libertad si el imputado permanece en situación de prisión provisional más allá de un plazo que pueda objetivamente estimarse que excede lo razonable”*.³⁹⁶

Cuando la excepcionalidad que dio pie a la imposición de la medida desaparece el imputado debe quedar en libertad inmediatamente. Así lo ha reiterado el Tribunal Constitucional a través de varias sentencias:

“Por tratarse de una medida excepcional hemos señalado también que el derecho a la libertad se vulnera, no sólo cuando el afectado por ella sigue en prisión más allá del límite máximo absoluto, sino incluso cuando siendo legalmente posible la prórroga o el mantenimiento de la medida, las decisiones judiciales correspondientes no han sido acordadas antes de que se cumpliera el plazo relativo oportuno”.³⁹⁷

³⁹⁵ STC 99 / 2005, 18 de abril.

³⁹⁶ Gimeno Sendra, *supra* nota 340, en la pág. 682.

³⁹⁷ STC 147 / 2000, 29 de mayo.

4.8 Procedimiento.

La prisión provisional es de carácter excepcional por cuanto, específicamente, la ley dispone que “*sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria*”. También es subsidiaria, ya que la primera opción siempre debe ser la de mantener al imputado en libertad mientras se culmina la investigación y mientras se tramita el juicio en su contra y que la prisión provisional es la última a considerar. Sobre este aspecto ha dicho el Tribunal Constitucional:

*“[E]l contenido de privación de libertad, que la prisión provisional comporta, obliga a concebirla, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que, constitucionalmente la justifican y delimitan. Se trata de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso y ese fundamento justificativo traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones de libertad y condiciona, a la vez, su régimen jurídico”.*³⁹⁸

Sólo un juez, a petición de la parte afectada o el Ministerio Fiscal, puede acordar la prisión provisional de un acusado de delito; no lo puede hacer *motu proprio*. Así lo señala el inciso 4 del artículo 505 de la ley, que dispone que: “*El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido.*” Como resalta LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, esta limitación es parte del sistema acusatorio: “[l]a posibilidad de acordar la prisión provisional se encuentra regida por el principio acusatorio, de manera que no puede el juez adoptar de oficio dicha decisión, sino que es preciso que exista una petición de parte en tal sentido.”³⁹⁹

³⁹⁸ STC 128/1995, 26 de julio.

³⁹⁹ Jacobo López Barja de Quiroga, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, tomo I, pág. 1328, (2014).

Para viabilizar la petición de prisión provisional, se llevará a cabo una vista dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención del acusado o a su declaración ante el Juez. En dicha vista, el Ministerio Fiscal o la parte acusadora harán su petición al Juez, justificando su petición dentro de los parámetros constitucionales establecidos para que proceda la prisión provisional. Sobre este punto, SÁNCHEZ BARRIOS destaca que *“lo cierto es que la única parte acusadora constituida en el proceso, en la mayoría de los casos es el Fiscal”*.⁴⁰⁰ El acusado, por su parte, tiene derecho a estar asistido por un abogado elegido por él o designado y podrá defenderse ante la petición de prisión provisional. SÁNCHEZ BARRIOS alerta que podría adoptarse la prisión provisional sin la comparecencia del Fiscal o el imputado, si existiera un riesgo de fuga:

“El órgano jurisdiccional, de todas formas, puede adoptar la prisión provisional, aunque no comparezca el Fiscal o el imputado o su letrado, cuando por ejemplo... existiera riesgo de fuga, sin perjuicio de la necesidad de intentar nuevamente la realización de esta audiencia en el plazo de setenta y dos horas. Si el segundo intento de comparecencia también se frustra debe intentarse de nuevo la comparecencia y podría mantenerse mientras tanto la situación cautelar del imputado”.⁴⁰¹

Para TOMÉ GARCÍA, el límite a la potestad del juez para declarar *motu proprio* la prisión provisional, introducido por la Ley 5/1995, de 22 de mayo del Tribunal de Jurado, *“es un intento del ejecutivo para controlar la decisión de ingresar o no a una persona en prisión provisional”*.⁴⁰² Para LORCA NAVARRETE, esto permite que *“en un acto tan trascendente como es privar de libertad a una persona, esas partes [incluido el fiscal] no sean meras comparsas de la apreciación de oficio por parte del instructor de las circunstancias que determinan la prisión preventiva”*.⁴⁰³

⁴⁰⁰ Sánchez Barrios, *supra* nota 348, en la pág. 6.

⁴⁰¹ *Id.* en las págs. 6 - 7.

⁴⁰² Tomé García, *supra* nota 337, en la pág. 299.

⁴⁰³ Antonio María Lorca Navarrete, *El proceso penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, pág. 126, (Madrid, 1997).

Indica la ley que el Juez antes de adoptarla deberá tomar en consideración las repercusiones que esta pueda tener en el acusado, considerando sus circunstancias y las del hecho delictivo. El Juez tiene que evaluar si el acusado es una persona con una residencia fija, si tiene familia, si está empleado y sus antecedentes penales. Sobre los vínculos familiares y el riesgo de fuga, advierte NAVARRO MASSIP:

*“Obviamente la situación familiar puede conjugar el riesgo de fuga, lo que dependerá esencialmente de la vinculación y de las relaciones familiares concretas que mantiene el imputado con su entorno. La situación familiar ha de ir referida a los vínculos afectivos y, carecer de familia, lo que no siempre depende del propio sujeto imputado, no debe ser considerado como un elemento negativo”.*⁴⁰⁴

De la misma manera debe evaluar la pena que en su momento pudiera ser impuesta. Por otra parte, la ley advierte que no se impondrá la prisión provisional *“cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación”.*

La decisión de ordenar la prisión provisional debe ser proporcional, sólo podrá ser decretada *“cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional”.* Esto quiere decir que mientras haya otras opciones disponibles para garantizar el mismo propósito, la prisión provisional debe descartarse y optarse por la libertad. El Tribunal Constitucional ha señalado que la decisión de prisión provisional debe ser restrictiva y que en caso de dudas se debe recurrir a opciones *“menos restrictivas de la libertad”.*

Por su parte, en cuanto al control de la razonabilidad de la fundamentación, también es reconocido por la jurisprudencia constitucional el carácter excepcional inherente a la prisión provisional,

⁴⁰⁴ Navarro Massip, *supra* nota 365, en la pág. 7.

*por oposición a la libertad como regla general, lo que comporta la primacía del favor libertatis o in dubio pro libertate, formulaciones que vienen a significar que la interpretación y la aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional deben hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, lo cual ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la norma menos restrictiva de la libertad.*⁴⁰⁵

Otras opciones menos restrictivas de la libertad podrían ser la libertad provisional con o sin fianza, con pulsera electrónica o la prisión atenuada en los casos que dispone la ley.

4.9 Efectos de la Prisión Provisional

Tan pronto el juez hace una determinación de prisión provisional el sospecho o acusado se mantendrá privado de su libertad en una institución penal. Como reseña ASENSIO MELLADO, una determinación de prisión provisional “[s]e resuelve en una privación de libertad que se cumple en un establecimiento penitenciario, pero sujeta a un régimen distinto al aplicable a los penados”.⁴⁰⁶ Debido a que una determinación de prisión provisional lacera derechos constitucionales del acusado, el Juez viene obligado a sustentar su determinación. El auto debe contener las razones por las que el acusado debe quedar detenido en espera de juicio. Sobre esto ha dicho el Tribunal Constitucional:

“Es cierto, como hemos afirmado de manera reiterada, que la motivación de las resoluciones judiciales restrictivas de los derechos fundamentales resulta imprescindible para la constatación de la legitimidad constitucional de dicha medida (SSTC 27/1989, 37/1989, 3/1992, 12/1994, 13/1994, 50/1995, 52/1995, 128/1995, etc.), de tal manera que la adopción de una medida de prisión preventiva o de su prolongación mediante una resolución carente de

⁴⁰⁵ STC 91/2018 de 17 de septiembre.

⁴⁰⁶ José María Asencio Mellado, *Derecho Procesal Penal*, pág. 203, (Valencia, 2004).

motivación no sólo supondría la lesión del art. 24.1 C.E., sino también la lesión del derecho fundamental limitado, en este caso la libertad...” ⁴⁰⁷

COBO DEL ROSAL denuncia que, en la práctica, el auto de prisión provisional sólo contiene unas líneas y no es fundamentado correctamente haciéndose *“de forma meramente formularia”*; *“a la medida cautelar de prisión, en demasiadas ocasiones, apenas si se le dedican unas líneas de un auto rayano en el formulario”*. ⁴⁰⁸

Tras una determinación de prisión provisional, el acusado puede apelar la decisión conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este se establece que la apelación se tramitará de manera preferente y obliga a que se resuelva la misma en un plazo máximo de treinta días.

Una determinación de prisión provisional no debe tener ningún efecto sobre el juicio de la persona, ya que se le sigue presumiendo inocente de los delitos imputados. Como ha reiterado el Tribunal Constitucional *“el imputado tiene el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo”*.⁴⁰⁹ Pero sabemos que son mayores los privilegios que disfruta un acusado en libertad que uno encerrado en la prisión. Sobre los efectos de la prisión provisional en el individuo, nos indica COBO DEL ROSAL:

“La reclusión preventiva ejerce una influencia negativa en la mayor parte de los casos, situación que mejora notablemente cuando el recluso pasa a penado. En ello, influyen factores como la falta de separación con los otros penados que ya se encuentran cumpliendo una condena, la incertidumbre por la condena que podrá recaer – lo que provoca un gran desasosiego e impaciencia -, la desidia en el comportamiento diario del preventivo, al no

⁴⁰⁷ STC 158/1996, 15 de octubre.

⁴⁰⁸ COBO DEL ROSAL ET. ALS., *supra* nota 357, en la pág. 441.

⁴⁰⁹ STC 128/1995, 26 de julio.

poder gozar de los beneficios penitenciarios de que gozan los ya penados.”

410

Otros, como BARREIRO y RODRÍGUEZ MAGARIÑOS, destacan que inevitablemente la prisión provisional tendrá un efecto negativo que afectará el proceso en contra del acusado:

*“[A]unque sea de forma inconsciente y encubierta, en aspectos fundamentales de su decisión, tanto en la propia apreciación probatoria como en la cuantificación de la pena, que en no pocos casos acaba determinándose con la mira puesta en los plazos de la prisión preventiva”.*⁴¹¹

*[E]l derecho fundamental a la presunción de inocencia se ve seriamente soliviantado por la prisión provisional, pues, ante una medida cautelar de esa índole, desaparece como garantía nuclear del proceso penal al resultar, de facto, desplazada por la presunción de culpabilidad.*⁴¹²

El preso provisional se mantiene en un régimen distinto al de los convictos, cobijándole unos derechos y unas protecciones mientras se encuentra detenido. La Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, enmienda el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer el tratamiento que se le brindará al acusado mientras subsista la determinación de prisión provisional:

“La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al

⁴¹⁰ Cobo del Rosal, *supra* nota 343, en la pág. 538.

⁴¹¹ Jorge Alberto Barreiro, *La reforma de la prisión provisional: Leyes Orgánicas 13 y 15 de 2003 y la doctrina del Tribunal Constitucional*, en *Revista Jueces para la Democracia*, Nº 51, (Madrid, 2004).

⁴¹² Gudín Rodríguez Magariños, *supra* nota 339, en la pág. 232.

*honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”.*⁴¹³

El preso provisional también tendrá derecho “*a ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten*”.⁴¹⁴ El acusado tiene derecho a tener un abogado, a guardar silencio, a no auto incriminarse y a impugnar la legalidad de su detención.

El Código Penal Español del 23 de noviembre de 1995 provee en su artículo 58 que el tiempo que se mantenga la persona en prisión podrá ser abonado a la sentencia que, en su momento, le sea impuesta de ser declarado culpable.⁴¹⁵

Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de julio de 1985 en sus artículos 294 al 296 provee para que, en caso de que el acusado resulte inocente, pueda existir la posibilidad de reclamarle al Estado por el tiempo que pasó en prisión.⁴¹⁶ Como advierte RAMOS MÉNDEZ, “[t]anpreciado es el valor

⁴¹³ Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

⁴¹⁴ *Id.*

⁴¹⁵ Art. 58 CP: 1. El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad impuesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más de una causa. 2. El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado, previa audiencia del ministerio fiscal. 3. Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar. 4. Las reglas anteriores se aplicarán también respecto de las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.

⁴¹⁶ **Artículo 294 LOPJ:** 1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios. 2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido. 3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.

*de la libertad que Cuando se atenta contra él con una prisión injusta, se ha establecido la responsabilidad patrimonial del Estado.”*⁴¹⁷ *“La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”*. Esta obligación de compensar al que sufre injustamente la prisión provisional, señala DEL SAZ, surge de la Constitución:

*“La Constitución exige que la privación legítima del derecho a la libertad en aras de un interés público prevalente sea debidamente compensada conforme a los criterios comunes a cualquier responsabilidad del Estado. Esto es, la existencia de daño real y efectivo derivado de un sacrificio singular especialmente intenso, que excede de lo que puede considerarse una limitación del derecho, y a cuya producción el individuo no ha colaborado”.*⁴¹⁸

Específicamente, el artículo 121 de la Constitución es el que viabiliza la reclamación al disponer que: *“[l]os daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley.”*

Artículo 295 LOPJ: En ningún caso habrá lugar a la indemnización cuando el error judicial o el anormal funcionamiento de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado.

Artículo 296 LOPJ: 1. Los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos. 2. Si los daños y perjuicios provinieren de dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá exigir, por vía administrativa a través del procedimiento reglamentariamente establecido, al Juez o Magistrado responsable el reembolso de lo pagado sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que éste pudiera incurrir, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. El dolo o culpa grave del Juez o Magistrado se podrá reconocer en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial conforme al procedimiento que éste determine. Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido y la existencia o no de intencionalidad.

⁴¹⁷ Francisco Ramos Méndez, *Enjuiciamiento Criminal*, pág. 341, (Barcelona, 2004).

⁴¹⁸ Silvia Del Saz, *La obligación del Estado de indemnizar los daños ocasionados por la privación de libertad de quien posteriormente no resulta condenado*, en *Revista de Administración Pública*, pág. 61, (Madrid, 2014).

La reclamación podría basarse en los siguientes fundamentos: “i) vulneración del principio de presunción de inocencia del art. 24.2 CE; ii) vulneración del principio de legalidad y de seguridad jurídica de los arts. 17 y 25.1 CE; y iii) vulneración del derecho a ser indemnizado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, reconocido en los arts. 106.2 y 121 CE.”⁴¹⁹ Según DEL SAZ, estas reclamaciones van en aumento:

*“Las reclamaciones de responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de la detención y prisión provisional sufrida por quien posteriormente no resulta condenado han ido creciendo al mismo ritmo que se han fortalecido las garantías del proceso penal, en especial el principio de la presunción de inocencia, y se ha ido definiendo con nitidez el contenido de los derechos fundamentales afectados por las actuaciones penales”.*⁴²⁰

Señala DEL SAZ que “[e]l nacimiento de responsabilidad exige, en primer lugar, que se haya producido la lesión de un derecho que haya ocasionado un daño efectivo”.⁴²¹ Añade Del Saz que el daño “exceda de lo que puede considerarse una limitación del derecho, que debe asumir el individuo como carga derivada de su convivencia en sociedad o, aun tratándose de un sacrificio singular, éste sea de baja intensidad”.⁴²²

Pero, como alerta TOMÉ GARCÍA, hay una excepción a este derecho de indemnización: “no se tiene derecho de indemnización en aquellos casos, los más frecuentes, en que el investigado o encausado, que ha sufrido prisión provisional, es absuelto por insuficiencia de pruebas que acrediten su culpabilidad”.⁴²³ Nos parece que, en este tipo de caso, el acusado también debería tener acceso a reclamar una compensación, pues también es responsabilidad del Estado someter los casos con toda la prueba necesaria. O

⁴¹⁹ STC 8 / 2017, 19 de enero de 2017.

⁴²⁰ Del Saz, *supra* nota 420, en las págs. 56 - 57.

⁴²¹ *Id.* en la pág. 79.

⁴²² Del Saz, *supra* nota 420, en la pág. 79.

⁴²³ TOMÉ GARCÍA, *supra* nota 337, en las págs. 56 - 57.

sea, una reclamación por el funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Actualmente, el Auto del Tribunal Constitucional nº 79/2018, de 17 de julio, contiene el planteamiento de una auto-cuestión o cuestión interna de inconstitucionalidad del art. 294.1 LOPJ respecto de los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa”, por posible oposición a los artículos 17, 14 y 24.2 CE. Cuando se decida esta cuestión tendremos la doctrina constitucional acerca de si se tiene o no derecho a ser indemnizado en cualquier caso en que se ha padecido prisión provisional y después se dicta sentencia absolutoria del acusado.

CAPÍTULO 5.

LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL PUERTORRIQUEÑO EN LA ACTUALIDAD

5.1 Concepto

Puerto Rico no cuenta con la detención preventiva como medida cautelar desde el caso de *Jiménez v. González* de 1950. En este caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que, al quedar abolida la pena de muerte en 1929, ya los jueces no tenían discreción para detener a un acusado de delito capital.⁴²⁴ Esta interpretación ya la había hecho el Tribunal Supremo en 1919 en el caso *Rodríguez Barreal v. Labiosa*, durante la amnistía de la pena de muerte, vigente de noviembre de 1917 hasta abril de 1921.⁴²⁵ Decimos que fue una interpretación del Tribunal Supremo, pues la *Ley para Abolir la Pena de Muerte en Puerto Rico de 1929* nada dispuso sobre la eliminación de la detención como medida cautelar.

Esta interpretación del Tribunal Supremo luego fue adoptada por la Convención Constituyente que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1950 al 1952, a pesar de las recomendaciones dadas por los expertos que le indicaron que debía existir la detención como medida cautelar para aquellos acusados de los delitos que en el pasado se castigaban con la muerte. Los miembros de la Convención Constituyente decidieron que todo acusado en Puerto Rico se le tenía que imponer una fianza, que de poder prestarla, podía quedar en libertad, mientras se dilucida el juicio.⁴²⁶ La detención de acusados sólo quedó como excepción para aquellos acusados que no puedan prestar la fianza impuesta. Esta detención por disposición constitucional no puede exceder de seis meses.

⁴²⁴ *Jiménez v. González*, 71 D.P.R. 118 (1950).

⁴²⁵ *Barreal v. Alcaide*, 27 D.P.R. 46 (1919).

⁴²⁶ Const. E.L.A., Art. II, § 11: “*Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio*”.

5.2 Fundamento

El 3 de julio de 1950 Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley Pública 600 con el fin de que el pueblo de Puerto Rico adoptara su propia Constitución. Así lo estableció el artículo 1 de la citada ley que indicaba:

“Decrétese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, Que, reconociendo ampliamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, se aprueba esta Ley, con el carácter de un convenio, de manera, que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo”.⁴²⁷

Esta ley fue refrendada por el pueblo de Puerto Rico con más del 70% de apoyo. Esto dio pie a que se organizara una Convención Constituyente que redactaría la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para orientar a los miembros de la Convención Constituyente se organizó un grupo de profesores de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, miembros de la facultad de esa institución e investigadores de los Estados Unidos. El grupo de investigadores, dirigido por el entonces director de la Escuela Graduada de Administración Pública, Pedro Muñoz Amato, estuvo compuesto por Karl J. Friedrich, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Harvard y colaborador en la redacción de varias constituciones alrededor del Mundo, A. Cecil Snyder, Francisco Ayala, Jan P. Charmatz, Gordon K. Lewis, Raúl Serrano Geys, Henry Wells, Adolfo Portier Ortiz, Irma García de Serrano, Antonio J. González y Mercedes Portillo Negrón.⁴²⁸

⁴²⁷ Ley Pública 600 del 3 de julio de 1950, art. 1.

⁴²⁸ Sobre la labor realizada por este grupo de expertos el Dr. Austin McDonald, profesor de la Universidad de California dijo: “Los miembros de la facultad de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico estaban muy al tanto de los pasos preliminares que usualmente tomaban en un estado progresista de la Unión Americana antes de abrir la sesión inaugural de una convención constituyente: la colección de otras constituciones y documentos similares para propósitos de comparación y análisis de problemas que tuvieran que requerir la atención de los delegados. Esos pasos preliminares eran especialmente necesarios

El fruto de ese trabajo se recogió en un libro de más de seiscientas páginas titulado: *La Nueva Constitución de Puerto Rico*. Al examinar el libro, llama la atención que los expertos alertaron a los miembros de la Convención Constituyente de los problemas que podría conllevar la adopción de un derecho absoluto a la fianza. Los expertos recomendaron el regreso de la posibilidad de detener a los acusados de delitos que en el pasado podían enfrentar la pena de muerte:

“La disposición que garantiza el derecho a la fianza plantea varios problemas importantes. Hay que considerar en primer lugar si la

en el caso de Puerto Rico por la complejidad inusual de la tarea que estarían enfrentando los delegados.

Así que la Escuela de Administración Pública puso a su equipo a trabajar todo el material de apoyo. Contó con asistencia de otros miembros de la facultad de la Universidad de Puerto Rico e incluso algunos expertos de los Estados Unidos. Todos los investigadores trabajaron como grupo, los reportes eran preparados individualmente o en pequeños grupos y después eran discutidos y revisados por el grupo antes de presentarlos a la convención constituyente. Muchas de las recomendaciones fueron aceptadas por la convención quienes luego expresaron formalmente su agradecimiento a la Escuela de Administración Pública por el buen trabajo realizado.

Las gracias fueron totalmente agradecidas. Los reportes cubrían el rango más amplio de temas: las relaciones entre Puerto Rico y España y las subsecuentes con los Estados Unidos desde 1898 hasta 1951, la Carta de Derechos, el espinoso tema de las enmiendas y con gran detalle la propuesta organización del nuevo gobierno. Los autores proveyeron su completa familiaridad con la jurisprudencia de los Estados Unidos y con la literatura de la ciencia política americana. También ilustraron extensamente sobre la experiencia europea. De hecho, difícilmente ellos pudieron haber hecho un mejor trabajo”.

*“The members of the faculty of the University of Puerto Rico’s School of Public Administration were fully aware of the preliminary steps usually taken in a progressive state of the American Union before the opening session of a constitutional convention – the collection of other constitutions and similar documents for comparative purposes, and the analysis of problems likely to require the attention of the delegates. Such preliminary steps were especially necessary in the case of Puerto Rico, because of the unusual complexity of the task that confronted the delegates. They had to face a whole series of new problems, including the nature and even the name of this “Associated Free State.” So the School of Public Administration put its staff to work preparing the necessary background material. Assistance was provided by other members of the faculty of the University of Puerto Rico, and even by some experts from the United States. All the investigators worked as a group; the reports prepared by individuals of small sections were subsequently discussed and revised by the group before presentations were accepted by the convention, which subsequently expressed its formal thanks to the School of Public Administration for a job well done. The thanks were fully deserved. The reports covered the widest possible range of subjects – the relations of Puerto Rico with Spain, and subsequently with the United States from 1898 to 1951; the bill of rights; the thorny problem of amendment; and, in great detail, the proposed organization of the new government. The authors proved their thorough familiarity with jurisprudence in the United States and with the literature of the American political science. They drew extensively on European experience, also. In fact, they could scarcely have done a better job.” Austin McDonald, *The American Political Science Review*, Vol.49, núm. 3, pág. 888 (1955).*

excepción relativa a crímenes capitales debe eliminarse totalmente o si debe, por el contrario, mantenerse una excepción que cubra delitos tales como rebelión, asesinato o violación, por los cuales se impone la pena de muerte en otras jurisdicciones.

En caso de que se decida conservar la excepción, corresponde determinar si la frase “o la presunción grande” debe o no eliminarse. En Filipinas se decidió eliminarla para evitar el abuso de que se privara a una persona de la libertad bajo fianza por el mero hecho de que se la acusara de uno de los delitos comprendidos en la excepción, aunque no hubiera pruebas suficientes para sostener la acusación”.⁴²⁹

Además, explicaron a los miembros de la Convención Constituyente el origen y propósito de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y su implementación en Puerto Rico a través de la entonces vigente Ley Jones de 1917.

“La Enmienda Octava y la disposición correspondiente en la Ley Orgánica de Puerto Rico tienen un antecedente en la Ley del Parlamento inglés del año 1689, titulada “Ley declarando los derechos y las libertades de los ciudadanos y determinando la sucesión al trono”, en la cual se especificaba que las fianzas y multas no podrían ser excesivas, ni los castigos crueles e inusitados.

Las palabras usadas en la Constitución de los Estados Unidos implican una limitación a la autoridad del Congreso y a la discreción de las cortes de los Estados Unidos que poseen jurisdicción criminal. No es, sin embargo, una limitación expresa a los poderes de los estados, pero algunos jueces han asegurado que la Enmienda Catorce la hace aplicable a los estados.

⁴²⁹ Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, *La Nueva Constitución de Puerto Rico*, pág. 154, (2008).

La disposición constitucional garantiza el derecho a prestar fianza antes del juicio, y es su propósito evitar que se impongan fianzas excesivas, ya que, si se fija una cantidad de dinero demasiado alta, prácticamente impide que la fianza pueda prestarse. No hay que perder de vista que el propósito de las fianzas es asegurar la presencia del acusado en el juicio, y no que esté encarcelado antes de ser convicto.

La cuestión de si una fianza es o no excesiva se deja a discreción del juez, y éste puede basarse en los siguientes criterios: a) la naturaleza del delito; b) el carácter y reputación del individuo; c) las probabilidades de culpa; d) las circunstancias económicas del prisionero; e) la capacidad del acusado para prestar fianza; f) su salud, y g) si está bajo fianza en otros casos.

Estos factores deben pesarse considerando, como se argumentó anteriormente, que la detención del acusado antes del juicio no es lo deseable. Privar a un acusado del derecho a fianza, si lo merece, es como privarle de su libertad sin el debido procedimiento de ley”.⁴³⁰

Como vemos, los asesores en sus recomendaciones a la Convención Constituyente no eliminaron la posibilidad de que se pudiera detener a algunos acusados, aunque eso no era lo “deseable”.

Acorde con estas recomendaciones fueron las primeras propuestas que se presentaron en la Convención Constituyente que permitían el derecho a quedar libertad bajo fianza y dejando abierta la posibilidad de detener a algunos acusados. La primera propuesta fue presentada por el delegado del Partido Popular Democrático⁴³¹ Heraclio Rivera Colón el 25 de septiembre de 1951, y leía como sigue:

⁴³⁰ *La Nueva Constitución de Puerto Rico*, supra nota 244 en la pág. 155.

⁴³¹ Partido político que aboga por la autonomía de Puerto Rico en unión a los Estados Unidos de América. Fundado por Don Luis Muñoz Marín (1898 – 1980) en 1938, fue el partido dominante desde finales de la década de los cuarenta hasta finales de los sesenta. Sus miembros componían la mayoría en la Convención Constituyente que redactó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde 1951 al 1952.

*“Toda persona tendrá derecho a prestar una fianza razonable con suficiente garantía, para permanecer en libertad hasta que se le celebre juicio y sea convicta, excepto en casos de delitos que aparejen reclusión perpetua, en que el tribunal correspondiente podrá concederlo si, a su juicio, los hechos y circunstancias lo justificaren en bien de la justicia”.*⁴³²

El 16 y el 31 de octubre de 1951 la delegación de Partido Estadista⁴³³ en la Convención Constituyente también presentó dos propuestas que ofrecían un derecho a quedar en libertad bajo fianza limitada. La propuesta era similar a la que hubo en Puerto Rico de 1902 a 1929, cuando se le negaba el derecho a quedar en libertad mediante prestación de fianza a acusados de delitos cuya pena contemplaba la muerte cuando la prueba fuera evidente o la presunción suficientemente fuerte. La propuesta era la siguiente:

*“Toda persona podrá, antes de ser convicta, prestar fianza con suficiente garantía, excepto por delitos castigables con prisión perpetua cuando la prueba sea evidente o la presunción suficientemente fuerte”.*⁴³⁴

Alejándose de las recomendaciones dadas por los expertos y de las primeras propuestas, el delegado y presidente de la Comisión de la Carta de Derechos Jaime Benítez presentó el 31 de octubre de 1951 la primera propuesta que incluía un derecho absoluto a la fianza. Su propuesta decía:

“En todos los procesos criminales el acusado disfrutará los derechos de tener un juicio rápido y público, de ser avisado de la

⁴³² Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, *Proposiciones y Resoluciones de la Convención, Constituyente de Puerto Rico 1951-1952*, Proposición Núm. 10, 25 de septiembre de 1951 (1992).

⁴³³ Partido que abogaba por la integración de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos de América. Fue el segundo partido en cuanto al número de miembros en la Convención Constituyente.

⁴³⁴ Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, *Proposiciones y Resoluciones de la Convención, Constituyente de Puerto Rico 1951-1952*, Proposición Núm. 103, 16 de octubre de 1951 (1992).

*naturaleza y causa de la acusación y obtener copia de la misma, de carearse con los testigos de cargo, de obtener la comparecencia compulsoria de los testigos propios, de tener asistencia de abogado, de gozar de la presunción de inocencia. Antes de mediar un fallo condenatorio todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será obligado a inculparse mediante su propio testimonio y una vez absuelto nadie podrá ser juzgado de nuevo por el mismo delito. Nadie será encarcelado por deuda. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. Ni las fianzas ni las multas serán excesivas”.*⁴³⁵

Una propuesta similar contemplando el derecho absoluto a la fianza fue presentada en esa misma fecha por los delegados Cruz Ortiz Stella y Luis Alfredo Colón Velázquez:

*“Toda persona podrá, antes de ser convicta, prestar fianza con suficiente garantía. No se fijarán multas o fianzas excesivas”.*⁴³⁶

Esta última propuesta fue la que se sometió a debate y finalmente prevaleció. La disposición quedó como sigue:

“Antes de mediar un fallo condenatorio, todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será obligado a inculparse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá comentarse en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Nadie será encarcelado por deuda. La detención preventiva no excederá un plazo mayor de seis meses, ni las fianzas ni las multas serán excesivas. Las leyes

⁴³⁵ Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, *Proposiciones y Resoluciones de la Convención, Constituyente de Puerto Rico 1951-1952*, Proposición Núm. 272, 31 de octubre de 1951 (1992).

⁴³⁶ Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, *Proposiciones y Resoluciones de la Convención, Constituyente de Puerto Rico 1951-1952*, Proposición Núm. 295, 31 de octubre de 1951 (1992).

*determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.*⁴³⁷

Los miembros de la Comisión de la Carta de Derechos justificaron la redacción de su propuesta indicando: “[e]sta sección contiene las garantías que protegen al acusado en el derecho común. Se expresan en la forma tradicional para incorporar así el significado jurídico que han adquirido en las interpretaciones judiciales”.⁴³⁸ Sobre el derecho absoluto de todo acusado a que se le imponga una fianza dijeron:

*“[S]e mantiene el derecho de todo acusado a permanecer en libertad bajo fianza y se elimina la excepción de la Carta Orgánica referente a “crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande. La sección 8 que recomendamos anteriormente declara que no existirá la pena de muerte. Además, consideramos que en ningún caso debe encarcelarse a un acusado sin permitírsele prestar fianza”.*⁴³⁹

Como justificación al derecho absoluto a la fianza, Benítez señaló:

“Los derechos diez, once, doce y trece se refieren todos ellos a garantías al ciudadano, a garantías al ciudadano en los procesos judiciales para que esté plena y ampliamente protegido y se le ofrezca aquella otra libertad que el gran director americano, Franklin D. Roosevelt, en otra referencia significaba como la libertad del temor.

Aquí, en estas garantías consignadas, están las protecciones necesarias al ciudadano para que pueda, frente a cualquier situación,

⁴³⁷ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 3 pág. 2569, (2003).

⁴³⁸ *Id.*

⁴³⁹ *Id.* en la pág. 2570.

*frente a cualquier problema, sentirse protegido en toda la amplitud del derecho procesal”.*⁴⁴⁰

Aunque cada Estado de los Estados Unidos puede tener su propia legislación regulando las detenciones y la libertad bajo fianza, las mismas tienen que ajustarse a la norma constitucional. Esto es debido a que como señala LAFAVE: “*la Decimocuarta Enmienda*⁴⁴¹ *de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la cláusula del debido proceso, hace extensiva la disposición de la Octava Enmienda que prohíbe las fianzas excesivas a los Estados*”.⁴⁴² (traducción nuestra)

Al examinar detalladamente las normas constitucionales sobre la fianza y las detenciones en todos los Estados de los Estados Unidos de América, podemos constatar que ninguno provee un derecho absoluto a la libertad bajo fianza. Todos permiten en casos excepcionales la detención preventiva de los acusados. Incluso los Estados que abolieron la pena de muerte mantiene la detención preventiva como parte de su ordenamiento procesal. Esta norma también se extiende a los territorios no incorporados de los Estados Unidos. La única excepción es Puerto Rico.

Los defensores del derecho absoluto a la fianza – que incluye al Tribunal Supremo de Puerto Rico – lo atan al derecho a la presunción de inocencia. En el caso *Pueblo v. Martínez Hernández*, se trata una controversia relacionada a la ejecución de la fianza por violación a las condiciones impuestas al acusado para que pudiera permanecer en libertad y el pago de intereses, una vez ésta es confiscada. Al resolver la controversia, el Tribunal Supremo aprovecha la

⁴⁴⁰ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 2, pág. 1105 (2003).

⁴⁴¹ Enmienda XIV: Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos.

⁴⁴² “*The Eighth Amendment to the United States Constitution, which is also applicable to the states through the Fourteenth Amendment due process clause, provides in part: “Excessive bail shall not be required”.*” Wayne R. LaFave, et al., *Criminal Procedure*, pág. 680 (2009).

oportunidad para discutir la relación entre el derecho a la libertad del acusado mediante el pago de fianza y la presunción de inocencia. Este caso es importante en nuestro análisis porque la presunción de inocencia es uno de los argumentos que se utilizan para defender el derecho absoluto a la fianza.

*“En Puerto Rico, el derecho del imputado a quedar en libertad bajo fianza es de rango constitucional. La sección 11 del Artículo II de la Constitución del E.L.A. consagra el derecho de todo acusado a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, y a que la fianza no sea excesiva. Este derecho a fianza es un modo de implantar la presunción de inocencia, pues sería un contrasentido encarcelar a quien se presume inocente, quien eventualmente puede resultar exonerado de culpa”.*⁴⁴³

Sólo unos pocos, como el profesor Ernesto L. Chiesa, el tratadista de derecho procesal penal más citado en la Isla, difiere totalmente de esta posición y expone que en Puerto Rico esto ha sido sacado fuera de contexto. Nos dice CHIESA:

“En Puerto Rico se habla totalmente fuera de contexto del alcance de la presunción de inocencia como impedimento para eliminar el derecho absoluto del imputado a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio. Pero por más fundamental que sea la garantía de la presunción de inocencia, “[E]sta [la presunción de inocencia] no tiene ninguna aplicación a una determinación en cuanto al derecho de un preso preventivo durante el confinamiento, incluso antes de que su juicio haya comenzado”. (traducción nuestra)⁴⁴⁴ *Como he escrito en otro lugar: La presunción de inocencia es una norma de derecho probatorio sobre obligación de presentar evidencia y obligación de persuadir. Es una norma fundamental. Pero es insuficiente y de poco valor en cuanto a la determinación de los derechos del acusado en la zona de detención preventiva. Iniciada la*

⁴⁴³ *Pueblo v. Martínez Hernández*, 158 D.P.R. 388 (2003).

⁴⁴⁴ “[I]t has no application to a determination of the right of a pretrial detainee during confinement before his trial has even begun.”

acción penal con la determinación judicial de causa probable para el arresto, el Estado tiene razones de mucho peso para tomar medidas que tiendan a asegurar que el imputado no ha de escapar y ha de comparecer a juicio y hasta para tomar medidas de protección social en ciertos casos. La presunción de inocencia está para proteger al acusado en el juicio, pero no será obstáculo para que el Estado limite de alguna manera la libertad del imputado mientras es sometido a juicio. El requisito de tener que prestar fianza es ciertamente una limitación y la presunción de inocencia no es obstáculo. Ciertamente, si la presunción de inocencia se puede invocar para regular la detención preventiva, entonces sería inconstitucional condicionar la libertad antes de convicción a la prestación de una fianza o a satisfacer determinadas condiciones o restricciones. El argumento de quienes invocan la presunción de inocencia como obstáculo para eliminar el derecho a libertad bajo fianza en ciertos casos, prueba demasiado, pues llevado a sus últimas consecuencias impediría la fianza como condición para la libertad. Lo cierto es que en la jurisdicción federal, donde rige una Constitución que garantiza los derechos fundamentales del ciudadano, incluyendo los derechos procesales del imputado de delito, se reconoce el rango constitucional de la presunción de inocencia, sin que ello sea obstáculo alguno para la validez constitucional de excluir el beneficio de libertad bajo fianza para promover la seguridad social, defendiendo al Pueblo de imputados que representan un peligro social si quedan libres en espera del juicio".⁴⁴⁵

Veinte años después de la aprobación de la Constitución se radicó el primero de varios proyectos de ley que han buscado enmendar el derecho absoluto a la fianza y la implantación de la detención como medida cautelar. El primer intento ocurre en 1972 durante la administración del gobernador Rafael Hernández Colón, donde se sometió a la consideración del Senado la Resolución Concurrente Núm. 37, que buscaba reglamentar el derecho a la fianza. Esta medida murió en el trámite legislativo.

⁴⁴⁵ Ernesto L. Chiesa Aponte, *Los derechos de los acusados y la factura más ancha*, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83, págs. 85 - 86 (1996).

El 2 de abril de 1975 se radica Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 47, que buscaba establecer que los acusados de delito grave tendrían derecho a quedar en libertad bajo fianza en aquellos casos en que por ley así se estableciera.⁴⁴⁶ Esta propuesta, que no se convirtió en ley, buscaba que los acusados de delito grave no tuvieran derecho a quedar en libertad bajo fianza, excepto en cuanto a aquellos delitos que mediante ley le fuere así otorgado.⁴⁴⁷ Dos propuestas adicionales se realizaron durante la administración de Hernández Colón en 1975 y 1976 corriendo la misma suerte. Todas las propuestas justificaban la enmienda al derecho absoluto a la fianza utilizando como base – pero sin prueba de su correlación – el aumento en la tasa de criminalidad, y no un problema procesal. Según PADILLA MARTÍNEZ, *“la no aprobación de estas propuestas no fue por una cuestión de índole jurídica, sino política”*.⁴⁴⁸

Durante la siguiente Administración, liderada por Carlos Romero Barceló, se presentaron varios proyectos de ley que pretendieron acabar con el derecho absoluto a la fianza y retornar la detención preventiva como medida cautelar. El 11 de octubre de 1977 se presentó la Resolución Concurrente del Senado Núm. 14, que propuso el siguiente lenguaje para la enmienda constitucional:

“Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto, en los casos de delito grave, cuando dicho delito hubiera alegadamente ocurrido mientras el acusado se encontraba disfrutando de libertad bajo fianza a consecuencia de una acusación anterior de delito grave separada e independiente; o cuando el delito grave que se le impute hubiere alegadamente ocurrido

⁴⁴⁶ Harry N. Padilla, *Propuestas enmiendas constitucionales al derecho a la fianza y las razones por las cuales estas no se materializaron*, 22 Rev. Der. P.R. 3, pág. 8 (1982-1983).

⁴⁴⁷ *Id.*

⁴⁴⁸ Padilla, *supra* nota 448, en la pág. 9.

*dentro de los 5 años después de haber sido convicto por un delito grave anterior; todo ello según se disponga por ley”.*⁴⁴⁹

PADILLA MARTÍNEZ destaca *“que 10 de abril de 1978 se presentó una nueva propuesta a través de la Resolución Concurrente del Senado, la Núm. 23, similar a la anterior pero eliminando la parte sobre la imputación de un nuevo delito dentro de los cinco años siguientes a una previa convicción”.*⁴⁵⁰

Finalmente, en 1979 se aprobó una legislación para llevar a cabo un referéndum donde el pueblo votaría a favor o en contra de una propuesta que enmendaría el derecho absoluto a la fianza y regresaría la detención preventiva como medida cautelar. Se proponía enmendar la sección 11 del artículo II para que leyera de la siguiente forma:

*“Todo acusado de delito menos grave tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. La Asamblea Legislativa dispondrá por ley bajo qué circunstancias los acusados de delito grave no tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza y adoptará las medidas necesarias para reglamentar su concesión”.*⁴⁵¹

Pero el referéndum propuesto para que se llevara a cabo el 6 de abril de 1980 nunca se celebró, porque su ley habilitadora fue impugnada en los tribunales en el caso de *Ortiz Angleró v. Barreto Pérez*, debido a que limitaba la participación de los electores. En su decisión el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que esta se limitaba únicamente a la controversia del cierre del registro electoral y no a la propuesta de enmienda al derecho absoluto a la fianza:

“Lo que hoy resolvemos no menoscaba la facultad de las ramas ejecutiva y legislativa del Gobierno de celebrar el referéndum sobre la

⁴⁴⁹ Padilla, *supra* nota 448, en la pág. 10.

⁴⁵⁰ *Id.*

⁴⁵¹ *La Fianza: Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial*, Revista del Colegio de Abogados, págs. 596 - 679 (1979).

*fianza, sujeto a las normas constitucionales aplicables, dentro de un término razonable entre unas nuevas inscripciones parciales y la nueva fecha que se señale para el referéndum”.*⁴⁵²

En cuanto a la constitucionalidad de esta propuesta, resulta difícil hacer un análisis, pues dejaba al arbitrio de los legisladores, luego de aprobada la propuesta enmienda, determinar las condiciones en las que un acusado de delito grave pudiera haber quedado en libertad bajo fianza. En 1986 se presentó una nueva propuesta, pero tampoco salió del trámite legislativo por encontrar oposición dentro de los miembros de la delegación del partido de gobierno.

En 1994 finalmente se presenta con éxito una nueva propuesta para enmendar la Constitución y llevar a cabo un referéndum. Esta fue la Ley Núm. 49 del 2 de agosto de 1994, conocida como “*Ley Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la Constitución de Puerto Rico de 1994*”, que proponía la celebración de un referéndum el 6 de noviembre de 1994 para que el pueblo decidiera si se enmendaba o no la Sección 11 del Artículo II de la Constitución. Decía de la siguiente manera:

*“Sección 11. - Todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad”.*⁴⁵³

El referéndum se llevó a cabo el 6 de noviembre de 1994, y la propuesta fue derrotada por el 53.5% de los electores. El gobierno estaba tan convencido de que ganaría dicho referéndum que aprobó las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal que hubiesen sido necesarias, habiendo sido eliminado

⁴⁵² Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, pág. 93 (1980).

⁴⁵³ Ley Núm. 49 del 2 de agosto de 1994.

el derecho absoluto a la fianza. No fue hasta el 13 de marzo de 2003 que se aprobó una ley para derogar las frustradas enmiendas.⁴⁵⁴

Opino que, de haberse aprobado estas propuestas, podría haber sido declarada inconstitucional utilizando las normas establecidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, debido a que se estaría denegando automáticamente el derecho a la fianza para algunos acusados de ciertos delitos. Creemos que una propuesta que permita al juez ordenar la detención preventiva en algunos casos a petición del fiscal, como el modelo español, podría sobrepasar la barrera constitucional.

Los antecedentes planteados en la propuesta del 1994 (acusado previamente convicto por delito grave, que se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y que represente una amenaza para la comunidad), podría ser parte del análisis para que se pida la detención preventiva. Pero no podría ser de manera automática. De existir la petición de detención, debería entonces llevarse a cabo una vista donde el Ministerio Público pueda hacer sus planteamientos a favor de la detención y el acusado, acompañado de su abogado, pueda hacer los suyos en contra de la misma.

Pero la derrota de la propuesta del 1994 no se debió a estos cuestionamientos constitucionales. La derrota se produjo porque la propuesta cayó dentro del debate político. El partido de gobierno en aquel momento, Partido Nuevo Progresista, avaló la enmienda, y basó su campaña no en cuestionamientos de tipo procesal o constitucional, sino en que había que enmendar la Constitución porque el derecho absoluto a la fianza propiciaba la criminalidad. Por otra parte, el partido de oposición en aquel momento, el Partido Popular Democrático, se opuso a la enmienda sin tampoco utilizar planteamientos procesales o constitucionales.

⁴⁵⁴ Ley Núm. 85 del 13 de marzo de 2003.

En el 2012 el Gobierno aprobó la Ley 84, de 14 de mayo de 2012, conocida como la “Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda Constitucional sobre la Fianza”, que buscaba nuevamente enmendar la Constitución para derogar el derecho absoluto a la fianza y reinstalar la detención preventiva con un sistema bastante similar al de la Prisión Provisional en España. La Exposición de Motivos de la ley indicaba su intención:

*“... se someterá al Pueblo de Puerto Rico, para su aprobación o rechazo, una propuesta de enmienda a la Constitución de Puerto Rico a fin de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinatos cometidos en medio de un robo en el hogar, en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinatos cometidos al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber...”*⁴⁵⁵

Dicha Exposición de Motivos también indicaba que esta enmienda sería una herramienta poderosa para mantener a los criminales peligrosos “*alejados de nuestras calles*”, y así evitar “*que los criminales cometan delitos, destruyan evidencia que puede ser utilizada en su contra, intimiden potenciales testigos o pongan en riesgo la seguridad de nuestras familias mientras se mantienen en la libre comunidad bajo fianza*”.⁴⁵⁶ La propuesta hacía referencia a la Constitución de 1952, alegando que las circunstancias habían cambiado “*desde ese momento la actividad criminal en nuestra Isla se ha transformado radicalmente*”.

La Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, organización que representa a la mayoría de los acusados de delitos graves, en su ponencia en contra de la aprobación de esta ley, argumentó que, de ser aprobada, “*provocará*

⁴⁵⁵ Ley Núm. 84 de 14 de mayo de 2012.

⁴⁵⁶ *Id.*

*que el sistema jurídico penal puertorriqueño convierta la detención preventiva, disfrazada de un matiz de medida cautelar para garantizar la comparecencia del imputado a los procesos, en una condena anticipada, que viola irreparablemente la presunción de inocencia, derecho expresamente reconocido en la Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico”.*⁴⁵⁷

Creo que esta propuesta pudo haber pasado el escrutinio constitucional porque no negaba automáticamente la fianza a algunos acusados, sino que les otorgaba a los jueces la discreción de denegarla. A la misma vez, reinstalaba la detención preventiva como medida cautelar.

La propuesta se sometió a votación del pueblo de Puerto Rico el 19 de agosto de 2012. Esta fecha resultó muy sospechosa para muchos, ya que era apenas tres meses antes de las Elecciones Generales. Se pensaba que el referéndum se pautó para esa fecha con objeto de darle una victoria al entonces gubernamental Partido Nuevo Progresista. También se creía que el opositor Partido Popular Democrático, como en el 1994, se opondría a la medida, pero no fue así. El Partido Popular adoptó una posición de dejar al albedrío de sus electores por qué opción votar, pero su líder de entonces, Alejandro García Padilla, quien se había expresado en el pasado en contra de la propuesta, decidió apoyarla. El apoyo a la propuesta fue toda una estrategia para evitar una derrota tres meses antes de las elecciones generales para el puesto de gobernador. Finalmente, el referéndum se llevó a cabo en la fecha señalada, y el pueblo derrotó la propuesta de enmienda a la Constitución con 443,369 (55.03%) votos para el "No" y 362,262 (44.97%) votos para el "Sí".⁴⁵⁸

Además de los referéndums para enmendar la Constitución, el Gobierno ha recurrido a la aprobación de leyes para enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal, dirigidas a limitar el derecho absoluto a la fianza y lograr

⁴⁵⁷ Ponencia de la Sociedad para la Asistencia Legal, *Resolución Concurrente del Senado Número 60*, pág. 5 (2012).

⁴⁵⁸ El Nuevo Día, *CEE emite certificación gana el "No" en consulta constitucional*, 19 de agosto de 2012. Tomado de: <https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/ceeemitecertificacionganaelnoenconsultaconstitucional-1326358/>

la detención preventiva de acusado que no puedan prestar la cuantía impuesta o para que no se puedan acoger a las opciones de libertad condicionada.

La primera de estas leyes, de 1974, justificaba la enmienda indicando *“que el derecho a libertad bajo fianza reconocido en la Constitución no se estaba aplicando con la debida consideración a los intereses públicos y privados envueltos”*.⁴⁵⁹ La Exposición de Motivos de la ley alegaba que *“no había normas adecuadas para la fijación de la fianza en forma tal que garantizara sin dudas la comparecencia del acusado ante el Tribunal.”*⁴⁶⁰ También señalaba que *“la falta de un procedimiento uniforme para revisar la cuantía o las condiciones de la fianza habían ocasionado un resultado perjudicial al interés de los acusados y de la sociedad en general”*.⁴⁶¹ Asimismo añadía *“que estas situaciones habían creado desasosiego en la sociedad sin ofrecer las garantías debidas y sin proteger tampoco con adecuacidad los derechos de los imputados”*.⁴⁶² La ley repetía la disposición constitucional que prohíbe la imposición de fianzas excesivas, establecía una serie de requisitos extraconstitucionales que debía considerar el juez a la hora de fijar una cuantía:

“Para la fijación de la cuantía de la fianza se tomarán en consideración las circunstancias relacionadas con la adecuada garantía de la comparecencia del imputado, incluyendo:

- 1. La naturaleza y circunstancias del delito imputado.*
- 2. Los nexos del imputado con la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia, su historial de empleo y sus relaciones familiares.*
- 3. El carácter y condición mental del imputado.*
- 4. Los recursos económicos del imputado.*

⁴⁵⁹ Ley Núm. 139 de 23 de julio de 1974.

⁴⁶⁰ *Id.*

⁴⁶¹ *Id.*

⁴⁶² *Id.*

5. *El historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimientos de órdenes judiciales*”.

La ley también facultaba a los jueces para aumentar o reducir la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo ameritaran. Esa revisión también la podía solicitar cualquiera de las partes envueltas en el pleito. La ley indicaba que, si se solicitaba el aumento de la fianza, se debería indicar cuales serían “*esas nuevas condiciones encaminadas a garantizar la comparecencia del imputado*”.⁴⁶³ La ley también establecía que “*la petición se debía resolver en un plazo de veinticuatro horas a partir del momento en que se hubiera hecho la solicitud, y previa audiencia con la presencia del fiscal y el acusado, si tuvieran a bien comparecer después de haber sido citados*”.⁴⁶⁴ Si la moción fuere solicitando el aumento de la fianza, el magistrado que hubiere de entender en la misma señalará condiciones, incluyendo su citación para notificarle la resolución del tribunal sobre la moción de revisión de la fianza.

El 20 de julio de 1979 se firmó una enmienda a la antes reseñada ley para establecer que una parte que solicita la revisión de la fianza sólo podrá hacerlo “*en el Tribunal Superior correspondiente al distrito judicial con competencia para conocer de la causa*”.⁴⁶⁵ Alegaba la Exposición de Motivos que, tal y como estaba redactada la anterior ley, había dado lugar a que se condujera a la persona imputada “*ante un magistrado de un distrito judicial distinto al que ocurrieron los hechos para que ese magistrado redujera la fianza fijada*”.⁴⁶⁶ Indicaba la nueva ley que esta práctica impedía que el magistrado tuviera los suficientes elementos de juicio para tomar en consideración las circunstancias para la fijación de la cuantía de la fianza. También señalaba que los fiscales “*no contaban con el expediente de la persona para comparecer al tribunal y ser oídos en cuanto a la reducción de la fianza que se solicita*”.⁴⁶⁷ La ley también puso cortapisa al *Hábeas Corpus*, un recurso extraordinario establecido por la Constitución para

⁴⁶³ Ley Núm. 139 de 23 de julio de 1974.

⁴⁶⁴ *Id.*

⁴⁶⁵ Ley Núm. 177 de 20 de julio de 1979.

⁴⁶⁶ *Id.*

⁴⁶⁷ Ley Núm. 177 de 20 de julio de 1979.

liberar a personas encarceladas ilegalmente. La ley estableció que no se podía utilizar el Hábeas Corpus *“para solicitar una rebaja a la cuantía de la fianza, sin antes haberse agotado el procedimiento establecido en la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal”*.⁴⁶⁸

En 1984 se aprueba una nueva enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal para no permitir la prestación de fianza de imputados que se encontraran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Tampoco permitiría la prestación de fianza de acusados que no hubieran sido arrestados o no hubieran comparecido ante un magistrado para ser informado de los delitos que se le imputan.⁴⁶⁹ Ese mismo año se presentó otra ley para limitar el derecho a la libertad bajo fianza de los acusados de delitos *que “no tuvieran derecho a sentencia suspendida que luego de encontrársele culpable aguardaba a que se le impusiera una sentencia”*.⁴⁷⁰ Esta nueva ley buscaba evitar la práctica - según el legislador - *“creciente”*, de que un acusado, a quien se encontró culpable por un delito que no tenía el beneficio de sentencia suspendida, *“evadiera la jurisdicción del tribunal luego de mediar fallo condenatorio pero antes del acto de lectura de sentencia”*.⁴⁷¹ La ley ordenaba que *“se le cancelara la fianza y se ordenara su encarcelamiento hasta tanto se dictara la sentencia”*.⁴⁷² Esta ley creaba una nueva particularidad en cuanto a detención preventiva se refiere, pues si bien es cierto que un acusado convicto que se encuentra en trámites de apelación no tiene un derecho absoluto a quedar en libertad bajo fianza, en este caso estamos hablando de un acusado que aún no ha sido condenado.

Mediante la Ley Núm. 39 del 5 de junio de 1986 se establecen nuevas condiciones a la libertad bajo fianza. Se le da discreción al juez para imponer fianza en casos de acusados por delito menos grave cuando a su juicio *“existan circunstancias de orden o interés público”*.⁴⁷³ Asimismo el juez puede *“en*

⁴⁶⁸ Ley Núm. 177 de 20 de julio de 1979.

⁴⁶⁹ Ley Núm. 5 del 30 de marzo de 1984.

⁴⁷⁰ *Id.*

⁴⁷¹ *Id.*

⁴⁷² *Id.*

⁴⁷³ Ley Núm. 39 del 5 de junio de 1986.

*cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, podrá exigir la prestación de una fianza, o imponer condiciones a cualquier persona que se encontrare en libertad haya o no prestado fianza”.*⁴⁷⁴

La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica de 1989 también contiene unas limitaciones a la libertad bajo fianza, ordenando a los jueces a que tomen en consideración si el acusado *“tiene historial de haber violado órdenes de un tribunal o de una agencia gubernamental”*.⁴⁷⁵ También permite que en este tipo de casos el juez imponga condiciones a la fianza si la persona *“cuenta con un historial de violencia doméstica o un historial de comisión de actos violentos y si la persona representa una amenaza potencial para la víctima del delito o para cualquier persona”*.⁴⁷⁶

La Ley Núm. 30 de 20 de julio de 1989 provee para que el fiscal pueda solicitar al juez la imposición de fianza a acusados de delitos menos graves si lo entiende necesario. También permite que el juez imponga condiciones si entiende que existen circunstancias de orden o interés público. La ley además dispone que el fiscal solicitará la prestación de una fianza o la imposición de condiciones de conformidad en todo caso en que la persona arrestada haya sido convicta anteriormente por cualquier delito grave, o en tres (3) delitos menos graves. También exige la imposición de fianza en casos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por jurado. La ley igualmente provee para que el juez pueda imponer motu proprio, o a solicitud del fiscal, condiciones adicionales a la fianza.

El 6 de diciembre de 1993 se aprueba una nueva ley para enmendar la Regla 6.1 de Procedimiento Criminal, con objeto de *“limitar la discreción del Ministerio Público a la hora de solicitar la imposición de fianza en casos de imputación de ciertos delitos menos graves”*.⁴⁷⁷ En una reveladora Exposición de

⁴⁷⁴ Ley Núm. 39 del 5 de junio de 1986.

⁴⁷⁵ Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989

⁴⁷⁶ *Id.*

⁴⁷⁷ Regla 6.1: Las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo condenatorio. (a) En casos menos graves: En todo caso menos grave en que no hubiere derecho a juicio por jurado, a excepción de los delitos de agresión,

Motivos, el Gobierno admite que parte del grave problema de hacinamiento carcelario y todos los problemas que esto conlleva se debe a la detención preventiva de acusados:

“Hoy día, el hacinamiento carcelario es uno de los mayores problemas que afronta nuestro sistema correccional. Tanto es así, que la imposibilidad de mantener en condiciones adecuadas la enorme cantidad de reclusos en las facilidades correccionales de la Isla, ha motivado el que cientos de éstos hayan sido liberados y se encuentren en la comunidad antes de cumplir sus términos de prisión. No obstante, el problema del hacinamiento no ha sido resuelto y el mismo amerita la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo.

En gran medida, esta situación se agrava con el constante ingreso a las instituciones penales de personas imputadas de delitos menos graves y no violentos, quienes no pueden pagar la fianza impuesta por el magistrado. El costo para el Gobierno por la detención preventiva de imputados de delitos menos graves que no han pagado fianza es inconmensurable, además tiene un efecto directo sobre el hacinamiento carcelario.

agresión agravada en su modalidad de menos grave, privación ilegal de custodia en su modalidad menos grave, acometimiento u opresión por funcionario público, compeler a acto propio de su cargo, intrusión en la tranquilidad personal, entrada en heredad ajena, entrada ilegal, usurpación, daños, restricción de libertad, amenazas, duelo, alteración a la paz, alarma falsa, nuevo arresto o encarcelamiento de persona excarcelada, justicia por sí mismo, perversión de menores, fuga en su modalidad de menos grave, escalamiento, posesión de herramientas para escalar, posesión ilegal de explosivos y delitos menos graves de carácter violento, tipificados en leyes especiales, no será necesaria la prestación de fianza para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. Se considerarán de carácter violento, cualesquiera delitos cuya comisión envuelva el uso, intento de uso o la amenaza de uso de fuerza física contra la persona o contra la propiedad. En el caso de los delitos menos graves exceptuados, el magistrado deberá imponer fianza, sólo si el fiscal así lo solicita, tomando en consideración los criterios que establece la Regla 218(b). En todo caso en que motu proprio, o a solicitud del ministerio fiscal, el magistrado determine que existen circunstancias de orden o interés público podrá imponer condiciones de conformidad a la Regla 218(c). El fiscal solicitará la prestación de una fianza o la imposición de condiciones de conformidad con la Regla 218 en todo caso en que la persona arrestada haya sido convicta anteriormente por cualquier delito grave, o en tres (3) delitos menos graves, o cuando se trate de un domiciliado en Puerto Rico.

La Regla 6.1(a), de las de Procedimiento Criminal vigente, dispone que en casos de delitos menos graves no es necesario fijar fianza, por lo que el tribunal sólo puede imponerla a solicitud del fiscal. Por ello, esta Asamblea Legislativa considera necesaria la presente enmienda, a los efectos de limitar la discreción del fiscal para solicitar la imposición de fianza en los casos menos graves que no conlleven juicio por jurado, ni estén comprometidos dentro de los delitos menos graves que la propia Regla 6.1(a) enumera”.⁴⁷⁸

La ley también provee para la imposición de fianza “para ciertos y determinados delitos menos graves siempre y cuando el ministerio público lo solicite, lo que implica que no es discrecional por parte del magistrado la imposición o no de la fianza”.⁴⁷⁹ Entre estos delitos están “los delitos de carácter violento, entendiéndose por esto cualesquiera delitos menos graves tipificados en el Código Penal de Puerto Rico o en leyes especiales, cuya comisión envuelva el uso, intento de uso o la amenaza de uso de fuerza física contra la persona o contra la propiedad”.⁴⁸⁰ “Estos, en protección del interés y seguridad pública, deben mantenerse sujetos a la solicitud de imposición de fianza por el Ministerio Público”.⁴⁸¹

El 12 de agosto de 1995 se crea mediante ley la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Señala la ley que esta agencia “tendría como propósito suministrar información verificada a los tribunales al momento de fijar o modificar la fianza o las condiciones que mejor puedan asegurar la presencia del imputado en las diversas etapas del juicio, velar por la seguridad pública y el derecho del acusado a obtener su libertad provisional”.⁴⁸² El procedimiento a seguir por esta agencia para preparar su informe y emitir sus recomendaciones a los jueces sería el siguiente:

⁴⁷⁸ Ley Núm. 105 de 6 de diciembre de 1993.

⁴⁷⁹ *Id.*

⁴⁸⁰ *Id.*

⁴⁸¹ *Id.*

⁴⁸² Ley Núm. 177 del 12 de agosto de 1995.

“La Oficina tendrá la tarea de investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos y ofrecer sus recomendaciones en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional del imputado, en la alternativa o adicionalmente a la imposición de fianza. A estos efectos la Oficina preparará un informe a ser presentado a los tribunales en la vista para la imposición de la fianza. Los jueces tendrán ante sí información confiable que los ayude a imponer o no una fianza o condiciones en sustitución o además de la fianza, que se ajusten a las circunstancias particulares de cada caso.

*En el ejercicio de su discreción, tras evaluar el informe presentado por la oficina, el juez podrá imponer o modificar una fianza monetaria o conceder la libertad provisional, en la alternativa o adicionalmente a la fianza, sujeto a condiciones que garanticen la presencia del acusado en las diversas etapas del proceso criminal. Todo aquel imputado a quien se le conceda libertad provisional sujeto a condiciones, con o sin fianza, será supervisado por la Oficina hasta la emisión de un fallo o veredicto o hasta que termine el proceso. La creación de la Oficina propiciará la eliminación de los efectos de la desigualdad económica en la obtención de la libertad provisional y reducirá el uso innecesario de las escasas y costosas facilidades correccionales. La participación en los programas de la Oficina será estrictamente voluntaria y el derecho a la libertad provisional mediante la prestación de una fianza permanecerá intacto”.*⁴⁸³

Los beneficios de esta ley excluían a los acusados de lo que denominaba en la misma como *“delito peligroso”*. Estos eran: asesinato, mutilación, lanzar ácido a una persona, violación, secuestro, robo en todas sus modalidades, incendio agravado, y estragos.

El 11 de diciembre de 1995 el Gobierno vuelve a aprobar una ley para *“limitar la discreción de los fiscales a la hora de solicitar la imposición de fianza*

⁴⁸³ Ley Núm. 177 del 12 de agosto de 1995.

en casos menos graves que no conlleven juicio por jurado".⁴⁸⁴ Al leer su Exposición de Motivos, vemos que el Gobierno vuelve admitir un serio problema de hacinamiento carcelario, que se agrava con la detención preventiva de acusados que no pueden prestar la fianza impuesta:

"Hoy día, el hacinamiento carcelario es uno de los mayores problemas que afronta nuestro sistema correccional. Tanto es así, que la imposibilidad de mantener en condiciones adecuadas la enorme cantidad de reclusos en las facilidades correccionales de la Isla, ha motivado el que cientos de éstos hayan sido liberados y se encuentren en la comunidad antes de cumplir sus términos de prisión. No obstante, el problema del hacinamiento no ha sido resuelto y el mismo amerita la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo.

En gran medida, esta situación se agrava con el constante ingreso a las instituciones penales de personas imputadas de delitos menos graves y no violentos, quienes no pueden pagar la fianza impuesta por el magistrado. El costo para el Gobierno por la detención preventiva de imputados de delitos menos graves que no han pagado fianza es

⁴⁸⁴ Regla 6.1, Fianza hasta que se dicte sentencia, cuando se exigirá: Las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo condenatorio. (a) En casos menos graves.-En todo caso menos grave en que no hubiere derecho a juicio por jurado, a excepción de los delitos de agresión, agresión agravada en su modalidad de menos grave, privación ilegal de custodia en su modalidad menos grave, acometimiento u opresión por funcionario público, compeler a acto propio de su cargo, intrusión en la tranquilidad personal, entrada en heredad ajena, entrada ilegal, usurpación, daños, restricción de libertad, amenazas, duelo, alteración a la paz, alarma falsa, nuevo arresto o encarcelamiento de persona excarcelada, justicia por sí mismo, perversión de menores, fuga en su modalidad de menos grave, escalamiento, posesión de herramientas para escalar, posesión ilegal de explosivos y delitos menos graves de carácter violento, tipificados en leyes especiales, no será necesaria la prestación de fianza para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. Se considerarán de carácter violento, cualesquiera delitos cuya comisión envuelva el uso, intento de uso o la amenaza de uso de fuerza física contra la persona o contra la propiedad. En el caso de los delitos menos graves exceptuados, el magistrado deberá imponer fianza, sólo si el fiscal así lo solicita, tomando en consideración los criterios que establece la Regla 218(b). En todo caso en que motu proprio, o a solicitud del ministerio fiscal, el magistrado determine que existen circunstancias de orden o interés público podrá imponer condiciones de conformidad a la Regla 218(c). El fiscal solicitará la prestación de una fianza o la imposición de condiciones de conformidad con la Regla 218 en todo caso en que la persona arrestada haya sido convicta anteriormente por cualquier delito grave, o en tres (3) delitos menos graves, o cuando se trate de un no domiciliado en Puerto Rico.

inconmensurable, además tiene un efecto directo sobre el hacinamiento carcelario".⁴⁸⁵

El 24 diciembre de 1995 se enmiendan nuevamente las Reglas de Procedimiento Criminal para atemperarla con las nuevas disposiciones de la entonces recién creada Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.⁴⁸⁶ El 4 de agosto de 1997 se enmienda la ley que crea la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para hacer *"compulsorio que todo imputado de delito que conlleve fianza se someta a su jurisdicción"*.⁴⁸⁷ De esta manera se elimina la excepción de los *"delitos peligrosos"*.

El 3 de junio de 2004 se enmienda nuevamente la ley creadora de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio para disponer que *"toda persona a quien se le impute un delito que conlleve fianza deberá someterse a su jurisdicción"*.⁴⁸⁸ La ley también enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal para obligar al tribunal a *"considerar la evaluación, informe y recomendaciones de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio antes de hacer una determinación sobre fianza, fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento o libertad bajo custodia de tercero"*.⁴⁸⁹ También indica que *"deberá considerar el informe a la hora de fijar el monto de la fianza"*.⁴⁹⁰

El 3 de junio de 2004 el Gobierno de Puerto Rico vuelve a enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal para añadir *"medidas cautelares adicionales para los acusados a los que se le imponga una fianza y puedan prestarla"*.⁴⁹¹ Alegaba el Gobierno que, con esta enmienda, *"cumplía con la naturaleza constitucional del derecho a la fianza, pero salvaguardando el interés y la*

⁴⁸⁵ Ley Núm. 230 del 11 diciembre de 1995.

⁴⁸⁶ Ley Núm. 245 del 24 diciembre de 1995.

⁴⁸⁷ Ley Núm. 58 del 4 de agosto de 1997

⁴⁸⁸ Ley Núm. 133 del 3 de junio de 2004.

⁴⁸⁹ *Id.* en el art. 5.

⁴⁹⁰ *Id.* en el art. 6.

⁴⁹¹ Ley Núm. 134 del 3 de junio de 2004.

protección comunitaria".⁴⁹² La ley estableció el requisito de "*supervisión electrónica, como condición a la fianza a personas imputadas por asesinato, violación, secuestro, violencia doméstica, delitos que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos graves en los cuales se utilice un arma*".⁴⁹³ Asimismo, dispuso que el acusado que queda en libertad bajo fianza "*debía evitar todo contacto con la víctima del crimen o los testigos potenciales, y no podría poseer armas de fuego o mortíferas*".⁴⁹⁴ Tampoco podría consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas.

Además, la ley establece el elemento de peligrosidad como uno de los factores a considerar al momento de fijar la cuantía de la fianza. También añade otros elementos a tener en cuenta como el carácter, la peligrosidad y la condición mental del imputado. Incluso incorpora un elemento subjetivo a la evaluación, al establecer que el juez puede utilizar "*cualquier otra información que le merezca crédito y que sea pertinente al asunto*".⁴⁹⁵ La ley también dispone que la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio será obligatoria, esto es, "*que todo acusado de delito grave se tiene que someter a su evaluación y el juez contará con su informe a la hora de determinar la medida cautelar*".⁴⁹⁶

El 22 de diciembre de 2009 se firma una nueva ley que enmienda una vez más las reglas 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal para limitar el derecho a quedar en libertad bajo fianza y a nuestro juicio propiciar la detención.⁴⁹⁷ En su Exposición de Motivos, la ley hace un recuento sobre el historial del derecho a la fianza en Puerto Rico, destacando que es uno absoluto y que, a diferencia de la disposición constitucional federal de los Estados Unidos, no se puede legislar para detener sin fianza. Para justificar su acción, los legisladores indican que, aunque carecen de capacidad para legislar a los efectos de autorizar la detención preventiva sin derecho a fianza, sí pueden regularla y hasta imponer condiciones

⁴⁹² Ley Núm. 134 del 3 de junio de 2004.

⁴⁹³ *Id.*

⁴⁹⁴ *Id.*

⁴⁹⁵ *Id.*

⁴⁹⁶ *Id.* en los arts. 1 - 2.

⁴⁹⁷ Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009.

a la misma. Justifica la Asamblea Legislativa su acción alegando que con ella se protege tanto al individuo como a la sociedad.

No obstante, la Asamblea Legislativa se propone enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal a fin de establecer condiciones más restrictivas a la fianza que un juzgador vaya a imponer a personas imputadas de ciertos delitos graves o de carácter violento. Ello es debido *“al peligro que representa el aumento en la incidencia criminal para nuestros ciudadanos, particularmente los delitos cometidos por individuos que se encontraban bajo fianza al momento de delinquir”*.⁴⁹⁸

Para sustentar su alegación, la Asamblea Legislativa hace un listado de acusados que han cometido delito estando en libertad bajo fianza. Comienza destacando los acusados que estaban en libertad bajo los beneficios que les brinda la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio que fueron arrestados nuevamente:

“Igualmente, alarmante resulta la situación de personas que, siendo imputadas de delito, han infringido nuevamente alguna disposición penal mientras disfrutaban de la libertad bajo fianza. De acuerdo a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), en el 2009 dicha Oficina tiene bajo su supervisión a un total de cinco mil setecientos veintiocho (5.728) imputados de delito, de los cuales doscientos ochenta y seis (286) han vuelto a delinquir estando bajo los servicios de dicha oficina”.⁴⁹⁹

Si sacamos el porcentaje de acusados bajo el amparo de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio que volvió a ser acusada, podemos ver que no llegó al 5%. Luego los legisladores exponen la información provista por la Fiscalía sobre las personas que han sido arrestadas mientras se encontraban bajo fianza. A diferencia de los números brindados de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, los legisladores no exponen el total de personas que se

⁴⁹⁸ Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009.

⁴⁹⁹ *Id.*

encontraban en libertad bajo fianza. Sólo destacan los que fueron arrestados mientras se encontraban bajo fianza.

“Conforme a la información suministrada, en el 2008 y el 2009, se han reportado ciento ochenta y ocho (188) casos de este tipo. Esta cifra se distribuye entre las siguientes fiscalías: Aguadilla: 17 casos; Aibonito: 30 casos; Arecibo: 6 casos; Caguas: 1 caso; Fajardo: 25 casos; Guayama: 18 casos; Humacao: 57 casos; Ponce: 3 casos; Utuado: 6 casos; Mayagüez: 25 casos; Carolina: 1 caso”.⁵⁰⁰

Si tomamos estos números y los analizamos con el total de acusados que se encontraban en libertad tras haber prestado la fianza impuesta entre el 2008 y el 2009, podremos ver que sólo una ínfima minoría volvió a ser acusado. Esto contrasta con la alegación de los legisladores de que la situación de personas bajo fianza que eran arrestadas nuevamente era *“alarmante”*.

Utilizando estos datos, la Legislatura justificó enmendar la ley para establecer condiciones más estrictas al derecho a la fianza. En su análisis, la Legislatura también realiza un análisis acomodaticio del caso de *Salerno* para justificar las condiciones restrictivas del derecho a la fianza. Estas condiciones llevan a los jueces a imponer fianzas altas que los acusados no pueden prestar:

“En el caso United States v. Salerno, 481 U.S. 739, 748 (1987), el Tribunal Supremo Federal advirtió que: “El interés regulatorio del gobierno en la seguridad de la comunidad puede, en circunstancias apropiadas, superar el interés de libertad de un individuo.”⁵⁰¹ En el citado caso, el Tribunal Supremo Federal validó la privación de libertad del imputado a base de su peligrosidad social, pero tomando en cuenta todas las salvaguardas procesales dispuestas en el estatuto federal conocido como el Bail Reform Act, 18 U.S.C. §§ 3141 et seq.

⁵⁰⁰ Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009.

⁵⁰¹ *“The Government’s regulatory interest in community safety can, in appropriate circumstances, outweigh an individual’s liberty interest”.*

Sobre el particular, dicho foro señaló: “Cuando el gobierno demuestra con pruebas claras y convincentes que un arrestado presenta una amenaza identificada y articulable para un individuo o a la comunidad, creemos que, de acuerdo con la Cláusula de Debido Proceso, un tribunal puede impedir que el arrestado ejecute esa amenaza. Bajo estas circunstancias, no podemos afirmar categóricamente que la detención preventiva “ofende algún principio de justicia tan arraigado en las tradiciones y la conciencia de nuestro pueblo como para ser clasificado como fundamental...”⁵⁰² (traducción nuestra) De esta manera, el Tribunal Supremo Federal resolvió que la disposición del Bail Reform Act que faculta al tribunal a privar a un imputado del derecho a fianza en ciertas circunstancias no viola, de su faz, la cláusula contra fianzas excesivas ni el debido proceso de ley. Ahora bien, el Tribunal Supremo indicó que las medidas de restricción a la libertad antes de convicción requieren que se guarde la debida proporción con el interés social apremiante de protección perseguido por el gobierno”.⁵⁰³

Como se ve, el Gobierno trata de utilizar el caso de *Salerno* para justificar la imposición de condiciones cuyo objetivo es la detención del acusado. En *Salerno*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que justifica es la utilización de la detención como medida cautelar, no la utilización de trabas que llevan al magistrado a imponer fianzas altas para negar el derecho a la fianza en un Estado que dice tener un derecho absoluto a la fianza. Y la Asamblea Legislativa extrapola la justificación de *Salerno* para justificar la imposición de mayores restricciones al derecho a la libertad bajo fianza: “conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en *Salerno*, si el elemento de peligrosidad es constitucionalmente válido para privar a ciertos imputados del derecho a fianza, también debe serlo para simplemente imponer condiciones

⁵⁰² “[W]hen the Government proves by clear and convincing evidence that an arrestee presents an identified and articulable threat to an individual or the community, we believe that, consistent with the Due Process Clause, a court may disable the arrestee from executing that threat. Under these circumstances, we cannot categorically state that pretrial detention “offends some principle of justice so rooted in the traditions and conscience of our people as to be ranked as fundamental...”

⁵⁰³ Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009.

más estrictas a dicho derecho”. Asimismo, utiliza el criterio de “protección de seguridad social” que se utiliza en *Salerno* para justificar la detención para validar el uso de restricciones al derecho a la fianza:

*“Toda vez que, en Puerto Rico, distinto a la jurisdicción federal, existe un derecho constitucional absoluto a la fianza, la norma de Salerno puede utilizarse únicamente para apoyar la imposición de mayores restricciones al referido derecho. Por tanto, a la luz de lo resuelto en Salerno, esta Asamblea Legislativa invoca el criterio de protección de seguridad social para establecer mayores restricciones a este derecho, ello sobre la base de la peligrosidad del imputado y la gravedad del delito imputado, sobre todo cuando se trata de conducta de violencia física que ponga en peligro la vida o la integridad corporal de los ciudadanos, o que de otra manera constituya un grave peligro para la seguridad de terceros o de la sociedad”.*⁵⁰⁴

Las nuevas condiciones que estableció esta nueva ley fueron: 1) que no se le imponga al imputado una fianza con el beneficio del pago del diez por ciento (10%) en efectivo; 2) que sea mandatorio que el imputado se someta al monitoreo electrónico mediante grillete; y 3) prohibir que la fianza se satisfaga mediante compañía fiadora. Las condiciones uno y dos lo que buscan es la imputación de fianzas excesivas que lleven al acusado a la detención preventiva. Opinamos que estas restricciones vulneran las disposiciones sobre la fianza de la Constitución de Puerto Rico y de la prohibición de fianzas excesivas de la Constitución de los Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno alega que estas condiciones no infringen el mandato constitucional sobre el derecho a la fianza, porque no lo eliminan. También alega el Gobierno que estas enmiendas ni regulan ni fijan cuál deberá ser la cuantía a imponerse, a pesar de eliminarles el beneficio del pago del diez por ciento (10%).

Sobre el grillete electrónico es importante destacar que el mismo requiere que el acusado tenga un teléfono de línea en su casa para poder monitorearlo.

⁵⁰⁴ Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009.

Esto representa un problema y un gasto para el acusado, ya que en la actualidad pocas personas, especialmente los jóvenes, cuentan con un teléfono de línea en sus hogares, por disponer ya de un teléfono móvil. Según la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico, sólo un 19% (783.739) de la población cuenta con una línea de teléfono alámbrica, mientras que un 81% (3.389.402) cuenta con una línea inalámbrica.⁵⁰⁵

Previendo tal vez impugnaciones a la ley por estar dirigida a la imposición de fianzas excesivas, el Gobierno se adelanta y cita varios casos que han llegado a varios tribunales apelativos a nivel federal que justifican que la imposición de una fianza que el acusado no pueda prestar no la hace de por sí inconstitucional.

La Constitución de Puerto Rico sólo garantiza que todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, y que dicha fianza no será excesiva. Si la cuantía y las condiciones de una fianza son impuestas a base de criterios constitucionalmente válidos y conforme al debido proceso de ley, *“no puede sostenerse que una fianza es inconstitucional sólo porque el imputado no puede prestarla por razón de falta de recursos”*. Sobre el particular, en el caso *Hodgdon v. United States*, el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito concluyó:

*“[L]a fianza no es excesiva simplemente porque el acusado no puede pagarla.”*⁵⁰⁶ (traducción nuestra).

Por otra parte, en el caso *White v. United States*, el mismo foro expuso lo siguiente: *“[E]l propósito de la fianza no puede cumplirse en todos los casos solo acomodándose al bolsillo del acusado y a su deseo de ser libre en espera de una posible condena”*.⁵⁰⁷ (traducción nuestra).

⁵⁰⁵ Informe Trimestral, Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico, (2017). http://www.jrtp.r.pr.gov/estadisticas/TRIMESTRAL01_ESTADISTICAS_2017.pdf

⁵⁰⁶ *“Thus, bail is not excessive merely because the defendant is unable to pay it.”* *Hodgdon v. United States*, 365 F.2d 679, pág. 687 (8vo Cir.1966).

⁵⁰⁷ *“The purpose for bail cannot in all instances be served by only accommodating the defendant's pocketbook and his desire to be free pending possible conviction.”* *White v. United States*, 330 F.2d 811, pág. 814 (8vo Cir. 1964).

Estas dos sentencias de tribunales apelativos no obligan al foro estatal, sólo podrían servir como persuasivas. Pero si leemos el caso de *Hodgdon v. United States* nos percatamos que se trataba de una fianza de \$50.000.00 por dos cargos por uso violento de un arma de fuego y que el tribunal la consideró alta, aunque no al punto de considerarla excesiva.

*“La fianza fue grande, pero considerando la "naturaleza y circunstancias de la ofensa acusada" y "el carácter del acusado", no creemos que sea excesiva”.*⁵⁰⁸ (traducción nuestra).

No sabemos si esa determinación se pudo haber sostenido si la apelación hubiese llegado ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero si traemos a valor presente la fianza impuesta de \$50.000.00 en 1966 sería de \$387.616.35 en el 2018. En cuanto al otro caso citado por el gobierno *White v. United States*, se trató de una fianza de \$5.000.00 en 1964 que llevado a valor presente totalizarían \$39.890.61.

En resumen, nos parece que estas enmiendas a las reglas 6.1 y 218 de Procedimiento Criminal del 22 de diciembre de 2009 no fueron hechas “a base de criterios constitucionalmente válidos y conforme al debido proceso de ley” y sí como subterfugio para lograr la detención preventiva de acusados, pasando por encima el derecho absoluto a la fianza que impone la Constitución de Puerto Rico. El efecto de la aprobación de estas enmiendas los podemos ver en el porcentaje de detenidos que aumenta alrededor de un 10% en comparación con los años anteriores.

El 27 de diciembre de 2011, una vez más, las Reglas de Procedimiento Criminal fueron enmendadas, esta vez para revisar la lista de delitos⁵⁰⁹ en los

⁵⁰⁸ *“The bail was large, but considering the "nature and circumstances of the offense charged," and "the character of the defendant," we do not believe it was excessive.” Hodgdon v. United States*, 365 F.2d 679, pág. 687 (8vo Cir.1966).

⁵⁰⁹ Los delitos son: asesinato; secuestro, secuestro agravado, secuestro de menores; robo agravado; incendio agravado; utilización de un menor para pornografía infantil; envenenamiento intencional de aguas de uso público; agresión sexual; maltrato intencional de menores según dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 177-1995, según enmendada o su análoga en una ley

que será obligatoria la supervisión electrónica en adición a la prestación de la fianza.⁵¹⁰ A los acusados de estos delitos, entre los que se encuentran: asesinato, secuestros, robo agravado, incendio agravado, pornografía infantil y grandes transacciones de drogas, no se les brindará el beneficio de prestar sólo el 10% de la fianza impuesta. Tampoco se les podrá diferir de la prestación de la fianza. Ese mismo día también se enmienda la ley orgánica de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, para que los acusados que se benefician de su programa de libertad bajo fianza costeen parte de los gastos administrativos relacionados con la supervisión electrónica.⁵¹¹ La ley dispone que en caso de que el acusado resulte inocente de los cargos se le devuelva el dinero pagado por su supervisión electrónica.

El 24 de junio de 2012 se enmiendan otra vez las Reglas de Procedimiento Criminal para imponer mayores restricciones a los acusados de ciertos delitos⁵¹² y para aquellos que, encontrándose en libertad bajo fianza, vuelve a ser acusados de delito.⁵¹³ Las condiciones que se les impondrán a estos acusados, además de la fianza, son:

posterior; Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa Criminal Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los siguientes Artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el 5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre Comercio de armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5.10 sobre Remoción o Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; violaciones a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, que impliquen grave daño corporal y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma, según ésta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”. Ley Núm. 281 del 27 de diciembre de 2011, art. 6, inciso (a).

⁵¹⁰ Ley Núm. 281 del 27 de diciembre de 2011.

⁵¹¹ Ley Núm. 282 del 27 de diciembre de 2011.

⁵¹² “Asesinato en todas sus modalidades, robo de vehículo de motor a mano armada, robo agravado, secuestro agravado y secuestro de menores, agresión sexual y violación a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” que implique grave daño corporal”. Artículo 2, Ley Núm. 123 de 24 de junio de 2012.

⁵¹³ Ley Núm. 123 del 24 de junio de 2012.

1. *“Comparecer o reportarse junto al tercer custodio en todos los procesos judiciales y todos los procedimientos ante un oficial de supervisión y seguimiento de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio en la forma en que se disponga por reglamento.*
2. *Permanecer en su domicilio en un horario restrictivo desde las seis de la tarde (6:00 PM) hasta las seis de la mañana (6:00 AM); excepto en los casos en que el Tribunal expresamente lo autorice por razones de trabajo, estudio, tratamiento médico, viaje justificado o cualquier razón meritoria.*
3. *Realizarse pruebas de dopaje de sustancias controladas o drogas periódicamente según se disponga por Reglamento a esos efectos.*
4. *De ser necesario el acusado deberá someterse a cualquier tratamiento médico y/o psiquiátrico, incluyendo tratamiento para evitar la dependencia de alcohol o drogas.*
5. *Entregar al Tribunal o la persona encargada el pasaporte.*
6. *Hacer las gestiones necesarias para la obtención de un empleo o matricularse en alguna institución educativa”.*⁵¹⁴

Como en ocasiones anteriores, la Asamblea Legislativa comienza la Exposición de Motivos de la ley citando la sección 11 del artículo II de la Constitución, que establece que todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. Pero acto seguido destaca una vez más que ellos tienen el poder de regularla. De nuevo extrapola las consideraciones que se han establecido en los Estados Unidos para la detención preventiva como medida cautelar, para justificar con ellas las restricciones propuestas a la libertad bajo fianza:

“Originalmente, su único propósito era garantizar la comparecencia del imputado a las órdenes, citaciones y procedimientos del Tribunal, incluyendo la vista preliminar, el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia. La fianza no se fija con el propósito de castigar a la persona

⁵¹⁴ Ley Núm. 123 del 24 de junio de 2012, en el art. 1.

acusada, sino para asegurar su presencia ante el Tribunal cuando así se le requiera.

No obstante, hace varias décadas se estableció que la fianza también sirve otros propósitos igualmente importantes: proteger a la víctima, a posibles testigos, a la comunidad y otra evidencia que exista en contra del imputado, tomando en consideración todos los elementos pertinentes, incluyendo la peligrosidad del imputado”.⁵¹⁵

Nuevamente presentan el número de acusados que se encontraban en libertad bajo los beneficios de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio que fueron vueltos a acusar, para dar la impresión de que es un problema de gran magnitud, ya que no indican el número de los que no fueron acusados y cumplieron con las condiciones:

“Según las estadísticas de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), para el 2009, 335 imputados de delitos graves que se encontraban bajo su supervisión cometieron nuevos delitos o infringieron nuevamente alguna disposición penal mientras disfrutaban de la libertad bajo fianza. Dicha cifra fue de 294 en el 2010 y de 234 en el 2011, respectivamente. Lo anterior revela, sin duda, que durante los pasados 3 años más de 800 imputados de delito grave que quedaron en libertad bajo fianza violentaron algunas de las condiciones para su libertad o delinquieron nuevamente, afectando la paz y la seguridad de nuestra población”.⁵¹⁶

Para que tengamos una idea: de 1996 al 2003 la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio tuvo 20.184 acusados bajo su jurisdicción.⁵¹⁷ De estos, sólo 1.439, o sea, el 7% de los acusados, fue acusado nuevamente por delitos alegadamente cometidos mientras se encontraba en libertad bajo la supervisión

⁵¹⁵ Ley Núm. 123 del 24 de junio de 2012.

⁵¹⁶ *Id.*

⁵¹⁷ Datos provistos por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

de la oficina.⁵¹⁸ El Gobierno dice que con estas enmiendas protege a las víctimas y testigos. Pero no presenta pruebas de que estos nuevos crímenes hayan sido contra las víctimas o testigos del delito que provocó la primera acusación.

Utilizando lo antes señalado como justificación, la nueva ley le “*elimina*” el derecho a fianza al acusado que, estando ya en libertad bajo una medida cautelar, se le vuelva a acusar por delito cometido bajo esta condición. Nos parece que esta nueva ley es inconstitucional, pues la Constitución de Puerto Rico no establece límites al ejercicio del derecho a libertad bajo fianza.

En el 2017 se presentaron ante la Asamblea Legislativa dos nuevas propuestas que buscan enmendar una vez más las Reglas de Procedimiento Criminal para limitar la libertad bajo fianza y propiciar la detención preventiva. El primero es el Proyecto de la Cámara número 68 del 2 de enero de 2017, en cuya Exposición de Motivos justifica la enmienda indicado que “[d]ebido al potencial peligro que las personas imputadas de ciertos delitos graves representan para la sociedad cuando son puestas en libertad bajo fianza, la Asamblea Legislativa ha entendido que se deben imponer ciertas restricciones para otorgar dicha libertad”.⁵¹⁹

A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esta pre-adjudicación de peligrosidad a ciertos acusados sería inconstitucional. También vulneraría el debido proceso de ley el no hacer una evaluación individual del acusado al momento de fijar una fianza. De ser aprobado este proyecto y convertido en ley, eliminaría el beneficio de prestar el 10% de la fianza impuesta a todos los acusados de delitos graves tipificados en la Ley de Sustancias Controladas y en la Ley de Armas de Puerto Rico. También se incluiría en el texto a los acusados de delitos por maltrato de personas de edad avanzada, a acusados de violar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica donde se alegue haber causado grave daño corporal, y a

⁵¹⁸ Datos provistos por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.

⁵¹⁹ P. de la C. 68 del 2 de enero de 2017.

aquellos acusados de delitos graves en donde se alegue la utilización de cualquier tipo de arma.

La segunda propuesta se plantea a través del Proyecto de la Cámara 377 del 4 de enero de 2017. Esta busca establecer unas “Guías para la Imposición de Fianzas en casos de Crímenes Violentos en Puerto Rico”. La propuesta plantea que la “Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de contextualizar y brindar unas guías claras sobre cómo debe manejarse el derecho a la libertad bajo fianza en ciertas circunstancias que representan un grave peligro para la seguridad y estabilidad de nuestra comunidad”.⁵²⁰ El Gobierno alega que existe arbitrariedad en la imposición de las cuantías de las fianzas, y para mostrarlo utiliza el caso de un acusado de asesinato al que se le imponen \$110,000.00 - haciendo ver que es poco—, y que luego la misma fue aumentada \$620,000.00:

*“Este interés se acentúa cuando somos testigos de crímenes violentos como el asesinato del joven Steven Cruzado Torres, quien perdió la vida mientras jugaba baloncesto en una cancha de su comunidad. La fianza impuesta a su asesino confeso, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas y a la Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, y quien cuenta con un historial delictivo, fue de \$110,000.00. Aunque la misma fue eventualmente aumentada a \$620,000.00, preocupa la arbitrariedad con la que se atiende este asunto y el riesgo que ello representa para la seguridad”.*⁵²¹

En sus argumentos, el Gobierno no menciona si el acusado intentó prestar los \$110,000.00, pues por el delito imputado no tiene el beneficio de prestar el 10%, debido a las enmiendas que se le han realizado a la ley. El Gobierno plantea que “el propósito de estas guías es lograr que se establezcan normas más claras y uniformes en la imposición de la fianza”.⁵²² Esa uniformidad que plantea la propuesta – como indicamos en la propuesta anterior— violentaría el debido proceso de ley y las normas establecidas en la jurisprudencia, minando

⁵²⁰ P. de la C. 377 del 4 de enero de 2017.

⁵²¹ *Id.*

⁵²² *Id.* en la pág. 4.

la discreción del juez y su responsabilidad de evaluar la situación caso a caso. La ley, de aprobarse, dejaría la puerta abierta a que el juez pueda determinar una fianza en una cuantía menor a la pre-establecida, pero lo obligaría a poner por escrito “las razones por las cuales consideró que existían circunstancias que ameritaban imponer una fianza menor a la establecida”.⁵²³

En resumen, las cuantías fijadas por esta propuesta de ley serían de \$75,000.00 para acusados de delitos de robo, escalamiento y violaciones a la ley de armas, de \$150,000.00 para acusados de robo agravado, secuestro o pornografía infantil, de \$250,000.00 para acusados de asesinato en segundo grado y delitos de agresión sexual y de \$500,000.00 para acusados de asesinato en primer grado. Todos estos acusados tendrían que prestar la fianza impuesta en su totalidad y no podría ser diferida por el Programa de Servicios con Antelación al Juicio del Departamento de Corrección y Rehabilitación.⁵²⁴ De aprobarse este proyecto, podría ser impugnada su constitucionalidad. Como señala el profesor LaFave, “*prefijar el monto de la cuantía de fianza a base únicamente del delito imputado, viola la Octava Enmienda*”.⁵²⁵

5.3 Finalidad.

Al igual que con la fianza, la finalidad de la detención preventiva es evitar el riesgo de fuga y garantizar la comparecencia del acusado a todas las etapas del proceso que se llevará a cabo en su contra. Con la detención del acusado el Estado garantiza la comparecencia del acusado a todo el proceso que conlleva el procesamiento de un caso criminal grave: la vista preliminar, la lectura de acusación y el juicio.

Si el acusado se encuentra en detención preventiva, el Estado viene obligado por disposición constitucional a llevar a cabo todo el proceso en un término no mayor de seis meses, que es el límite establecido por la Constitución. Transcurridos seis meses en detención preventiva, el abogado del acusado

⁵²³ P. de la C. 377 del 4 de enero de 2017, en la pág. 8.

⁵²⁴ *Id.* en las págs. 5 – 8.

⁵²⁵ LAFAVE, *supra* nota 444, en la pág. 681.

procederá a solicitar su excarcelación a través de un recurso de Habeas Corpus. El caso en contra del acusado continuará, pero ya sin la detención del acusado como garantía comparecencia.

5.4 Naturaleza jurídica.

En teoría, la detención preventiva en Puerto Rico es una medida de naturaleza cautelar personal, que busca evitar el riesgo de fuga garantizando con el apresamiento la comparecencia del acusado a todas las etapas del proceso. Pero, en la práctica, en Puerto Rico se utiliza la detención con otros motivos. A través de la detención se busca aplacar la alarma social que provoca la alta incidencia criminal que sufre la Isla, en especial en aquellos casos de mucho revuelo en la opinión pública. También se pretende evitar la reiteración delictiva sacando de las calles a presuntos delincuentes. Con la detención también se consigue evitar el riesgo de ocultación y destrucción de evidencia. Por último, también se alcanza a proteger a las alegadas víctimas del hecho imputado, manteniendo al acusado en prisión en lo que se dilucida el caso.

El problema con estos motivos ocultos para detener a los acusados en Puerto Rico es que se utiliza la imposición de fianzas excesivas para lograr el propósito. Esto representa una violación a las normas constitucionales estatales y federales, que prohíben la imposición de fianzas excesivas. Como veremos más adelante, si se analiza a la luz de la normativa federal estadounidense, el proceso que se lleva a cabo donde resulta detenido un acusado en Puerto Rico es inconstitucional.

5.5 Clases.

En Puerto Rico existe la detención preventiva del acusado, donde permanece encerrado en una penitenciaría hasta un máximo de seis meses mientras se lleva a cabo el juicio en su contra. También existe la restricción domiciliaria, donde el acusado se mantiene en su hogar en espera de juicio y sólo puede salir del mismo mediando autorización del tribunal. Estos acusados llevan una banda

electrónica que notifica a las autoridades si el acusado ha salido del hogar sin autorización o si se ha excedido del tiempo concedido para realizar alguna gestión o se ha apartado del lugar al que fue autorizado a asistir.

5.6 Presupuestos.

El único presupuesto requerido para que proceda la detención preventiva del acusado es que no pueda prestar la fianza impuesta. Según las estadísticas provistas por la Oficina de Administración de Tribunales, la mayoría de los acusados no pueden prestar la fianza impuesta, por lo que terminan sumariados en detención preventiva.

5.7 Requisitos de tiempo.

La detención preventiva apenas tuvo discusión durante las audiencias de la Convención Constituyente. Desde un principio se planteó que estarían en detención preventiva aquellos acusados de delito grave que no pudieran pagar la fianza impuesta. La única controversia giró en torno al máximo de tiempo que podría estar el acusado en detención preventiva.

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles de la Constitución Jaime Benítez había propuesto que la detención preventiva antes del juicio no excederá de un plazo mayor de 6 meses.⁵²⁶ Ante esta propuesta, el delegado José R. Gelpí propuso que el plazo debería ser de dos meses, ya que ese era el plazo vigente en aquel momento:

“Como he dicho hace un momento, los fiscales actualmente tienen 60 días para radicar las acusaciones. Mediante esta enmienda de que se crea por medio de la carta de derechos, se le da a los fiscales una laxitud de seis meses para tener a una persona en prisión preventiva, es decir, antes de formular la acusación. Creo que debemos ser más humanos y

⁵²⁶ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 3, pág. 1947 (2003).

*no tener a una persona presa sin formularle la acusación por más de 60 días o dos meses que es lo que determina el Código de Enjuiciamiento Criminal”.*⁵²⁷

Dicha proposición fue rebatida por el delegado Arcilio Alvarado:

“Ahora, piense el compañero y piensen los compañeros delegados, que el término de dos meses es absolutamente insuficiente para poder disponer definitivamente de un caso criminal a través de un juicio. Si fuese un solo juicio pues sería fácil, pero los tribunales están sobrecargados de trabajo en lo criminal. Este término que estamos fijando es tan y tan perentorio que si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido a juicio, la corte tiene que ponerlo en la calle por un hábeas corpus inmediatamente que hayan pasado los seis meses. Si corremos eso a los dos meses, yo digo que será absolutamente imposible para este estado, para este gobierno, atender todos los procesos criminales y dejarlos despachados dentro de los 60 días de la comisión del delito.

...

*El término de seis meses es prudente, es razonable, corresponde a la legislación actual y podría funcionar con él. Con el otro término sería un absurdo y estaríamos echando constantemente a la calle a las personas porque no podrían ser sometidas razonablemente a juicio dentro del término de seis meses”.*⁵²⁸

El delegado Antonio Reyes Delgado también argumentó en contra de los 2 meses en detención preventiva: *“Yo entiendo que si se rebajaran a menos de seis meses, estaríamos poniendo en peligro el principio total y entorpeciendo la administración de la justicia”.*⁵²⁹

⁵²⁷ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 3, pág. 1947 (2003).

⁵²⁸ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 2, pág. 1949 (2003).

⁵²⁹ *Id.*

Finalmente, se sometió a votación la propuesta de Benítez y se aprobó. Benítez justificó su propuesta en el Informe de la Comisión de Carta de Derechos sometido para la consideración de los miembros de la Convención Constituyente. En dicho informe se reconocía que el término de los seis meses en detención preventiva era nuevo en nuestro sistema, ya que antes de la aprobación de la Constitución se utilizaban estrategias legales para aumentar el término en que el acusado se encontraba en detención preventiva:

“La disposición limitando a seis meses la detención preventiva es nueva en nuestra jurisdicción. Tiene por propósito impedir que se pueda encarcelar a una persona por más de seis meses sin celebrarle juicio. Actualmente es posible lograr esto, mediante la radicación de acusaciones sucesivas, cada vez que finalice el término de ciento veinte días que marca la ley”.⁵³⁰

Sobre la sección 11 de la Constitución y la detención preventiva no mayor de seis meses dijo Trías Monge, quien también fue miembro de la Convención Constituyente:

“La sección 11, concerniente a los derechos del acusado, se basó principalmente en la Ley Orgánica y la Constitución de los Estados Unidos. La disposición al efecto que la detención preventiva no debe exceder de seis meses no tuvo precedente en ninguno de los anteproyectos auspiciados por las delegaciones. La disposición fue producto de la Comisión y el sentir mayoritario de la Asamblea sobre la indeseabilidad de permitir la prolongación del encarcelamiento de personas mediante la mera radicación de acusaciones sucesivas”.⁵³¹

Tres años después de la puesta en vigor de la Constitución el Tribunal Supremo atendió el caso de *Sánchez v. González* donde puso en vigor la

⁵³⁰ *Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de P.R.*, tomo 4, pág. 3185 (2003).

⁵³¹ Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, *supra* nota 434, en el prólogo.

limitación de tiempo para la detención preventiva, y explicó el por qué del término de 6 meses:

“[T]endió a garantizar al ciudadano contra posibles excesos de autoridad, evitando que la restricción efectiva de la libertad-cuando ha mediado causa probable para un arresto-se convierta, de hecho, en castigo anticipado por un delito no juzgado. La Convención Constituyente consideró razonable el término de 6 meses fijado para que el Estado descargara su responsabilidad de llevar a juicio a aquellos acusados que, por no haber podido prestar fianza para su libertad provisional, permanecían detenidos en espera de la celebración del juicio”.⁵³²

En el caso *Pueblo v. Paonesa*, el Tribunal Supremo cita a los profesores de Derecho Procesal RESUMIL SAN FILLIPO y CHIESA APONTE para explicar la razón por la cual la detención preventiva no debe exceder de 6 meses.

“La profesora Resumil señala que la cláusula de detención preventiva pretende “evitar que a una persona a quien ampara una presunción de inocencia sea restringida por el estado en el ejercicio de su poder de custodia con el único propósito de hacerle comparecer a juicio.” La duración limitada del periodo de detención preventiva pretende evitar que “se convierta en un castigo anticipado por un delito no juzgado.”

“Cabe señalar que no existe una disposición equivalente a ésta en la Constitución de los Estados Unidos. (Ernesto Chiesa Aponte).⁵³³

La importancia del caso de Paonesa es que el Tribunal Supremo deja claro cuándo comienza el juicio para así detener el término de los seis meses máximos en detención preventiva. CHIESA APONTE explica la decisión del Supremo en cuanto este aspecto:

⁵³² *Sánchez v. González*, 78 D.P.R. 849, pág. 854 (1955)

⁵³³ *Pueblo v. Paonesa Arroyo*, 173 D.P.R. 203, pág. 210 (2008).

“... resolvió que:

(i) Es suficiente el inicio del juicio, antes de que se cumplan los seis (6) meses de detención preventiva, para evitar la excarcelación del acusado al amparo de la cláusula de detención preventiva; no se requiere la celebración del juicio dentro de los seis (6) meses desde que el acusado fue detenido preventivamente.

(ii) En el contexto de la cláusula constitucional sobre detención preventiva, el juicio comienza con la juramentación preliminar del jurado bajo la Regla 119 de Procedimiento Criminal.

(iii) Si el juramento preliminar se hace con el único propósito de asegurar que el acusado siga detenido, el acusado “no queda huérfano de remedios”, pues la dilación irrazonable entre el juramento preliminar y el juramento definitivo es una violación al derecho a juicio rápido que puede acarrear la desestimación de la acusación.⁵³⁴

El Tribunal Supremo estimo que, en este caso, el Ministerio Público no actuó para circunvalar la protección constitucional y había buenas razones para posponer el proceso de desinsaculación. Me parece correcto lo resuelto por el Tribunal Supremo en cuanto a que lo decisivo sea el juramento preliminar para que se dé como comenzado el juicio en el contexto de la cláusula constitucional. Pero lo cierto es que habrá muchos casos en los que el juramento preliminar sea sólo una estrategia para escapar a la cláusula constitucional, pues el Ministerio Público o el tribunal no están preparados para ver el juicio. En esos casos, ante un recurso para excarcelar al acusado, el Tribunal de Primera Instancia debe evaluar con mucho rigor la justa causa para no seguir con el proceso de desinsaculación y la presentación de prueba. Los tribunales apelativos sólo deben intervenir con la

⁵³⁴ Ernesto L. Chiesa Aponte, *Derecho Penal*, 78 REV. JUR. UPR 291, pág. 314 (2009).

estimación del Tribunal de Primera Instancia en casos de abuso de discreción”.⁵³⁵

En 2011 se decide un caso que redefine la interpretación del término de seis meses máximo en detención preventiva. El caso también nos deja ver la visión que tienen los jueces del alto foro sobre la detención preventiva y la fianza. En el caso *Vázquez Alejandro v. Superintendente del Centro de Detención de Bayamón*, el Tribunal Supremo confirmó la decisión tanto del Tribunal de Primera Instancia como del Tribunal de Apelaciones, que determinó que si la primera acusación se desestima durante la vista preliminar o el juicio por exceder los términos de juicio rápido establecidos en la Regla 64 (n) de Procedimiento Criminal, y el acusado estaba en detención preventiva y el Estado decide volverlo a acusar, el periodo en que estuvo encarcelado no se abona (al término de los seis meses) si nuevamente no puede pagar la fianza impuesta y es enviado a detención preventiva.⁵³⁶ Por lo tanto, el acusado se expone a estar otro término

⁵³⁵ CHIESA APONTE, supra nota 536, en las págs. 314 – 315.

⁵³⁶ Regla 64. Fundamentos de la moción para desestimar La moción para desestimar la acusación o denuncia, o cualquier cargo de las mismas solo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos: ... (n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento: (1) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se hubiere presentado acusación o denuncia contra él, o que ha estado detenido por un total de quince (15) días sin que se hubiere presentado una acusación o denuncia contra él si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a). (2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación si se encontraba bajo fianza o dentro de los treinta (30) días si se encontraba sumariado o si se tratare de un caso en que un magistrado autorizó la radicación de las mismas de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6(a). (3) Que el acusado estuvo detenido en la cárcel por un total de sesenta (60) días con posterioridad a la presentación de la acusación o denuncia sin ser sometido a juicio. (4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia. (5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se le hubiere celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse. (6) Que no se celebró vista preliminar a la persona dentro de los sesenta (60) días de su arresto en los casos en que deba celebrarse. (7) Que se celebró una vista de causa probable para arresto o citación luego de los 60 días de la determinación de no causa. (8) Que se celebró una vista preliminar en alzada luego de 60 días de la determinación de no causa en vista preliminar. Se dispone que el tribunal no podrá desestimar una acusación o denuncia, bajo este inciso, sin antes celebrar una vista evidenciaria. En la vista, las partes podrán presentar prueba y el tribunal considerará los siguientes aspectos: (1) Duración de la demora; (2) Razones para la demora; (3) Si la demora fue provocada por el acusado o expresamente consentida por este; (4) Si el Ministerio Público demostró la existencia de justa causa para la demora; y (5) Los perjuicios que la demora haya podido causar. Una vez celebrada la vista, el magistrado consignará por escrito los fundamentos de su determinación, de forma tal que las partes tengan la oportunidad efectiva y objetiva de evaluar, si así lo solicitan, la reconsideración o revisión de dicha determinación.

de seis meses en detención preventiva, sin que se le abone nada a ese término de lo que ya estuvo sumariado durante la primera acusación.

Esta situación, como advierte el entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, en su opinión disidente, podría ser utilizada por el Estado para mantener a acusados en detención por más de seis meses, burlando así la norma constitucional:

“Considerar la segunda detención del señor Vázquez Alejandro como un nuevo proceso judicial abriría las puertas al Ministerio Público para burlar la protección constitucional contra las detenciones preventivas en exceso de seis meses sin celebrarse juicio. Bastaría dejar transcurrir los términos de rápido enjuiciamiento, esperar el archivo del caso y someterlo nuevamente, para poder encarcelar al ciudadano indefinidamente sin iniciar el juicio.”⁵³⁷

Este caso también es revelador porque nos muestra a través de sus expresiones la diferente visión que tienen los jueces del actual Tribunal Supremo sobre la detención y la fianza. En el voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Rafael Martínez Torres y al que se unieron los jueces Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón, en su crítica a la opinión disidente del Juez Presidente, dejan ver cierto prejuicio sobre los acusados que se encuentran en detención preventiva por no poder prestar la fianza impuesta:

“En primer lugar, tenemos el deber de hacer cumplir las garantías constitucionales que protegen a todo acusado. Nuestro Pueblo no espera menos. De igual modo, nuestro Pueblo tampoco espera que ante la necesidad de la sociedad donde vivimos actualmente de que se haga cumplir la ley, y se procese y encarcele al delincuente, este Tribunal

⁵³⁷ Vázquez Alejandro v. Supte. Bayamón, 183 D.P.R. 711, pág. 717 (2011).

*invente derechos que no existen y excarcele con suma facilidad a aquellos que insisten en robarnos nuestra tranquilidad y asesinar nuestro futuro”.*⁵³⁸

Más adelante los jueces señalan que: *“el propósito de la detención preventiva no es castigar al pobre. Lo que busca es proteger la seguridad pública al propiciar que los casos se atiendan sin demora”.*⁵³⁹

Por otro lado, el Juez Presidente Hernández Denton, en su voto particular disidente, al que se unieron las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez, expresa su visión sobre la disposición constitucional que obliga a liberar acusado tras pasar seis meses en detención preventiva:

*“[L]a disposición contra la detención preventiva en exceso de seis meses es la única esperanza de salir en libertad que poseen quienes no pueden prestar la fianza a la que tienen derecho -de rango constitucional- todos los imputados de delito en nuestro País. No olvidemos que la cláusula en controversia es la fianza de los pobres”.*⁵⁴⁰

El último caso relacionado a la duración de la detención preventiva decidido hasta la fecha por el Tribunal Supremo fue el de *Pueblo v. Aponte Ruperto* del 4 de enero de 2018. En este caso hubo una serie de dilaciones en los procedimientos, que incluyeron también los ocasionados tras el paso de los huracanes Irma y María, durante el mes de septiembre de 2017. La fiscalía se oponía a la excarcelación, alegando que el tiempo que se paralizó el sistema judicial por razón de fuerza mayor debe ser excluido del cómputo de seis meses de detención preventiva. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de Habeas Corpus y el Tribunal de Apelaciones la revocó. Inconforme la fiscalía, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de *certiorari*. El Tribunal Supremo, por su parte, confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones. En su opinión, de

⁵³⁸ Vázquez Alejandro v. Supte. Bayamón, *supra* nota 539, en la pág. 714.

⁵³⁹ *Id.*

⁵⁴⁰ *Id.* en la pág. 720.

conformidad con la decisión la Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez, se indica:

*“Aclarado el marco constitucional y legal aplicable, corresponde analizar si las dilaciones que causaron fenómenos atmosféricos como Irma y María se deben considerar al computar el término constitucional de detención preventiva. Por los fundamentos siguientes, concluyo que el término máximo de seis meses no admite excepciones por “justa causa”, ni se debe suspender o paralizar ante el paso de un evento atmosférico de esta naturaleza. Por consiguiente, considero que la garantía constitucional no permite privar al acusado de su libertad por más de seis meses en un escenario como este”.*⁵⁴¹

5.8 Procedimiento.

Todo arrestado es llevado ante un juez, para celebrar una vista dirigida a determinar si hay causa probable para arresto o citación, mejor conocida como “regla 6”, por estar regulada bajo ese número en las Reglas de Procedimiento Criminal.⁵⁴²

⁵⁴¹ *Pueblo v. Aponte Ruperto*, 2018 TSPR 2 (2018).

⁵⁴² Regla 6. Orden de arresto a base de una denuncia

(a) Expedición de la orden. Si de una denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). El Ministerio Público tendrá discreción para presentar cargos en ausencia a toda persona sospechosa de delito cuando entienda que existen circunstancias justificadas, excepto: (a) cuando el sospechoso comunique por sí o a través de su representación legal que está disponible para acudir a la vista de Regla 6 o su alzada, en el día y la hora indicada por el fiscal; (b) cuando se tenga al sospechoso de delito y esté bajo custodia estatal o federal en una institución penal; (c) cuando se tenga del sospechoso de delito una dirección física de trabajo o dirección residencial en la cual se pueda notificar personalmente de la radicación de cargos en su contra. El tribunal deberá evaluar la justificación presentada por el Ministerio Público para radicar en ausencia antes de tomar una determinación. No obstante, la determinación del Ministerio Público de que existen circunstancias justificadas para someter el caso en ausencia será merecedora de amplia deferencia por parte del magistrado. La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable. El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieran

Antes de llevarse a cabo esta vista, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio, que cuenta con oficinas en los tribunales, evalúa al arrestado conforme lo establece la regla 6.1 inciso f del Procedimiento Criminal:

“(f) En todo caso, el magistrado requerirá la evaluación, informe y recomendaciones de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio sobre todo imputado antes de hacer una determinación sobre fianza o hacer una determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento o libertad bajo custodia de tercero”.⁵⁴³

conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para determinar causa probable. En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido por abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor. En aquellos casos en que la vista sea por una violación a las secs. 602 et seq. del Título 8, se seguirán los procedimientos establecidos en la sec. 640 del Título 8 referente a la comparecencia de un representante del Ministerio Público. Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal.

(b) Forma y requisitos de la orden de arresto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el título oficial del magistrado que la expidiere, dirigida para su ejecución y diligenciamiento a uno, varios o a cualquier funcionario del orden público. Ordenará el arresto de la persona o personas a quienes se les imputare el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilación innecesaria ante un magistrado, según se dispone en la Regla 22(a). La orden deberá además, describir el delito imputado y deberá especificar el nombre de la persona o personas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, designará a dichas personas mediante la descripción más adecuada posible que las identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha y el sitio de su expedición y el monto de la fianza fijada por el magistrado que la expidió.

(c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un delito inferior o distinto a aquél que el fiscal entendiere procedente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados.

⁵⁴³ 34 L.P.R.A. Ap. II R 6.1.

En la práctica, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio funciona de la siguiente manera: en cada Sala de Investigaciones de los Tribunales de Primera Instancia hay un despacho con representantes de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Uno de estos representantes realiza una evaluación al acusado antes de que pase a la sala del tribunal donde se llevará a cabo la vista para la determinación de causa probable para arresto, si es un delito grave por el que se le acusa, o citación si fuese un delito menos grave. El acusado puede estar acompañado de su abogado mientras se realiza esta evaluación. El evaluador en su informe tomará en consideración *“el historial socio-económico del acusado, su nivel de escolaridad, empleo, residencia, lazos con la comunidad y cualquier otra información, incluyendo la adicción o dependencia al alcohol o a las sustancias controladas, que le sirva al tribunal de guía para determinar los medios para poner en libertad provisional a toda persona arrestada por imputársele la comisión de un delito”*.⁵⁴⁴

Luego el evaluador *“emitirá un informe con sus hallazgos y recomendaciones que puedan ser útiles o necesarias para el juez al momento de tomar una decisión sobre la medida cautelar que habrá de poner al acusado”*.⁵⁴⁵ En cuanto a las condiciones que se le puedan imponer al acusado, el informe tomará en consideración: *“sus relaciones en la comunidad y lazos de familia, historial de empleo, sus recursos económicos, récord de convicciones anteriores, récord de comparecencia a corte en ocasiones anteriores, de fuga para evitar ser encausado y de incomparecencias”*.⁵⁴⁶ También tomará en consideración *“las circunstancias de su arresto y cualquier otra información que sea pertinente”*.⁵⁴⁷

Inmediatamente que el informe está listo, el acusado pasa solo o con su abogado (según sea el caso) a la sala del tribunal, donde el juez escuchará la prueba en su contra. En esta etapa, para que el juez encuentre causa probable

⁵⁴⁴ Ley Núm. 177 del 12 de agosto de 1995, art. 4.

⁵⁴⁵ *Id.*

⁵⁴⁶ *Id.*

⁵⁴⁷ *Id.*

para arresto, sólo tiene que entender que el delito fue cometido y que probablemente la persona que está en su sala como acusado fue el responsable. Basta con un mínimo de prueba para que pueda llegar a dicha conclusión. En la mayoría de los casos, la prueba consiste en la declaración del policía que radicó la querrela en su contra o realizó la investigación, o de algún testigo de los hechos.

Durante la vista, la parte acusadora, la Policía de Puerto Rico o el Ministerio Público presentan toda la prueba que ellos entiendan necesaria para que el juez determine la causa probable para arresto, si se trata de un delito grave, o citación para juicio, si se trata de un delito menos grave. En la mayoría de las ocasiones, el Ministerio Público no se presenta en esta vista a menos que sea un caso mucha importancia o revuelo en los medios de comunicación.

Aunque los acusados tienen un derecho constitucional a estar asistidos de abogados, la realidad es que muy pocos asisten a la vista de regla 6 acompañados de abogado. Esto puede deberse a la inmediatez del arresto, a la regla 22 de Procedimiento Criminal que exige que el *“funcionario del orden público que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano”* y a la falta de capacidad económica del acusado para contratar un abogado.

También las organizaciones que se dedican a brindar representación legal a los acusados de manera gratuita no brindan sus servicios en esta etapa de los procedimientos. Por lo tanto, la mayoría de los acusados en Puerto Rico van a la vista de regla 6 sin abogado. De estar acompañado de abogado este podrá contrainterrogar a los testigos, objetar prueba y presentar prueba o testigos en favor del acusado. Por el contrario, si el acusado no tiene abogado, la práctica es que el juez no le permite hablar, ni presentar prueba a su favor, con la intención de proteger su derecho a la no autoincriminación.

Tan pronto el juez determina causa probable para arresto, revisa el informe emitido por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio, para luego

llegar a su determinación sobre la medida cautelar que dispondrá para el acusado. Luego de que el tribunal imponga su medida cautelar al acusado, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio *“tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento con las condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas al acusado y de informar con premura a los tribunales y a cualquier otro funcionario pertinente de cualquier incumplimiento”*.⁵⁴⁸ La ley incluso le da el poder de *“arrestar a cualquier persona bajo su supervisión que incumpla con cualquiera de las condiciones de libertad provisional que le fueron impuestas”*.⁵⁴⁹ Las medidas cautelares que puede recomendar el Programa de Servicios con Antelación a Juicio son: libertad bajo custodia de tercero, libertad bajo reconocimiento propio, libertad condicional, libertad bajo fianza diferida y libertad provisional.⁵⁵⁰

Si por el delito cometido el acusado no se puede acoger a una de las medidas cautelares auspiciadas por Programa de Servicios con Antelación a Juicio, el tribunal procederá a imponer una fianza conforme a lo establecido en la regla 6.1

⁵⁴⁸ Ley Núm. 177 del 12 de agosto de 1995, art. 4.

⁵⁴⁹ *Id.*

⁵⁵⁰ “1. Libertad bajo custodia de tercero: es la libertad provisional condicional cuando un tercero se compromete con el tribunal a supervisar a un imputado en el cumplimiento de ciertas condiciones y el tercero, además, se compromete a informarle al tribunal el incumplimiento por el imputado de cualquiera de esas condiciones. El tercero aceptará sus obligaciones personalmente ante el tribunal y de igual manera aceptará el imputado la supervisión del tercero. 2. Libertad bajo reconocimiento propio: es la libertad provisional de un imputado después de comparecer ante un tribunal, cuando se le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal bajo su promesa escrita de comparecer al tribunal cada vez que sea citado y de acatar las órdenes y mandatos judiciales, incluyendo las condiciones impuestas por el tribunal durante su libertad provisional. 3. Libertad Condicional: es la libertad provisional de un imputado de delito después de comparecer ante un tribunal, cuando el tribunal le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal con o sin la prestación de una fianza, siempre y cuando el imputado cumpla con una o varias condiciones que le sean impuestas por el tribunal mientras dure su libertad provisional. 4. Libertad bajo Fianza Diferida: es la libertad provisional de un imputado de delito después de comparecer ante el tribunal, cuando éste le fija una fianza monetaria, pero le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal sin la prestación de la fianza fijada, siempre y cuando el imputado cumpla con una o varias condiciones que le sean impuestas por el tribunal mientras dure su libertad provisional, disponiéndose que de determinarse que el imputado incumplió con cualquiera de dichas condiciones, se le requerirá el pago de la fianza y de no prestarla se le encarcelará inmediatamente, sin menoscabo de lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Criminal. 5. Libertad Provisional: es la libertad de un imputado de delito después de comparecer ante un tribunal, decretada por autoridad judicial, durante el transcurso de una acción penal. La libertad provisional podrá obtenerse por cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse a, la libertad bajo propio reconocimiento, bajo custodia de tercero, bajo condiciones no monetarias o bajo fianza diferida”. Ley Núm. 177 del 12 de agosto de 1995, art. 2.

de Procedimiento Criminal. Esta regla dispone que “[e]n todo caso grave o menos grave en que hubiere derecho a juicio por jurado el magistrado exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia”.⁵⁵¹

Al establecer la cuantía de la fianza, las reglas de Procedimiento Criminal disponen que el juez deberá considerar lo siguiente:

“En ningún caso se exigirá una fianza excesiva. Para la fijación de la cuantía de la fianza se tomarán en consideración las circunstancias relacionadas con la adecuada garantía de la comparecencia del imputado, incluyendo:

- 1 La naturaleza y circunstancias del delito imputado.*
- 2 Los nexos del imputado en la comunidad, entre ellos, su tiempo de residencia, su historial de empleo y sus relaciones familiares.*
- 3 El carácter, peligrosidad y condición mental del imputado. A tales efectos, el tribunal podrá valerse del récord de condenas anteriores o de cualquier otra información que le merezca crédito y que sea pertinente al asunto.*
- 4 Los recursos económicos del imputado.*
- 5 El historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales.*
- 6 La evaluación, informes y recomendaciones que haga la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.”*⁵⁵²

Tomando lo antes dispuesto en consideración, el juez procede a imponer un monto de fianza el cual el acusado deberá prestar ante la secretaría de lo criminal del tribunal. La prestación la hará con dinero de su propio peculio o a través de un fiador, quien le cobrará el diez por ciento de la cuantía impuesta. Tan pronto el juez establece la fianza a prestar el abogado del acusado, puede solicitar que

⁵⁵¹ 34 L.P.R.A. Ap. II R 6.1.

⁵⁵² 34 L.P.R.A. Ap. II R 218.

se le dé el beneficio al acusado de prestar sólo el diez por ciento (10%) de la cuantía impuesta, según lo establece la regla 220 de Procedimiento Criminal.⁵⁵³ De no poder prestar la fianza impuesta el acusado tiene la oportunidad de pedir que se revise la misma a través de lo dispuesto en la regla 218 de Procedimiento Criminal.⁵⁵⁴ Para esto se llevará a cabo una vista ante otro juez que evaluará si procede o no revisar la cuantía o las condiciones impuestas. De igual manera, el Ministerio Público puede solicitar que se revise la cuantía impuesta si entiende que la misma debe ser mayor o para que se impongan condiciones.

En cuanto a la cuantía a imponer como fianza a un acusado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la misma no puede ser parte de la pena:

“La fianza al imputado o acusado de delito no se fija con el propósito de castigarlo, sino para asegurar su comparecencia ante el tribunal cuando así le sea requerido. La prestación de la fianza garantiza la sumisión del acusado a todas las órdenes, citaciones y procedimientos

⁵⁵³ Toda fianza será suscrita, o reconocida, ante un magistrado o secretario, según corresponda, bien por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico; bien por el Director Ejecutivo del Proyecto de Fianzas Aceleradas (*Expedited Bail Project*) creado mediante Orden de 28 de abril de 1988 dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso de Carlos Morales Feliciano, et al. v. Rafael Hernández Colón, et al., Caso Civil Núm. 79-4 (PG), al cual se le considerará, para los efectos de esta regla, como una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, incluyendo específicamente, pero sin que ello se entienda como una limitación, la potestad de prestar fianzas documentales o en efectivo, incluyendo el diez por ciento (10%) en efectivo del monto total de la fianza impuesta, cuando el juez o magistrado que imponga la fianza, en el ejercicio de su discreción, estime conveniente o necesario conceder tal beneficio; bien por un fiador residente en Puerto Rico que posea bienes inmuebles en Puerto Rico no exentos de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que pesen sobre dichos bienes, excepto que el magistrado o secretario ante quien se preste la fianza podrá permitir a más de un fiador que se obliguen separadamente por sumas inferiores siempre que el total de las obligaciones individuales equivalga a dos (2) veces el monto de dicha fianza. Dondequiera que en estas reglas se utilice el término “fiadores” se entenderá que lee “fiador o fiadores”. 34 L.P.R.A. Ap. II R 220.

⁵⁵⁴ Una parte puede solicitar la revisión de las condiciones o de la fianza señaladas mediante moción, únicamente ante la Sala del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al distrito judicial con competencia para conocer de la causa. Si la moción fuere solicitando la ampliación de las condiciones o el aumento de la fianza, el magistrado que hubiere de entender en la misma señalará condiciones encaminadas a garantizar la comparecencia del imputado, incluyendo la citación para notificarle la resolución del tribunal sobre la moción de revisión de las condiciones o de la fianza. Una moción para ampliar o limitar las condiciones o para aumentar o reducir la fianza se resolverá dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su presentación, previa audiencia al fiscal y a la persona imputada, si tuvieran a bien comparecer después de haber sido citados. 34 L.P.R.A. Ap. II R 218 (d) (1).

ante el tribunal, surgidas en virtud del procedimiento criminal habido en su contra".⁵⁵⁵

A pesar de la prohibición constitucional, el aumento desmedido de la detención de acusados a través de la imposición de fianzas excesivas comenzó a partir de la década de los setenta. Esto quedó corroborado en el estudio que realizara el Lcdo. Roberto Boneta Carrión en 1970 y que fuera publicado en la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Una de las primeras conclusiones a las que llega BONETA CARRIÓN en su investigación es que ya en aquella época se utilizaba la fianza como *"un medio punitivo y no como un medio para garantizar el regreso del acusado el día del juicio"*.⁵⁵⁶ Indica que esa tendencia *"resaltaba más en casos relacionados a violaciones a la entonces Ley de Narcóticos"*.⁵⁵⁷ Otra conclusión del estudio es que la fijación de la cuantía de fianza impuesta a acusados de delitos sexuales dependía *"del grado de repugnancia o desaprobación que sentían los jueces"*.⁵⁵⁸ Que los jueces *"no tomaban en consideración los atributos personales de los acusados al fijar la cuantía de la fianza"*.⁵⁵⁹ Otro importante hallazgo de la investigación es que cuando se arresta a un acusado al que se le ha determinado causa probable en ausencia y se le fija una fianza, los jueces son reacios a revisarla:

*"[A]l determinar la fianza el acusado no está presente y su cuantía se fija sin tener en cuenta sus condiciones personales. Una vez arrestado, el acusado se lleva a donde el magistrado "disponible más cercano" que no necesariamente es el que expidió la orden de arresto. Como cuestión de deferencia o respeto los jueces no suelen rebajar las fianzas impuestas por otros magistrados..."*⁵⁶⁰

⁵⁵⁵ Pueblo v. Martínez Hernández, *supra* nota 445, en la pág. 394.

⁵⁵⁶ Roberto Boneta Carrión, *La Fianza en Puerto Rico*, 39 Rev. Jur. UPR 523, pág. 537 (1970)

⁵⁵⁷ *Id.*

⁵⁵⁸ *Id.* en la pág. 541.

⁵⁵⁹ *Id.* en la pág. 551.

⁵⁶⁰ *Id.*

BONETA CARRIÓN concluye su artículo señalando que en “*en Puerto Rico no se individualiza la fianza como lo exige el caso de Stack v. Boyle*” y que esto se debe “a la incomprensión por parte de muchos magistrados del propósito de la fianza y a la existencia de unos criterios inadecuados para la fijación de la cuantía”.⁵⁶¹ El letrado tajantemente concluye que sin duda alguna “en Puerto Rico el sistema de fianza se usa para privar de su libertad a ciertos acusados que los magistrados determinan no deben estar en libertad”.⁵⁶²

Un año después de la publicación del estudio BONETA CARRIÓN, sale a la luz la compilación de presentaciones ofrecidas durante el *Seminario Sobre Fianza Criminal* por importantes jueces y abogados de la época. Los juristas reseñaron a través de sus presentaciones cómo iba aumentando la cantidad de detenidos en la Isla, afectando principalmente a los acusados de la clase pobre. En su exposición, el juez Miguel A. Montalvo reseña “un estudio preparado por el Departamento de Justicia, División de Corrección, sobre “Los confinados que no habían prestado fianza en las Instituciones Penales en Puerto Rico”, durante el periodo del 16 al 20 de junio de 1972”.⁵⁶³ Los resultados del estudio fueron los siguientes:

“[S]e señala que las fianzas que se están imponiendo en Puerto Rico son claramente excesivas. De dicho estudio surge que unos 682 de los 691 confinados tenían un monto promedio de \$14,989 de fianza. En los límites de la frecuente figuraron seis confinados con fianzas montantes hasta \$100 y un confinado con fianza montante a \$600,000. El monto de la fianza para estos 682 confinados ascendió a \$10,357,399. La mediana en el monto de la fianza fue de \$4,760. Es decir, que el 50 por ciento de los confinados tenían fianzas desde mis de \$100.00 hasta esa cantidad; mientras que el otro 50 por ciento tengan fianzas montantes desde \$4,760 a \$600,000. A la luz de las estadísticas antes mencionadas no es pecado

⁵⁶¹ BONETA CARRIÓN, supra nota 556, en la pág. 560.

⁵⁶² *Id.* en la pág. 562.

⁵⁶³ Jose V. Toledo et al., *Seminario Sobre Fianza Criminal*, 8 Rev. Jurídica U. Inter. PR 25, pág. 39 (1973).

*admitir que en Puerto Rico el pobre es el que va a la cárcel en la etapa anterior al juicio”.*⁵⁶⁴

El presidente de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, Lcdo. Héctor Lugo Bougal, resaltaba en su presentación la queja de muchos abogados sobre la imposición de fianzas excesivas:

*“Un número considerable de abogados de nuestro Colegio [de Abogados de Puerto Rico], ha estado planteando durante los últimos días la crisis de nuestro régimen de derecho, en cuanto a la imposición de fianzas excesivas a los ciudadanos que se ven acusados en nuestras cortes de justicia”.*⁵⁶⁵

El licenciado LUGO BOUGAL responsabilizaba por esta acción al desconocimiento de la finalidad de la fianza:

*“El abogado que suscribe tiene la seguridad que el error en la imposición de fianzas excesivas tiene su origen en la inadvertencia profesional del propósito que instituyó la fianza provisional en nuestro sistema democrático, razón que explica a su vez la publicación del presente artículo, el que pretende esbozar los fundamentos jurídicos de la institución de la fianza en nuestro sistema”.*⁵⁶⁶

El abogado Gerardo Ortiz del Rivero en su presentación nos revela que, ya en aquella época, se imponían fianzas en cuantías millonarias para lograr la detención de acusados:

“Los abogados debemos estar siempre alertas sobre eso, pues desgraciadamente hay muchas personas que creen que un individuo que comete un delito debe estar preso y que se le debe poner una fianza tan

⁵⁶⁴ Toledo et al., *supra* nota 565, en la pág. 39.

⁵⁶⁵ *Id.* en la pág. 41.

⁵⁶⁶ *Id.*

*alta que no pueda salir. Los mejores ejemplos son los casos de drogas. Aquí en Puerto Rico se vanaglorian en la prensa de que se impusieron en una redada seis 6 siete millones de dólares en fianzas. Eso es ridículo. Como ya les dije no es la primera vez que un caso se vé grandísimo en los periódicos y después lo tienen que archivar”.*⁵⁶⁷

En 1973 la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico emite un informe donde denuncia que “[e]l sistema imperante en Puerto Rico, aún bajo las disposiciones de reciente legislación, le niega a una gran parte de los acusados la igual protección de las leyes”.⁵⁶⁸ Resaltaba la comisión que la mayoría de los acusados luego salían absueltos “por lo que la encarcelación provisional representa una injusticia”.⁵⁶⁹ También denuncia que la Administración de Tribunales no lleva estadísticas del monto de las fianzas impuestas: “[e]n lo que al monto de las fianzas fijadas en Puerto Rico concierne, la Administración de Tribunales no lleva estadísticas que permitan concluir si es está o no violando la prohibición constitucional contra fianzas excesivas”.⁵⁷⁰ Cuarenta y cinco años después la Oficina de Administración de Tribunales todavía no lleva un registro sobre el monto de las fianzas impuestas.

En el 1975, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, en su revista *La Toga*, también se hace eco de las denuncias sobre el sistema de fianzas en Puerto Rico. En el artículo titulado *El Derecho a la Fianza*, la Lcda. Sonia Avilés Lamberty denuncia que había “una tendencia creciente a hacer punitiva la fijación de fianza”.⁵⁷¹ Exhortaba a través de su escrito “la eliminación de la fianza tal y como está establecida actualmente”.⁵⁷² Y recomendaba que la imposición de una fianza debía “ser una excepción aún en delitos graves”.⁵⁷³ En esa misma

⁵⁶⁷ Toledo et al., *supra* nota 565, en las págs. 49 – 50.

⁵⁶⁸ Comisión de Derechos Civiles, Informes de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tomo I, pág. 677 (1973).

⁵⁶⁹ *Id.*

⁵⁷⁰ *Id.* en la pág. 681.

⁵⁷¹ Sonia E. Avilés Lamberty, *El Derecho a la fianza*, REVISTA LA TOGA, julio 1975, en la pág. 11.

⁵⁷² *Id.*

⁵⁷³ *Id.*

revista, en el artículo titulado: *Informe sobre la fianza*, el Lcdo. Francisco Ariel Avilés Rodríguez indicaba lo siguiente sobre la raíz del problema:

“El estudio de los innumerables escritos en esta y en muchas otras jurisdicciones en torno a la fianza criminal, junto al análisis de las vistas públicas realizadas por el Colegio, han demostrado que el problema básico de nuestro sistema actual de fianza gira en torno a su énfasis desmedido en el aspecto monetario y económico como garantía de comparecencia”.⁵⁷⁴

Con el pasar de los años, la situación se ha ido agravando y el número de detenidos ha ido en aumento. Así lo pudimos constatar con los números provistos por la Administración de Tribunales de Puerto Rico, que demuestran que la mayoría de las personas no pueden prestar la fianza impuesta, por lo que terminan en detención. Las estadísticas provistas por el Departamento de Corrección y Rehabilitación también lo confirman.

Esta política que convierte la detención en la regla y no la libertad choca con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el citado caso de *Salerno*, donde se señaló que la libertad tiene que ser la norma y la detención preventiva una excepción cuidadosamente limitada. En el Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico la norma también es la detención de acusados. Pero, como señalamos en un capítulo anterior, este foro es de jurisdicción limitada, donde los casos criminales que se atienden son de circunstancias extraordinarias, por lo que se podría justificar el número alto de detenidos.

A través de su historia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto varias controversias relacionadas con la fianza y la detención. En varias ha repetido que no se puede utilizar como pena anticipada, que su propósito es servir de garantía, que el derecho a la fianza va ligado a la presunción de inocencia y que la detención no puede exceder de seis meses. Pero desde el

⁵⁷⁴ Francisco Ariel Avilés Rodríguez, *Informe sobre la fianza*, Revista La Toga, julio 1975, en la pág. 13.

antes citado *Pérez v. Tribunal de Distrito*, un caso de 1951, o sea, pre-constitución, no ha resuelto una controversia donde se plantee la imposición de una fianza excesiva.⁵⁷⁵ Tampoco ha llegado un caso ante el foro federal donde un acusado a nivel estatal lleve su planteamiento amparándose en la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Creemos que el caso puede llegar de un momento a otro.

La Sociedad para la Asistencia Legal, una entidad sin fines de lucro dedicada a ofrecer representación legal a indigentes, presentó datos aún más reveladores en su ponencia en contra de la Ley Núm. 84 de 14 de mayo de 2012 para la celebración del referéndum para enmendar el derecho absoluto a la fianza:

“Del 56.56% cuya fianza superaba los \$10,000.00, la cuantía alcanzaba los \$500,000.00. La mediana de la fianza impuesta ascendió a \$15,000.00. De los datos antes provistos resulta razonable colegir que ninguna de las personas sumariadas tenía capacidad de pago para prestar la fianza impuesta. Obsérvese que el grupo de sumariados que recibe algún tipo de ingreso anual nunca superó los \$7,000.00. Estas cifras son reflejo de un sistema penal donde la presunción de inocencia no se garantiza adecuadamente y la imposición de la fianza excesiva es frecuente. La fianza promedio impuesta en casos de asesinato fue de \$725,000 y apenas un 5% de los imputados de este delito pudo pagarla”.⁵⁷⁶

Nos parece que estas cuantías vulneran la normativa establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de *Stack*, ya que el propósito de esas cuantías no es para servir de garantía, sino que son impuestas para llevar al acusado a la detención:

⁵⁷⁵ *Pérez v. Tribunal de Distrito*, 72 D.P.R. 930 (1951).

⁵⁷⁶ Ponencia de la Sociedad para la Asistencia Legal, *Resolución Concurrente del Senado Número 60*, pág. 40 (2012).

“[L]a práctica moderna de exigir una fianza o el depósito de una suma de dinero sujeta a confiscación sirve como garantía adicional de la presencia de un acusado. La fianza establecida en una cifra superior a una cantidad razonablemente calculada para cumplir este propósito es "excesiva" según la Octava Enmienda.

...

*Dado que la función de la libertad bajo fianza es limitada, la fijación de fianza para cualquier acusado individual debe basarse en normas relevantes para el propósito de asegurar la presencia de ese acusado”.*⁵⁷⁷

Resulta importante destacar en un análisis sobre prestación de fianza el ingreso medio de los puertorriqueños. Según las estadísticas del Censo Federal de los Estados Unidos, en el 2016 el ingreso medio familiar de los puertorriqueños en Puerto Rico fue de \$19.606.00.⁵⁷⁸ Esto es menos de la mitad del ingreso medio familiar de los ciudadanos de Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos, que totalizó \$40.528.00 en el mismo año.⁵⁷⁹ Por lo tanto, en un país pobre como Puerto Rico, la imposición de fianza alta también podría constituir una acción discriminatoria. Como indica la profesora LÓPEZ VILANOVA:

*“[U]n sistema que hace accesible un derecho constitucional sólo a los que pueden pagarlo, evidencia estar en grave crisis de discrimen por razón económica”.*⁵⁸⁰ *El alto porcentaje de desempleo entre los sumariados, combinado con la necesidad de garantía colateral para conseguir una fianza comercial, tiene el efecto de producir un discrimen patente contra un gran sector de nuestra sociedad”.*⁵⁸¹

⁵⁷⁷ *Stack v. Boyle*, 342 U.S. 1, pág. 5 (1951)

⁵⁷⁸ U.S. Census Bureau, <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/pr/PST045217>

⁵⁷⁹ *Id.*

⁵⁸⁰ Jocelyn López Vilanova, *El Impacto de la Pobreza en la Administración de la Justicia Criminal*, 19 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 315, pág. 319 (1984 - 1985).

⁵⁸¹ *Id.* en la pág. 318.

El profesor estadounidense LAFAVE nos señala en su tratado de Procedimiento Criminal que “una fianza fijada en una cuantía más alta que la que razonablemente pueda ser calculada para lograr su propósito es excesiva bajo la Octava Enmienda”.⁵⁸² Si aplicamos ese estándar en Puerto Rico, podemos constatar que las fianzas se fijan no para lograr ese propósito, sino para lograr la detención de los acusados. Las cuantías muchas veces son tan altas que los acusados no pueden prestarla ni utilizando el beneficio de la prestación de sólo el 10% de la misma, ni a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio⁵⁸³. Un dato revelador es que, en la vista de determinación de causa para arresto, mejor conocida en Puerto Rico como “la regla 6”⁵⁸⁴, donde el magistrado

⁵⁸² LAFAVE, supra nota 444, en la pág. 681.

⁵⁸³ La Oficina de Servicios con Antelación a Juicio es un organismo adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de suministrar información verificada a los tribunales al momento de fijar o modificar la fianza o las condiciones que mejor puedan asegurar la presencia del imputado en las diversas etapas del juicio, velar por la seguridad pública y el derecho de acusado a obtener su libertad provisional. Esta Oficina tiene la tarea de investigar y evaluar a todo imputado de ciertos delitos y ofrecer sus recomendaciones en cuanto a la probabilidad de decretar la libertad provisional del imputado, en la alternativa o adicionalmente a la imposición de fianza.

⁵⁸⁴ Regla 6. Orden de Arresto a Base de una Denuncia: (a) Expedición de la orden. Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, con excepción de lo dispuesto en la Regla 7(a). La determinación de causa probable podrá estar fundada total o parcialmente en una declaración por información o creencia con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad. Cuando hubiere más de una persona afectada, el magistrado podrá expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable. El magistrado podrá también determinar causa probable para creer que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante él una denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algún testigo o testigos que tuvieren conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el magistrado, además de la expedición de la orden de arresto o citación, deberá levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y dirección del testigo o testigos examinados por él bajo juramento para determinar causa probable. En esta determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor. Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien se le imputa la comisión de un delito, aun cuando la sala donde actúe el magistrado no tenga competencia para la celebración del juicio contra el imputado. En tal caso, luego de expedir la orden de arresto y de cumplir con los trámites preliminares que se establecen en estas reglas, el magistrado ordenará que se transfiera el caso a la sala correspondiente para la continuación del proceso criminal. (b) Forma y requisitos de la orden de arresto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el título oficial del magistrado que la expidiere, dirigida para su ejecución y diligenciamiento a uno, varios o a cualquier funcionario del orden público. Ordenará el arresto de la persona o personas a quienes se les imputare el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilación innecesaria ante un magistrado, según se dispone en la Regla 22(a). La orden deberá, además, describir el delito imputado y deberá especificar el nombre de la persona o personas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, designará a dichas personas mediante la

decide imponer una fianza, la mayoría de los acusados de delito grave acuden sin abogado. Esto aumenta las posibilidades de que resulten detenidos. Como señala el tratadista LAFAVE *“si el acusado es representado por un abogado en su vista de fianza mejora grandemente sus posibilidades de que la fianza sea impuesta en una cuantía moderada o sea liberado bajo su propio reconocimiento”*.⁵⁸⁵

Para que tengamos una idea del problema, la Sociedad para la Asistencia Legal, que brinda representación legal al 75% de los acusados de delito grave en Puerto Rico, tiene como política no representar acusados en la vista para determinar causa probable. Al no tener asistencia de abogado, tampoco se le permite contrainterrogar testigos ni presentar argumentos a su favor para evitar la detención. En la práctica, los jueces no permiten que el acusado se exprese para evitar que se afecte su derecho a la no autoincriminación. A juicio de los tratadistas estadounidenses WHITEBREAD y SLOBOGIN *“el debido proceso de ley en su forma procesal probablemente requiera que para determinar la libertad antes de juicio de un acusado, que puede tener consecuencias a largo plazo, se tiene que llevar a cabo una vista, con asistencia de abogado y con derecho a contrainterrogar”*.⁵⁸⁶ (traducción nuestra). En Puerto Rico, en la mayoría de los casos esto no pasa, porque el acusado no tiene abogado o peor aún, el caso se somete sólo con declaraciones juradas de los testigos sin que estos estén presentes para ser contrainterrogados.

descripción más adecuada posible que las identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha y el sitio de su expedición y el monto de la fianza fijada por el magistrado que la expidió. (c) Si de la denuncia jurada o de la declaración o declaraciones juradas sometidas con la misma o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el magistrado determinare la inexistencia de causa probable, no podrá presentarse denuncia o acusación de clase alguna. En tal caso o cuando la determinación de causa probable fuere por un delito inferior o distinto a aquél que el fiscal entendiere procedente, éste podrá someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. El magistrado, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá prontamente expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados. (Enmendada en el 1966; 1986, ley 80; 1987, ley 29; 1990, ley 26). 34 L.P.R.A. Ap. II R 6.

⁵⁸⁵ LAFAVE, *supra* nota 444, en la pág. 678.

⁵⁸⁶ Whitebread y Slobogin, *supra* nota 263, en la pág. 589.

Tampoco se celebra una vista independiente para determinar la libertad o no del acusado, sino que en un mismo acto se establece la causa probable para arresto y se le impone una fianza, que como señalamos anteriormente, en la mayoría de los casos no puede prestar y termina en detención.

Todo esto aumenta las posibilidades de que se le encuentre causa probable para arresto y se le imponga una fianza excesiva para lograr su detención. Como señala LAFAVE si *“el acusado está representado por un abogado durante la vista de fianza aumentan grandemente sus oportunidades de que la fianza sea impuesta en una cantidad modesta o que se le libere bajo reconocimiento propio”*. Una de las razones por las que hace diferencia la presencia del abogado de defensa es que puede llevar a la atención del juez datos relevantes sobre el historial de su representado y al mismo tiempo vela porque este no se incrimine brindando información intentando obtener él mismo su libertad antes del juicio”.⁵⁸⁷ (traducción nuestra). LAFAVE incluso señala que en la vista donde se fija la fianza, el acusado tiene derecho a estar asistido de abogado conforme a la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos:

“Debido a que la representación de abogado puede tener tal impacto en la vista de fianza, hay mucho que decir sobre la afirmación de que el derecho a la asistencia de abogado de la Sexta Enmienda aplica desde ese momento. Tal conclusión es ciertamente coherente con la noción general, como lo ha expresado el Tribunal Supremo, de que este derecho comienza al “inicio de un procedimiento penal judicial contencioso”, en cuyo momento el “acusado se encuentra enfrentado con las fuerzas de la fiscalía de sociedad organizada, e inmerso en las complejidades del derecho penal sustantivo y procesal”. Además, encuentra un fuerte apoyo en Coleman v. Alabama donde la opinión de que una audiencia preliminar es una “etapa crítica” para el derecho a asistencia de abogado se basó en parte en el hecho de que “el abogado también puede ser influyente... en la formulación de argumentos efectivos

⁵⁸⁷ LaFave, *supra* nota 444, en la pág. 678.

para el acusado en asuntos tales como ... libertad bajo fianza ".⁵⁸⁸
(traducción nuestra).

También es importante resaltar que muchas veces los fiscales no acuden a la vista para determinar causa probable. Por lo que la imposición de la fianza queda totalmente al arbitrio del juez.

Que el por ciento de detenidos alcance casi el 80% de los ingresos nuevos a las cárceles, también nos puede dar a entender que en Puerto Rico se estén utilizando las fianzas en una cuantía excesiva como pena anticipada o como medida cautelar.⁵⁸⁹ Esto no iría tan solo en contravención con lo establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, sino también contra lo establecido en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *Bell v. Wolfish* donde se advierte que *no se puede utilizar la detención como castigo*. Hasta la fecha, ningún acusado puertorriqueño tampoco ha llevado un caso ante el foro estatal o federal haciendo estos planteamientos.

Con el aumento en la criminalidad en Puerto Rico durante la década de los setenta, comienzan a presentarse proyectos de ley dirigidos a enmendar la Constitución para derogar el derecho absoluto a la fianza, tal y como ya se expuso. Estos proyectos de ley para enmendar la Constitución habían sido fomentados –sin base científica- desde la década de los sesenta a través de editoriales, noticias sensacionalistas y columnas publicadas por los periódicos principales de la isla.⁵⁹⁰

5.9 Efectos de la detención preventiva.

El acusado que no puede prestar la fianza impuesta es transportado desde el tribunal por el agente investigador hasta un cuartel donde es

⁵⁸⁸ LaFave, *supra* nota 444, en las págs. 678 - 679.

⁵⁸⁹ Ver anexo: Informe anual de ingresos y egresos en las instituciones correccionales en Puerto Rico, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina de Desarrollo Programático, 2015 – 2016 y 2016 – 2017.

⁵⁹⁰ Véase: José Efraín Hernández Acevedo: *La Fianza en Puerto Rico: ¿obstáculo en la lucha contra la criminalidad?*, editorial Situm (2012).

fotografiado y se le toman las huellas dactilares. Este proceso es conocido como el fichaje. Luego es transportado hasta una institución carcelaria. Una vez en esta, un oficial correccional lo evalúa y lo clasifica conforme el monto de la fianza impuesta. Mientras más alta es la cuantía de fianza impuesta, se entiende que su peligrosidad es mayor, por lo que se clasifican de acuerdo con las custodias disponibles: mínima, mediana, máxima.

Durante las primeras cuarenta y ocho horas del ingreso, el sumariado es observado por personal médico y evaluado por un trabajador social. En el proceso médico se le hace un examen donde se le interroga sobre posibles condiciones médicas, para poder brindarle el tratamiento requerido. En cuanto a la evaluación social, se le permite hacer llamadas a familiares para notificarles sobre los días de visita. Su abogado también puede acudir a la institución penal para trabajar con el caso que tiene pendiente en el tribunal. Al detenido se le brinda consejería sobre el cambio que implica estar privado de la libertad, y como esto puede afectarlo psicológicamente.

Pasadas las primeras cuarenta y ocho horas, el detenido es ingresado en una sección del penal reservada para los que, al igual que él, no pudieron prestar la fianza impuesta. A estos los dividen dependiendo de la cuantía de la fianza impuesta. Aunque no juntan a los preventivos con el resto de la población penal, el tratamiento que reciben es el mismo. El tiempo que pase el acusado en detención preventiva podrá ser abonado a la sentencia que se dicte en su contra, de ser encontrado culpable. De ser declarado no culpable de los cargos imputados o si se desestima el caso, el acusado no tiene derecho a una acción por los daños y perjuicios contra el Estado.

Uno de los efectos que también sufre el detenido es que ve erosionada su presunción de inocencia, al estar tras los barrotes en espera del juicio. Aunque en teoría el acusado en detención sigue gozando de la presunción de inocencia, se han hecho estudios que han concluido que la misma se ve lacerada, aumentando así las posibilidades de resultar culpables. Sobre esto nos dice LÓPEZ VILANOVA:

“Estudios realizados en Puerto Rico y los Estados Unidos revelan una marcada probabilidad de ser encontrado culpable a cumplir en confinamiento al que está detenido sumariamente. Se ha señalado que más del sesenta por ciento (60%) de los sumariados a cumplir pasaran directamente de sumariados a sentenciados”.⁵⁹¹

⁵⁹¹ López Vilanova, *supra* nota 582 en la pág. 319.

CAPÍTULO 6

LA DETENCIÓN PREVENTIVA (“PRE-TRIAL DETENTION”) EN EL DERECHO PROCESAL PENAL ESTADOUNIDENSE EN LA ACTUALIDAD

6.1 Concepto.

La detención preventiva es una medida cautelar dentro del sistema procesal penal federal estadounidense.⁵⁹² Se regula a través de la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Reforma a la Fianza de 1984 y la jurisprudencia establecida sobre la libertad bajo fianza y la detención preventiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

La detención preventiva procederá si el juez o el magistrado *motu proprio* o a petición del Ministerio Público, determina que ninguna opción de libertad asegurará la comparecencia del acusado. PRINGLE señala que “*aunque la ley provee para que el juez pueda ordenar por sí la detención, esta autoridad es raramente ejercida*”.⁵⁹³ (traducción nuestra).

También podrá ordenar la detención del acusado si considera que este representa una amenaza para la seguridad de los demás o un peligro para la comunidad. La detención también procederá en casos donde se considere que existe un riesgo grave de que el acusado intente obstruir la justicia, o de que amenace, hiera, intimide o intente amenazar, herir o intimidar a un posible testigo o a algún miembro del jurado. La detención preventiva además procederá cuando el acusado no pueda prestar la fianza impuesta por el juez o magistrado.

⁵⁹² En los textos de Derecho Procesal Penal estadounidense se identifica como *pre-trial detention* o *preventive detention*.

⁵⁹³ “*While the Act does empower the court to enter a detention order on its own motion, this authority is rarely exercised.*” Bruce D. Pringle, *Bail and detention in federal criminal proceedings*, 22 Colo. Law. 913, pág. 918 (1993).

La Constitución de los Estados Unidos de América no establece un derecho absoluto a la fianza para los acusados, pero si establece es una prohibición a que se impongan fianzas excesivas. Esta disposición de la Constitución, contenida en la Octava Enmienda, ha sido extendida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a los Estados a través de la Decimocuarta Enmienda.⁵⁹⁴ ROONEY nos señala que la limitación a que ciertos acusados puedan quedar en libertad mientras esperan juicio no fue adoptada en la Constitución, pero a través de esta se dejó la puerta abierta para que se hiciera:

“El propósito principal de la fianza ha sido "garantizar el regreso del acusado en procedimientos posteriores". Sin embargo, no todos los acusados de un delito tienen derecho a ser liberados bajo fianza antes del juicio. La fianza puede ser denegada en casos de delitos capitales. Esta excepción a la libertad bajo fianza no es una excepción declarada constitucionalmente. No hay excepciones establecidas constitucionalmente a la Cláusula de Fianza de la Octava Enmienda. Dos años después de la redacción de la Constitución, el Congreso determinó que se debería crear una excepción a la fianza por delitos capitales. El Congreso tenía el poder de crear esta excepción porque la Constitución se redactó de manera amplia para que sus disposiciones fueran aplicables a situaciones imprevistas por sus redactores. Esta excepción fue designada por ley y se incorporó a las Reglas Federales de Procedimiento Penal”.⁵⁹⁵ (traducción nuestra).

⁵⁹⁴ “The command of the Eighth Amendment, banning “cruel and unusual punishments,” stems from the Bill of Rights of 1688. And it is applicable to the States by reason of the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment”. “El mandato de la Octava Enmienda, que prohíbe los “castigos crueles e inusuales”, se deriva de la Declaración de Derechos de 1688. Y es aplicable a los Estados en virtud de la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda”. (traducción nuestra) Robinson v. California, 370 U.S. 660, pág. 675 (1962); “Bail, of course, is basic to our system of law and the Eighth Amendment’s proscription of excessive bail has been assumed to have application to the States through the Fourteenth Amendment”. “La fianza, por supuesto, es parte de nuestro sistema legal y se ha asumido que la prohibición de fianzas excesiva de la Octava Enmienda se aplica a los Estados a través de la Enmienda Catorce.” (traducción nuestra) Schilb v. Kuebel, 404 U.S. 357, pág. 365 (1971).

⁵⁹⁵ “The primary purpose of bail has been “to ensure the return of the accused at subsequent proceedings.” Everyone charged with a crime, however, does not have the right to be released on bail prior to trial. Bail can be denied in capital cases. This exception to release on bail is not a constitutionally stated exception. There are no constitutionally stated exceptions to the Eighth Amendment Bail Clause. Two years after the drafting of the Constitution, Congress determined that an exception to bail should be created for capital offenses. Congress had the power to create this exception because the Constitution was drafted in a broad manner so that its provisions would be applicable to situations unforeseen by its drafters. This exception was designated by statute

Esta limitación sí fue adoptada en la Constitución de la mayoría de los Estados de la Unión, indicando que todos los acusados tendrían derecho a quedar en libertad bajo fianza, excepto los acusados de delitos capitales.

6.2 Fundamento.

Prácticamente desde sus inicios como nación, los Estados Unidos de América establecieron quienes podían quedar en libertad bajo fianza y quienes podían quedar detenidos. A través de la sección 33 de la Ley Federal de la Judicatura de 1789 se estableció que: “*en casos criminales, se admitirá la fianza, excepto cuando el castigo sea la muerte*”.⁵⁹⁶ (traducción nuestra). Poco después se aprobó la Octava Enmienda de la Constitución que estableció que las fianzas no serían excesivas:

*“El problema de la fianza se presentó ante el primer Congreso en la primavera y el verano de 1789 en dos paquetes legislativos separados: la cláusula de fianza excesiva como una de las enmiendas propuestas a la Constitución, y el artículo 33 de la Ley de la Judicatura que extiende el derecho absoluto a la fianza en todos los casos a nivel federal, excepto los capitales”.*⁵⁹⁷ (traducción nuestra).

Según el profesor FOOTE, la disposición constitucional prohibiendo las fianzas excesivas proviene del capítulo 39 de la Carta Magna de 1215.⁵⁹⁸ Esta fue creada después de que el rey Juan de Inglaterra violara un sin número de

and incorporated into the Federal Rules of Criminal Procedure.” Karen A. Rooney, *Detaining for danger under the federal and Massachusetts bail statutes: controversial but constitutional*, 22 New Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement 465, págs. 467 – 468 (1996).

⁵⁹⁶ “...in criminal cases, bail shall be admitted, except where the punishment may be death...” Federal Judiciary Act of 1789, §33

⁵⁹⁷ “The bail problem was before the first Congress in the spring and summer of 1789 in two separate legislative packages: the excessive bail clause as one of the proposed amendments to the Constitution, and section 33 of the Judiciary Act extending an absolute right to bail in all noncapital federal criminal cases.” Caleb Foote, *Commings Constitutional Crisis in Bail: I*, 113 U. Pa. L. Rev. 959, pág. 971 (1965)

⁵⁹⁸ Carta Magna de 1215, XXXIX. “Ningún hombre libre será tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o de alguna manera destruido; no Nos dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”.

leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, y sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, que enumera lo que después vinieron a ser considerados como derechos humanos.⁵⁹⁹ Según FOOTE: *“el reconocimiento de la importancia de la libertad bajo fianza para evitar el encarcelamiento previo al juicio fue un tema central en la larga lucha para implementar la promesa del famoso capítulo 39 de la Carta Magna de que “ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión... a menos que... “por la ley de la tierra”.”*⁶⁰⁰ (traducción nuestra). Destaca además Foote que es *“significativo que tres de los pasos más importantes en este proceso: la Petición de Derecho en 1628, la Ley de Habeas Corpus de 1679 y la Declaración de Derechos de 1689, surgieron de casos que alegaban una negación abusiva de libertad bajo fianza pendiente de juicio”.*⁶⁰¹ (traducción nuestra).

La disposición constitucional de los Estados Unidos adoptada mediante enmienda el 15 de diciembre de 1791 proviene de una disposición similar de la Declaración de Derechos de Inglaterra del 13 de febrero de 1689:

“La Carta de Derechos o Declaración de Derechos (en inglés Bill of Rights) es un documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo (Carlos II y Jacobo II). Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas «Declaraciones de Derechos», incluyendo: el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), la revolucionaria Declaración de los Derechos del Hombre y

⁵⁹⁹ Breve Historia de los Derechos Humanos, <http://mx.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html> (2018).

⁶⁰⁰ *“Recognition of the importance of bail in order to avoid pretrial imprisonment was a central theme in the long struggle to implement the promise of the famous 39th chapter of Magna Carta that “no freeman shall be arrested, or detained in prison . . . unless . . . by the law of the land.”*” Caleb Foote, *Commings Constitutional Crisis in Bail: I*, 113 U. Pa. L. Rev. 959, págs. 965 - 966 (1965).

⁶⁰¹ *“It is significant that three of the most critical steps in this process—the Petition of Right in 1628, the Habeas Corpus Act of 1679, and the Bill of Rights of 1689—grew out of cases which alleged abusive denial of freedom on bail pending trial.”* Id. en la pág. 966.

del Ciudadano (1789) y la internacional Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)”.⁶⁰²

Esta ley que “*declaraba los derechos y libertades de los súbditos ingleses, comenzaba denunciando los abusos y atropellos cometidos bajo el reinado de Jacobo II, junto con la ayuda de malos consejeros, jueces y ministros*”.⁶⁰³ Entre los abusos denunciados en la Declaración de Derechos estaba “*el que se habían exigido fianzas excesivas a personas procesadas en casos criminales, para eludir el beneficio de las leyes promulgadas para la libertad de los súbditos*”.⁶⁰⁴ Para desalentar esta práctica, la Declaración de Derechos estableció que, a partir de ese momento, no se exigirían fianzas ni multas excesivas. Cuando se planteó copiar dicha disposición sobre la fianza de la Declaración de Derechos de Inglaterra en la Constitución de los Estados Unidos, el único cuestionamiento provino del congresista Samuel Livermore, senador por el Estado de New Hampshire, quien cuestionaba qué se entendía por fianza excesiva.⁶⁰⁵

Sobre el funcionamiento del sistema de detenciones y fianzas bajo la Ley Federal de la Judicatura de 1789, nos dice Betsy Kushlan Wanger:

“En sus inicios el sistema de fianzas estadounidense tomó mucho de las prácticas tradicionales de la fianza británica. Hasta mediados del siglo XIX, la garantía desempeñó el papel central en el sistema de fianzas estadounidense. Una persona de buena reputación en la comunidad comparecería ante el tribunal para aceptar la custodia del acusado según los términos establecidos por el tribunal. Debido a que distintos acusados plantearon diferentes tipos y grados de riesgo, los tribunales a menudo

⁶⁰² Historia Contemporánea, Bill of Right, <http://historiacontemporanea09-10.blogspot.com.es/2009/10/bill-of-rights.html> (2009)

⁶⁰³ Declaración de Derechos (The Bill of Rights) del 13 de febrero de 1689.

⁶⁰⁴ *Id.*

⁶⁰⁵ “*The only recorded comment of a Member of Congress during debate on adoption of the “excessive bail” provision was that of Mr. Livermore. “The clause seems to express a great deal of humanity, on which account I have no objection to it; but as it seems to have no meaning in it, I do not think it necessary. What is meant by the terms excessive bail? Who are to be judges?”*” 1 Annals of Congress 754 (1789).

ajustaron las condiciones de la fianza a las características individuales del acusado y del presunto delito. Aunque los tribunales tenían amplia autoridad para negar la libertad bajo fianza a los acusados de delitos con pena capital, generalmente liberaban a aquellos que conseguían a alguien que los custodiara antes del juicio.

Debido a la creciente dificultad de los acusados para encontrar custodios aceptables ante los tribunales, el sistema de garantía personal evolucionó gradualmente hacia un sistema de fianzas comercial. La transformación de garantías personales a fianzas comerciales redujo sustancialmente la capacidad de los tribunales para evaluar los riesgos de la libertad provisional. El compromiso pecuniario de un agente de fianzas comercial no necesariamente refleja la participación del acusado en comparecer en el juicio o dejar de participar en actividades delictivas. A lo largo de este período, la autoridad judicial para negar la libertad bajo fianza también fue disminuyendo a medida que se redujo drásticamente el número de delitos penados con la muerte. Sin la garantía, las opciones de supervisión proporcionadas por las garantías personales y sin una amplia autoridad legal para denegar la fianza, muchos funcionarios judiciales establecieron condiciones financieras para la libertad que excedían la capacidad de pago del acusado, provocando de manera indirecta su detención preventiva.”⁶⁰⁶ (traducción nuestra).

⁶⁰⁶ “The early American bail system borrowed heavily from traditional British bail practices. Until the midnineteenth century, the surety played the central role in the American bail system. A reputable person from the community would appear before the court to agree to take custody of the defendant under terms set by the court. Because different defendants posed different types and degrees of risk, courts often adjusted bail conditions to the individual characteristics of the defendant and of the alleged crime. Although courts had broad authority to deny bail for defendants charged with capital offenses, they would generally release in a form of pretrial custody defendants who were able to find willing custodians. Due to the increasing difficulty defendants confronted in locating custodians known and acceptable to the courts, the personal surety system gradually evolved into a commercial bondsman system. The transformation from personal sureties to commercial bail bondsmen substantially reduced the courts' ability to assess the risks of pretrial release. The pecuniary commitment of a commercial bail bondsman did not necessarily reflect the defendant's own stake in appearing at trial or in ceasing to engage in criminal activity. Throughout this period, the judicial authority to deny bail was also diminishing as the number of crimes punishable by death was drastically reduced. Without the secure, supervised release options provided by personal sureties and without broad legal authority to deny bail, many judicial officers set financial conditions of release that exceeded the defendant's ability to pay, effectively ordering sub rosa pretrial detention.” Betsy Kushlan Wagner, *Limiting Preventive Detention Through Conditional Release: The Unfulfilled Promise of the 1982 Pretrial Services Act*, 97 Yale L.J. 320, págs. 323 - 324 (1987).

El profesor HOWE resalta que, a pesar de sus más de doscientos años de vigencia, la Octava Enmienda de la Constitución Federal prácticamente no se ha desarrollado, a diferencia de otros derechos que protegen a los acusados en los Estados Unidos:

“La prohibición de la Octava Enmienda sobre la "fianza excesiva" es quizás la menos desarrollada de las cláusulas criminales en la Carta de Derechos. Las razones no tienen nada que ver con la escasez de quejas sobre una fianza excesiva en los tribunales de primera instancia. En un momento cualquiera, cerca de 500,000 personas acusadas penalmente languidecen en cárceles en los Estados Unidos, y no solo abogados de defensa en casos individuales, sino también profesores de Derecho que han estudiado un espectro más amplio de estos casos sostienen que muchas de estas detenciones son innecesarias. Sin embargo, las reclamaciones sobre fianza excesiva prácticamente no reciben audiencia en la Corte Suprema, a diferencia de reclamaciones, por ejemplo, sobre invasiones no razonables a la privacidad por parte de la policía, interrogatorios impropios por parte de la policía, o castigos crueles e inusitados. El Tribunal no ha emitido una opinión donde se aplique la Cláusula de Fianza Excesiva en más de 25 años y solo ha emitido otras dos en toda su historia, ambos a principios de los años cincuenta.”⁶⁰⁷ (traducción nuestra)

Como destaca el profesor HOWE, fue a mediados del siglo XX, en los inicios de la Guerra Fría, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió dos casos donde comenzó a interpretar la Octava Enmienda. Las doctrinas establecidas en estos casos luego sirvieron para la redacción de dos estatutos federales que regularían específicamente la libertad bajo fianza y las detenciones. El primero de estos casos fue *Stack v. Boyle* de 1951, donde el Tribunal Supremo interpretaría qué constituye una fianza excesiva.

⁶⁰⁷ “The Eighth Amendment prohibition on “excessive bail” is perhaps the least developed of the criminal clauses in the Bill of Rights. The reasons have nothing to do with a scarcity of complaints about excessive bail in the trial courts. At any given time, about 500,000 criminally accused persons languish in jail in the United States, and not only defense lawyers in individual cases, but legal scholars who have studied the broader spectrum of cases regularly contend that many of these detentions are unnecessary. Yet, claims of excessive bail virtually never receive an airing in the Supreme Court, unlike claims, for example, about unreasonable police invasions of privacy, improper police interrogations, or cruel and unusual punishments. The Court has not issued an opinion applying the Excessive Bail Clause in more than 25 years and has rendered only two others in its history, both in the early 1950s.” Scott W. Howe, *The implications of incorporating the Eighth Amendment prohibition on excessive bail*, 43 Hofstra L. Rev. 1039, págs. 1039 - 1040 (2015).

En este caso, un grupo de extranjeros fueron acusados de violentar las disposiciones de la *Ley Smith*, un estatuto que castigaba a aquellos que abogaran por el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos.⁶⁰⁸ A los acusados se le fijó una fianza de \$50,000, por lo que estos radicaron mociones para que se les redujera la fianza, alegando que cuantía “*era excesiva al amparo de la Octava Enmienda*”.⁶⁰⁹ (traducción nuestra)

Como argumentos a su favor, los acusados “*presentaron pruebas de sus recursos financieros, de sus relaciones familiares, de su estado de salud, de sus antecedentes penales y otra información*”⁶¹⁰ (traducción nuestra). Por su parte, el Gobierno justificó su acción alegando que otras personas que habían sido acusadas por violaciones a la misma ley habían violentado las condiciones de la fianza. Se llevó a cabo una audiencia, pero el juez de distrito se negó a reducir la fianza. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Esto llevó a los acusados a radicar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En su decisión, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos explicó que: “*desde la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1789 hasta las Reglas Federales de Procedimiento Penal vigentes en aquel momento, la ley federal ha estipulado inequívocamente que una persona arrestada por un delito no capital se le debe permitir quedar en libertad bajo fianza*”.⁶¹¹ (traducción nuestra) Señala

⁶⁰⁸ “*The Smith Act (Alien Registration Act of 1940) is a federal statute of the United States that imposes criminal penalties for those who advocate the overthrow of the government. This Act also required all adult residents that are “non-citizens” to register with the government of the United States*”. La Ley Smith (Ley de Registro de Extranjeros de 1940) “*es un estatuto federal de los Estados Unidos que impone sanciones penales a quienes abogan por el derrocamiento del gobierno. Esta Ley también exigía que todos los residentes adultos que son “no ciudadanos” se registren en el gobierno de los Estados Unidos*”. (traducción nuestra). Tomado de: <http://totallyhistory.com/smith-act-of-1940/>

⁶⁰⁹ “*Petitioners moved to reduce bail on the ground that bail as fixed was excessive under the Eighth Amendment.*” *Stack v. Boyle*, *supra* nota 579, en la pág. 3.

⁶¹⁰ “*In support of their motion, petitioners submitted statements as to their financial resources, family relationships, health, prior criminal records, and other information.*” *Id.*

⁶¹¹ “*From the passage of the Judiciary Act of 1789, 1 Stat. 73, 91, to the present Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 46(a)(1), federal law has unequivocally provided that a person arrested for a noncapital offense shall be admitted to bail.*” *Stack v. Boyle*, *supra* nota 579, en la pág. 4.

el Tribunal que hay un derecho tradicional a estar en libertad antes de la condena ya que esto *“permite al acusado la preparación de una defensa sin impedimentos, y sirve para evitar la imposición de la pena antes de la condena, o sea, una pena anticipada”*.⁶¹² El Tribunal añade que *“si no se conserva este derecho a quedar en libertad bajo fianza antes del juicio, la presunción de inocencia, alcanzada luego de siglos de lucha, perdería su significado”*.⁶¹³ (traducción nuestra) Pero aclara que *“la libertad antes del juicio está condicionada a que el acusado brinde suficiente garantía de que estará presente durante el juicio y que se someterá a la condena de ser encontrado culpable”*.⁶¹⁴ (traducción nuestra) Por otro lado el Tribunal Supremo señala que *“una fianza establecida en una cifra superior a una cantidad razonablemente calculada para cumplir este propósito es excesiva según la Octava Enmienda”*.⁶¹⁵ (traducción nuestra)

Dado que la función de la libertad bajo fianza es limitada, señala el Tribunal Supremo que *“la fijación de una fianza para cualquier acusado debe estar basada en normas relevantes al propósito de asegurar la presencia de ese acusado.”*⁶¹⁶

En este caso los peticionarios se enfrentaban a un encarcelamiento de no más de cinco años y a una multa no mayor de \$10,000, por lo que el Tribunal Supremo entendió que: *“la suma impuesta como fianza era mucho mayor que lo*

⁶¹² *“This traditional right to freedom before conviction permits the unhampered preparation of a defense, and serves to prevent the infliction of punishment prior to conviction.”* Id.

⁶¹³ *“Unless this right to bail before trial is preserved, the presumption of innocence, secured only after centuries of struggle, would lose its meaning.”* Id.

⁶¹⁴ *“The right to release before trial is conditioned upon the accused's giving adequate assurance that he will stand trial and submit to sentence if found guilty.”* Id.

⁶¹⁵ *“Bail set at a figure higher than an amount reasonably calculated to fulfill this purpose is “excessive” under the Eighth Amendment.”* Id. en la pág. 5.

⁶¹⁶ *“Since the function of bail is limited, the fixing of bail for any individual defendant must be based upon standards relevant to the purpose of assuring the presence of that defendant.”* Id.

*que de ordinario se impone por delitos con penas similares, y que en este caso no había pruebas que justificaran tal acción”.*⁶¹⁷

El Tribunal Supremo determinó que, teniendo en cuenta la acusación en este caso, *“se puede determinar que la cuantía de la fianza impuesta es inusualmente alta y constituye un acto arbitrario”.*⁶¹⁸ Señala además que: *“permitir dicha conducta inyectaría en su propio sistema de gobierno los mismos principios del totalitarismo que el Congreso estaba tratando de evitar al aprobar el estatuto bajo el cual los peticionarios han sido acusados”.*⁶¹⁹

El Tribunal Supremo destaca que, en caso de que se requiriera una fianza *“por un monto mayor al normalmente fijado, se debe celebrar una vista donde se dilucide la prueba que lo justifica y se puedan proteger los derechos constitucionales del acusado”.*⁶²⁰ El Tribunal concluyó la fianza *“no se fijó utilizando los métodos apropiados”.*⁶²¹

El Tribunal Supremo dictó su sentencia anulando la del Tribunal de Apelaciones, y remitiendo el caso al Tribunal de Distrito, para que procediera de conformidad con su decisión.

La importancia de este caso radica en que los tribunales de los Estados Unidos no pueden prefijar la cuantía de la fianza por delito o por precedentes y

⁶¹⁷ *“Upon final judgment of conviction, petitioners face imprisonment of not more than five years and a fine of not more than \$10,000. It is not denied that bail for each petitioner has been fixed in a sum much higher than that usually imposed for offenses with like penalties, and yet there has been no factual showing to justify such action in this case.”* Stack v. Boyle, *supra* nota 579, en la pág. 5.

⁶¹⁸ *“To infer from the fact of indictment alone a need for bail in an unusually high amount is an arbitrary act.”* *Id.* en la pág. 6.

⁶¹⁹ *“Such conduct would inject into our own system of government the very principles of totalitarianism which Congress was seeking to guard against in passing the statute under which petitioners have been indicted.”* *Id.*

⁶²⁰ *“If bail in an amount greater than that usually fixed for serious charges of crimes is required in the case of any of the petitioners, that is a matter to which evidence should be directed in a hearing so that the constitutional rights of each petitioner may be preserved.”* *Id.*

⁶²¹ *“The Court concludes that bail has not been fixed by proper methods in this case...”* *Id.* en la pág. 7.

están obligados a analizar las circunstancias de cada acusado para hacerlo. De lo contrario estarían violando el debido proceso de ley.

Un año después de haber decidido *Stack v. Boyle*, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos trata otro tema relacionado con los detenidos. En el caso de *Carlson v. Landon* de 1952, el tribunal justifica ciertas detenciones sin derecho a quedar en libertad bajo fianza.⁶²² También aprovecha para explicar los orígenes y las limitaciones del derecho a la fianza.

En este caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos procedió a revisar unas sentencias de cuatro peticionarios que habían sido arrestados bajo órdenes, emitidas después de la promulgación de la *Ley de Seguridad Interna de 1950*, acusados bajo el pretexto de ser extranjeros y miembros del Partido Comunista de los Estados Unidos. Las órdenes establecían que se les mantuviera bajo custodia hasta que se determinara su deportación. Los acusados radicaron peticiones de hábeas corpus, alegando “*que la detención sin fianza violaba la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda y la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y que la sección 20 de la Ley de Inmigración también era inconstitucional*”.⁶²³ (traducción nuestra)

El gobierno presentó declaraciones defendiendo sus órdenes de detención alegando que habían: “*motivos razonables para creer que la liberación de los peticionarios sería perjudicial para el interés público y pondría en peligro el bienestar y la seguridad de los Estados Unidos*”⁶²⁴ (traducción nuestra). Los peticionarios replicaron los planteamientos del Gobierno, alegando “*que llevaban muchos años de residencia en el país, y que no había fundamentos para creer que iban a cometer una acción contraria al bienestar público durante la*

⁶²² *Carlson v. Landon*, 342 U.S. 524 (1952).

⁶²³ “*Petitions for habeas corpus were promptly filed alleging that the detention without bond was in violation of the Due Process Clause of the Fifth Amendment and the Eighth Amendment to the Constitution of the United States...*” *Id.* en la pág. 529.

⁶²⁴ “*Respondent filed returns defending his orders of detention on the ground that there was reasonable cause to believe that petitioners' release would be prejudicial to the public interest and would endanger the welfare and safety of the United States.*” *Id.*

*tramitación de su proceso de deportación*⁶²⁵ (traducción nuestra). También destacaron en su alegación *“su integración en la vida comunitaria a través del matrimonio y conexiones familiares, y su adherencia meticulosa a los términos de una fianza en un caso anterior donde también había habido cargos de deportación”*⁶²⁶ (traducción nuestra). Al considerar estas alegaciones, el Tribunal sostuvo la determinación de no concederles la libertad bajo fianza, ya que a su juicio el Director del Servicio de Inmigración y Naturalización no había abusado de su discreción.

El Tribunal Supremo, al resolver el caso, determinó que los extranjeros, mientras no logren obtener y mantener la ciudadanía por naturalización, *“están sujetos al poder plenario del Congreso para expulsarlos bajo el derecho soberano de determinar qué ciudadanos pueden permanecer dentro de sus fronteras y quiénes no”*.⁶²⁷ (traducción nuestra)

El Tribunal Supremo también sostuvo la determinación de no conceder la libertad bajo fianza de estos acusados. Concluyó el Tribunal que la decisión no fue arbitraria ni caprichosa, ni un abuso de poder, y que no se violó la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda. Mantuvo el Tribunal que la *“discrecionalidad sobre la libertad bajo fianza otorgada al Secretario de Justicia”*⁶²⁸ por la Ley de Seguridad Interna fue lo suficientemente amplia como

⁶²⁵ *“These returns were countered by petitioners with allegations of their many years’ residence spent in this country without giving basis for fear of action by them inimical to the public welfare during the pendency of their deportation proceedings...” Carlson v. Landon, supra nota 624, en la pág. 529.*

⁶²⁶ *[T]heir integration into community life through marriage and family connections, and their meticulous adherence to the terms of previous bail, allowed under a former warrant charging deportability.” Id. en la 530.*

⁶²⁷ *“...as aliens fail to obtain and maintain citizenship by naturalization, they remain subject to the plenary power of Congress to expel them under the sovereign right to determine what noncitizens shall be permitted to remain within our borders.” Id. en la pág. 534.*

⁶²⁸ *“Attorney General”*: es el nombre que se le otorga en los Estados Unidos de América al Ministro de Justicia o Secretario de Justicia como se le designa a su equivalente en Puerto Rico.

*para justificar la detención de los peticionarios sin fianza como una amenaza para el interés público*⁶²⁹ (traducción nuestra).

En cuanto a la alegación de que se violentó la disposición de la Octava Enmienda, el Tribunal determinó que, en este tipo de casos, no se requiere que se permita la libertad bajo fianza.

El Tribunal Supremo aprovechó la oportunidad para explicar los orígenes del derecho a la libertad bajo fianza y sus limitaciones. Dice el Tribunal que la cláusula de fianza: *“fue tomada, con ligeros cambios, de la Ley de la Carta de Derechos de Inglaterra”*⁶³⁰ (traducción nuestra). Destaca el Tribunal que: *“en Inglaterra, nunca se pensó que esa cláusula era para otorgar el derecho a la libertad bajo fianza en todos los casos, sino simplemente que la fianza no sea excesiva en los casos en que sea apropiado conceder la fianza”*⁶³¹ (traducción nuestra). Señala el Tribunal que: *“cuando esta cláusula fue transferida a la Declaración de Derechos de EE.UU., no se dijo nada diferente a este concepto”*⁶³² (traducción nuestra). Sobre los poderes del Congreso para regular la libertad bajo fianza y la Octava Enmienda, dijo el Tribunal:

“La Octava Enmienda no ha impedido que el Congreso defina los tipos de casos en los que se permitirá quedar en libertad bajo fianza en este país. Por lo tanto, fianza no es obligatoria en casos criminales donde la pena pueda ser la muerte. De hecho, el mismo lenguaje de la Enmienda no dice que todos los arrestos deben tener la oportunidad de prestar fianza. Creemos,

⁶²⁹ “[T]he discretion as to bail in the Attorney General was certainly broad enough to justify his detention to all these parties without bail as a menace to the public interest.” *Carlson v. Landon*, *supra* nota 624, en la pág. 541.

⁶³⁰ “The bail clause was lifted, with slight changes, from the English Bill of Rights Act.” *Id.* en la pág. 545.

⁶³¹ “In England, that clause has never been thought to accord a right to bail in all cases, but merely to provide that bail shall not be excessive in those cases where it is proper to grant bail.” *Id.*

⁶³² “When this clause was carried over into our Bill of Rights, nothing was said that indicated any different concept.” *Id.* en la pág. 545.

*claramente, que la Octava Enmienda no exige que se permita la libertad bajo fianza en las circunstancias de estos casos*⁶³³ (traducción nuestra).

A nuestro entender, la importancia de este caso radica en que el Tribunal Supremo valida las limitaciones a la libertad bajo fianza. Para hacerlo, va hasta los orígenes de este derecho en la Ley de la Carta de Derechos de Inglaterra de 1689, para resaltar que el mismo siempre ha tenido limitaciones, y que en casos extraordinarios se justifica la detención del acusado.

El proceso establecido en la Ley Federal de la Judicatura de 1789 se mantuvo vigente hasta el 22 de junio de 1966, cuando se aprueba la Ley de Reforma de la Fianza⁶³⁴ para revisar las prácticas de libertad bajo fianza existentes en los tribunales de los Estados Unidos. Como señala LAFAVE, esta legislación *“sirvió como un importante modelo a seguir para las reformas que se llevaron a cabo en los estados*⁶³⁵ (traducción nuestra). Su tema central, dice LaFave, fue *“que el reconocimiento personal era el método preferido de libertad provisional en lugar de la tradicional fianza de dinero como un requisito previo para la liberación*⁶³⁶ (traducción nuestra).

PRINGLE, por su parte, catalogó la ley como una revolucionaria:

“[L]a Ley de reforma de la fianza de 1966, fue por derecho propio una legislación revolucionaria. Antes de 1966, los tribunales federales dependían casi exclusivamente de fianza monetarias como medio para asegurar la

⁶³³ *“The Eighth Amendment has not prevented Congress from defining the classes of cases in which bail shall be allowed in this country. Thus, in criminal cases, bail is not compulsory where the punishment may be death. Indeed, the very language of the Amendment fails to say all arrests must be bailable. We think, clearly, here that the Eighth Amendment does not require that bail be allowed under the circumstances of these cases.”* *Carlson v. Landon*, *supra* nota 624, en las págs. 545 - 546.

⁶³⁴ Bail Reform Act of 1966.

⁶³⁵ *“The federal Bail Reform Act of 1966, which governed bail and release practices in the federal courts for several years, also served as an important model for reform legislation in the states.”* LaFave, *supra* nota 444, en la pág. 676.

⁶³⁶ *“Its central theme was the personal recognizance is the preferred method of pretrial release in lieu of the traditional reliance upon money bail as a prerequisite to release.”* *Id.* en la pág. 676.

*presencia de un acusado en los procedimientos judiciales. Sin embargo, esta práctica tuvo el efecto inaceptable de detener a muchos acusados simplemente porque no pudieron depositar la fianza. La Ley de 1966 estableció condiciones no monetarias que podrían imponerse en relación con la libertad antes del juicio, lo que razonablemente garantizaría la comparecencia del acusado en los procesos judiciales*⁶³⁷ (traducción nuestra).

Por otro lado, PRINGLE señala que uno de los defectos principales de la ley del 1966 era que no contaba con la peligrosidad como causa para ordenar la detención de un acusado, y que esto llevaba a los jueces a llevar a cabo procedimientos inaceptables a la hora de ordenar la libertad o detención de un acusado:

*“La falta de un procedimiento para detener a personas por constituir un peligro para la comunidad obligó a los tribunales a adoptar dos procedimientos alternativos inaceptables. Algunos jueces aplicaron la legislación de 1966 literalmente y liberaron a los acusados peligrosos en condiciones que razonablemente garantizaran que regresaran para los procedimientos judiciales. Otros jueces que no estaban dispuestos a ignorar la seguridad de la comunidad simplemente encontrarían alguna razón, como el riesgo de fuga, para detener al acusado, generalmente imponiendo una fianza monetaria alta*⁶³⁸ (traducción nuestra).

⁶³⁷ “[T]he Bail Reform Act of 1966, was in its own right a revolutionary piece of legislation. Prior to 1966, the federal courts relied almost exclusively on monetary bonds as the means for assuring a defendant's presence for court proceedings. However, this practice had the unacceptable effect of detaining many defendants simply because they were unable to post bond. The 1966 Act established nonmonetary conditions that could be imposed in connection with pretrial release which would reasonably assure the defendant's appearance for court proceedings.” Pringle, *supra* nota 595, en la pág. 913.

⁶³⁸ “The lack of any procedure for detaining persons on the basis of their danger to the community forced courts to adopt one of two unacceptable alternative procedures. Some judges applied the 1966 legislation literally and released dangerous defendants on conditions that would reasonably assure that they would return for court proceedings. Other judges who were not inclined to ignore the safety of the community would simply find some reason, such as flight risk, to detain the defendant, usually by imposing a high monetary bond.” *Id.* en la pág. 913.

Para SALTZBURG y CAPRA, el propósito de *Ley de Reforma de la Fianza de 1966* fue el de “evitar que los acusados tuviesen tramitar su fianza a través de fiadores”⁶³⁹ (traducción nuestra). Sobre el propósito de la ley, nos dice KUSHLAN WANGER:

*“Diseñada principalmente para reducir la excesiva dependencia judicial de la fianza de alta cuantía, la Ley de Reforma de Fianzas de 1966 puso renovado énfasis en la supervisión de custodia para facilitar una liberación segura. Esta Ley requería que los funcionarios judiciales consideraran una gran cantidad de opciones de condiciones de liberación y que liberaran a los sospechosos bajo condiciones menos restrictivas que razonablemente garantizarían su comparecencia en el juicio”.*⁶⁴⁰ (traducción nuestra).

JOHNSTON, por su parte, destaca que la Ley de Reforma de la Fianza de 1966, además de buscar una alternativa a la fianza monetaria que discriminaba contra el pobre, también vino para evitar la imposición de fianzas altas cuyo objetivo era detener a acusados peligrosos:

“La fianza en efectivo se condenó, no solo porque discriminaba a los pobres, sino también porque indirectamente permitía que los tribunales establecieran una fianza inasequible sin explicación, simplemente para detener preventivamente a los acusados consideraba peligrosos. La Ley de reforma de la fianza de 1966 intentó rectificar esta situación discriminatoria creando una presunción que favorecía la liberación de los

⁶³⁹ “The purpose of the 1966 Act was to encourage federal courts to release accused persons without requiring them to deal with bail bondsmen.” Stephen A. Saltzburg y Daniel J. Capra, *American Criminal Procedure: cases and comentary*, pág. 1036 (2014)

⁶⁴⁰ “Designed primarily to reduce the excessive judicial reliance on high money bail, the Bail Reform Act of 1966 placed renewed emphasis on custodial supervision to facilitate safe release. This Act required judicial officers to consider a host of release conditions and to release suspects under the least restrictive conditions that would reasonably assure their appearance at trial.” Betsy Kushlan Wagner, *Limiting Preventive Detention Through Conditional Release: The Unfulfilled Promise of the 1982 Pretrial Services Act*, 97 Yale L.J. 320, pág. 326 (1987)

acusados bajo propio reconocimiento. La imparcialidad hacia el acusado era la principal preocupación".⁶⁴¹ (traducción nuestra).

Otro objetivo de la Ley de Reforma de la Fianza de 1966 fue la de aplacar el hacinamiento carcelario que había en esa época:

"Las reformas de la fianza de esta época respondieron al horroroso hacinamiento y las condiciones en las cárceles de las ciudades, los atrasos en el sistema de justicia penal resultaron en detenciones prolongadas y la sensación de que miles de estos acusados fueron detenidos antes del juicio únicamente por su pobreza. Por lo tanto, un enfoque principal de estas reformas, incluida la Ley de Reforma de la Fianza de 1966, fue la liberación creciente en el reconocimiento "basado en información sobre los lazos de la comunidad de los acusados" y el uso de la libertad condicional en lugar de la fianza monetaria para garantizar la asistencia a los tribunales".⁶⁴² (traducción nuestra).

La ley enmendaba el capítulo 207 del título 18 de las *Leyes de los Estados Unidos sobre Crímenes y Procedimiento Criminal*, para establecer la liberación de acusados de delitos que no conllevaran la pena de muerte. Se estableció que toda persona acusada de un delito que no fuese castigado con la muerte, debía comparecer ante un funcionario judicial para que fuera liberado en lo que esperaba su juicio. La libertad podía ser bajo reconocimiento personal o

⁶⁴¹ "Cash bail was condemned not only because it discriminated against the poor, but because it indirectly allowed courts to set unaffordable bail without explanation simply to preventively detain defendants perceived as dangerous by the court. 158 The Bail Reform Act of 1966 attempted to rectify this discriminatory situation by creating a presumption favoring release of defendants on their own recognizance (ROR). Fairness to the individual was the paramount concern." Alexia J. Johnston, *United States v. Salerno: Preventive Detention — coming of age*, 1988 Det. C.L. Rev. 135, págs.152 – 153 (1988).

⁶⁴² "This provided much of the impetus for the 1966 reform of the federal bail provisions. The bail reforms of this era responded to the horrendous overcrowding and conditions in city jails, backlogs in the criminal justice system resulting in extended detentions, and the sense that thousands of these defendants were being detained pretrial solely because of their poverty. Hence, a main focus of these reforms, including the 1966 Bail Reform Act, was increasing release on recognizance "based on information about defendants' community ties" and using conditional release rather than money bail to ensure attendance in court." Adam Klein & Benjamin Wittes, *Preventive Detention in American Theory and Practice*, 2 Harv. Nat'l Security J. 85, pág.128 (2011).

mediante la prestación de una fianza no asegurada, cuya cuantía debía establecer el oficial judicial, a menos que este determinare, en el ejercicio de su discreción, que dicha liberación no asegura razonablemente la comparecencia de la persona cuando le sea requerida. La ley también facultaba al funcionario judicial⁶⁴³ a imponer una condición o combinación de condiciones para otorgarle la libertad.⁶⁴⁴

La ley establecía que, al momento de señalar las condiciones para la liberación, se tendría en cuenta la naturaleza y circunstancias del delito, el peso de la prueba contra el acusado, sus lazos familiares, su empleo, sus recursos financieros, su carácter y condición mental, el tiempo que lleva viviendo en su comunidad, su record penal, y su registro de comparecencias a procedimientos judiciales o si se ha escapado para evitar un enjuiciamiento o su falta de comparecencia a procedimientos judiciales.

Al autorizar la liberación del acusado, el oficial judicial tenía que emitir una orden detallando las condiciones impuestas. La orden también debía advertir al acusado de las sanciones que conllevaría las violaciones a las condiciones de su liberación, y que se emitiría una orden de arresto inmediatamente cuando ocurriera una violación.

La ley además establecía un proceso de revisión en caso de que el acusado en un término de veinticuatro horas no pudiera cumplir con las

⁶⁴³ Para efectos de esta ley funcionario judicial era cualquier persona o tribunal autorizado de conformidad con la sección 3041 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, con autoridad para liberar o detener a una persona antes del juicio o la sentencia o pendiente apelación en un tribunal de los Estados Unidos, y cualquier juez del Tribunal de Sesiones Generales de Washington, D.C.

⁶⁴⁴ 1. Poner al acusado bajo la custodia de una persona u organización designada que acepte supervisarlo. 2. Ponerle restricciones de viaje, de asociación o de lugar de residencia durante el periodo en que se encuentre en libertad. 3. Requerirle la prestación de una cuantía de fianza en específico y depositar en corte el 10 por ciento de esa cuantía en dinero en efectivo o utilizando otra garantía. El depósito se devolvería una vez que se cumplan las condiciones de la libertad. 4. Podría requerir una fianza garantizada o el depósito de dinero efectivo en lugar de esta. 5. También podía imponer cualquier otra condición que considerara razonablemente necesaria para asegurar la comparecencia del acusado, incluyendo exigirle que permanezca bajo custodia durante ciertas horas.

condiciones impuestas. El funcionario judicial tenía que exponer por escrito los motivos por los que las estaba imponiendo. Asimismo, establecía un proceso de apelación ante foros de mayor jerarquía, de no estar de acuerdo el acusado con las condiciones impuestas.

El estatuto alertaba que las condiciones que se impusieron para conceder la libertad del acusado se podrían modificar en cualquier momento para imponer adicionales o diferentes. Además, se alertaba que los trámites que se realizaran al amparo de esta ley no necesitaban cumplir con las reglas de admisibilidad de la prueba.

La Ley de Reforma de la Fianza de 1966 además establecía un proceso similar para acusados que ya fueran convictos y hubiesen presentado una apelación o un recurso de revisión ante un Tribunal Apelativo. El proceso también era el mismo para testigos que se pensara que no iban a asistir al tribunal a declarar. A estos se les podía imponer las mismas condiciones de los acusados. Pero advertía que ningún testigo sería detenido si era incapaz de cumplir con cualquier condición para su liberación, si el testimonio de dicho testigo podía garantizarse adecuadamente mediante una deposición.

Por último, la ley advertía de que el tiempo que pasara el acusado detenido, se le acreditaría en su sentencia, de ser encontrado culpable.

Durante el periodo de vigencia de la Ley de Reforma a la Fianza de 1966, el Tribunal Supremo decidió el caso de *Bell v. Wolfish* de 1979.⁶⁴⁵ En este caso, el Tribunal Supremo examinó los derechos constitucionales de los detenidos en prisión preventiva. También determinó cuáles son las condiciones debe de haber para que la detención no se considere una pena anticipada. El Tribunal añade que, conforme a la cláusula de debido proceso, un detenido no puede ser castigado antes de ser juzgado. La razón según el Tribunal es la siguiente:

⁶⁴⁵ *Bell v. Wolfish*, 441 U.S. 520 (1979).

*“Una persona legalmente en prisión preventiva no ha sido declarada culpable de ningún delito. Solo ha tenido una "determinación judicial de causa probable como requisito previo para la restricción extendida de su libertad después del arresto. Y si fue detenido por una presunta violación de una ley federal, también debe haber tenido una vista de libertad bajo fianza. En tales circunstancias, el Gobierno puede detenerlo para garantizar su presencia en el juicio y puede someterlo a las restricciones y condiciones del centro de detención, siempre que esas condiciones y restricciones no constituyan un castigo o violen la Constitución”.*⁶⁴⁶

El Tribunal Supremo valida en su decisión que se impongan restricciones durante la detención, y que estas no equivalen a un castigo:

*“No todas las restricciones impuestas durante la detención preventiva equivalen a un castigo en el sentido constitucional. Una vez que el Gobierno ha ejercido su autoridad para detener a una persona en espera de juicio, obviamente tiene derecho a llevar a cabo todas las acciones necesarias para efectuar la detención. Tradicionalmente, esto ha significado el confinamiento en una instalación que, no importa cuán moderna o anticuada sea, resulta en la restricción del movimiento de un detenido. Ya sea que se llame una cárcel, una prisión o un centro de custodia, su propósito es detener. La pérdida de la libertad de poder elegir y la privacidad son incidentes inherentes de confinamiento en una cárcel. Y el hecho de que tal detención interfiera con el deseo comprensible del detenido de vivir lo más cómodamente posible y con la menor restricción posible durante el confinamiento no convierte las condiciones o restricciones de la detención en castigo”.*⁶⁴⁷

⁶⁴⁶ “A person lawfully committed to pretrial detention has not been adjudged guilty of any crime. He has had only a “judicial determination of probable cause as a prerequisite to [the] extended restraint of [his] liberty following arrest.” And, if he is detained for a suspected violation of a federal law, he also has had a bail hearing. Under such circumstances, the Government concededly may detain him to ensure his presence at trial, and may subject him to the restrictions and conditions of the detention facility so long as those conditions and restrictions do not amount to punishment, or otherwise violate the Constitution.” *Bell v. Wolfish*, *supra* nota 647, en la pág. 535.

⁶⁴⁷ “Not every disability imposed during pretrial detention amounts to “punishment” in the constitutional sense, however. Once the Government has exercised its conceded authority to detain a person pending trial, it obviously is entitled to employ devices that are calculated to effectuate this detention. Traditionally, this has meant confinement in a facility which, no matter

El Tribunal señala que, para que las condiciones impuestas a la detención sean válidas, tienen que adelantar un objetivo legítimo del Estado:

*“Si una condición o restricción particular de la prisión preventiva está razonablemente relacionada con un objetivo gubernamental legítimo, no significa, sin más, un castigo. Por el contrario, si una restricción o condición no está razonablemente relacionada con una meta legítima, si es arbitraria o sin propósito, un tribunal puede inferir que el propósito de la acción gubernamental es un castigo que puede no infligirse constitucionalmente a los detenidos en calidad de detenidos.”*⁶⁴⁸

Según el Tribunal, los objetivos legítimos del Estado justifican *“la limitación o la retractación de los derechos constitucionales tanto de los presos condenados como de los detenidos en prisión preventiva están la seguridad institucional, la preservación el orden interno y la disciplina”*.⁶⁴⁹

La importancia de este caso radica en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha justificado en su decisión el trato que se le brinda a los detenidos en una prisión. Los intereses del Estado irán por encima de los del acusado, aunque en teoría este sea una persona que aún no ha sido juzgada ni condenada, y se le presuma inocente. Por lo tanto, el trato que se le dará al detenido en prisión no será muy diferente al que se le brinda al condenado.

how modern or how antiquated, results in restricting the movement of a detainee in a manner in which he would not be restricted if he simply were free to walk the streets pending trial. Whether it be called a jail, a prison, or a custodial center, the purpose of the facility is to detain. Loss of freedom of choice and privacy are inherent incidents of confinement in such a facility. And the fact that such detention interferes with the detainee's understandable desire to live as comfortably as possible and with as little restraint as possible during confinement does not convert the conditions or restrictions of detention into "punishment." Bell v. Wolfish, supra nota 647, en la pág. 537.

⁶⁴⁸ *“Thus, if a particular condition or restriction of pretrial detention is reasonably related to a legitimate governmental objective, it does not, without more, amount to "punishment." Conversely, if a restriction or condition is not reasonably related to a legitimate goal -- if it is arbitrary or purposeless -- a court permissibly may infer that the purpose of the governmental action is punishment that may not constitutionally be inflicted upon detainees qua detainees.” Id. en la pág. 539.*

⁶⁴⁹ *“Prison administrators therefore should be accorded wide-ranging deference in the adoption and execution of policies and practices that in their judgment are needed to preserve internal order and discipline and to maintain institutional security.” Id. en la pág. 547.*

A partir de la década de los setenta y ochenta, el aumento en los crímenes relacionados al narcotráfico y a la cantidad de acusados en libertad bajo fianza que cometían delitos, llevó al Congreso de los Estados Unidos a crear la Ley de Reforma a la Fianza de 1984, que derogaría la de 1966. Alexia J. JOHNSTON resume lo ocurrido:

“Mientras la detención preventiva se mantuvo fuera del ojo público en la década de los sesenta, en la década de los setenta y los ochenta volvió al ojo público en gran parte debido al aumento en la criminalidad en general y al aumento de la conciencia por parte pueblo de que un número significativo de delitos graves era cometido por acusados en libertad pendientes de juicio.

Pero tal vez el factor más influyente que explica el cambio de una intervención gubernamental limitada y de derechos al individuo a una creciente burocracia de poder y preocupación en cuanto a la seguridad pública, fue el reconocimiento público del problema de las drogas en los Estados Unidos. "Es conocido por todos que el tráfico de drogas es llevado a cabo en un grado inusual por personas involucradas en patrones continuos de actividad criminal". Las personas acusadas de delitos graves relacionados a drogas a menudo están en el negocio de distribución o importación de drogas. Debido a la naturaleza misma de sus actividades, hay un número significativo de narcotraficantes involucrados en infracciones reiteradas y el "peligro" para la seguridad de cualquier otra persona o comunidad sigue en riesgo.

Para 1981, el Grupo de Trabajo del Secretario de Justicia sobre Crímenes Violentos había recomendado "un compromiso inequívoco de combatir el tráfico de drogas internacional y nacional". La guerra contra las drogas resultante renovó todo el sistema de justicia penal desde la investigación inicial y los procedimientos previos al juicio hasta la revisión de apelaciones de procesamiento. Se quejaban de que se habían otorgado demasiadas protecciones a los acusados, un miembro del Congreso indicó: "En la guerra contra los estupefacientes hemos encontrado al enemigo, y él es el Código

de los Estados Unidos. Nunca he visto semejante laberinto de leyes y complejos...” El Congreso se involucró en un programa de gran alcance al intentar reformar varios aspectos del sistema de justicia penal, particularmente aquellos relacionados con las drogas. Los líderes del Congreso no dudaron en lo más mínimo en recoger la bandera de la fiscalización de drogas. Atacaron celosamente al "enemigo" y "si la Declaración de Derechos, la tradición o las protecciones estatutarias se interponían en el camino del esfuerzo de guerra, entonces tenían que irse". Más de cien proyectos de ley se introdujeron a lo largo de 1981-83, que culminaron en la Ley de Reforma de Fianzas de 1984”.⁶⁵⁰ (traducción nuestra).

Esta nueva ley fue codificada e incluida en el título 18 de las Leyes de los Estados Unidos sobre Crímenes y Procedimiento Criminal, capítulo 207, sobre Liberación y Detención de Acusados Pendientes de Procesos Judiciales.⁶⁵¹ Hasta la fecha sigue vigente. ARTHUR destaca la diferencia entre la nueva ley y el anterior sistema:

⁶⁵⁰ “While preventive detention may have remained the minority view of the 1960's, it became the majority view of the 1970's and 80's largely because of increased crime in general, and because of heightened awareness on the part of the public that a significant number of serious crimes were being committed by persons on release pending adjudication of criminal charges. Perhaps the single most influential factor which explains the turnabout from a formerly limited government and individual rights to a bureaucracy of escalating power and public safety concerns, was public recognition of the drug problem in America. ‘It is well known that drug trafficking is carried on to an unusual degree by persons engaged in continuing patterns of criminal activity.’ Persons charged with major drug felonies are often in the business of distributing and/or importing drugs. Due to the very nature of their activities, there are a significant number of drug traffickers involved in repeat offenses and ‘danger’ to the safety of any other person or the community remains at risk. By 1981, the Attorney General's Task Force on Violent Crime had recommended ‘an unequivocal commitment to combatting international and domestic drug traffic.’ The resulting war on drugs revamped the entire criminal justice system from initial investigation and pretrial procedures all the way through appellate review of prosecutions. Complaining that far too many protections were conferred upon defendants, one member of Congress observed: ‘In the war on narcotics we have met the enemy, and he is the U.S. Code. I have never seen such a maze of laws and hangups . . .’ Congress became involved in a far reaching program as it attempted to reform various aspects of the criminal justice system, particularly those which were drug related. Congressional leaders were not in the least bit hesitant to pick up the banner of drug enforcement. They zealously attacked the ‘enemy’ and ‘if the Bill of Rights, tradition, or statutory protections stood in the way of the war effort, then they had to go.’ Over a hundred bills were introduced throughout 1981-83, culminating in the Bail Reform Act of 1984.” Johnston, *supra* nota 643, en las págs.153 – 154 (1988).

⁶⁵¹ 18 U.S. Code Chapter 207, Release and Detention Pending Judicial Proceedings.

“La Ley de Reforma de la Fianza de 1984 efectuó un cambio radical en la jurisprudencia federal de la fianza. Desde la promulgación de la primera Ley del Poder Judicial en 1789 hasta el 12 de octubre de 1984, fecha en que entró en vigencia la Ley de Reforma de Fianzas, en general era cierto que los acusados federales en casos no capitales se les podría admitir fianza. Según la nueva ley, el gobierno puede detener a los acusados federales antes del juicio sólo por el hecho de que representan un peligro para la comunidad”⁶⁵² (traducción nuestra).

Con la inclusión de la predicción de criminalidad futura en la Ley de Reforma de la Fianza de 1984, los jueces y magistrados ya no tendrían que recurrir a la imposición de cuantías altas de fianza para evitar que un acusado que consideren peligroso salga a la calle:

“Antes de que la Ley de Reforma de la Fianza se convirtiera en ley, los funcionarios judiciales que establecían la fianza no podían considerar legítimamente las predicciones de criminalidad futura. A los acusados federales se les admitiría fianza, excepto en tres circunstancias: (1) que fueran acusados de un delito capital; (2) que eran muy propensos a huir; o (3) que habían amenazado a testigos o jurados”⁶⁵³ (traducción nuestra).

PRINGLE señala que la ley del 1984 corrige un error de la ley de 1966, al incluir la peligrosidad como causal para ordenar la detención de un acusado:

“La Ley de Reforma de la Fianza de 1984 representa una mejora significativa con respecto a la legislación anterior. Aborda y corrige una

⁶⁵² “The Bail Reform Act of 1984 effected a radical change in federal bail jurisprudence. 2 From the enactment of the first Judiciary Act in 1789 until October 12, 1984, the date on which the Bail Reform Act took effect, it was generally true that federal defendants in noncapital cases could be admitted to bail. Under the new law, the government may detain federal defendants prior to trial solely on the ground that they represent a danger to the community.” Kevin F. Arthur, *Preventive Detention Liberty in the balance*, 46 Md. L. Rev. 378 (1987).

⁶⁵³ “Before the Bail Reform Act became law, judicial officers setting bail could not legitimately consider predictions of future criminality. Federal defendants would be admitted to bail except in three circumstances: (1) they were charged with a capital offense; (2) they were exceedingly likely to flee; or (3) they had threatened witnesses or jurors.” Arthur, *supra* nota 654, en la pág. 382.

*deficiencia importante en la Ley de 1966 al reconocer específicamente que el riesgo de seguridad para otras personas y para la comunidad que plantea la liberación previa al juicio de ciertos acusados debe considerarse al tomar decisiones relacionadas con la fianza. La ley de 1984 proporciona un enfoque más honesto en el tema de la prisión preventiva al eliminar la necesidad del uso de fianzas monetarios elevadas como medio para mantener a acusados peligrosos bajo custodia. Finalmente, la Ley de 1984 crea un marco analítico integral y, al mismo tiempo, permite al poder judicial la flexibilidad necesaria para establecer condiciones de liberación adaptadas a las circunstancias individuales de cada acusado”.*⁶⁵⁴ (traducción nuestra).

Hay autores como ALSCHULER que consideran que, al no requerir una prueba de culpabilidad o de probabilidad de convicción para autorizar la detención, la ley es inconstitucional.⁶⁵⁵ ALSCHULER señala que esto “*fue un acto deliberado de los congresistas*”⁶⁵⁶ (traducción nuestra). Hasta la fecha, este es un planteamiento que se mantiene sin resolver. ALSCHULER, además, señala que la ley, “*aunque la reduce, no elimina la ventaja que tienen los ricos en un en el sistema de fianza*”⁶⁵⁷ (traducción nuestra). Otros como JOHNSTON consideran que lo justo de la ley de 1984 es que “*la peligrosidad ahora puede considerarse abiertamente como una base legítima para la liberación o la*

⁶⁵⁴ “*The Bail Reform Act of 1984 represents a significant improvement over prior legislation. It addresses and corrects a major deficiency in the 1966 Act by specifically recognizing that the safety risk to other persons and the community posed by pretrial release of certain defendants should be considered in making decisions regarding bail. The 1984 law provides a more honest approach to the matter of pretrial detention by eliminating the need for the sub rosa use of high monetary bonds as a means of keeping dangerous defendants in custody. Finally, the 1984 Act creates a comprehensive analytical framework while, at the same time, allows the judiciary the necessary flexibility to fashion release conditions tailored to the individual circumstances of each defendant.*” Pringle, *supra* nota 595, en la pág. 922.

⁶⁵⁵ Albert W. Alschuler, Preventive pretrial detention and the failure of interest-balancing approaches to due process, 85 Mich. L. Rev. 510, (1986).

⁶⁵⁶ “*Congress’ failure to require prosecutors to offer preliminary proof of guilt at detention hearings was deliberate.*” *Id.* en la pág. 518.

⁶⁵⁷ “*This scheme does not eliminate the advantage that the bail system affords the rich in the administration of criminal justice but does reduce it.*” *Id.* en la pág. 510.

*detención, lo que reduce la probabilidad de violaciones de la cláusula de fianza excesiva de la octava enmienda*⁶⁵⁸ (traducción nuestra).

En 1987 llega ante la consideración del Tribunal Supremo el caso de *United States v. Salerno*, que marca un antes y un después en cuanto a la normativa de las detenciones y la fianza en los Estados Unidos.⁶⁵⁹ En este caso, los acusados Anthony Salerno y Vincent Cafaro fueron arrestados el 21 de marzo de 1986, después de haber múltiples violaciones a leyes penales y a la ley contra el crimen organizado conocida como RICO, por sus siglas en inglés. El Gobierno solicitó mantener a ambos acusados en detención, alegando que ninguna condición aseguraría su presencia en el juicio:

*“En la lectura de acusación el gobierno ordenó la detención de Salerno y Cafaro. Alegaron que ninguna condición que se le impusiera para que quedaran en libertad garantizaría la seguridad de la comunidad ni de ninguna otra persona. El Tribunal de Distrito celebró una audiencia en la que el gobierno hizo una presentación detallada de sus todas sus pruebas para que se autorizara la detención. El Gobierno logró incluso demostrar que Salerno era el "jefe" de organización mafiosa La Cosa Nostra y que Cafaro era un "capitán" ⁶⁶⁰ de la familia Genovese. La prueba del gobierno se basaba mayormente en conversaciones telefónicas interceptadas bajo una orden del tribunal. Alegaba el gobierno que los acusados habían participado en conspiraciones de gran envergadura para ayudar a sus empresas ilegítimas a través de medios violentos”.*⁶⁶¹ (traducción nuestra).

⁶⁵⁸ *“The justice of the 1984 Act lies in the fact that dangerousness can now be openly considered as a legitimate basis for release or detention, lessening the likelihood of violations of the excessive bail clause of the eighth amendment...”* Johnston, *supra* nota 643, en la pág.158 (1988).

⁶⁵⁹ *United States v. Salerno*, 481 U.S. 739 (1987).

⁶⁶⁰ *“El Capitán o Capo dirige su propia sección de la familia mafiosa. Opera actividades específicas de la Mafia. Un Capo se considera exitoso solo si gana una gran cantidad de dinero para la Mafia. Guarda algunas de sus ganancias y el resto se transfiere a sus jefes.”* Structure of the Mafia, The Mafia, <https://the-mafia.weebly.com/index.html>.

⁶⁶¹ *“At respondents' arraignment, the Government moved to have Salerno and Cafaro detained pursuant to § 3142(e), on the ground that no condition of release would assure the safety of the community or any person. The District Court held a hearing at which the Government made a*

El Tribunal de Distrito avaló la detención alegando que el Gobierno: *“había establecido con pruebas claras y convincentes que bajo ninguna condición o combinación de condiciones de libertad se garantizaría la seguridad de la comunidad o de personas”*⁶⁶² (traducción nuestra). El tribunal en su decisión destacó que:

*“Las actividades de una organización criminal como las de la Familia Genovese no cesan con el arresto de sus directores ni con su libertad incluso bajo las condiciones de fianza más estrictas. Las empresas ilegales, establecidas durante muchos años, requieren atención y protección constantes, o fallarán. Bajo estas circunstancias, el tribunal reconoció una fuerte inclinación por parte de sus líderes para continuar con sus actividades habituales. Añadió el tribunal que cuando las actividades comerciales habituales implican amenazas, golpizas y asesinatos, el peligro que representan en la comunidad es sin lugar a dudas evidente”*⁶⁶³ (traducción nuestra).

Los acusados apelaron esta decisión alegando: *“que en la medida en que la Ley de Reforma de la Fianza permite la prisión preventiva sobre la base de que “es probable que el arrestado cometa crímenes futuros”, es*

detailed proffer of evidence. The Government's case showed that Salerno was the "boss" of the Genovese crime family of La Cosa Nostra, and that Cafaro was a "captain" in the Genovese family. According to the Government's proffer, based in large part on conversations intercepted by a court-ordered wiretap, the two respondents had participated in wide-ranging conspiracies to aid their illegitimate enterprises through violent means.” United States v. Salerno, supra nota 661, en la pág. 743.

⁶⁶² *“The District Court granted the Government's detention motion, concluding that the Government had established by clear and convincing evidence that no condition or combination of conditions of release would ensure the safety of the community or any person...” Id. en las págs. 743 – 744.*

⁶⁶³ *“The activities of a criminal organization such as the Genovese Family do not cease with the arrest of its principals and their release on even the most stringent of bail conditions. The illegal businesses, in place for many years, require constant attention and protection, or they will fail. Under these circumstances, this court recognizes a strong incentive on the part of its leadership to continue business as usual. When business as usual involves threats, beatings, and murder, the present danger such people pose in the community is self-evident.” Id. en la pág. 744.*

inconstitucional".⁶⁶⁴ El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito les dio la razón a los acusados y dijo:

*"Aunque estuvo de acuerdo en que se podía imponer la prisión preventiva si los acusados intimidaban a los testigos o ponían en peligro el proceso" halló que la "autorización de prisión preventiva basada en la posibilidad de peligrosidad futura violaba el debido proceso de ley sustantivo, que prohíbe la privación total de la libertad simplemente como un medio para prevenir crímenes futuros. El tribunal concluyó que el Gobierno no podía, de conformidad con el debido proceso de ley, detener a personas que no habían sido convictas de ningún delito simplemente porque se pensaba que representaban un peligro para la comunidad. Concluyó además el Tribunal de Apelaciones que el sistema de derecho penal federal responsabiliza a las personas por acciones pasadas, no por acciones futuras".*⁶⁶⁵ (traducción nuestra).

El caso llega hasta el Tribunal Supremo y este comienza a resolver la controversia señalando que: *"el hecho de que la Ley de Reforma de la Fianza pueda funcionar de manera inconstitucional bajo algunas circunstancias es insuficiente que se declare totalmente inválida. Señala el Tribunal Supremo que no ha reconocido la doctrina de "overbreadth"*⁶⁶⁶ *fuera del contexto limitado de la*

⁶⁶⁴ *"Respondents appealed, contending that, to the extent that the Bail Reform Act permits pretrial detention on the ground that the arrestee is likely to commit future crimes, it is unconstitutional on its face."* United States v. Salerno, *supra* nota 661, en la pág. 744.

⁶⁶⁵ *"Although the court agreed that pretrial detention could be imposed if the defendants were likely to intimidate witnesses or otherwise jeopardize the trial process, it found" § 3142(e)'s authorization of pretrial detention [on the ground of future dangerousness] repugnant to the concept of substantive due process, which we believe prohibits the total deprivation of liberty simply as a means of preventing future crimes."* The court concluded that the Government could not, consistent with due process, detain persons who had not been accused of any crime merely because they were thought to present a danger to the community. It reasoned that our criminal law system holds persons accountable for past actions, not anticipated future actions." *Id.* en las págs. 744 – 745.

⁶⁶⁶ La doctrina de "Overbreadth" es: *"un principio de revisión judicial que establece que una ley sería inconstitucional si castiga un discurso o una conducta constitucionalmente protegida (que incluso el gobierno podría válidamente limitar para promover un interés gubernamental convincente). Una ley redactada con demasiada amplitud, al punto de que disuade a la libertad de expresión, podría ser declarada inconstitucional su efecto de detente (chilling effect), incluso si también prohíbe actos que podrían ser legítimamente prohibidos. Si una ley es excesivamente amplia, el tribunal puede salvarla declarando inconstitucional sólo la parte que excesivamente*

Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos^{667 668} (traducción nuestra). Añade el Tribunal que “*no se había rebasado la pesada carga para demostrar que la ley era fehacientemente inconstitucional*”⁶⁶⁹ (traducción nuestra).

Los acusados presentaron dos argumentos para que se declararan inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Reforma de la Fianza que permiten la prisión preventiva a base de peligrosidad futura. Sostenían, al igual que Tribunal de Apelaciones, que: “*la Ley excede las limitaciones impuestas al Gobierno Federal por la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda. En segundo lugar, sostenían que la Ley contraviene la prohibición contra las fianzas excesivas de la Octava Enmienda*”⁶⁷⁰ (traducción nuestra).

En cuanto a esto, el Tribunal de Apelaciones decidió (y el Tribunal Supremo concuerda) que “*la prisión preventiva establecida por la ley es una regulatoria y no penal. O sea, que se trata de una cuestión reglamentaria o procesal y no penal*”⁶⁷¹ (traducción nuestra). En cuanto a esto, señala el Tribunal

amplia. Si el tribunal no puede eliminar esa parte de la ley dejando a salvo aquellas que pueden ser constitucionales, entonces puede declarar inconstitucional la ley en su totalidad”. (traducción nuestra). US Legal, <https://definitions.uslegal.com/o/overbreadth-doctrine/>

⁶⁶⁷ “*The fact that the Bail Reform Act might operate unconstitutionally under some conceivable set of circumstances is insufficient to render it wholly invalid, since we have not recognized an “overbreadth” doctrine outside the limited context of the First Amendment.*” United States v. Salerno, *supra* nota 661, en la pág.745.

⁶⁶⁸ Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América: “*El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.*” Constitución de los Estados Unidos de América, 1787, The U.S. National Archives and Records Administration, <https://www.archives.gov/espanol/constitucion.html>.

⁶⁶⁹ “*We think respondents have failed to shoulder their heavy burden to demonstrate that the Act is “facially” unconstitutional*” United States v. Salerno, *supra* nota 661, en la pág.745.

⁶⁷⁰ “[T]he Act exceeds the limitations placed upon the Federal Government by the Due Process Clause of the Fifth Amendment. Second, they contend that the Act contravenes the Eighth Amendment’s proscription against excessive bail.” *Id.* en la pág. 746.

⁶⁷¹ “*The Court of Appeals assumed that pretrial detention under the Bail Reform Act is regulatory, not penal, and we agree that it is.*” United States v. Salerno, *supra* nota 661, en la pág. 746.

Supremo que *“por el mero hecho de que una persona sea detenida no quiere decir que el gobierno le ha impuesto un castigo”*⁶⁷² (traducción nuestra).

Dice el Tribunal Supremo que: *“para determinar si una restricción a la libertad constituye un castigo inadmisibles o una regulación permisible, lo primero que hay que buscar es la intención legislativa”*⁶⁷³ (traducción nuestra). Señala el Tribunal que: *el historial legislativo de la Ley de Reforma a la Fianza claramente indica que el Congreso no formuló las disposiciones de la prisión preventiva como un castigo para acusados peligrosos*⁶⁷⁴ (traducción nuestra). Añade el Tribunal que el Congreso percibió la detención preventiva como *“una solución potencial a un problema social apremiante”*⁶⁷⁵ (traducción nuestra). Y que: *“no hay duda de que prevenir el peligro para la comunidad es un objetivo reglamentario legítimo”*⁶⁷⁶ (traducción nuestra).

El Tribunal Supremo tampoco entiende que la detención preventiva sea excesiva en relación con el objetivo reglamentario que el Congreso pretende lograr. Añade el Tribunal que *“la Ley de Reforma a la Fianza establece cuidadosamente las circunstancias bajo las cuales se puede pedir la detención para los acusados de los crímenes más graves”*.⁶⁷⁷ También destaca las salvaguardas que contiene la ley en favor del acusado, como la vista antes de la detención, las restricciones del derecho a juicio rápido y las condiciones en donde permanecerán detenidos. Reitera el Tribunal Supremo que *“la detención preventiva contemplada en la Ley de Reforma de la Fianza es de naturaleza*

⁶⁷² “As an initial matter, the mere fact that a person is detained does not inexorably lead to the conclusion that the government has imposed punishment.” *Id.*

⁶⁷³ “To determine whether a restriction on liberty constitutes impermissible punishment or permissible regulation, we first look to legislative intent.” *Id.* en la pág. 747.

⁶⁷⁴ “The legislative history of the Bail Reform Act clearly indicates that Congress did not formulate the pretrial detention provisions as punishment for dangerous individuals.” *Id.*

⁶⁷⁵ “Congress instead perceived pretrial detention as a potential solution to a pressing societal problem.” *Id.* en la pág. 747.

⁶⁷⁶ “There is no doubt that preventing danger to the community is a legitimate regulatory goal.” *Id.*

⁶⁷⁷ “The Bail Reform Act carefully limits the circumstances under which detention may be sought to the most serious of crimes.” *Id.* en la pág. 747.

regulatoria, y no constituye un castigo antes del juicio en violación de la cláusula de debido proceso".⁶⁷⁸

Sobre la conclusión del Tribunal de Apelaciones de que la cláusula del debido proceso prohíbe la prisión preventiva por motivos de peligro para la comunidad como medida reglamentaria, independientemente de la duración de la detención, el Tribunal Supremo indica que "*el interés regulatorio del gobierno en la seguridad de la comunidad puede, en circunstancias apropiadas, superar el interés de la libertad de una persona*".⁶⁷⁹ Para justificar aún más su decisión, el Tribunal repasa otras decisiones donde ha justificado la detención de acusados.⁶⁸⁰

⁶⁷⁸ "We conclude, therefore, that the pretrial detention contemplated by the Bail Reform Act is regulatory in nature, and does not constitute punishment before trial in violation of the Due Process Clause." *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en la pág. 748.

⁶⁷⁹ "We have repeatedly held that the Government's regulatory interest in community safety can, in appropriate circumstances, outweigh an individual's liberty interest." *Id.*

⁶⁸⁰ "1. Que existen intereses gubernamentales suficientemente convincentes para justificar la detención de personas peligrosas. 2. Que no existe una barrera constitucional que impida la detención de extranjeros residentes potencialmente peligrosos en espera de los procedimientos de deportación. 3. Que el gobierno puede detener individuos mentalmente inestables que representan un peligro y a acusados peligrosos que se vuelven incompetentes para enfrentar un juicio. 4. Asimismo, han aprobado la detención de menores cuando presentan un peligro continuo para la comunidad. 5. Incluso los adultos competentes pueden enfrentar restricciones sustanciales a la libertad como resultado del funcionamiento del sistema de justicia penal. Si la policía sospecha que un individuo cometió un delito, puede arrestarlo y retenerlo hasta que un juez determine si existe una causa probable." (traducción nuestra) For example, in times of war or insurrection, when society's interest is at its peak, the Government may detain individuals whom the Government believes to be dangerous. See *Ludecke v. Watkins*, 335 U. S. 160 (1948) (approving unreviewable executive power to detain enemy aliens in time of war); *Mover v. Peabody*, 212 U. S. 78, 212 U. S. 84-85 (1909) (rejecting due process claim of individual jailed without probable cause by Governor in time of insurrection). Even outside the exigencies of war, we have found that sufficiently compelling governmental interests can justify detention of dangerous persons. Thus, we have found no absolute constitutional barrier to detention of potentially dangerous resident aliens pending deportation proceedings. *Carlson v. Landon*, 342 U. S. 524, 342 U. S. 537-542 (1952); *Wong Wing v. United States*, 163 U. S. 228 (1896). We have also held that the government may detain mentally unstable individuals who present a danger to the public, *Addington v. Texas*, 441 U. S. 418 (1979), and dangerous defendants who become incompetent to stand trial, *Jackson v. Indiana*, 406 U. S. 715, 406 U. S. 731-739 (1972); *Greenwood v. United States*, 350 U. S. 366 (1956). We have approved of postarrest regulatory detention of juveniles when they present a continuing danger to the community. *Schall v. Martin*, *supra*. Even competent adults may face substantial liberty restrictions as a result of the operation of our criminal justice system. If the police suspect an individual of a crime, they may arrest and hold him until a neutral magistrate determines whether probable cause exists. *Gerstein v. Pugh*, 420 U. S. 103 (1975). Finally, respondents concede and the Court of Appeals noted that an arrestee may be incarcerated until trial if he presents a risk of flight, see *Bell v. Wolfish*, 441 U.S. at 441 U. S. 534, or a danger to witnesses. *United States v. Salerno*, en las págs. 748 - 749.

Sobre la Ley de Reforma de la Fianza de 1984, el Tribunal señala que “se centra en un problema particularmente grave en el que los intereses del gobierno son abrumadores”, y que la detención se limita a “individuos que han sido arrestados por una categoría específica de delitos extremadamente graves”⁶⁸¹ (traducción nuestra). El Tribunal valida la determinación de detener a un acusado por la posibilidad que cometan nuevos delitos, utilizando como justificación la intensión legislativa de la Ley de la Reforma de la Fianza de 1984: “El Congreso encontró específicamente que estas personas son mucho más propensas a ser responsables de actos peligrosos en la comunidad después de la detención”⁶⁸² (traducción nuestra). Luego el Tribunal hace referencia a todo el proceso que se tiene que dar antes de que se llegue a la determinación de detener a un acusado. Esto para justificar el debido proceso de ley.

*“El gobierno debe demostrar una causa probable para creer que el crimen ha sido cometido por el arrestado, pero eso no es suficiente. En una vista, el gobierno debe convencer a un juez con pruebas claras y convincentes de que ninguna condición de libertad puede razonablemente garantizar la seguridad de la comunidad o la de cualquier persona”*⁶⁸³ (traducción nuestra).

El Tribunal recalca en su análisis la importancia del derecho a la libertad del individuo, pero acto seguido señala que este cede al derecho puede ceder ante los derechos del colectivo:

⁶⁸¹ “The Bail Reform Act of 1984 responds to an even more particularized governmental interest than the interest we sustained in Schall. The statute we upheld in Schall permitted pretrial detention of any juvenile arrested on any charge after a showing that the individual might commit some undefined further crimes. The Bail Reform Act, in contrast, narrowly focuses on a particularly acute problem in which the Government interests are overwhelming. The Act operates only on individuals who have been arrested for a specific category of extremely serious offenses.” *Id.* en la pág. 750.

⁶⁸² “Congress specifically found that these individuals are far more likely to be responsible for dangerous acts in the community after arrest.” *Id.*

⁶⁸³ “The Government must first of all demonstrate probable cause to believe that the charged crime has been committed by the arrestee, but that is not enough. In a full-blown adversary hearing, the Government must convince a neutral decisionmaker by clear and convincing evidence that no conditions of release can reasonably assure the safety of the community or any person.” *Id.* en la pág. 750.

*“No minimizamos la importancia y naturaleza fundamental de este derecho [a la libertad del individuo]. Pero, como sostienen nuestros casos, este derecho puede, en circunstancias donde el interés del gobierno es lo suficientemente importante, estar supeditado a necesidades mayores de la sociedad”*⁶⁸⁴ (traducción nuestra).

Luego destacan que, en cuanto a este aspecto, la Ley de la Reforma de la Fianza de 1984 satisface dicho requisito. Además, añade que, cuando se cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para determinar la detención del acusado, se respeta lo establecido en la cláusula constitucional del debido proceso de ley:

*“Cuando el gobierno demuestra con pruebas claras y convincentes que un arrestado representa una amenaza para otra persona o para la comunidad, de conformidad con la Cláusula del Debido Proceso, un tribunal puede inhabilitar al detenido para que no ejecute esa amenaza”*⁶⁸⁵ (traducción nuestra).

Sobre el cuestionamiento de los acusados en cuanto a los procedimientos de la Ley de Reforma de la Fianza de 1984, el Tribunal Supremo determina que los mismos son adecuados.⁶⁸⁶ Recalcan, como han dicho en decisiones anteriores, que *“no hay nada intrínsecamente malo en una predicción de*

⁶⁸⁴ “We do not minimize the importance and fundamental nature of this right. But, as our cases hold, this right may, in circumstances where the government's interest is sufficiently weighty, be subordinated to the greater needs of society.” *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en las págs. 750 – 751.

⁶⁸⁵ “When the Government proves by clear and convincing evidence that an arrestee presents an identified and articulable threat to an individual or the community, we believe that, consistent with the Due Process Clause, a court may disable the arrestee from executing that threat.” *Id.* en la pág. 751.

⁶⁸⁶ “Finally, we may dispose briefly of respondents' facial challenge to the procedures of the Bail Reform Act. To sustain them against such a challenge, we need only find them “adequate to authorize the pretrial detention of at least some [persons] charged with crimes,” whether or not they might be insufficient in some particular circumstances. We think they pass that test.” *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en la pág. 751.

*conducta criminal futura*⁶⁸⁷ (traducción nuestra). Destacan que “los procedimientos mediante los cuales se evalúa la probabilidad de una peligrosidad futura están específicamente diseñados para aumentar la precisión de esa determinación”⁶⁸⁸ (traducción nuestra). El Tribunal pasa entonces a reseñar cuáles son los procesos con los que se salvaguardan los derechos del acusado, garantizando así la constitucionalidad del estatuto.⁶⁸⁹

Sobre el alegato de los acusados de que la Ley de Reforma de Fianzas infringía la Octava Enmienda, el Tribunal Supremo en resumen indica que esta sólo dispone “que no se exigirán fianzas excesivas” y que “nada dice de que la fianza estará disponible para todo”⁶⁹⁰ (traducción nuestra).

El Tribunal Supremo finaliza resolviendo el planteamiento de los acusados de que en los Estados Unidos existe un derecho a quedar en libertad bajo fianza.

⁶⁸⁷ “As we stated in *Schall*, “there is nothing inherently unattainable about a prediction of future criminal conduct.” *Id.*

⁶⁸⁸ “Under the Bail Reform Act, the procedures by which a judicial officer evaluates the likelihood of future dangerousness are specifically designed to further the accuracy of that determination.” *Id.*

⁶⁸⁹ “Detainees have a right to counsel at the detention hearing. They may testify in their own behalf, present information by proffer or otherwise, and cross-examine witnesses who appear at the hearing. The judicial officer charged with the responsibility of determining the appropriateness of detention is guided by statutorily enumerated factors, which include the nature and the circumstances of the charges, the weight of the evidence, the history and characteristics of the putative offender, and the danger to the community. The Government must prove its case by clear and convincing evidence. Finally, the judicial officer must include written findings of fact and a written statement of reasons for a decision to detain. The Act’s review provisions, provide for immediate appellate review of the detention decision. We think these extensive safeguards suffice to repel a facial challenge.”

“Los detenidos tienen derecho a un abogado en la vista de detención. Pueden declarar a nombre propio, ofrecer prueba a su favor y contrainterrogar a los testigos que comparecen en la audiencia. El funcionario judicial a cargo de la responsabilidad de determinar la idoneidad de la detención se guía por factores enumerados de manera estatutaria, que incluyen la naturaleza y las circunstancias de los cargos, el peso de la prueba, el historial y las características del presunto delincuente y el peligro que representa para la comunidad. El gobierno debe probar su caso con evidencia clara y convincente. Finalmente, el funcionario judicial debe incluir los hechos por escrito y una declaración escrita de los motivos que determinaron la detención. Las disposiciones sobre revisión de la Ley, proporcionan una revisión inmediata de la decisión de detención. Creemos que estas amplias salvaguardas son suficientes para repeler su impugnación.” (traducción nuestra) *Id.* en las páginas 751 - 752.

⁶⁹⁰ “The Eighth Amendment addresses pretrial release by providing merely that “[e]xcessive bail shall not be required.” This Clause, of course, says nothing about whether bail shall be available at all.” *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en la pág. 752.

Para rechazarlo, al igual que en el caso de *Carlson*, recurre nuevamente a la historia del derecho a la fianza en los Estados Unidos para decir una vez más que este viene de la Carta de Derechos de Inglaterra, y que nunca se vislumbró que fuera absoluto.⁶⁹¹ O sea, que nunca se pensó para que todos los acusados tuvieran derecho a quedar en libertad bajo fianza.

Más adelante señala el Tribunal que la única limitación de la cláusula de fianza que se podría argumentar es que *“las condiciones de liberación o detención propuestas por el Gobierno no sean excesivas”*⁶⁹² (traducción nuestra).

Para determinar si la respuesta del gobierno es excesiva, el Tribunal Supremo dice que debemos comparar esta con el *“interés que el gobierno busca proteger”*⁶⁹³ (traducción nuestra):

“Cuando el gobierno indique que su único interés es evitar la fuga, el tribunal debe fijar la fianza en una suma que garantice ese objetivo, y nada más. Nosotros creemos que cuando el Congreso ha ordenado la detención sobre la base de un interés apremiante distinto de la prevención

⁶⁹¹ “The bail clause was lifted with slight changes from the English Bill of Rights Act. In England, that clause has never been thought to accord a right to bail in all cases, but merely to provide that bail shall not be excessive in those cases where it is proper to grant bail. When this clause was carried over into our Bill of Rights, nothing was said that indicated any different concept. The Eighth Amendment has not prevented Congress from defining the classes of cases in which bail shall be allowed in this country. Thus, in criminal cases, bail is not compulsory where the punishment may be death. Indeed, the very language of the Amendment fails to say all arrests must be bailable.”

“La cláusula de fianza fue traída con ligeros cambios de la Carta de Derechos de Inglaterra. En Inglaterra, esa cláusula nunca vislumbró otorgar un derecho a la fianza en todos los casos, sino simplemente que la fianza no debería ser excesiva en los casos en que fuese apropiado imponer una fianza. Cuando se trajo esta cláusula a nuestra Carta de Derechos, no se dijo que fuera un concepto diferente. La Octava Enmienda no ha impedido que el Congreso defina en qué clases de casos se permitirá la libertad bajo fianza. Por lo tanto, en los casos penales la fianza no es obligatoria cuando el castigo puede ser la muerte. De hecho, el mismo lenguaje de la Enmienda no dice que todos los acusados tienen derecho a fianza”. Id. en la pág. 754.

⁶⁹² “The only arguable substantive limitation of the Bail Clause is that the Government's proposed conditions of release or detention not be “excessive” in light of the perceived evil.” *Id.*

⁶⁹³ “[T]o determine whether the Government's response is excessive, we must compare that response against the interest the Government seeks to protect by means of that response.” *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en la pág. 754.

*de fuga, como lo ha hecho aquí, la Octava Enmienda no requiere la libertad bajo fianza*⁶⁹⁴ (traducción nuestra).

Concluye el Tribunal Supremo su decisión defendiendo el derecho que tiene el Estado de proteger los intereses del colectivo por encima de los del individuo, siempre y cuando se siga el debido proceso de ley.⁶⁹⁵

En Puerto Rico, la jurisdicción federal se ejerce a través del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Dicha jurisdicción se ejerce de manera prácticamente inalterada desde la creación del Tribunal a través de la Ley Foraker de 1900. En el Tribunal Federal, en el ámbito penal mayormente se juzgan a acusados por delitos de narcotráfico y otros crímenes violentos tipificados por las leyes penales federales. A la mayoría de estos acusados, por la naturaleza de los crímenes por los que se le acusa, los jueces y magistrados no les conceden el derecho a quedar en libertad bajo fianza, por lo que se ordena su detención e ingreso en el Centro Metropolitano de Detenciones (M.D.C.) en espera de su juicio.

⁶⁹⁴ “[W]hen the Government has admitted that its only interest is in preventing flight, bail must be set by a court at a sum designed to ensure that goal, and no more. We believe that, when Congress has mandated detention on the basis of a compelling interest other than prevention of flight, as it has here, the Eighth Amendment does not require release on bail.” *Id.* en las págs. 754 – 755.

⁶⁹⁵ “In our society, liberty is the norm, and detention prior to trial or without trial is the carefully limited exception. We hold that the provisions for pretrial detention in the Bail Reform Act of 1984 fall within that carefully limited exception. The Act authorizes the detention prior to trial of arrestees charged with serious felonies who are found after an adversary hearing to pose a threat to the safety of individuals or to the community which no condition of release can dispel. The numerous procedural safeguards detailed above must attend this adversary hearing. We are unwilling to say that this congressional determination, based as it is upon that primary concern of every government -- a concern for the safety and indeed the lives of its citizens -- on its face violates either the Due Process Clause of the Fifth Amendment or the Excessive Bail Clause of the Eighth Amendment.”

“[E]n nuestra sociedad la libertad es la norma y la detención antes del juicio es la excepción, cuidadosamente limitada. Sostenemos que las disposiciones sobre la detención preventiva en la Ley de la Reforma de la Fianza de 1984 caen dentro de esa cuidadosamente limitada excepción. La Ley autoriza la detención antes del juicio de acusados de delitos graves a los que, cuando después de una vista adversativa no se pueda disipar que exista una amenaza para la seguridad de las personas o la comunidad. Las numerosas garantías procesales detalladas anteriormente deben estar presentes en esta vista adversativa. No estamos dispuestos a decir que esta determinación congresional, basada en la preocupación principal de cada gobierno, una preocupación por la seguridad y, de hecho, la vida de sus ciudadanos viola la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda o la Cláusula de Fianzas Excesivas de la Octava Enmienda”. (traducción nuestra). *United States v. Salerno*, *supra* nota 661, en las págs. 751 – 755.

En materia procesal penal, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, al igual que el resto de los Tribunal de Distrito Federal, opera bajo la Constitución de los Estados Unidos, las reglas establecidas en el Título 18 de las Leyes de los Estados Unidos sobre Crímenes y Procedimiento Criminal⁶⁹⁶. En el título 18 se encuentra la Ley de Reforma de la Fianza de 1984 que provee para la detención de acusados. También se utilizan mayormente para acusados a nivel federal en Puerto Rico el Título 21 de las Leyes de los Estados Unidos sobre Alimentos y Drogas⁶⁹⁷ y de este en específico el capítulo 13 que trata sobre Prevención, Uso y Abuso de Drogas⁶⁹⁸. Igualmente se emplea con frecuencia el Título 8 de las Leyes de los Estados Unidos sobre Inmigrantes y Nacionalidad⁶⁹⁹.

Es importante destacar que, en cada Estado de los Estados Unidos, los Tribunales Federales utilizan las leyes de forma dispar. Todo depende de las particularidades de la región. O sea, que las leyes que mayormente se utilizan para juzgar delitos en Puerto Rico, no son necesariamente las que mayormente se utilizan en los cincuenta estados de la Unión o los territorios. En los Estados Unidos existen 94 distritos judiciales federales, que incluyen al menos un distrito en cada estado, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.⁷⁰⁰ Tres territorios de los Estados Unidos (las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte), tienen tribunales de distrito que conocen casos federales, incluidos casos de bancarrota.⁷⁰¹

Por la naturaleza grave de los delitos que se juzgan en el foro federal en Puerto Rico, la mayoría de los acusados permanecen detenidos durante el juicio. Como podemos ver en la siguiente tabla, durante la pasada década, alrededor del setenta por ciento de los acusados en Puerto Rico a nivel federal quedan en detención preventiva.

⁶⁹⁶ U.S. Code Title 18, Crimes and Criminal Procedure.

⁶⁹⁷ U.S. Code Title 21, Food and Drugs.

⁶⁹⁸ Chapter 13, Drug Abuse Prevention and Control.

⁶⁹⁹ U.S. Code: Title 8, Aliens and Nationality.

⁷⁰⁰ Federal Bar Association, http://www.fedbar.org/Public-Messaging/About-US-Federal-Courts_1.aspx (2017).

⁷⁰¹ *Id.*

Aunque de ordinario la jurisdicción de los tribunales federales es limitada a violaciones de leyes penales federales, en Puerto Rico, durante los pasados años, estos casos poco a poco han ido aumentando. Esto es debido a que durante los pasados años la Policía de Puerto Rico ha llegado a acuerdos de colaboración con agencias de ley y orden del gobierno federal de los Estados Unidos, como la Drug Enforcement Administration (D.E.A.), el Negociado de Investigaciones Especiales (F.B.I.) y la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones Federales (I.C.E. – H.S.I.).⁷⁰²

Estos acuerdos de colaboración buscan unir esfuerzos en las investigaciones de delitos relacionados al narcotráfico y armas de fuego.⁷⁰³ Más recientemente se han incluidos acuerdos de colaboración para investigar y procesar casos de evasión contributiva y corrupción gubernamental.⁷⁰⁴ Estos acuerdos proveen para que los acusados se juzguen en el foro federal donde, con toda probabilidad, a los acusados no se les va a conceder el derecho a quedar en

⁷⁰² Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, 18 de diciembre de 2015, Acuerdo de Colaboración Entre Policía y ICE tiene como resultado ocupación de más de una docena de armas ilegales: *El director del Negociado de Drogas, Armas Ilegales y Control del Vicio, comandante José Juan García y el director interino de la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones Federales (ICE – HSI por sus siglas en inglés) en San Juan, Ricardo Mayoral dieron a conocer el resultado de un acuerdo entre ambas agencias que culminó en la ocupación de armas de fuego ilegales, municiones y decenas de arrestados en el área metropolitana.*

⁷⁰³ El Nuevo Día, lunes, 24 de noviembre de 2014, Federales y Policía extienden acuerdo para trabajar en conjunto: *Al tiempo que reclamó que el plan anticrimen de su administración ha reducido los delitos de violencia en el país, el gobernador Alejandro García Padilla anunció la extensión a las 13 regiones policíacas existentes el acuerdo de colaboración con las agencias federales que permite el destaque de policías y fiscales para procesar casos en la esfera federal sobre crimen organizado, lavado de dinero, robos de autos a mano armada (carjackings) y delitos en los que se usen armas automáticas.*

Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, 3 de abril de 2014, En colaboración con agencias estatales y federales Policía diligenció 1,034 órdenes de arresto en marzo 2014: El superintendente interino de la Policía de Puerto Rico, coronel Juan Rodríguez Dávila informó el jueves, que en un esfuerzo colaborativo entre agencias estatales y federales se pudieron diligenciar 1,034 órdenes de arrestos durante el mes de marzo de 2014.

⁷⁰⁴ El Nuevo Día, lunes, 1 de febrero de 2017, Gobierno firma acuerdo de colaboración con las autoridades federales: *El Gobierno de Puerto Rico firmó un acuerdo hoy con las autoridades federales para reforzar la lucha contra el crimen el cual incluye, por primera vez, casos de evasión contributiva y corrupción gubernamental, una de las áreas donde el Negociado Federal de Investigación (FBI) ha estado más activo en los pasados años.*

libertad mediante la prestación de una fianza por la gravedad de los delitos imputados. Y es esta una de las razones por las que las autoridades locales buscan llegar a este tipo acuerdos de colaboración con las agencias federales.⁷⁰⁵

Es importante destacar que cuando el gobierno de Puerto Rico intentó en el 2012 enmendar la Constitución para limitar el derecho a la libertad mediante prestación de fianza, describió la detención de ciertos acusados en el sistema de justicia penal federal como una herramienta poderosa.⁷⁰⁶

6.3 Finalidad.

La finalidad de la detención bajo la Ley de la Reforma a la Fianza de 1984 es la de evitar el riesgo de fuga, evitar que el acusado infrinja daños a testigos, a la comunidad o a miembros del jurado. También busca evitar que acusados catalogados como peligrosos puedan salir en libertad y que estos continúen llevando a cabo actividades criminales.

⁷⁰⁵ Oficina de Prensa del Departamento de Justicia de Puerto Rico, 9 de febrero de 2017, Ejemplo de colaboración estatal y federal caso de Waldemar Martínez: *La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, reiteró que la radicación de cargos tanto a nivel estatal como a nivel federal contra Waldemar Martínez Ortiz demuestra el compromiso y la efectividad del acuerdo de entendimiento firmado entre ambas jurisdicciones para sacar a los criminales de la calle y procurar el bienestar de la ciudadanía. Anoche a nivel federal, el magistrado Bruce McGiverin autorizó la denuncia en contra de Martínez Ortiz por cometer un carjacking causando grave daño corporal por hechos ocurridos el 31 de enero pasado, cuando robó el vehículo de una de dos hermanas, contra quienes agredió sexualmente. “El caso de Martínez Ortiz es el mejor ejemplo de la efectividad del acuerdo de entendimiento firmado el 1 de febrero junto con las autoridades federales en La Fortaleza con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien está comprometido a combatir la criminalidad. A nivel estatal, se radicarón los cargos que correspondían y los federales sometieron por carjacking. De esta forma nos aseguramos que esta persona esté sumariada y, de ser encontrada culpable, pasará largo tiempo en la cárcel”, expresó Vázquez Garced.*

⁷⁰⁶ “En la jurisdicción federal, los jueces tienen a su disposición una herramienta poderosa para mantener a los criminales peligrosos alejados de nuestras calles mientras culmina el procedimiento criminal en su contra. Se trata de la discreción para concederle o negarle el derecho a la fianza. Ello permite a los jueces federales evaluar la peligrosidad de los acusados y, en caso de determinar que éstos representan riesgo de fuga o riesgo a otras personas o la comunidad, negarle la fianza y mantenerlos encarcelados hasta la celebración del juicio. Esto evita que los criminales cometan delitos, destruyan evidencia que puede ser utilizada en su contra, intimidan potenciales testigos o pongan en riesgo la seguridad de nuestras familias mientras se mantienen en la libre comunidad bajo fianza”. Ley Núm. 84 de 14 de mayo de 2012.

6.4 Naturaleza jurídica.

La detención preventiva en el sistema procesal estadounidense es una medida cautelar de naturaleza personal, por lo que le es aplicable en este punto todo lo que de ella se dijo en relación con Puerto Rico.

6.5 Clases.

La Ley de Reforma a la Fianza de 1984 estableció dos tipos de detenciones: la detención mientras el acusado espera o se encuentra en medio de un juicio y otra mientras espera la sentencia o se encuentra en apelación.

- a. *Pendiente de Juicio: Un funcionario judicial autorizado a ordenar el arresto de una persona bajo la sección 3041 de este título ante quien se traiga a una persona arrestada ordenará que dicha persona sea liberada o detenida, mientras se encuentra en espera de un proceso judicial, conforme a este capítulo. (traducción nuestra)*
- b. *Pendiente de sentencia o apelación: Un funcionario judicial de un tribunal con jurisdicción original sobre un delito, o un funcionario judicial de un tribunal de apelación federal, ordenará que, a la espera de la imposición o ejecución de la sentencia, o hasta que se apele la sentencia condenatoria o sentencia, una persona sea liberada o detenida en virtud de este capítulo.⁷⁰⁷ (traducción nuestra)*

La ley también provee para que el acusado pueda salir en libertad bajo reconocimiento personal o bajo fianza. Para ambas opciones, el juez puede establecer condiciones.

⁷⁰⁷ "(a) Pending trial.--A judicial officer authorized to order the arrest of a person under section 3041 of this title before whom an arrested person is brought shall order that such person be released or detained, pending judicial proceedings, under this chapter. (b) Pending sentence or appeal.--A judicial officer of a court of original jurisdiction over an offense, or a judicial officer of a Federal appellate court, shall order that, pending imposition or execution of sentence, or pending appeal of conviction or sentence, a person be released or detained under this chapter."

6.6 Presupuestos.

Conforme a la Ley de Reforma de la Fianza de 1984 tanto el ministerio público como el juez o magistrado *motu proprio* pueden pedir la detención de un acusado. Como señalamos anteriormente, raras veces los jueces ordenan la detención del acusado, dejando en manos del Ministerio Público la decisión de solicitar la detención.

La detención de un acusado antes del juicio procederá cuando el juez o magistrado, luego de una vista, encuentra que ninguna condición o combinación de condiciones garantizará razonablemente la presencia del acusado cuando se le requiera; y también cuando no se garantice la seguridad de cualquier otra persona o de la comunidad.⁷⁰⁸ El Ministerio Público, el juez o magistrado pueden pedir o acordar la detención del acusado si determinan que existe un riesgo de fuga. También pueden solicitar o decidir la detención del sospechoso si determinan que, estando en libertad, podría obstruir o intentar obstruir la justicia, o pueda o intente amenazar o herir a testigos o a miembros del jurado. Como advierte PRINGLE: “*generalmente el gobierno tiene el peso de la prueba de demostrar la necesidad de la detención*”⁷⁰⁹ (traducción nuestra).

La ley también provee para que haya una presunción a favor de la detención cuando a la persona se le acuse de cometer un delito mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza física contra una persona o propiedad y cuya pena podría ser de 10 años o más. También cuando sea acusado de un delito cuya pena máxima podría ser cadena perpetua o la muerte. La presunción también procederá si es acusado de una violación a la Ley Federal de Sustancias Controladas o a la Ley de Importación y Exportación de Sustancias Controladas, y la pena sea de 10 años o más. De igual manera habrá una presunción a favor

⁷⁰⁸ A diferencia de España donde sólo puede ordenar la prisión provisional un juez, en los Estados Unidos la autorización es muy amplia. En términos generales la ley autoriza a detener a acusados de haber cometido algún delito contra los Estados Unidos a cualquier juez en los Estados Unidos, de todos los niveles, desde un juez de paz hasta un juez del Tribunal Supremo y hasta los alcaldes.

⁷⁰⁹ “*Generally, the burden of proof is on the government to establish the necessity for detention.*” Pringle, *supra* nota 595, en la pág. 919.

de la detención si el acusado ha sido convicto por delitos de violencia o sustancias controladas en cualquier jurisdicción estatal o federal.

Además, surgirá la presunción a favor de la detención si es acusado por cualquier delito grave que involucre a una víctima menor de edad o implique la posesión o el uso de un arma de fuego o un dispositivo explosivo o cualquier otra arma peligrosa. Asimismo, la presunción procederá en casos de ofensores sexuales que no se hayan sometido al registro de ofensores sexuales. Si el acusado ya ha sido convicto por alguno de estos delitos a nivel estatal o federal, o si el delito se cometió estando en libertad en espera de juicio a nivel estatal o federal, o si ha transcurrido un periodo no mayor de cinco años desde la fecha de su condena o liberación por alguno de estos delitos. El acusado en estos casos tiene que rebatir el peso de la prueba para derrotar la presunción a favor de la detención.

6.7 Requisitos de tiempo.

La Ley Federal de Reforma de la Fianza de 1984 no dispone de una limitación en cuanto al tiempo que puede pasar un acusado en detención. El tiempo estaría sujeto al derecho constitucional a juicio rápido y este a su vez a la interpretación judicial. Los atrasos y suspensiones que alarguen la estadía en detención de un acusado en espera de juicio muchas veces son considerados como justificados y, por lo tanto, no le aplicaría la protección del derecho a juicio rápido.

Destaca ARTHUR tener un tiempo límite máximo de detención ha sido señalado como un punto débil de la ley y que podría ser en algún caso inconstitucional:

“La gran mayoría de los tribunales, incluidos los Tribunales de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer, Tercer, Séptimo y Undécimo circuito, han llegado a la conclusión de que la Ley de Reforma de la Fianza no es, de su faz, inconstitucional. Pero incluso algunos de estos tribunales han advertido que una de las características más problemáticas

de la Ley es la posibilidad de una detención preventiva indefinida, que en algunas circunstancias, podría ser inconstitucional” ⁷¹⁰ (traducción nuestra).

ARTHUR también señala que, a pesar de que la Ley para Juicios Rápidos de 1974 establece que el juicio para los que están detenidos se tiene que llevar a cabo dentro de un término de 90 días, la misma ley contiene una serie de excepciones que provoca que el proceso se pueda alargar incluso hasta años.⁷¹¹ Otros autores como ALSCHULER catalogan la falta en la ley de un periodo máximo en detención como algo perturbador.⁷¹²

⁷¹⁰ “The great majority of courts, including the United States Courts of Appeals for the First, Third, Seventh, and Eleventh Circuits, have concluded that the Bail Reform Act is, at least, not unconstitutional on its face. But even some of these courts have cautioned that one of the Act’s most troublesome features - the possibility of indefinite pretrial detention - may in some circumstances render it unconstitutional as applied.” Arthur, *supra* nota 652, en la pág. 378.

⁷¹¹ “Congress intended that the Speedy Trial Act 69 would limit the length of pretrial detention. Section 3164 of the Speedy Trial Act states that pretrial detainees must come to trial within ninety days after detention begins. Unfortunately, the “days” to which that section refers are not calendar days. Section 3161(h) contains numerous provisions for “excludable time” that does not count against the ninety-day requirement. A trial judge may grant excludable time if, *inter alia*, the defendant undergoes physical or mental examinations, pursues an interlocutory appeal, or faces trial in the interim on other charges. The potential for delay is greatest, however, in complex cases, especially those involving numerous defendants. In such cases, in order to serve “the ends of justice,” the trial judge is often compelled to grant a continuance to one or both of the parties. These continuances do not count against the Speedy Trial Act’s ninety-day time limit. Yet the period of excludable delay may last for months, or even years. As a result, nearly every court that has considered the constitutionality of the Bail Reform Act has held that, at least in some cases, the time limits of the Speedy Trial Act may not adequately protect due process interests.”

“El Congreso pretendía que la Ley de Juicios Rápidos limitaría la duración de la detención preventiva. La sección 3164 de la Ley de Juicios Rápidos establece que los detenidos deben ir a juicio dentro de los noventa días posteriores al inicio de la detención. Desafortunadamente, los “días” a los que se refiere esa sección no son días calendario. La Sección 3161 (h) contiene numerosas disposiciones para el “tiempo excluible” que no cuenta en contra del requisito de noventa días. Un juez de primera instancia puede conceder un tiempo excluible si, entre otras cosas, el acusado se somete a exámenes físicos o mentales, presenta una apelación interlocutoria o se enfrenta a un juicio mientras por otros cargos. El potencial de demora es mucho mayor en casos complejos, especialmente en los que involucran a numerosos acusados. En tales casos, para servir a “los fines de la justicia”, el juez de primera instancia a menudo se ve obligado a conceder una continuación a una o ambas partes. Estas continuaciones no cuentan para el límite de tiempo de noventa días de Ley de Juicios Rápidos. Sin embargo, el período de demora excluible puede durar meses, o incluso años. Como resultado, casi todos los tribunales que han considerado la constitucionalidad de la Ley de reforma de la fianza han sostenido que, al menos en algunos casos, los límites de tiempo de la Ley de juicios rápidos pueden no proteger adecuadamente los intereses del debido proceso”. (traducción nuestra). Arthur, *supra* nota 654, en la pág. 387.

⁷¹² “Among the disturbing aspects of the 1984 Act are some things that are not there. Unlike the 1970 preventive detention legislation for the District of Columbia, which in most cases limited the period of pretrial incarceration to sixty days, the 1984 Act imposes no limit on the length of pretrial detention. Its authors relied on a measure enacted after the District of Columbia statute, the Federal Speedy Trial Act of 1974, to guard against prolonged imprisonment before trial. The 1974

Hasta la fecha el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se ha expresado en cuanto a qué termino de tiempo podría ser considerado una violación al derecho a juicio rápido. PRINGLE resalta que los tribunales apelativos tampoco han llegado a un consenso.⁷¹³

Act provides, but only as a starting point, that the trial of an incarcerated defendant must begin within ninety days of his detention. Although Senator Thurmond, Senator Laxalt, and others who supported the 1984 Act described this ninety-day period as an 'upper bound' or 'worst case limit,' they were in error. The authors of the Speedy Trial Act recognized that the circumstances justifying delay cannot be reduced to a formula. After providing other, more specific exclusions from the ninety-day period, they created an all-purpose escape route. The Act authorizes judges to extend the ninety-day period on the basis of findings that 'the ends of justice served by granting continuances outweigh the best interest of the public and the defendant in a speedy trial.' Statistics compiled by the Administrative Office of the United States Courts indicate that most federal criminal cases are not concluded within periods close to the base periods established by the Act. Indeed, in a complex case, federal pretrial detention can easily last longer than a year."

"Entre los aspectos perturbadores de la Ley de 1984 están algunas cosas que no contiene. A diferencia de la legislación de detención preventiva de 1970 para el Distrito de Columbia, que en la mayoría de los casos limitó el período de prisión preventiva a sesenta días, la Ley de 1984 no impone ningún límite a la duración de la detención preventiva. Sus autores se basaron en... la Ley Federal de Juicios Rápidos de 1974, para evitar el encarcelamiento prolongado antes del juicio. La Ley de 1974 establece, pero sólo como punto de partida, que el juicio de un acusado encarcelado debe comenzar dentro de los noventa días posteriores a su detención. Aunque el senador Thurmond, el senador Laxalt y otros que apoyaron la Ley de 1984 describieron este período de noventa días como un "límite máximo" o "un límite en el peor de los casos", se equivocaron. Los autores de Ley Federal de Juicios Rápidos reconocieron que las circunstancias que justifican el retraso no pueden reducirse a una fórmula. Después de proporcionar otras exclusiones más específicas del período de noventa días, crearon una ruta de escape de uso múltiple. La Ley autoriza a los jueces a extender el período de noventa días sobre la base de los hallazgos de que "los fines de la justicia superan los mejores intereses del público y del acusado en cuanto a juicio rápido. Las estadísticas compiladas por la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos indican que la mayoría de los casos penales federales no se concluyen en períodos cercanos a los períodos establecidos por la Ley. De hecho, en un caso complejo, la detención preventiva federal puede durar más de un año" (traducción nuestra). Alschuler, supra nota 657, en la pág. 516.

⁷¹³ "There has been a significant amount of litigation regarding the constitutionality of the Act as applied to specific cases. Generally, challenges have revolved around the question of how long a defendant awaiting trial may be detained before his or her due process rights are infringed. For example, the U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit has held that detention of a defendant as a flight risk for over four months was excessive. 17 On the other hand, pretrial confinement for over sixteen months was deemed not violative of due process by the Court of Appeals for the First Circuit. The constitutionality of the duration of detention in a particular case cannot be determined solely by the length of the confinement. The court also must take into account the totality of the circumstances, including the complexity of the case, whether the government or the defendant occasioned the delay, and the strength of the evidence of flight risk and dangerousness."

"Ha habido una cantidad significativa de litigios con relación a la constitucionalidad de la Ley según se aplica a casos en específicos. En general, los litigios han girado en torno a de cuánto tiempo se puede detener a un acusado en espera de juicio antes de que se infrinja su derecho al debido proceso. Por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Décimo Circuito sostuvo que la detención de un acusado por riesgo de fuga durante más de cuatro meses fue excesiva. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito consideró que el confinamiento previo al juicio por más de dieciséis meses no violaba el debido proceso. La constitucionalidad de la duración de la detención en un caso particular no puede ser determinada

6.8 Procedimiento

La sección 3142 de la Ley de Reforma a la Fianza de 1984 dispone que luego que el juez o el Ministerio Público solicite la detención del acusado se llevará a cabo una vista para ese propósito inmediatamente después de la primera comparecencia del acusado ante un juez o magistrado. Sobre por qué no se lleva a cabo la vista de detención en la primera comparecencia, nos dice PRINGLE:

“Aunque la Ley indica que una audiencia de detención puede llevarse a cabo en la comparecencia inicial, esto rara vez ocurre. Típicamente, el gobierno busca una continuación [de la vista] y, en ausencia de circunstancias excepcionales, se otorga una moción para que se continúe de hasta tres días. Aparte de la necesidad del gobierno de prepararse, existen importantes impedimentos legales y prácticos para realizar una audiencia de detención en el momento de la comparecencia inicial. Por ejemplo, normalmente el acusado no está representado por el abogado en la comparecencia inicial”⁷¹⁴ (traducción nuestra).

En la audiencia, el acusado tiene derecho a estar representado por un abogado de su selección y a su costo. De no tener capacidad económica para pagar un abogado el Estado le proveerá uno. De no ser uno de los casos donde se presume la justificación de detención, el ministerio público tendrá que presentar prueba que justifique la detención del acusado. El acusado a través de su abogado tendrá la oportunidad de presentar testigos, contrainterrogar a los testigos que se presente el ministerio público y presentar pruebas. Si al acusado se le imputa alguna causal que active la presunción a favor de la detención,

únicamente por la duración del confinamiento. El tribunal también debe tener en cuenta la totalidad de las circunstancias, incluida la complejidad del caso, si el gobierno o el acusado ocasionaron la demora, y la fuerza de la evidencia del riesgo de fuga y la peligrosidad”. (traducción nuestra). Pringle, supra nota 595, en la pág. 913.

⁷¹⁴ *“Although the Act indicates that a detention hearing may be held at the initial appearance, this rarely occurs. Typically, the government seeks a continuance and, absent exceptional circumstances, a motion for a continuance of up to three days is granted. Aside from the government's need to prepare, there are significant legal and practical impediments to holding a detention hearing at the time of the initial appearance. For example, normally the defendant is unrepresented by counsel at the initial appearance. It is not advisable to hold an adversary evidentiary hearing on the issue of detention at a time when the defendant *918 cannot enjoy the constitutional right to counsel.” Pringle, supra nota 595, en las págs. 917 – 918.*

tendrá que presentar pruebas para rebatirla. Al igual que en la Ley de la Reforma a la Fianza de 1966, en las vistas de detención no será de aplicación las reglas de admisibilidad de la prueba.

La ley dispone que la determinación que haga el juez de que ninguna condición o combinación de condiciones razonablemente garantizará la seguridad de otras personas o la comunidad, debe estar respaldada por evidencia clara y convincente.

Sobre el contenido de la orden de detención, la sección 3142 de la ley estipula que en la misma: (1) el juez deberá incluir los hechos, sus hallazgos y los motivos de la detención; (2) ordenará que el acusado sea puesto bajo la custodia del Fiscal General para su confinamiento en una instalación correccional separada, en la medida de lo posible, de personas que esperan o cumplen condenas o que se encuentran bajo custodia hasta la apelación; (3) ordenará que al acusado se le brinde una oportunidad de orientarse con un abogado; y (4) indicará que, por orden de un Tribunal de los Estados Unidos o a petición de la fiscalía, la persona a cargo de la instalación correccional donde el acusado está confinado lo entregue a un alguacil de los Estados Unidos para que asista a los procedimientos judiciales cuando sea necesario.

6.9 Efectos de la prisión preventiva (“pre-trial detention”)

La determinación de detención del acusado es revisable si, ante una petición de libertad, el juez o magistrado determina que existe información que no conocía al momento de ordenar la detención, y si surgieron condiciones favorables para una liberación que aseguren la comparecencia del acusado, siempre que quede garantizada la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad. El juez también podría permitir la liberación temporal del acusado para la preparación de su defensa.

Sobre los efectos de una detención en el acusado, la propia ley advierte que no se interpretará como modificación o limitación de su presunción de inocencia. Pero en realidad se han realizado estudios que han concluido que la detención

tiene un efecto adverso en el acusado. La mayoría de los detenidos sufre consecuencias emocionales y laborales por su detención. También aumentan las probabilidades de que lo encuentren culpable de los delitos imputados en comparación con acusados que permanecen en libertad. Para ALSCHULER, la detención preventiva afecta todos los aspectos del ser humano.⁷¹⁵

DRESSLER y THOMAS III enumeran las razones del por qué del alto nivel de convicción entre los acusados que se encuentra en detención:

“(1) La restricción de la relación abogado–cliente...; (2) debido a la pérdida de ingresos, el detenido puede requerir los servicios de un defensor público con exceso de trabajo, en lugar de un abogado privado de su elección; y (3) las condiciones de la cárcel muchas veces presionan al detenido a aceptar una oferta de declaración de culpabilidad desventajosa”⁷¹⁶ (traducción nuestra).

⁷¹⁵ “As commentators have often noted, the burdens of pretrial imprisonment are not limited to losses of time and liberty. The jobs of detained defendants frequently disappear, and friendships and family relationships are disrupted. Indeed, families and friends sometimes lose interest and no longer visit or write. The physical conditions of confinement often are worse for untried defendants, frequently detained in local jails, than for convicted felons detained in penitentiaries. Work opportunities and educational programs usually are less available. Coercion to engage in homosexual activities appears to be common as do other forms of brutalization, and suicide rates are high. Moreover, incarceration affects a defendant's physical appearance and impedes his ability to consult lawyers, locate witnesses, and otherwise prepare a defense. The available empirical studies of the effects of detention may not be conclusive, for perfect controls are unattainable. Nevertheless, these studies strongly suggest that pretrial incarceration makes both conviction and a severe sentence more likely.”

“Como los comentaristas han señalado a menudo, las cargas de la prisión preventiva no se limitan a la pérdida de tiempo y libertad. Los empleos de los detenidos frecuentemente desaparecen, y las amistades y las relaciones familiares se interrumpen. De hecho, las familias y los amigos a veces pierden interés y ya no visitan ni le escriben. Las condiciones físicas de reclusión a menudo son peores para los acusados no juzgados, frecuentemente detenidos en cárceles locales, que para los delincuentes condenados detenidos en centros penitenciarios. Las oportunidades de trabajo y los programas educativos suelen ser menos disponibles. La coerción para participar en actividades homosexuales parece ser común al igual que otras formas de brutalización, y las tasas de suicidio son altas. Además, el encarcelamiento afecta la apariencia física de un acusado e impide su capacidad para consultar a abogados, localizar testigos y preparar una defensa. Los estudios empíricos disponibles sobre los efectos de la detención pueden no ser concluyentes, ya que los controles perfectos son inalcanzables. Sin embargo, estos estudios sugieren fuertemente que el encarcelamiento antes del juicio hace que tanto la condena como una sentencia severa sean más probables”. (traducción nuestra). Alschuler, supra nota 657, en la pág. 517.

⁷¹⁶ “(1) The curtailment of the attorney-client relationship ...; (2) due to loss of income, a detainee may be required to rely on the services of an overworked public defender rather than a private attorney of choice; and (3) a detainee is often pressured by jail conditions to accept a disadvantageous plea offer.” Joshua Dressler y George C. Thomas III., *Criminal Procedure: principles, policies and perspectives*, págs. 796 - 797 (2013)

La ley provee para que tanto el acusado como el Ministerio Público puedan apelar las determinaciones que se realicen en una vista para detención, de no estar de acuerdo con las mismas.

CAPÍTULO 7.

LA RELACIÓN ENTRE PUERTO RICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y SU EFECTO EN LOS DERECHOS DEL ACUSADO

7.1 Los Casos Insulares y sus efectos en los derechos de los acusados en Puerto Rico.

A principios del siglo XX, comenzaron a llegar una serie de casos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se discutirían controversias nacidas de la nueva política imperial estadounidense. A través de estos pleitos, denominados como los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos establecería los lineamientos de la política a seguir con sus nuevas posesiones. A juicio de TRÍAS MONGE, *“lo que se litigaba en el fondo era la facultad del gobierno de los Estados Unidos de establecer colonias, de negarle a las nuevas posesiones derechos que bajo la Constitución amparaban a los estados”*.⁷¹⁷

Antes de los llamados Casos Insulares los Estados Unidos no contaba con Territorios No Incorporados. Hasta entonces llegó a tener Territorios Incorporados respecto de los que existía la intención de que algún día serían Estados de la unión. Para con los Territorios No Incorporados, no sería así. Sobre la situación antes de 1898, nos dice SERRANO GEYLS:

“[L]a condición constitucional de los territorios adquiridos antes de 1898 y sus relaciones con el gobierno federal no plantearon problemas jurídicos de importancia porque las tres ramas de gobierno habían aceptado desde fines del Siglo 18 que esos territorios se convertirían en estados de la Unión, luego de un período – a ser establecido por el

⁷¹⁷ Trías Monge, *supra* nota 180, en la pág. 244.

Congreso – de desarrollo poblacional y económico y aprendizaje de los principios y prácticas del gobierno propio”.⁷¹⁸

Esta historia cambió con la firma del Tratado de París de 1898, mediante el cual los Estados Unidos reciben a las islas de Puerto Rico, Filipinas y Guam, territorios que catalogaría como no incorporados. Este nuevo estatus político creó una serie de controversias que acabarían en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Señala RIVERA RAMOS que estos casos, conocidos como los “Casos Insulares”, *“fueron creando una diferenciación en cuanto a la aplicación de los derechos constitucionales que protegerían a los ciudadanos residentes en estos territorios”*.⁷¹⁹ Y hacemos énfasis en “ciudadanos residentes en estos territorios”, pues si estos emigran hacia uno de los Estados de la unión gozarían de los mismos derechos y obligaciones de sus habitantes. Por lo tanto, el trato diferenciado se da únicamente con los residentes de los Territorios No Incorporados. Para RIVERA RAMOS a través de Casos Insulares el Tribunal Supremo de los Estados Unidos *“ha justificado dicha discriminación entre ciudadanos de una misma nación”*.⁷²⁰

⁷¹⁸ Raúl Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, vol. I, pág. 449, (1986).

⁷¹⁹ “The name Insular Cases is normally given to a series of nine decisions rendered in 1901. Seven of those cases arose from Puerto Rico, one from Hawaii, and one from the Phillippine Islands”. “El nombre de Casos Insulares usualmente se le otorga a una serie de nueve decisiones emitidas en 1901. Siete de esos casos surgieron de Puerto Rico, uno de Hawai y uno de las Islas Filipinas”. (traducción nuestra). Efrén Rivera Ramos, *The Legal Construction of Identity*, págs. 74 – 75 (2001).

⁷²⁰ El Dr. Efrén Rivera Ramos resume en trece puntos las doctrinas más importantes establecidas a través de los llamados “Casos Insulares”. Estas son: 1. Los Estados Unidos tienen un derecho soberano inherente para adquirir un territorio extranjero. 2. Como corolario a ese Derecho, el gobierno de los Estados Unidos tiene el poder de gobernar ese territorio adquirido. 3. La cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos le garantiza poderes plenarios al Congreso para gobernar los territorios estadounidenses. 4. Hay que hacer una distinción entre algo llamado territorio incorporado y algo llamado territorio no incorporado. 5. El territorio incorporado se considera parte integral de los Estados Unidos, mientras el territorio no incorporado pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. 6. No todas las provisiones de la Constitución de los Estados Unidos aplican a los territorios. Además, puede haber algunas disposiciones (por ejemplo, el derecho a juicio por jurado) que se apliquen en territorios incorporados, pero no en territorios no incorporados. Determinar qué disposición constitucional se aplica en los territorios depende de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 7. El Congreso puede decidir, de conformidad con sus poderes plenarios, extender todas las leyes federales a los territorios bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. También puede decidir que algunas leyes se apliquen y otras no. 8. Los derechos políticos de participación plena en el gobierno de los Estados Unidos, incluida la representación en el Congreso de los Estados Unidos y la elección de funcionarios federales, se han otorgado solo a los residentes de los Estados, no a los residentes de los territorios. 9. Con respecto al territorio no incorporado, el Congreso puede disponer del territorio

La situación de Puerto Rico se decidió en el caso *Downes v. Bidwell*⁷²¹ de 1901, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó que Puerto Rico es un territorio que le pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Como destaca HELFELD: “la Corte Suprema decidió que la intensión del Tratado de París no fue la de incorporar a Puerto Rico en los Estados Unidos”.⁷²²

Así las cosas, no siendo parte de los Estados Unidos, a los acusados en Puerto Rico sólo les protegerán los “derechos fundamentales” de la Constitución

como le parezca. Esto incluye proporcionar diversas formas de autogobierno (sin renunciar a la autoridad máxima del Congreso bajo la cláusula territorial), incorporar el territorio a la comunidad política de los Estados Unidos, admitirlo como un Estado o deshacerse del territorio otorgándole independencia o cederlo a otro país. El Congreso tiene el poder de hacer todas esas cosas. Sin embargo, en virtud de la Constitución, no está obligado a hacer ninguna de ellas. 10. La decisión de incorporar un territorio no incorporado pertenece exclusivamente al Congreso. 11. La mera extensión de la ciudadanía estadounidense a los residentes del territorio no tiene el efecto de incorporar ese territorio. 12. Puerto Rico se le considera como un territorio no incorporado de los Estados Unidos. 13. Posiblemente por diferentes razones, la cláusula de uniformidad, la cláusula de exportación y el derecho a un juicio por jurado en los tribunales locales no se aplican en Puerto Rico. Es posible que otras cláusulas de la Constitución no se apliquen, pero eso es decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

“1. The United States has inherent sovereign right to acquire foreign territory. 2. As a corollary to that right, the US government has the power to govern the territory so acquired. 3. The territory clause of the US Constitution grants Congress plenary power to govern US territories. 4. There is a distinction to be made between something called incorporated territory and something else called unincorporated territory. 5. Incorporated territory is to be considered an integral part of the United States, while unincorporated territory is only appurtenant to, but not a part of, the United States. 6. Not all provisions of the US Constitution apply in the territories. Further, there may be some provisions (for example, the right to jury trial) that apply in incorporated territories but not unincorporated territories. Determining which constitutional provisions apply in the territories is up to the US Supreme Court. 7. Congress may decide, in accordance with its plenary powers, to extend all federal laws to the territories under US jurisdiction. It may also decide that some laws will apply and others will not. 8. Political rights of full participation in the governance of the United States, including representation in the US Congress and the election of federal officials, have been granted only to residents of the states, not to residents of the territories. 9. Regarding unincorporated territory (for argument’s sake, I will not include incorporated territory here), Congress can dispose of the territory as it sees fit. This includes providing for diverse form of self-government (without relinquishing Congress’s ultimate authority under the territory clause), incorporating the territory into the US political community, admitting it as a state, or getting rid of the territory by granting it independence or ceding in to another country. Congress has the power to do all those things. However, under the Constitution, it is not obligated to do any of them. 10. The decision to incorporate an unincorporated territory belongs exclusively to Congress. 11. The mere extension of US citizenship to a territory’s residents does not have the effect of incorporating that territory. 12. Puerto Rico is to be considered an unincorporated territory of the United States. 13. Arguably for different reasons, the uniformity clause, the export clause, and the right to a trial by jury in local courts do not apply in Puerto Rico. Other clauses of the Constitution may not apply, but that is up to the US Supreme Court to decide.” Efrén Rivera Ramos, *The Insular Cases: What is there to reconsider?*, en *Reconsidering the Insular Cases: The Past and Future of the American Empire*, págs. 31 – 32, (Gerald L. Neuman & Tomiko Brown - Nagin eds.), 2015.

⁷²¹ *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244 (1901).

⁷²² Helfeld, *supra* nota 251, en la pág. 190.

federal. La determinación de qué son o no “derechos fundamentales” queda a la discreción de los jueces y magistrados de los tribunales federales.

7.2 La protección de los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos de América a los acusados en Puerto Rico a nivel local.

Sobre la protección de los derechos de la Constitución estadounidense a los acusados en los Estados, como nos indica CHIESA APONTE, se han esbozado tres teorías: la teoría de la incorporación total, la teoría de los derechos fundamentales y teoría de la incorporación selectiva que establece la doctrina que ha prevalecido.⁷²³ A juicio CHIESA APONTE, la aplicación de las garantías procesales (que para él incluye las garantizadas en la Octava Enmienda), obligan al gobierno de Puerto Rico:

La incorporación de estas garantías procesales “incorporadas” obliga al gobierno de Puerto Rico, independientemente de que Puerto Rico para fines de la incorporación selectiva sea considerado como un estado o como un territorio (teoría del “either-or”), favorecida por la Corte Suprema”. Si Puerto Rico es considerado como un estado, se activa la cláusula de debido proceso de ley en la Decimocuarta Enmienda, y la garantía procesal queda incorporada. Si Puerto Rico es considerado como territorio de los Estados Unidos, la garantía procesal se aplica directamente sin necesidad de recurrir a la Enmienda Catorce.⁷²⁴

⁷²³ “1. La teoría de la incorporación total: sostiene que todos los derechos garantizados en la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos deben ser reconocidos por los gobiernos estatales.⁷²³ Esto es, el ciudadano o titular del derecho lo puede hacer valer no solo frente al gobierno federal, sino también frente al gobierno estatal. 2. La teoría de los derechos fundamentales: sostiene que bajo la cláusula de debido proceso de ley quedan incorporados a los estados solo aquellos derechos tan fundamentales que su negación no es compatible con la esencia misma del debido proceso de ley, que es “fundamental fairness”. Se habla de derechos implícitos en el concepto de libertad ordenada (“ordered liberty”). Sin embargo, hay otros derechos garantizados que, aunque importantes, no son tan fundamentales que obliguen a los gobiernos estatales a reconocerlos. 3. La teoría de la incorporación selectiva: parecida a la teoría de los derechos fundamentales y está igualmente fundada en la cláusula de debido proceso de ley en la Enmienda Catorce. Sin embargo, se expande más allá del concepto de “fundamental fairness” o de “implicit in the concept of ordered liberty”, para incluir derechos arraigados en el sistema de justicia criminal en los Estados Unidos.⁷²³ Esta es la doctrina que ha prevalecido.” Ernesto L. Chiesa Aponte, *Procedimiento Criminal y la Constitución*, pág. 18, (2017).

⁷²⁴ Chiesa, *supra* nota 725, en las págs. 24 – 25.

CHIESA APONTE concluye que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha reconocido la aplicación de los derechos fundamentales en Puerto Rico. Pero también advierte que: *“no necesariamente todos los “derechos fundamentales”, incorporados a los Estados a través de la Enmienda Catorce, son aplicables a los territorios no incorporados”*.⁷²⁵ Explica que: *“el concepto de “derechos fundamentales” podría tener significados distintos cuando se trata de incorporación a los estados a través de la Enmienda Catorce y cuando se trata de si esos derechos cobijan a los imputados en territorios no incorporados”*.⁷²⁶

CHIESA APONTE también realiza un análisis comparado sobre la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a la prohibición de fianzas excesivas y su equivalente en la Sección Once del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y concluye que ambas disposiciones son iguales y que una no brinda más derechos que la otra. Esto en comparación con otros derechos de la Constitución puertorriqueña que son de "factura más ancha" y brindan más derechos a los ciudadanos.⁷²⁷

⁷²⁵ Chiesa, *supra* nota 725, en la pág. 25.

⁷²⁶ *Id.*

⁷²⁷ *“La sección once de nuestra Carta de Derechos dispone que “las fianzas y las multas no serán excesivas”. La cláusula es prácticamente idéntica la establecida en la Enmienda Octava: “Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed”. Aquí no hay asomo de “factura más ancha”. No hay indicio de apartarnos de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la prohibición de fianzas excesivas. La norma fundamental es que una fianza por suma mayor que la indicada para garantizar la presencia del imputado está reñida con la Enmienda Octava. La cláusula no tiene el efecto de un impedimento para la detención preventiva, sin derecho a fianza, antes de un fallo condenatorio, por razón de la peligrosidad social que entraña la libertad bajo palabra del imputado particular. Distinta es la actuación en Puerto Rico, pues nuestra Carta de Derechos provee para derecho a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio. En ausencia de enmienda constitucional, en Puerto Rico no puede eliminarse el derecho a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio. En Puerto Rico sólo cabe regular el monto de la fianza, con la limitación constitucional de que tal monto no sea excesivo. También pueden imponerse condiciones no económicas al imputado que quede en libertad bajo fianza. Hay que tomar en consideración que “si las fianzas son excesivas, se viola el derecho de todo acusado a estar en libertad bajo fianza, hasta que haya un veredicto sobre su acusación. A mi juicio, no hay impedimento constitucional para regular el monto de la fianza a base de otras consideraciones ajenas a garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos en su contra. Al aprobarse nuestra Carta de Derechos el entendido era que el propósito de la fianza era garantizar la presencia del acusado. Pero hay que considerar el desarrollo posterior que culmina con Salerno v. United States, y con la aceptación de que hay otros fines legítimos para imponer condiciones a la libertad del imputado antes de fallo condenatorio, incluyendo lo relativo al monto de la fianza. En suma, me parece que la “factura más ancha” consiste aquí en las cláusulas específicas de derecho a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio y la que limita la detención preventiva a seis meses. No hay “factura más ancha” en cuanto a la prohibición de fianzas excesivas”*. Chiesa, *supra* nota 447, en las págs. 122 – 123.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, por su parte, entiende que a Puerto Rico se le aplican todos los derechos de la Constitución de los Estados Unidos que han sido extendidos a los Estados.⁷²⁸ ÁLVAREZ GONZÁLEZ destaca que las únicas garantías de las primeras ocho enmiendas cuya aplicación a los Estados se ha rechazado son: *“1) el derecho a portar armas, garantizado por la Segunda Enmienda; 2) la cláusula de la Quinta Enmienda que requiere la intervención de un gran jurado para presentar una acusación penal; y, 3) la garantía de juicio por jurado en casos civiles, consagrada por la Séptima Enmienda”*.⁷²⁹

HELFELD, por su parte, opina que, de llegar el caso ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, estos decidirán que aplican en Puerto Rico:

*“En mi opinión, es altamente probable que la Corte [Suprema de los Estados Unidos], si se ve presionada a decidir, sostendrá que los derechos de las enmiendas primera, cuarta, quinta, sexta, octava, decimotercera y decimonovena son tan vinculantes al Estado Libre Asociado, como lo son para los gobiernos de los estados...”*⁷³⁰

⁷²⁸ “¿Qué importancia tiene para Puerto Rico cuáles derechos de la Constitución de Estados Unidos el Tribunal Supremo federal ha hallado aplicables a los Estados y con qué extensión? En una palabra, muchísima. Si bien es cierto que Puerto Rico no es un Estado y, por ende, técnicamente no le aplica la doctrina de incorporación selectiva que el Tribunal Supremo federal ha creado para justificar la aplicación de determinadas garantías constitucionales a los Estados, puede advertirse de la discusión precedente que las doctrinas de incorporación selectiva, aplicable a los Estados, e incorporación territorial, aplicable a Puerto Rico, comparten el mismo criterio básico: si el derecho reclamado es uno “fundamental”. No considero probable que los tribunales concluyan que una misma garantía constitucional es “fundamental” respecto a los Estados más no en cuanto a Puerto Rico. A mi juicio, todo derecho que sea hallado aplicable a los Estados a través de la doctrina de incorporación selectiva ser igualmente aplicable a Puerto Rico, a través de la doctrina de incorporación territorial.” Jose Julián Álvarez González, *La Protección de Los Derechos Humanos en Puerto Rico*, 57 REV. JUR. UPR 133, págs. 149 - 150 (1988).

⁷²⁹ *Id.* en la pág. 146.

⁷³⁰ David M. Helfeld, *How Much of the Federal Constitution is Likely to Be Held Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico*, 39 Rev. Jur. UPR 169, pág. 183 (1970).

SERRANO GEYLS por su parte opinaba que la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sería aplicable a Puerto Rico por ser considerado este un derecho fundamental.⁷³¹ FONTANET MALDONADO, citando el caso de *Torres v. Puerto Rico*⁷³², concluye que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y, como tal, “no le son necesariamente de aplicación las disposiciones de la Constitución federal, que las mismas no operan ex proprio vigore”.⁷³³ Destaca FONTANET MALDONADO que, para que determinadas disposiciones constitucionales se apliquen –como son las contenidas en el *Bill of Rights*–, será necesario que el Congreso así lo disponga o los tribunales federales las hagan aplicables.⁷³⁴ Señala FONTANET MALDONADO que el Tribunal Supremo “ha extendido a los puertorriqueños los siguientes derechos de la Constitución federal: el debido proceso de ley, la protección contra registros y allanamientos irrazonables, la cláusula de privilegios e inmunidades y la igual protección de las leyes”.⁷³⁵

⁷³¹ “En cuanto a la Octava Enmienda el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió en *Schilb v. Kuebel*, 404 U.S. 357 (1971) que su prohibición a la imposición de fianzas excesivas aplica a los estados a través de la Decimocuarta Enmienda. Ahora bien, habría que analizar si ese derecho a la no imposición de fianzas excesivas de la Octava Enmienda se extiende a los ciudadanos estadounidenses residentes Puerto Rico, territorio no incorporado de los Estados Unidos. Hasta la fecha eso no se ha decidido. Me parece obvio que si la Enmienda VIII se aplicara a los estados por vía de su incorporación a la XIV, sería igualmente aplicable a Puerto Rico, ya directamente o por medio de la citada Enmienda XIV, por efecto de la doctrina de “derechos fundamentales”. Tampoco el Tribunal Supremo federal ha resuelto frontalmente si la protección de la Enmienda VIII contra “fianzas excesivas” incluye el derecho a fianza.

... A la luz de esa jurisprudencia, y particularmente si se considera el amplio desarrollo de la doctrina de “incorporación” de los derechos fundamentales a la Enmienda XIV, se puede predecir con fiabilidad que llegado el momento el Tribunal resolverá que existe un derecho a fianza -o a libertad antes del juicio--- garantizado por la Constitución federal y que ese derecho debe ser protegido contra intervenciones indebidas de los estados y de Puerto Rico”. Raúl Serrano Geyls, *La Propuesta Enmienda Constitucional Al Derecho a Fianza en Casos Criminales*, 44 Rev. Jur. U.P.R. 7, págs. 12 - 13 (1975).

⁷³² *Torres v. Puerto Rico*, 442 U.S. 465 (1979).

⁷³³ Julio E. Fontanet Maldonado, *El Proceso Penal de Puerto Rico*, pág. 22, (2008).

⁷³⁴ *Id.*

⁷³⁵ “1. El debido procedimiento de ley: *Calero Toledo v. Pearson Yacht*, 416 U.S. 663 (1974). 2. La protección contra los registros y allanamientos irrazonables: *Torres v. Puerto Rico*, 442 U.S. 475 (1979). 3. La cláusula de privilegios e inmunidades: *Balzac v. Porto Rico*, 258 U.S. 298 (1922). 4. La igual protección de las leyes: *Examining Board v. Flores Otero*, 426 U.S. 572 (1976)”.

FONTANET MALDONADO señala que *“los derechos del acusado contemplados en la Constitución federal que son parte de un proceso justo (fundamental fairness) o cuya aplicación es necesaria para evitar someter al acusado a un “risk of unfairness”, serán de aplicación a los Territorios no incorporados como Puerto Rico, como garantías mínimas”*.⁷³⁶ Por último concluye FONTANET MALDONADO su análisis indicando que *“los mismos derechos fundamentales que son aplicables a los Estados a través de la doctrina de la incorporación selectiva son y serán los que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haga extensivo a Puerto Rico como Territorio no incorporado”*.⁷³⁷ Sobre el derecho a la fianza FONTANET MALDONADO citando el caso de *Backer v. McCollan*, (anteriormente reseñado) alega que el Tribunal Supremo no se ha expresado con claridad. Sobre este punto diferimos de este autor, ya que entendemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha expresado extensamente sobre la Octava Enmienda y su aplicación a los Estados a través de la Decimocuarta enmienda.

Para NEVAREZ MUÑIZ, la regla es que *“los derechos fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos se aplican en Puerto Rico, por lo que las decisiones del Tribunal Supremo Federal sobre tales derechos son vinculantes”*.⁷³⁸ Añade que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán, no obstante, interpretar los derechos fundamentales de su Constitución en forma diferente a la federal, pero no acortar o restringir los derechos que ésta garantiza.

Por su parte, RESUMIL DE SANFILIPPO indicaba que algunos derechos fundamentales de la Constitución estadounidense protegen al acusado en Puerto Rico:

“El Derecho Procesal Penal puertorriqueño se reglamenta no sólo por la Constitución del Estado Libre Asociado sino también por la

⁷³⁶ Fontanet, *supra* nota 735, en la pág. 22

⁷³⁷ *Id.* en las págs. 22 - 23.

⁷³⁸ Dora Nevarez Muñiz, *Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño*, pág. 21, (2014).

*Constitución de los Estados Unidos, a la cual está íntimamente ligada y que provee algunos derechos fundamentales que protegen al ciudadano y que no pueden ser ignorados ni menoscabados por las disposiciones propias”.*⁷³⁹

Decía RESUMIL DE SANFILIPPO que esto: *“permite confrontar al Estado no únicamente con intervenciones irrazonables de acuerdo con la propia Constitución, sino también en violación a los derechos fundamentales protegidos en la esfera federal, lógicamente aplicables a la situación particular, y cuya interpretación mínima queda obligado el Tribunal Supremo de Puerto Rico al aplicar la propia Constitución”.*⁷⁴⁰

Indicaba además RESUMIL DE SANFILIPPO que: *“la autoridad federal sobre la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no había sido claramente delimitada y que se había tenido que recurrir a la interpretación judicial con el propósito de establecer los límites de aplicabilidad de la constitución federal”.*⁷⁴¹ Sobre la protección derechos fundamentales de la Constitución federal a los acusados en Puerto Rico, la profesora RESUMIL DE SANFILIPPO indicaba:

*“Toda vez que no es de completa aplicación, los criterios de aplicabilidad han sido fruto de dos vertientes: la de derechos fundamentales versus los no fundamentales y la de derechos naturales versus los remediales. En cuanto respecta a los derechos individuales vulnerables a través de un procedimiento criminal el hecho de la singular situación de Puerto Rico, como afirma Ortiz Álvarez, no afecta su consideración en forma distinta a los estados o territorios incorporados”.*⁷⁴²

⁷³⁹ Olga Elena Resumil de Sanfilippo, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal*, vol. I, págs. 17 - 18, (1990).

⁷⁴⁰ *Id.* en la pág. 18.

⁷⁴¹ *Id.*

⁷⁴² Resumil de Sanfilippo, *supra* nota 741, en la pág. 18.

Resalta RESUMIL DE SANFILIPPO que: *“la interpretación jurisprudencial al respecto ha sido muy escasa, debido a que, con excepción al derecho a juicio por jurado, así como la institución del gran jurado, todos los derechos individuales habían sido incorporados desde 1917 en la Ley Jones. La aprobación y establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con excepción del gran jurado y el derecho a juicio por jurado en casos civiles, se garantizan todos los derechos que la Constitución Federal establece, y a veces con mayor amplitud, fue causa de que se sometieran pocos casos a revisión...”*⁷⁴³

RESUMIL DE SANFILIPPO también destaca los derechos individuales que hasta el momento el Tribunal Supremo Federal ha reconocido como aplicables al campo del Derecho Procesal Penal en Puerto Rico: *la protección contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a asistencia de abogado, la representación pro se, el privilegio contra la autoincriminación y la protección contra la doble exposición.*⁷⁴⁴ También argumentaba que los tribunales puertorriqueños debían adherirse a la doctrina federal al interpretar la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a los derechos fundamentales.⁷⁴⁵

7.3 El caso *Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle* y sus posibles efectos en cuanto a la detención de acusados.

En 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió un caso que para unos cambió y para otros aclaró la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Este caso fue el de *Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez*

⁷⁴³ Resumil de Sanfilippo, *supra* nota 741, en las págs. 18 – 19.

⁷⁴⁴ *Id.* en la pág. 19.

⁷⁴⁵ “Así como en el aspecto legislativo los derechos fundamentales son de observación compulsoria, en materia de interpretación constitucional, la sujeción a la Constitución Federal obliga a las cortes locales a seguir la doctrina federal como base para la aplicación de las garantías ofrecidas. Tal sujeción no es taxativa en lo que se refiere a la interpretación de la propia Constitución. La obligatoriedad a seguir las pautas de la jurisprudencia federal es materia aplicable sólo a la interpretación de la Constitución Federal. La obligatoriedad a seguir las pautas de la jurisprudencia federal es materia aplicable sólo a la interpretación de la Constitución Federal. El poder de revisión judicial permite a los tribunales estatales interpretar la Constitución limitando su actuación a la aplicación estricta sin poder añadir ni sustraer a los mandatos de la Constitución”. *Id.* en las págs. 21 – 22.

Valle. Por mi parte opino que el caso también puede tener repercusiones en cuanto a la manera de abordar hasta hora en Puerto Rico la detención preventiva de acusados.

Este caso se inicia el 28 de septiembre de 2008, cuando se acusa en Puerto Rico al señor Luis M. Sánchez del Valle por varias violaciones a la Ley de Armas local. Poco tiempo después también se le acusó en el foro federal por *“comercio ilegal de armas y municiones en el comercio interestatal”*.⁷⁴⁶ El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico sentenció por estos hechos al señor Sánchez Valle. Ahora bien, como también se le acusaba por los mismos hechos a nivel estatal, este presentó una moción alegando que *“de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición, no podía ser procesado en Puerto Rico por los mismos delitos que el Tribunal Federal lo declaró culpable”*.⁷⁴⁷

El gobierno de Puerto Rico, a través del Ministerio Público, alegó que los *“Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico derivan su autoridad de fuentes distintas y ambas tienen poder para castigar los delitos sin ofender la garantía constitucional contra la doble exposición”*.⁷⁴⁸ El Tribunal de Primera Instancia acogió los planteamientos de Sánchez Valle y desestimó el caso, indicando que dicho acusado *“no podía ser encausado dos veces por los mismos delitos y ante el mismo ente soberano”*.⁷⁴⁹ El Tribunal de Apelaciones revocó al foro de primera instancia, determinando que *“conforme al estado de derecho vigente, una persona podía ser sometida a procesos criminales en el foro federal y el foro estatal por la misma conducta delictiva sin violar la protección constitucional contra la doble exposición”*.⁷⁵⁰ Inconforme con esta decisión, apelaron al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

⁷⁴⁶ *Pueblo v. Sánchez Valle*, 192 D.P.R. 594, pág. 598 (2015).

⁷⁴⁷ *Id.* en las págs. 599 – 598.

⁷⁴⁸ *Id.* en la pág. 599.

⁷⁴⁹ *Id.*

⁷⁵⁰ *Pueblo v. Sánchez Valle*, *supra* nota 748, en las págs. 601 – 602.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la teoría de la doble exposición y echó por tierra su decisión en el caso de *Pueblo v. Castro García*⁷⁵¹ (otro caso donde se alegó doble exposición), donde había determinado que “*el poder del Estado Libre Asociado para crear y poner en vigor delitos emana no sólo del Congreso de Estados Unidos, sino del consentimiento del Pueblo de Puerto Rico y por tanto de sí mismo, por lo que le es de aplicación la doctrina de soberanía dual*”.⁷⁵² Para justificar su decisión el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que la decisión de *Pueblo v. Castro García* “*no tienen base en el derecho constitucional federal*”.⁷⁵³ Y para no “perpetuar equivocaciones doctrinales”, resolvió que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía propia para enjuiciar a una persona que ya fue procesada en el Tribunal Federal. Indica el Tribunal Supremo:

“Luego de un análisis desapasionado de la historia y de la inmensa literatura jurídica sobre el tema, tenemos que concluir que, tras la adopción de una constitución, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos sujeto al poder del Congreso, según lo dispuesto en la cláusula territorial de la Constitución federal (Art. IV, Sec. 3).

La autoridad de Puerto Rico para enjuiciar personas se deriva de la delegación que efectuó el Congreso de los Estados Unidos y no en virtud de una soberanía propia. Como vimos, y contrario a las tribus indias o los estados, Puerto Rico nunca ha tenido una soberanía original o anterior bajo la cual delegó poderes al Congreso. Es al revés. La soberanía sobre Puerto Rico que poseía España fue transferida formalmente a los Estados Unidos en 1899, por el Tratado de París. Desde entonces, Estados Unidos administró a Puerto Rico por legislación aprobada al amparo de la cláusula territorial de la Constitución federal. La adopción de una constitución, por

⁷⁵¹ *Pueblo v. Castro García*, 120 DPR 740 (1988).

⁷⁵² *Id.* en la pág. 779.

⁷⁵³ *Pueblo v. Sánchez Valle*, *supra* nota 748, en la pág. 645.

delegación del Congreso, para organizar el gobierno local en sustitución de gran parte de la ley orgánica vigente entonces, no representó una cesión de soberanía a Puerto Rico. Por el contrario, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de los Estados Unidos. En conclusión, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es un ente soberano, pues, como territorio, su fuente última de poder para procesar delitos se deriva del Congreso de Estados Unidos”.

...

“Su poder lo ejerce como parte de una delegación de poderes y no por una cesión de soberanía del Congreso de Estados Unidos”.⁷⁵⁴

El gobierno de Puerto Rico no estuvo de acuerdo con la decisión y apeló al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El 9 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, concluyendo que: *“la fuente principal del poder de Puerto Rico para encausar es el Gobierno Federal” y que “el Estado Libre Asociado y los Estados Unidos no son soberanos separados.”⁷⁵⁵*

Si, como confirmó el Tribunal Supremo Federal, *“el Estado Libre Asociado y los Estados Unidos no son soberanos separados”*, ¿puede tener Puerto Rico una normativa sobre la fianza y la detención distinta a la establecida por la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia de dicho Tribunal Supremo? Entiendo que la contestación es que no. Siendo el Estado Libre Asociado una creación del Congreso de los Estados Unidos y residiendo en este cuerpo su soberanía, concluimos que no puede tener una normativa sobre la

⁷⁵⁴ *Pueblo v. Sánchez Valle*, *supra* nota 748, en las págs. 644 – 645.

⁷⁵⁵ *Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle*, en las págs. 17 – 18.

fianza distinta que no se ajuste a las disposiciones de su constitución y su jurisprudencia.

Teniendo en cuenta las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la opinión de tratadistas estadounidenses y puertorriqueños, considero que la Octava Enmienda protege a los acusados en Puerto Rico a nivel local. Pero, hasta la fecha, ningún acusado al que se le haya impuesto una fianza excesiva en un foro estatal ha llevado su reclamo sobre violación de la Octava Enmienda al foro federal. Tampoco ha llegado un caso donde se haga el mismo reclamo utilizando la Octava Enmienda y su jurisprudencia ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El haber establecido en la Constitución la obligación de imponer una fianza a todo acusado y no tener la detención como medida cautelar, lleva a muchos jueces a imponer cuantías excesivas. El propósito último de estas fianzas es llevar a detención a un acusado, muchas veces teniendo los mismos objetivos que tiene la detención preventiva en el foro federal o en el sistema español: riesgo de fuga, protección de víctimas y testigos, o la propia seguridad del acusado. Pero en Puerto Rico, a pesar de la disposición constitucional que garantiza la imposición de una fianza, vemos que la mayoría de los acusados por delito grave a los que se les impone una fianza lo es en una cuantía que no pueden prestar. Esto provoca que se invierta lo que se supone que sea la norma: que la detención es la excepción, y la norma la libertad del acusado.

Si examinamos el número de fianzas impuestas versus el número de fianzas admitidas en Puerto Rico del 2001 al 2017, podemos ver que la mayoría de las personas no puede prestar la cuantía impuesta, quedando en consecuencia en detención. (Ver anexo)

Si tomamos como muestra la Región Judicial de San Juan, capital de Puerto Rico y zona con mayor población en la Isla, vemos cómo la mayoría de los acusados de delitos graves terminan en detención preventiva por no poder prestar la fianza impuesta como condición para su libertad. En los pasados tres

años, el porcentaje de acusados en detención preventiva se ha disparado, sobrepasando el 75%. (Ver anexo)

CAPÍTULO 8.

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y FIANZA EN PUERTO RICO Y LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO ALTERNATIVA

8.1 Los aspectos que hacen inconstitucional el actual sistema de detenciones y fianzas en Puerto Rico

8.1.1 La relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y su efecto en los derechos de los acusados frente al sistema de detención y fianza

Desde 1952, con la llegada del Estado Libre Asociado, se le reconoció a Puerto Rico un grado de soberanía dentro de su unión con los Estados Unidos de América que le permitía acusar y procesar por unos mismos hechos a individuos por violaciones a las leyes locales que, a su vez, constituían delitos a nivel federal. Los tribunales podían dictar sentencias consecutivas o concurrentes a las que se hubiesen dictado en los foros federales. De igual manera, se podía acusar a nivel federal a un individuo por unos mismos hechos por los que había sido acusado a nivel estatal.

Pero todo esto cambió con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle*, donde se determinó que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no contaba con soberanía para acusar a una persona que ya había sido acusada por unos mismos hechos en el foro federal. De así hacerlo, se configuraría una doble exposición, algo que está prohibido tanto por la constitución federal como por la estatal. La conclusión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue que “la fuente principal del poder de Puerto Rico para encausar es el Gobierno Federal” y que “el Estado Libre Asociado y los Estados Unidos no son soberanos separados”. O sea, que la fuente de soberanía del gobierno federal estadounidense y la del Estado Libre Asociado es la misma.

Al ser la fuente de soberanía la misma, nos parece que la Isla no puede tener un sistema de detenciones y fianza propio, en contravención

con la norma federal. Por lo tanto, creo que un acusado podría reclamar que se cumpla en su caso lo establecido en la norma federal en cuanto a detención preventiva y fianza. Según nuestra investigación, hasta la fecha no ha llegado un caso ante el foro federal donde se reclame que en el foro estatal se le ha impuesto una fianza excesiva al amparo de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O, en la alternativa, reclame que el Estado Libre Asociado carece de soberanía para tener un sistema de detención preventiva y fianzas que se aparte de la norma federal.

De llegar este caso al tribunal federal, este se vería en la obligación de resolver conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, extendiendo a los acusados en Puerto Rico todas las protecciones establecidas para la detención preventiva y la imposición de fianzas. Esta decisión obligaría al gobierno de Puerto Rico a modificar su sistema procesal para que esté acorde con la norma federal.

8.1.2 El sistema de detención y fianza de Puerto Rico vulnera las doctrinas establecidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *Stack v. Boyle* y en *Bell v. Wolfish*

Puerto Rico eliminó la detención preventiva como medida cautelar cuando su Tribunal Supremo interpretó que, implícitamente, había quedado descartada cuando por ley se abolió la pena de muerte en 1929. Al examinar el Diario de Sesiones que contiene las discusiones de los legisladores sobre la ley, no se desprende que se haya eliminado la detención cuando se eliminó la pena de muerte.

Esta política de extender el derecho a todos los acusados a quedar en libertad bajo fianza fue llevada a la constitución en 1952 por parte de miembros de la Convención Constituyente. Esto se hizo a pesar de las advertencias hechas por los expertos, que recomendaban la detención de algunos acusados de delitos graves.

Con la decisión de brindar la oportunidad de quedar en libertad bajo fianza a todos los acusados, se creó una situación anómala en los Estados Unidos, pues este fue un derecho que nunca fue absoluto. Tampoco lo fue en el Reino Unido, de donde proviene el derecho a la fianza estadounidense. Ni siquiera en España, de la que fuimos parte hasta 1898, el derecho a la libertad bajo fianza es absoluto. Esto convierte a Puerto Rico en la única jurisdicción de los Estados Unidos donde existe un derecho absoluto a la fianza y donde no existe la detención – *de jure* – como medida cautelar en su sistema procesal penal.

Esta anomalía del sistema procesal puertorriqueño comenzó a traer problemas al poco tiempo de ser aprobada su Constitución con el aumento vertiginoso en la criminalidad a partir de la década de los sesenta. Ante la falta de la detención preventiva como medida cautelar y el fracaso en los múltiples intentos por enmendar la Constitución, ha llevado a los jueces a utilizar las fianzas excesivas para lograr la detención de algunos acusados. Pero esta práctica crea una crisis constitucional donde se vulneran derechos del acusado garantizados por las Constituciones de los Estados Unidos y Puerto Rico.

Esta práctica de imposición de fianzas excesivas para lograr la detención de acusados de delito también puede provocar una controversia que llegue al foro federal. Un acusado al que se le imponga una fianza excesiva para lograr su detención podría llevar un caso ante el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico alegando que se le ha violado su derecho a que no se le impongan fianzas excesivas al amparo de la Octava Enmienda de la Constitución Federal. El juez ante el cual llegue esta controversia tendrá que decidir si la protección de la Octava Enmienda constituye o no un derecho fundamental que protege a los ciudadanos estadounidenses que viven en el territorio de Puerto Rico. De ahí el caso podría pasar al Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston y, de este, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Desde su decisión en el caso de *Stack v. Boyle* de 1951, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha decidido qué constituye una fianza excesiva. Como indicamos anteriormente, en este caso el Tribunal Supremo señaló que *“una fianza establecida en una cifra superior a una cantidad razonablemente calculada para cumplir este propósito (de brindar suficiente garantía de que estará presente durante el juicio y que se someterá a la condena de ser encontrado culpable) es excesiva según la Octava Enmienda”*.⁷⁵⁶

Sería remoto que un caso donde se alegue una violación a la Octava Enmienda por la imposición de fianzas excesivas en algún Estado o territorio llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto debido a que todos los Estados y territorios cuentan con la detención como medida cautelar dentro en sus sistemas de Derecho Procesal penal. A nivel federal, la posibilidad también quedó eliminada, ya que la Reforma Federal de la Fianza de 1984 estableció que los jueces podían ordenar la detención de acusados a base de la probabilidad de que estos cometieran delito mientras se encuentran en libertad en espera de juicio. Esto eliminó la práctica de imponer fianzas excesivas con el propósito de que el acusado no pudiera prestarla, y así quedara detenido. La única excepción dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos es Puerto Rico, ya que es el único que no cuenta con la detención como medida cautelar y se vale de la imposición de fianzas excesivas para lograrlo.

Utilizando la doctrina de *Stack v. Boyle*, un detenido en Puerto Rico podría llevar su reclamo al Tribunal Federal solicitando que se imponga la fianza conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este caso. O sea, que se fijen fianzas en cuantías razonables, sin la posibilidad de imponer cuantías excesivas para lograr la detención del acusado.

⁷⁵⁶ *Stack v. Boyle*, 342 U.S. 1 (1951).

Esta situación, además de violentar la Octava Enmienda federal y lo establecido por el Tribunal Supremo en *Stack v. Boyle*, también vulnera la doctrina de *Bell v. Wolfish*, donde se condenó la utilización de la fianza como pena anticipada. En Puerto Rico la cuantía de la fianza va de la mano con la gravedad del delito cometido y la alarma social que pueda haber provocado. Las cuantías excesivas que se imponen para lograr la detención del acusado sin duda alguna constituyen una pena anticipada. Las condiciones posteriores también validan el argumento, pues el acusado, al quedar detenido, es llevado a una institución penal, donde recibe un trato similar al del resto de los confinados, pero sin las protecciones legales que a estos les aplican.

8.1.3 El proceso de fianza y detención en Puerto Rico es incompatible con lo establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *United States v. Salerno*

Tal y como está configurado, el proceso de fianza y detención en Puerto Rico presenta múltiples violaciones al debido proceso de ley, establecido por la norma federal. A continuación, demostraremos por qué es así.

En Puerto Rico la determinación de causa probable para arresto, la fijación de fianza y la detención del acusado por no poder prestarla, se lleva a cabo todo en una misma vista. En dicha vista, que se lleva a cabo tan pronto se arresta al acusado, la mayoría de los acusados no cuenta con representación legal. Debido a que las reglas de procedimiento criminal obligan a la policía a llevar ante un juez al acusado sin dilaciones, este se ve imposibilitado de contratar a un abogado. A esto se añade que la mayoría de los acusados no cuenta con medios económicos para contratar a un abogado que lo represente en esta etapa inicial del procedimiento. Tampoco el Estado le provee un abogado de oficio en esta etapa, ni las organizaciones que se dedican a defender a acusados indigentes. El acusado viene a contar con representación legal tiempo después de quedar detenido.

Al no contar con una representación legal en esta etapa, el acusado tampoco puede hacer valer otros derechos. Al acusado se le imposibilita presentar testigos a su favor que declaren en contra de su detención o a favor de que se le imponga una fianza mínima u otras medidas cautelares no monetarias.

Al acusado tampoco se le permite contrainterrogar a los testigos del Ministerio Público cuya declaración influirá en la determinación de causa probable para arresto y para la determinación de la cuantía de la fianza que podría conllevar su detención. De igual manera, al acusado se le imposibilitará objetar o replicar los planteamientos que presente el Ministerio Público en su contra. En la práctica, durante estas vistas los jueces no permiten que el acusado hable, bajo el argumento de que están protegiendo su derecho a la no autoincriminación. Esta situación se ha agravado en los pasados años, ya que el Ministerio Público, con el aval del Poder Judicial, está presentando acusaciones mediante declaraciones juradas sin contar con la presencia de testigos. Esto elimina de facto el derecho al contrainterrogatorio garantizado por la constitución.

Toda esta situación constituye una violación al debido proceso de ley que establece la Constitución de los Estados Unidos y el precedente establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de *United States v. Salerno* de 1987. Como ya se indicó, en el caso de Salerno el Tribunal Supremo validó la Ley Federal de Reforma a la Fianza de 1984, porque la misma cumplía con el debido proceso de ley, al ordenar una vista específicamente para determinar la detención o no de un acusado. En dicha vista el Ministerio Público viene obligado a convencer al juez “*con pruebas claras y convincentes de que ninguna condición de libertad puede razonablemente garantizar la seguridad de la comunidad o la de cualquier persona*”.⁷⁵⁷ En la vista, el acusado puede estar acompañado de abogado, puede presentar prueba a su favor y puede rebatir los argumentos y la prueba del Ministerio Público. En Puerto Rico, como vimos en párrafos anteriores, no se lleva a cabo una vista para determinar si se detiene o no a un acusado. La detención preventiva se da como consecuencia de no haber

⁷⁵⁷ *United States v. Salerno*, 481 U.S. 739 (1987).

podido prestar la fianza impuesta, cuya cuantía se determina según la gravedad o la alarma provocada por el delito imputado.

Toda esta situación podría dar pie a que un acusado radique una acción en el Tribunal Federal alegando que el proceso puertorriqueño viola el debido proceso de ley. Si el Tribunal Federal le diera la razón al acusado y determinara que el sistema de fianzas y detenciones en Puerto Rico es inconstitucional por violentar la Octava Enmienda y el debido proceso de ley, provocaría un caos en el sistema, pues comenzaría una oleada de casos impugnando la detención preventiva de la mayoría de los acusados.

8.2 Alternativas a la inconstitucionalidad

8.2.1 Fortalezas y debilidades de los sistemas de detención preventiva y prisión provisional de España, los Estados Unidos y Puerto Rico

En el sistema español, tanto el Ministerio Público como la parte acusadora pueden solicitar al juez la prisión provisional del acusado. Ante tal petición, se celebrará una vista donde el juez determinará que los hechos imputados presentan caracteres de delito y que el acusado fue quien presuntamente los cometió. Además, el juez debe concluir que mantener al acusado en libertad constituye un riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de destrucción o alteración de pruebas o una amenaza para la víctima. El Ministerio Público es quien tendrá el peso de la prueba para demostrar la necesidad de la prisión provisional. Si el juez determina que procede la prisión provisional, el acusado será llevado a una institución penal donde permanecerá mientras se culmina la investigación y el juicio en su contra. El acusado se mantendrá en prisión provisional mientras subsistan estos riesgos hasta un plazo máximo de dos años. Dicho plazo puede ser prorrogado hasta un máximo de dos años adicionales si se solicita la prórroga antes de que culmine el plazo original y si subsisten las condiciones que llevaron a la determinación de prisión provisional.

En el sistema federal estadounidense, el Ministerio Público es quien de ordinario puede solicitar la detención preventiva de un acusado. De manera

extraordinaria, el juez también podría ordenar *motu proprio* la detención. Esta procederá si en una vista se logra demostrar que no hay ninguna otra condición que pueda garantizar la presencia del acusado en el juicio. También procederá si se demuestra que aquel constituye un riesgo de fuga, que puede obstruir la justicia o que puede constituir una amenaza para la víctima, los testigos o algún miembro del jurado. Además, se toma en consideración si mantener al acusado en libertad constituye una amenaza para la seguridad de alguna persona o a la comunidad. Será el Ministerio Público quien tiene el peso de demostrar la necesidad de la detención.

El sistema federal estadounidense también establece una presunción de detención para acusados de delitos graves donde esté envuelto el uso de violencia, cuando se violen leyes relacionadas al narcotráfico, crímenes donde se involucre a un menor de edad o en casos de ofensores sexuales. También opera la presunción cuando se acuse nuevamente a una persona que ya había sido acusada por estos delitos anteriormente. En estos casos donde opera la presunción, el acusado tiene el peso de la prueba de demostrar que no debe ser detenido. Tan pronto el juez ordena la detención, el acusado es llevado a un centro penitenciario donde permanecerá mientras se ve el proceso en su contra. No existe un término máximo en que el acusado pueda estar detenido. El acusado tendría que reclamar que se le viola su derecho al juicio rápido y que un juez le dé la razón.

En el sistema puertorriqueño, de jure no existe la detención como una medida cautelar. Pero de facto existe a través de la imposición de fianzas excesivas a los acusados. En una sola vista se determina si existe causa probable para el arresto y la imposición de fianza. El juez, luego de examinar la prueba que puede ser testifical, documental o una combinación de ambas, determina si existe o no causa probable para arresto y, al mismo tiempo, impone una fianza al acusado luego de leer un informe sobre sus antecedentes preparado por el gobierno.

En caso de que el acusado no pueda prestar la fianza impuesta, este quedará detenido. Al momento de fijar la cuantía, se tomará en consideración la

naturaleza y las circunstancias del delito imputado, su arraigo en la comunidad, su historial de trabajo y sus relaciones familiares. También se considerará su carácter y su condición mental, sus recursos económicos y su historial de comparecencia en anteriores procesos. La detención será en un complejo carcelario hasta un máximo de seis meses. Transcurridos seis meses en detención, el acusado será liberado y el juicio continuará, pero sin la garantía de la custodia. Esto rara vez ocurre, ya que en la práctica el sistema procura que el proceso se lleve a cabo dentro de los seis meses siguientes a la detención.

En España y en los Estados Unidos, la prisión provisional y la detención preventiva son medidas cautelares disponibles en el ordenamiento procesal penal para detener a ciertos acusados en casos extraordinarios. En ambos países, esta medida cautelar se ha ido reformando a través de leyes y jurisprudencia para que la misma sólo pueda ser aplicada en casos excepcionales, haciendo un balance entre los derechos de los acusados y los de la comunidad. Esto no sucede en el modelo de Puerto Rico.

Otro problema que presenta el sistema puertorriqueño es que, a diferencia del español y el estadounidense, no se lleva a cabo una vista independiente para determinar la detención del acusado y conseguir así que se salvaguarden sus derechos constitucionales. Tanto en España como en los Estados Unidos, la ley obliga a realizar una vista específicamente para determinar si existen motivos para ordenar la detención o la prisión provisional del acusado. En Puerto Rico no se realiza una vista para determinar la detención del acusado. Esto se realiza dentro de la vista para determinar causa probable para arresto. En esta vista, la mayoría de los acusados no cuenta con representación legal. Tampoco tienen la oportunidad de presentar testigos a su favor. Al no contar con la representación legal de abogado, el acusado no puede contrainterrogar a los testigos de cargo u objetar los planteamientos que presente el Ministerio Público en su contra.

La situación se ha agravado en los pasados años, ya que el Ministerio Público, con el aval del Poder Judicial, están presentando acusaciones mediante declaraciones juradas sin contar con la presencia de testigos. Esta situación niega el derecho constitucional al careo que tienen todos los acusados. Todo ello

constituye una violación al debido proceso de ley que establece la Constitución de los Estados Unidos y el precedente establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de *United States v. Salerno* de 1987.

Estas posibles crisis constitucionales se podrían evitar si se concienciara al Gobierno de Puerto Rico sobre la necesidad de enmendar la Constitución para eliminar el llamado derecho absoluto a la fianza, y adoptara un sistema de detención acorde al estadounidense o retornando a la prisión provisional según ha sido reformada por el sistema español. Para lograrlo, se tendría que presentar una propuesta basada en los argumentos constitucionales antes esbozados y sobre la posible crisis que se podría producir de no adoptar una propuesta de inmediato. Para evitar el fracaso de los intentos anteriores, habría que evitar que la discusión se politice. Pero también habrá que hacerlo de manera sosegada y no en medio de una crisis provocada por algún caso criminal que provoque la alarma social.

En cuanto al tiempo máximo que puede pasar un acusado en detención, vimos que en los Estados Unidos no está definido. Cualquier reclamo se hará utilizando el derecho a juicio rápido. Pero como pudimos ver, los tribunales tienden a darle la razón al Ministerio Público para justificar los atrasos. Aunque los casos de acusados en detención de ordinario no se extienden por años, creemos que se debe enmendar la Ley de Reforma Federal a la Fianza para que se establezca un plazo máximo en detención provisional.

En el caso de Puerto Rico, la detención, que surge por no poder prestar la fianza impuesta, no puede extenderse por más de seis meses. Dicho término no se puede prorrogar, ya que está establecido como máximo en la Constitución. En caso de que el acusado permanezca detenido por más tiempo, se puede tramitar su liberación a través de un recurso de habeas corpus. Una vez liberado, el proceso contra el acusado continua en el tribunal. En la práctica, la mayoría de los casos inician y se resuelven dentro de los seis meses para evitar que el acusado quede en libertad mientras se ve el juicio.

En el caso de España, la prisión provisional tiene un término máximo de dos años, prorrogable a dos más si se solicita antes de que venza el término original y subsisten las causas que la justificaron. Estos plazos, que al sumarlos pueden llegar a 4 años, nos parece que vulneran el derecho a la libertad del acusado. Su extensión puede sembrar dudas sobre si el caso estaba listo o no para ser radicado. El que un acusado esté hasta cuatro años en prisión provisional crea dudas de si, al momento de ser detenido, se contaba con toda la prueba necesaria para sostener los cargos en su contra. También por su extensión puede considerarse una pena anticipada y afecta su defensa. Por otro lado, nos parece que la ley española es muy clara en cuanto a que, tan pronto desaparezcan los motivos que llevaron a la prisión provisional del acusado, este debe ser liberado. El sistema estadounidense y el puertorriqueño parecen no fomentar esa opción.

8.2.2 El regreso de prisión provisional como alternativa a la crisis constitucional

El modelo español actual de prisión provisional podría ser una alternativa que salvaría la inconstitucionalidad del sistema puertorriqueño de fianza y detención preventiva. A través de su evolución, la prisión provisional ha logrado superar los cuestionamientos constitucionales que la han rodeado a través del tiempo. Es una medida cautelar, a nuestro juicio, superior al modelo de detención preventiva estadounidense, por las salvaguardas que tiene antes de adoptarse.

Al adoptar el modelo español de prisión provisional, en Puerto Rico se le estarían ofreciendo mayores derechos al acusado que los que recibiría si se adoptada el sistema de detención preventiva federal estadounidense. De esta manera, no se dejaría a un lado el sistema actual, que ofrece menos derechos y garantías que el federal, convirtiéndolo entonces en uno inconstitucional. Hay que recordar que los Estados pueden ofrecer garantías mayores a las que ofrece la Constitución de los Estados Unidos, pero nunca menos que los que esta ofrece. Como el caso de la interceptación de llamadas telefónicas, que está prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero está permitido dentro del esquema constitucional federal estadounidense.

El modelo federal estadounidense basado en la Ley de Reforma Federal de la Fianza de 1984 da amplia discreción al juez o magistrado para determinar si detiene o no preventivamente a un acusado. Incluso no necesita que le sea solicitado por el Ministerio Público. Basta con que el juez o magistrado entienda que el acusado representa un peligro para la comunidad para ordenar su detención. A diferencia de este, el modelo español de prisión provisional exige que el juez primero infiera que racionalmente existe un riesgo de fuga, luego lo obliga a analizar la naturaleza del delito imputado, y por último le exige ponderar la gravedad de su pena. Cada una de estas salvaguardas tienen que evaluarse en su conjunto antes de ordenar la prisión provisional.

Evitar la destrucción o desaparición de pruebas es un justificante de prisión provisional que no existe en Puerto Rico. Tal y como está el sistema actual, donde se obliga a imponer una cuantía de fianza a todo acusado, no se podría evitar la destrucción u ocultación de pruebas mediante la detención del acusado. El sistema actual en Puerto Rico sólo depende de que la disposición del Código Penal sobre destrucción u ocultación de pruebas y las condiciones que se le hayan impuesto para estar en libertad bajo fianza sirvan de disuasivo al acusado.⁷⁵⁸ De igual manera, tampoco se puede evitar que el acusado actúe contra los bienes jurídicos de la víctima. Tampoco cuenta con una garantía de que el acusado cometa otros hechos delictivos mientras se encuentra en libertad bajo fianza.

Como la detención en Puerto Rico no está regulada y es la consecuencia de no poder prestar la fianza impuesta, el juez no está obligado a analizar si existen otras medidas menos gravosas. Con el sistema de prisión provisional español, los jueces vendrían obligados a determinar que no existen otras condiciones

⁷⁵⁸ Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012, según enmendada) Artículo 285, Destrucción de pruebas: Toda persona que sabiendo que alguna prueba documental o cualquier objeto pudiera presentarse en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial, legislativo o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, la destruya o esconda con el propósito de impedir su presentación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares (\$10,000).

menos gravosas al derecho a la libertad antes de ordenar la detención del acusado.

El sistema federal estadounidense y el puertorriqueño también deberían abrir la puerta para que aquellos acusados encarcelados que luego resulten inocentes puedan reclamar al estado por los daños y perjuicios ocasionados por su injusta detención. En España, hasta ahora la ley permitía que el acusado que estuvo en prisión provisional y resultara inocente, pudiera reclamar al estado sólo si se prueba que el hecho imputado nunca ocurrió. Este sistema ha cambiado tras la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional Español del 20 de junio de 2019 que anuló la cláusula que limitaba la posibilidad de obtener una compensación a aquellos casos donde se demostrara la inexistencia del hecho imputado.

“El Tribunal ha declarado que los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” de ese artículo de la LOPJ vulneran dos artículos de la Constitución: el 14, sobre la igualdad de los españoles ante la ley; y el 24.2, sobre el derecho a la presunción de inocencia.”⁷⁵⁹

Esta decisión, que aún no ha sido publicada, abre la puerta para que todos los acusados que sufran prisión provisional y luego salgan absueltos puedan reclamar al Estado independientemente de las razones que provocaron la desestimación del caso en su contra.

De adoptar el sistema de prisión provisional español, propondría que Puerto Rico mantenga la limitación de los seis meses máximo de tiempo encarcelado. Resulta excesivo el sistema español, con su posibilidad de que se pueda estar hasta 4 años en prisión provisional, y tampoco es adecuado el laxo sistema federal estadounidense, sin un término de tiempo en específico sujeto a las disposiciones de la Ley Federal de Juicio Rápido. Tampoco propondría que se

⁷⁵⁹ El Constitucional abre la puerta a ampliar las indemnizaciones a los presos preventivos absueltos, El País, 21 de junio de 2019, tomado de: https://elpais.com/politica/2019/06/19/actualidad/1560972760_060146.html.

adopte la prisión provisional incomunicada, pues creo que el acusado debe tener derecho a la asistencia de abogado desde el momento en que se convierte en sospechoso. Al ser un derecho constitucional en Puerto Rico y los Estados Unidos la asistencia de abogado desde el momento en que el acusado es sospechoso, sería inconstitucional la prisión provisional incomunicada.

Adoptando el sistema de prisión provisional español con unas pequeñas modificaciones (limitación a 6 meses máximo de prisión y la eliminación de la prisión incomunicada), Puerto Rico dispondría de una herramienta necesaria e inevitable para el cumplimiento de los fines del Derecho Procesal penal. A la vez, se establecerían unas salvaguardas, obligaciones y derechos para los acusados a la hora de decidir la adopción o no de esta medida cautelar.

El sistema de prisión provisional español encajaría perfectamente dentro de la jurisdicción estadounidense y superaría los cuestionamientos constitucionales del modelo actual. Además, no es más restrictivo que el sistema federal de detención preventiva, y como brinda mayores derechos y protecciones al acusado, es el idóneo para ser adoptado en Puerto Rico.

CONCLUSIONES

- I. A través de esta tesis tratamos de demostrar la necesidad de contar en todo sistema procesal penal con la prisión provisional o la detención preventiva regulada y ajustada a las normas constitucionales, garantizando el derecho supremo a la libertad.
- II. Asimismo, tratamos de demostrar que el sistema de fianzas y detención preventiva por no prestar la cuantía impuesta en Puerto Rico, no se ajusta a la norma constitucional estadounidense. El sistema puertorriqueño tampoco brinda las garantías procesales establecidas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Al no contar con la detención preventiva como medida cautelar, se utiliza la imposición de fianzas excesivas para que, aquellos que no la puedan prestar, queden en detención preventiva violentando sus derechos constitucionales.
- III. Al momento no se ha determinado si la prohibición constitucional federal a la imposición de fianzas excesivas aplica o no a los acusados en Puerto Rico. Al ser Puerto Rico un territorio no incorporado de los Estados Unidos de América, a diferencia de los Estados, los derechos fundamentales se determinan caso a caso.
- IV. El sistema puertorriqueño de fianzas y detención preventiva por no prestar la cuantía impuesta podría ser impugnado en el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos para Puerto Rico. Esto podría ocurrir a través de un caso donde un acusado alegue que se le está violando su derecho a que no se le imponga una fianza excesiva conforme a la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. También podría impugnar el procedimiento para la imposición de fianza – que puede terminar en su detención – por violentar las normas establecidas en el caso de *Salerno*.
- V. El Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos para Puerto Rico podría determinar que el sistema de imposición de fianzas en Puerto Rico es inconstitucional por utilizar cuantías excesivas para imponer la detención

preventiva a los acusados. Podría el Tribunal Federal emitir una orden para que, de ahora en adelante, la imposición de fianzas en Puerto Rico se ajuste a lo establecido en *Stack v. Boyle* y *Bell v. Wolfish* y se utilice el proceso establecido en *United States v. Salerno*.

- VI.** El proceso puertorriqueño de fianzas también podría ser cuestionado a nivel local llevando un caso hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, alegando una violación a la prohibición de fianza excesiva y vulneración del debido proceso de ley. El Tribunal Supremo de Puerto Rico podría revisar lo que ha sido su norma histórica, que ha sostenido que en la Isla existe un derecho absoluto a la fianza. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, utilizando los argumentos propuestos en esta tesis, podría justificar una limitación al derecho a la fianza atemperándolo a su historia en el ordenamiento estadounidense de donde procede y aplicando a nivel local la norma establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a detención preventiva y fianza.
- VII.** Nada impide al Tribunal Supremo de Puerto Rico reconocer el error histórico que se cometió al interpretar que existe un derecho absoluto a la fianza, cuando esto no es la realidad en la práctica y tampoco cuenta con base histórica para justificarlo. Como otros derechos constitucionales, creemos que la fianza puede ser regulada sin necesidad de enmendar la constitución, opción que ya ha fracasado en varias ocasiones.
- VIII.** Luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declare inconstitucional el sistema de fianzas y detención preventiva en Puerto Rico, la Asamblea Legislativa podría evaluar alternativas nuevas alternativas que cumplan con la normativa estadounidense. Una alternativa sería la adopción del sistema actual de prisión provisional española, al que consideramos superior a los modelos de detención preventiva estadounidenses.
- IX.** El regreso de la prisión provisional española en su modalidad actual con muy pocos cambios podría ser una alternativa viable para Puerto Rico, ya que se ajustaría muy bien a la norma constitucional estadounidense. La prisión

provisional española contiene garantías más amplias que las establecidas en la norma sobre detención preventiva estadounidense. Por lo tanto, sería una alternativa donde se garantizaría el derecho a la libertad del acusado, manteniendo la opción de detener a algunos acusados en situaciones muy específicas. El modelo español de prisión provisional ofrece un justo balance entre el derecho a la libertad del individuo y el derecho a la seguridad del colectivo.

ABSTRACT

In this thesis, we undertake an analysis of the provisional prison and pretrial detention processes in Spain, Puerto Rico and the United States. We seek to demonstrate that they are required precautionary measures within Penal Law. To accomplish this, we use the case of Puerto Rico, which had provisional prisons its Criminal Procedure until 1902 and preventive detention until the abolition of the death penalty in 1929. In two decisions, one in 1919 and the other in 1950, the Puerto Rico Supreme Court reached the conclusion that with the abolition of the death penalty; the right to remain free under bail was extended to all those who stand accused on criminal grounds. This idea was later included in the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico in 1952 notwithstanding warnings against it from experts. The result of this today is that Puerto Rico is the only jurisdiction in the United States of America that prohibits preventive detention as a precautionary measure and extends the right to obtain bail to all those who stand accused on criminal grounds.

This legal anomaly could provoke a constitutional crisis on the island because many Puerto Rican judges, unable to rely on provisional prison or preventive detention against the accused, impose excessive bail terms to achieve this outcome. At any moment, this practice could be challenged by the courts because it goes against not only the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico but also the United States Constitution which applies in Puerto Rico. This could occur if an accused person is ordered to pay excessive bail and decides to take the case to the United States Federal Court in Puerto Rico claiming that his or her right not to be subject to excessive bail has been violated.

Moreover, he or she could claim that his or her right to due process is being violated as Puerto Rico is not abiding by the decisions of the United States Supreme Court concerning pretrial detention. Although this case could be taken to Puerto Rican Courts arguing that the prohibition against excessive bail violates the local Constitution, we have seen that the Puerto Rico Supreme Court has upheld the practice of the imposition of excessive bail to obtain the detention of the accused. In the absence of a regulated detention system such as those in

Spain and the United States, many of those accused on criminal grounds are jailed for being unable to make bail.

Up to now, the United States Supreme Court has not pronounced itself on whether the prohibition of excessive bail is a fundamental constitutional right that protects Puerto Ricans. This is due to the current political status of the island which as an unincorporated territory is not subject to the United States Constitution in its entirety. According to the doctrine of insular cases in unincorporated territories, such as Puerto Rico, only those rights determined to be fundamental by the Supreme Court apply. This is decided on a case-by-case basis.

To avoid such a crisis, we propose, as an alternative, that Puerto Rico return to the Spanish model of provisional prison given that this process could be adjusted, without amendments, to the current system and would not be at loggerheads with United States Federal Law. Alternatively, a legal process similar to that of the states of the United States that allow the pretrial detention.

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo estudiar y comparar los sistemas de detención preventiva y prisión provisional de Puerto Rico, los Estados Unidos de América y España. Comienza con un estudio de la evolución de la prisión provisional en España desde el siglo XIX al presente. Se presta especial énfasis a los cambios que poco a poco ha sufrido desde la década de los ochenta del siglo XX hasta el presente para amoldarse a las disposiciones de la Constitución Española de 1978.

De igual manera se estudia el sistema de prisión provisional en Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el 1902 cuando se adopta un Código de Enjuiciamiento Criminal acorde con la política de americanización impuesta a partir de 1898. Luego la investigación estudia los efectos de la eliminación de la detención preventiva en Puerto Rico y la adopción de una política de derecho absoluto a la fianza.

Luego pasamos a estudiar el sistema federal estadounidense de detención preventiva (“pre-trial detention”) y su evolución a través de las doctrinas establecidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir de la década de los cincuenta del siglo XX. La investigación también expone la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y los efectos que esta puede tener en los derechos del acusado y en su sistema de imposición de fianza y detención preventiva.

Por último demostramos cómo el sistema puertorriqueño de fianza y detención preventiva no se ajusta a la norma estadounidense provocando que el mismo pueda ser declarado inconstitucional de un momento a otro. Para evitarlo proponemos que Puerto Rico adopte el modelo español de prisión provisional ya que el mismo se ajustaría con muy pequeños ajustes al sistema estadounidense. Por sus salvaguardas y restricciones el modelo de prisión provisional español brindaría mayores derechos que el de detención preventiva estadounidense y a su vez traería de vuelta a Puerto Rico una medida cautelar imprescindible en todo sistema procesal penal.

ANEXO DE LEGISLACIÓN

DERECHO INTERNO

Constitución Política de la Monarquía Española de 1812

Estatuto Real de 1834

Constitución de la Monarquía Española de 1837

Constitución de la Monarquía Española de 1845

Constitución de la Nación Española de 1869

Constitución de la Monarquía Española de 1876

Constitución Española de 1978

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en Materia de Prisión Provisional.

Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Real Decreto de 8 de junio de 1850, aprobando reformas y adiciones introducidas al Código Penal de 1848 y a su Ley Provisional de aplicación.

Real Decreto de 22 de diciembre de 1872, Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal.

Real Decreto de 23 de mayo de 1879, Código Penal para las Provincias de Cuba y Puerto Rico y Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Real Decreto de 19 de octubre de 1888, Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en Cuba y Puerto Rico.

Gaceta de Madrid, 22 de marzo de 1848.

Gaceta de Madrid núm. 304 del 30 de octubre de 1888.

Gaceta de Madrid núm. 99 del 9 de abril de 1881.

Gaceta de Madrid núm. 141 del 21 de mayo de 1863.

Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1882.

Gaceta de Madrid, tomo I, 12 de enero de 1891.

Boletín Oficial del Estado, núm. 3, de 3 de enero de 1985.

Boletín Oficial del Estado, núm. 122, de 23 de mayo de 1995.

Boletín Oficial del Estado, núm. 257, de 27 de octubre de 2003.

TRATADOS INTERNACIONALES

Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, 1898.

LEYES Y NORMAS DE ESTADOS TERCEROS

Puerto Rico

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1952.

Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1904.

Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1926.

Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1935.

Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas.

Ley núm. 139 de 23 de Julio de 1974

Ley núm. 177 de 20 de Julio de 1979

Ley núm. 5 de 30 de marzo de 1984

Ley núm. 39 de 5 de junio de 1986

Ley núm. 54 de 15 de agosto de 1989

Ley núm. 105 de 6 de diciembre de 1993

Ley núm. 49 de 2 de agosto de 1994

Ley núm. 177 de 12 de agosto de 1995

Ley núm. 230 de 11 diciembre de 1995

Ley núm. 245 de 24 diciembre de 1995

Ley núm. 58 de 4 de agosto de 1997

Ley núm. 85 de 13 de marzo de 2003

Ley núm. 133 de 3 de junio de 2004

Ley núm. 134 de 3 de junio de 2004

Ley núm. 190 de 22 de diciembre de 2009

Ley núm. 281 de 27 de diciembre de 2011

Ley núm. 282 de 27 de diciembre de 2011

Ley núm. 84 de 14 de mayo de 2012

Ley núm. 123 de 24 de junio de 2012

P. de la C. 68 de 2 de enero de 2017.

P. de la C. 377 de 4 de enero de 2017.

Estados Unidos de América

Constitution of the United States, 1787.

Organic Act of 1900.

U.S. Code: Title 8, Aliens and Nationality.

U.S. Code Title 18, Crimes and Criminal Procedure.

U.S. Code Title 21, Food and Drugs.

Federal Judiciary Act of 1789

Bail Reform Act of 1966

Public Law 600, an act to provide for the organization of a constitutional government by the people of Puerto Rico, July 3, 1950.

Reino Unido

Bill of Rights (Act) 1689

ANEXO DE JURISPRUDENCIA

TRIBUNALES DE DERECHO INTERNOS

STC 40/1987, 23 de abril.

STC 128/1995, 26 de julio.

STC 158/1996, 15 de octubre.

STC 47/2000, 17 de febrero.

STC 147 / 2000, 29 de mayo.

STC 99 / 2005, 18 de abril.

STC 29 / 2008, 29 de enero.

STC 8 / 2017, 19 de enero.

STC 91/2018, 17 de septiembre.

OTROS TRIBUNALES

Puerto Rico

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Pillot, 19 D.P.R. 264 (1913).

Barreal v. Alcaide, 27 D.P.R. 46 (1919).

Ex Parte Leroy, 17 D.P.R. 1047 (1911).
Flores v. Pueblo, 30 D.P.R. 583, 584 (1922)
Rodríguez v. Lugo, 36 D.P.R. 560 (1927).
Cardona v. Lugo, Alcaide, 36 D.P.R. 984 (1927).
Molina v. Lugo, Alcaide, 38 D.P.R. 895 (1928).
Jiménez v. González, 71 D.P.R. 118 (1950).
Pérez v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 930 (1951).
Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 854 (1955)
Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980).
Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R. 388 (2003).
Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 D.P.R. 203 (2008).
Vázquez Alejandro v. Supte. Bayamón, 183 D.P.R. 711 (2011).
Pueblo v. Aponte Ruperto, 2018 T.S.P.R. 2 (2018).

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América

Ex Parte Milligan, 71 U.S. 4 Wall. 2 2 (1866)
Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901).
Santiago v. Noguera, 214 U.S. 260 (1909).
Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951).
Carlson v. Landon, 342 U.S. 524 (1952).
Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962).
Schilb v. Kuebel, 404 U.S. 357 (1971).
Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520 (1979).
Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979).
United States v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987).

Corte de Apelaciones de los Estados Unidos

White v. United States, 330 F.2d 811 (8vo Cir. 1964).
Hodgdon v. United States, 365 F.2d 679 (8vo Cir.1966).

ANEXO BIBLIOGRAFÍA

- ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, *Cámara de Delegados de Puerto Rico, Primera y Segunda Asamblea Legislativa 1900-1903*, Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, San Juan, 1995.
- ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, *Proposiciones y Resoluciones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1951-1952*, San Juan, 1992.
- ALBERTO BARREIRO, Jorge, *La reforma de la prisión provisional: Leyes Orgánicas 13 y 15 de 2003 y la doctrina del Tribunal Constitucional*, en *Revista jueces para la democracia*, Nº 51, Madrid, 2004.
- ALSCHULER, Albert W., *Preventive pretrial detention and the failure of interest-balancing approaches to due process*, 85 Mich. L. Rev. 510, 1986.
- ALVARADO PLANAS, Javier, MONTES SALGUERO, Jorge, PÉREZ MARCOS, Regina M^a, SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M^a. Dolores del Mar, *Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones*, UNED, Madrid, 1999.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José Julián, *La Protección De Los Derechos Humanos En Puerto Rico*, 57 Rev. Jur. UPR 133, 1988.
- AMELL Y MASÓ, Salvador, *Órdenes judiciales dictadas por el Comandante en Jefe del Departamento, Secretario de Justicia, Corte Suprema de Justicia, Junta Judicial y Procurador General*, El Progreso, Mayagüez, 1900.
- ARANGÜENA FANEGO, Coral, *La prisión provisional y la incomunicación*, en *Nociones preliminares de Derecho Procesal Penal*, (Dir. Jordi Nieva Fernoll y Llorenç Bujosa Vadell), editorial Atelier, Barcelona, 2016.
- ARMENTA DEU, Teresa, *Estudios de justicia penal*, Editorial Marcial Pons, Madrid, Madrid, 2014.
- ARMENTA DEU, Teresa, *Lecciones de Derecho Procesal Penal*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013.
- ARMENTA DEU, Teresa, *Lecciones de Derecho Procesal Penal Español*, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2015.
- ARTHUR, Kevin F., *Preventive Detention Liberty in the Balance*, 46 Md. L. Rev. 378 (1987).

- ASENCIO MELLADO, José María, *Derecho Procesal Penal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004.
- ASENCIO MELLADO, José María, *La Prisión Provisional*, Editorial S.L. Civitas Ediciones, Madrid, 1987.
- AVILÉS LAMBERTY, Sonia E., *El derecho a la fianza*, en *Revista La toga*, San Juan, 1975.
- AVILÉS RODRÍGUEZ Francisco Ariel, Informe sobre la fianza, en *Revista La toga*, San Juan, 1975.
- BANACLOCHE PALAO, Julio, *La libertad personal y sus limitaciones*, Editorial S.A. McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid, 1996.
- BANACLOCHE PALAO, Julio y ZARZALEJOS NIETO, Jesús, *Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal*, Editorial La ley, Madrid, 2015.
- BARALT, Guillermo A., *Historia del Tribunal Federal en Puerto Rico: 1899 - 1999*, Publicaciones Puertorriqueñas, Hato Rey, 2004.
- BETANCOURT Y LEBRÓN, Ismael, Los derechos del acusado, Editorial del Colegio de Abogados de Puerto Rico, San Juan, 1975.
- BONETA CARRIÓN, Roberto, *La fianza en Puerto Rico*, 39 Rev. Jur. UPR 523, 1970.
- BLANCO HERRERO, Miguel, *Política de España en Ultramar*, Editorial Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1888.
- BLANCO, Tomás, *Prontuario Histórico de Puerto Rico*, Editorial Juan Pueyo, Madrid, 1935.
- CAMPOS SÁNCHEZ, Manuel, *La reforma de la prisión preventiva*, Editorial S.L. Diego Marín Librero, Murcia, 1998.
- CARROLL, Henry K., *Report of Porto Rico*, Government Printing Office, Washington, 1899.
- CAVERO LATAILLADE, Iñigo y ZAMORA RODRÍGUEZ, Tomás, *Constitucionalismo Histórico de España*, Editorial Universitas, Madrid, 1995.
- CHIESA APONTE, Ernesto L., *Los derechos de los acusados y la factura más ancha*, 65 Rev. Jur. U.P.R. 83, 1996.
- CHIESA APONTE, Ernesto L., *Derecho Penal*, 78 Rev. Jur. UPR 291, 2009.
- CHIESA APONTE, Ernesto L., *Procedimiento Criminal y la Constitución*, Editorial Situm, San Juan, 2017.
- COBO DEL ROSAL, Manuel, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, Madrid, 2008.

- COBO DEL ROSAL, Manuel, QUINTANAR DÍEZ, Manuel y ZABALA LÓPEZ, Carlos, *Derecho Procesal Penal Español*, Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, Madrid, 2015.
- COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO, *La Fianza: Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial*, Revista del Colegio de Abogados, San Juan, 1979.
- COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES DE PUERTO RICO, *Informes de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, tomo I, San Juan, 1973.
- CÓRDOVA CHIRINO, Jacobo, *Los que murieron en la horca*, Editorial Cordillera, San Juan, 1970.
- CRUZ MONCLOVA, Lidio, *Historia de Puerto Rico (Siglo XIX)*, tomo II, segunda parte, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1979.
- CRUZ MONCLOVA, Lidio, *Historia de Puerto Rico (Siglo XIX)*, tomo I, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1979.
- CRUZ MONCLOVA, Lidio, *Historia de Puerto Rico (Siglo XIX)*, tomo II, primera parte, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1979.
- DAVIS, George W., *Report of the Military Governor of Porto Rico on civil affairs*, Government Printing Office, Washington, 1902.
- DE LA ROSA CORTINA, José Miguel, *Las medidas cautelares personales en el proceso penal*, Editorial Bosch, Barcelona, 2015.
- DEL SAZ, Silvia, *La obligación del estado de indemnizar los daños ocasionados por la privación de libertad de quien posteriormente no resulta condenado*, en *Revista de administración pública*, Madrid, 2014.
- DE ESTEBAN, Jorge, *Las Constituciones de España*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000.
- DE DIEGO, José, *Nuevas Campañas*, Sociedad General de Publicaciones, Barcelona, 1916.
- DE DIEGO GARCÍA, Emilio, *Puerto Rico bajo la administración española durante la primera mitad del s. XIX*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1983.
- DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Derecho y Colonialismo*, Editorial Edil, San Juan, 1988.
- DELGADO CINTRÓN, Carmelo, *Imperialismo Jurídico Norteamericano en Puerto Rico (1898 – 2015)*, Publicaciones Gaviota, 2015.

- DÍAZ MARTÍNEZ, Manuel, *Prisión provisional e intereses constitucionalmente protegidos*, en *Diario la Ley* - Núm., Año XXV, Núm. 5931, Madrid, enero 2004.
- DÍAZ SOLER, Luis M., *Rosendo Matienzo Cintrón: Orientador y Guardián de una Cultura*, vol. I, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, 1960.
- DÍAZ SOLER, Luis M., *Puerto Rico: desde sus orígenes hasta el cese de la dominación española*, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1995.
- DRESSLER, Joshua y THOMAS III, George C., *Criminal Procedure: principles, policies and perspectives*, West Academic Publishing, Minnesota, 2013.
- ESCUDERO HERRERA, María Concepción, *Derecho Procesal Penal*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2015.
- FIGUEROA MERCADO, Loida, *Breve historia de Puerto Rico*, vol. I, Editorial Edil, Río Piedras, 1979.
- FIGUEROA MERCADO, Loida, *Puerto Rico ante la oferta de Leyes Especiales por España 1808 – 1887*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1963.
- FONTANET MALDONADO, Julio E., *El Proceso Penal de Puerto Rico*, Editorial Interjuris, 2008.
- FOOTE, Caleb, *Commig constitutional crisis in bail: I*, 113 U. Pa. L. Rev. 959 (1965)
- FRAGA IRIBARNE, Manuel, *Sociedad política y gobierno en Hispanoamérica*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962.
- GARCÍA, Mar Montón, *Los actuales presupuestos fácticos de la prisión provisional*, en *Diario La Ley*, Año XXV, Núm. 5972, Madrid, 2004.
- GARCÍA MORILLO, Joaquín, *Los derechos de libertad (i). La libertad personal*, en *Derecho Constitucional*, vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- GARCÍA GOYENA, Florencio, AGUIRRE, Joaquín y MONTALBAN, Juan Manuel, *Febrero o Librería de jueces, abogados y escribanos, comprensiva de los Códigos Civil, Criminal y Administrativo tanto en la parte teórica como en la práctica con arreglo en un todo a la legislación hoy vigente*, Imprenta y librería de D. Ignacio Boix, Madrid, 1843.
- GARCÍA SALGADO, Manuel, *Discurso pronunciado ante la excelentísima Real Audiencia de Puerto Rico*, Imprenta y librería de Acosta, San Juan, 1882.
- GIMENO SENDRA, Vicente, *Derecho Procesal Penal*, Editorial Colex, Madrid, 2008.

- GIMENO SENDRA, Vicente, *La necesaria reforma de la Prisión Provisional*, en *Diario La Ley*, Madrid, 5 de noviembre de 2001.
- GONZÁLEZ FAGUNDO, Francisco, *Las fianzas en casos criminales*, en *Revista de derecho, legislación y jurisprudencia*, San Juan, 1937.
- GONZÁLEZ VALES, Luis, *Apuntes para una historia del proceso de adopción del Código Penal luego del cambio de soberanía*, en *Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*, vol. I, Núm. I, San Juan, 1989.
- GÓMEZ ORBANEJA, Emilio y HERCE QUEMADA, Vicente, *Derecho Procesal Penal*, 1987.
- GOULD, Lyman J., *La Ley Foraker: raíces de la política colonial de los Estados Unidos*, Editorial Universitaria Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1975.
- GUDÍN RODRÍGUEZ MAGARIÑOS, Faustino, *La paulatina metamorfosis del juez de instrucción como juez de garantías: pautas jurídicas para la pervivencia de una arraigada institución*, en *Revista Penal*, Madrid, 2011.
- GUERRA PÉREZ, Cristina, *La decisión judicial de prisión preventiva*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- HELFELD, David M., *How much of the Federal Constitution is likely to be held applicable to the Commonwealth of Puerto Rico*, 39 Rev. Jur. UPR 169, 1970.
- HELFELD, David M., *El preludio histórico a la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, 21 Rev. Jur. UPR 182, 1952.
- HERNÁNDEZ GÓMEZ, Isabel, *Prisión provisional y garantías*, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas*, nº 16/17, 2011/12.
- HUNT, William H., *Second Annual Report of the Governor of Porto Rico covering the period from May 1, 1901, To July 1, 1902*, Forgotten Books, 1902.
- IBAÑEZ, Perfecto Andrés, *El juez y la prisión provisional*, en *Crítica y justificación del Derecho Penal en el cambio de siglo*, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, Cuenca, 2003.
- JOHNSTON, Alexia J., *United States v. Salerno: preventive detention — coming of age*, 1988 Det. C.L. Rev. 135 (1988)
- JORGE BARREIRO, Agustín, *Cuadernos de derecho judicial*, Nº. 18, 56, 1996.
- KLEIN, Adam y WITTES, Benjamin, *Preventive detention in american theory and practice*, 2 Harv. Nat'l Security J. 85, 2011.

- KUSHLAN WAGNER, Betsy, *Limiting preventive detention through conditional release: the unfulfilled promise of the 1982 Pretrial Services Act*, 97 Yale L.J. 320, 1987.
- LASTRES Y JUÍZ, Francisco, *Procedimientos Civiles y Criminales*, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1877.
- LASTRES Y JUÍZ, Francisco, *La fianza y la prenda*, Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 1879.
- LEBRÓN, Ramón, *Esbozo histórico del Derecho Penal: desde la Edad Media hasta los presentes días*, Morel Campos & Co., Caguas, 1916.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo, *Tratado de Derecho Procesal Penal*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2014.
- LOSADA, Juan Carlos, *Historia de las guerras de España*, Editorial Pasado y Presente, Barcelona, 2015.
- LÓPEZ VILANOVA, Jocelyn, *El impacto de la pobreza en la administración de la justicia criminal*, 19 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 315, 1984-1985.
- LÓPEZ-REY Y ARROJO, Manuel, *La reforma penal en Puerto Rico*, 36 Rev. Jur. UPR 419, 1967.
- LORCA NAVARRETE, Antonio María, *El proceso penal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*, Dykinson, Madrid, 1997.
- MÁLAGA DIÉGUEZ, Francisco, *El fundamento de la tutela provisional en el proceso penal*, en *Revista de Derecho Procesal* - Núm. 1-2/2002, octubre 2002.
- MÁLAGA DIÉGUEZ Francisco, *El fundamento de la tutela provisional en el Proceso Penal*, en *Revista de Derecho Procesal*, 2002.
- MALARET, Augusto, *Desarrollo del Derecho escrito en Puerto Rico*, en *Revista América Española*, Colombia, 1908.
- MARTÍN RÍOS, María del Pilar, *Medidas cautelares personales: detención, libertad provisional y prisión preventiva*, Juruá, Lisboa, 2016.
- MCDONALD, Austin, *The American Political Science Review*, Vol.49, Núm. 3, (1955).
- MORENO, Juan Damián, *El sistema cautelar penal*, en *Régimen jurídico de la prisión provisional*, Madrid, 2004.
- MONTERO AROCA Juan, GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, BARONA VILAR, Silvia, ESPARZA LEIBAR, Iñaki y ETXEBERRIA GURIDI, José Francisco, *Derecho Jurisdiccional III*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

- MORÁN MARTÍN, Remedios, *Historia del Derecho Privado, Penal y Procesal*, UNED-Universitas, Madrid, 2002.
- MORENO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín, *Derecho Procesal Penal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- MUERZA ESPARZA, Julio J., HINOJOSA SEGOVIA, Rafael, ARAGONESES MARTÍNEZ, Sara, DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, *Derecho Procesal Penal*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004.
- MUÑOZ DE FRONTERA, Nélida, *Historia del Derecho Puertorriqueño*, Situm, Hato Rey, 2002.
- MUÑOZ CONDE, F. y MORENO CATENA, V. M., *La prisión provisional en España, en la reforma penal y penitenciaria*, Santiago de Compostela, 1980.
- MUÑOZ MORALES, Luis, *Reseña de la legislación procesal en Puerto Rico*, 3 Rev. D. P. 6, 1945.
- NAVARRO MASSIP, Jorge, *La regulación de la prisión provisional: presupuestos y fines*, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, Madrid, 2013.
- NEUMAN, Gerald L. y BROWN – NAGIN, Tomiko (Editores), *Reconsidering the Insular Cases: The Past and Future of the American Empire*, Human Rights Program, Harvard Law School, Cambridge, MA, 2015.
- NEVAREZ MUÑIZ Dora, *Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño*, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2014.
- PADILLA, Harry N., *Propuestas enmiendas constitucionales al derecho a la finanza y las razones por las cuales estas no se materializaron*, 22 Rev. Der. P.R. 3, 1982-1983.
- PAGÁN, Bolívar, *Historia de los partidos políticos puertorriqueños, 1898-1956*, vol. I, Librería Campos, San Juan, 1972.
- PARRA IBÁÑEZ, D. F. S., *Curso elemental de Derecho Procesal Español Civil, Penal, Administrativo y Canónico*, Miguel Romero, Madrid, 1889.
- PÉREZ MARCHAND, Rafael V., *La justicia penal en Puerto Rico y su necesaria evolución*, 3 Rev. Jur. UPR 96, 1933-1934.
- PÉREZ VITORIA, Octavio, *Las medidas de seguridad*, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1951.
- PICÓ, Fernando, *Historia General de Puerto Rico*, Ediciones Huracán, Río Piedras, 2006.

- PICÓ, Fernando, *La guerra después de la guerra*, Ediciones Huracán, Río Piedras, 2004.
- PRIETO – CASTRO Y FERNÁNDEZ, Leonardo y GUTIÉRREZ DE CABIEDES Y FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Eduardo, *Derecho Procesal Penal*, Tecnos, 1989.
- PRINGLE, Bruce D., *Bail and detention in Federal Criminal proceedings*, 22 Colo. Law. 913, 1993.
- PUERTO RICO CONVENCIÓN CONSTITUYENTE (1951-1952), Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico: 1951 - 1952, tomos 2 – 4, Lexis-Nexis of Puerto Rico, Inc., Hato Rey, 2003.
- RAFFUCI DE GARCÍA, Carmen I., *El Gobierno Civil y la Ley Foraker (Antecedentes Históricos)*, Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1981.
- RAMOS GONZÁLEZ, Carlos E., *La constitución de Cádiz en el imaginario constitucional puertorriqueño*, 47 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 975, 2012.
- RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Enjuiciamiento Criminal*, Atelier, Barcelona, 2004.
- RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, *Arrestos, cárceles y prisiones en los derechos históricos de los españoles*, Editorial Ministerio del Interior, Madrid, 2008.
- RESUMIL DE SANFILIPPO, Olga Elena, *Práctica Jurídica De Puerto Rico, Derecho Procesal Penal*, vol. I, Equity Publishing, Orford, NH, 1990.
- RIVERO MÉNDEZ, Ángel, *Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico*, Editorial Edil, Río Piedras, 1972.
- RIVERA RAMOS, Efrén, *The Legal Construction of Identity*, A.P.A. Books, Washington, D.C., 2001.
- ROONEY Karen A., *Detaining for danger under the Federal and Massachusetts Bail Statutes: controversial but constitutional*, 22 New Eng. J. On Crim. & Civ. Confinement 465, (1996)
- ROWE, Leo S., *The United States and Porto Rico*, Arno Press, New York, 1904.
- ROWE, Leo, KEEDY, John M. y HERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan, *Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico*, Tip. Boletín Mercantil, San Juan, 1902.
- RUIZ Y RODRÍGUEZ, Hermenegildo María, *Compilación general de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento Criminal*, Imprenta de la Revista de Legislación Madrid, 1880.
- RUIZ Y RODRÍGUEZ, Hermenegildo María, *Tratado General de Procedimientos Criminales*, Imprenta de la Revista de Legislación Madrid, Madrid, 1878.
- SAINZ GUERRA Juan, *Historia del Derecho Español*, Dykinson, Madrid, 2008.

- SÁNCHEZ BARRIOS, María Inmaculada, *La prisión provisional y la necesaria convocatoria de una audiencia previa para su adopción*, en *Diario la Ley*, 1, Madrid, 2015.
- SALTZBURG Stephen A. y CAPRA Daniel J., *American Criminal Procedure: cases and comentary*, West Academic Publishing, St. Paul, MN, 2014.
- SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José, *Historia del Derecho*, Reus, Madrid, 2008.
- SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José, y MONTANOS FERRÍN, Emma, *Historia de las instituciones político-administrativas contemporáneas (1808-1975)*, Dykinson, Madrid, 1994.
- SANGER, J.P., GANNETT, Henry y WILLCOX, Walter F., *Censo de Puerto Rico*, Imprenta del Gobierno, Washington, 1899.
- SANGUINÉ, Odone, *Prisión provisional y derechos fundamentales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
- SERRANO GEYLS, Raúl, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, vol. I, Colegio de Abogados de Puerto Rico, Instituto de Educación Práctica, San Juan, 1986.
- SERRANO GEYLS, Raúl, *La propuesta enmienda constitucional al derecho a fianza en casos criminales*, 44 Rev. Jur. U.P.R. 7, 1975.
- SUÑEZ TEJERA, Yoruanys y DÁVILA CABEZAS, Dunia, *Los efectos negativos que causa para el acusado la prisión provisional en Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga), 2013.
- TODD, Roberto H., *Desfile de gobernadores de Puerto Rico: 1898 a 1943*, Impreso en Casa Baldrich, San Juan, 1943.
- TOLEDO, José V., MONTALVO, Miguel A., LUGO BOUGAL, Héctor, TREVIÑO, Juanita, ORTIZ DEL RIVERO, Geraldo, MORALES SÁNCHEZ, Julio, ORENSTEIN Stanley A., CARDONA-HERNANDEZ DE ORENSTEIN Ida, *Seminario sobre fianza criminal*, 8 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 25, 1973.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Manual de historia del Derecho Español*, Tecnos, Madrid, 1983.
- TOMÉ GARCÍA, José Antonio, *Curso de Derecho Procesal Penal*, Colex, Madrid, 2016.
- TORRES, Eulalio A., *Puerto Rico Penal Code of 1902 – 1975: a case of american legal imperialism*, 45 Rev. Jur. U.P.R. 1, 1976.

- TRÍAS MONGE, José, *El Choque de dos Culturas Jurídicas*, Equity Publishing Company, Hato Rey, 1991.
- TRÍAS MONGE, José, *El Derecho en Puerto Rico*, 12 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 7, 1977-1978.
- TRÍAS MONGE José, *El sistema judicial de Puerto Rico*, Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1978.
- TRÍAS MONGE, José, *Historia Constitucional De Puerto Rico*, tomo I, Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1980.
- TULIO, Marco, *Procedimientos Judiciales*, vol. II, Felipe González Rojas, Madrid, 1889.
- UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS, ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, *La Nueva Constitución de Puerto Rico*, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2da. edición, San Juan, 2008.
- WHITEBREAD, Charles H. y SLOBOGIN, Christopher, *Criminal Procedure: an analysis of cases and concepts*, Foundation Press, 2008.
- WILSON, Edward S., *Political development of Porto Rico*, F.J. Heer, Colombus, OH, 1905.

FUENTES CONSULTADAS EN INTERNET

ADJUTANT GENERAL'S OFFICE, War Department. General Orders, No. 101, 1898,
<https://hawaiiankingdom.org/pdf/General%20Orders%20No.%20101.pdf>

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE PUERTO RICO, Oficina de Prensa, *Ejemplo de colaboración estatal y federal caso de Waldemar Martínez*, 9 de febrero de 2017.
<http://www.justicia.pr.gov/ejemplo-de-colaboracion-estatal-y-federal-caso-de-waldemar-martinez/>

EL NUEVO DÍA, *CEE emite certificación gana el "No" en consulta constitucional*, 19 de agosto de 2012,
<https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/ceeemitecertificacionganaeln/enconsultaconstitucional-1326358/>

EL NUEVO DÍA, *Fracasa el bilingüismo en Puerto Rico*, 21 de abril de 2013.
<https://www.elnuevodia.com/Noticias/Locales/Nota/Fracasaelbilinguismoenpuertorico-1494801/>

EL NUEVO DÍA, *Ser bilingües: asignación pendiente*, 21 de mayo de 2013.
<https://www.elnuevodia.com/Noticias/Locales/Nota/Serbilinguesasignacionpendiente-1514129/>

EL NUEVO DÍA, *Federales y Policía extienden acuerdo para trabajar en conjunto*, 24 de noviembre de 2014,
<https://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/federalesypoliciaextiendenacuerdoparatrabajarenconjunto-1898453/>

FEDERAL BAR ASSOCIATION, *About U.S. Federal Courts*,
http://www.fedbar.org/Public-Messaging/About-US-Federal-Courts_1.aspx

HISTORIA CONTEMPORÁNEA, Bill of Right, <http://historiacontemporanea09-10.blogspot.com/2009/10/bill-of-rights.html>

JUNTA REGLAMENTADORA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE PUERTO RICO, Estadísticas de la industria de las telecomunicaciones y televisión por cable en Puerto Rico, Informe trimestral enero – diciembre 2017,
[Http://www.jrtrpr.pr.gov/Estadisticas/Trimestral01_Estadisticas_2017.Pdf](http://www.jrtrpr.pr.gov/Estadisticas/Trimestral01_Estadisticas_2017.Pdf)

NOTICEL, *¿Qué pasó hoy?*, 29 de septiembre de 2011, http://www.Noticel.Com/La-Calle/Qu-Pas-Hoy_20171130075033664/664784583

POLICÍA DE PUERTO RICO, Oficina de Prensa, *Acuerdo de colaboración entre Policía y ICE tiene como resultado ocupación de más de una docena de armas*

ilegales, 18 de diciembre de 2015, <https://policia.pr.gov/acuerdo-de-colaboracion-entre-policia-y-ice-tiene-como-resultado-ocupacion-de-mas-de-una-docena-de-armas-ilegales/>

SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL, Ponencia de la Sociedad para la Asistencia Legal, Resolución Concurrente del Senado número 60, 23 de abril de 2012, http://laevidencia.com/files/PONENCIA_SAL_RCS_60_-_Enmienda_Constitucional.pdf

TORRES RIVERA, Alejandro, *El Tratado de París de 1898*, https://www.ecured.cu/Nulidad_Del_Tratado_De_Par%C3%ADs.

UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS, *Una breve historia de los Derechos Humanos*, <https://www.unidosporlosderechoshumanos.mx/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html>

UNIVERSIA PUERTO RICO, *Universidad De Puerto Rico, Editorial UPR relanza, La Nueva Constitución de Puerto Rico*, 27 de junio de 2005, [Http://Noticias.Universia.Pr/Vida-Universitaria/Noticia/2005/06/27/141520/Editorial-Upr-Relanza-Nueva-Constitucion-Puerto-Rico.Html](http://Noticias.Universia.Pr/Vida-Universitaria/Noticia/2005/06/27/141520/Editorial-Upr-Relanza-Nueva-Constitucion-Puerto-Rico.Html)

U.S. CONGRESS, *Constitution of The United States Of America: analysis and interpretation*, <https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-6.pdf>

U.S. COURTS, *Caseload Statistics Data Tables*, https://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables?Tn=H-14%20&Pn=All&T=71&M%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&Y%5Bvalue%5D%5Byear%5D=Federal%20Bar%20Association%2C%20Http%3A%2F%2Fwww.Fedbar.Org/Public-Messaging/About-Us-Federal-Courts_1.aspx%20%282017%29.

U.S. NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION, *La Constitución de los Estados Unidos de América 1787*, <https://www.archives.gov/espanol/Constitucion.Html>.

**ANEXO: DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS
DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LA FIANZA Y LA DETENCIÓN
(traducción nuestra)**

Constitución de Alabama (1901)

*Sección 16. Toda persona antes de la convicción tiene derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto en delitos capitales, cuando la prueba es evidente o la presunción grande; y en ningún caso se requerirán fianzas excesivas.*⁷⁶⁰

Constitución del Estado de Alaska (1959)

Sección 1.11 ... El acusado tiene el derecho... de ser puesto en libertad bajo fianza excepto por delitos capitales cuando las pruebas son evidentes o la presunción grande...

*Sección 1.12. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁶¹

Constitución del Estado de Arizona (1912)

Sección 15. No se requerirán fianzas excesivas...

Sección 22.

A. Toda persona acusada de un crimen tiene derecho a la fianza con suficientes garantías excepto:

- 1. Por delitos capitales, agresión sexual, conducta sexual con un menor de quince años o acoso de un niño menor de quince años cuando la prueba es evidente o la presunción grande.*

⁷⁶⁰ **Constitution of Alabama (1901)**

Section 16. That all persons shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses, when the proof is evident or the presumption great; and that excessive bail shall not in any case be required.

⁷⁶¹ **Constitution of the State of Alaska (1959)**

Section 1.11. In all criminal prosecutions, the accused shall have the right ... to be released on bail, except for capital offenses when the proof is evident or the presumption great; ...

Section 1.12. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed...

2. *Por delitos graves cometidos cuando la persona acusada ya está bajo fianza o bajo acusación de otro delito grave o cuando la prueba es evidente o la presunción grande en cuanto a la nueva acusación.*
3. *Por delitos graves si la persona acusada representa un peligro substancial para cualquier otra persona o la comunidad, si ninguna condición de liberación que pueda ser impuesta puede razonablemente asegurar la seguridad de otra persona o de la comunidad y si la prueba es evidente o la presunción grande en la acusación actual.*
4. *Por delitos graves prescritos por la legislatura si la persona acusada entró o permaneció en los Estados Unidos ilegalmente y si la prueba es evidente o la presunción grande en la nueva acusación.*

B. El propósito de la fianza y de cualquier condición de liberación que pueda establecer un oficial judicial incluyen:

1. *Asegurar la presencia del acusado.*
2. *Proteger contra la intimidación de testigos.*
3. *Proteger la seguridad de la víctima y cualquier otra persona de la comunidad.*⁷⁶²

⁷⁶² **Constitution of the State of Arizona (1912)**

Section 15. Excessive bail shall not be required...

Section 22.

A. All persons charged with crime shall be bailable by sufficient sureties, except:

1. *For capital offenses, sexual assault, sexual conduct with a minor under fifteen years of age or molestation of a child under fifteen years of age when the proof is evident or the presumption great.*
2. *For felony offenses committed when the person charged is already admitted to bail on a separate felony charge and where the proof is evident or the presumption great as to the present charge.*
3. *For felony offenses if the person charged poses a substantial danger to any other person or the community, if no conditions of release which may be imposed will reasonably assure the safety of the other person or the community and if the proof is evident or the presumption great as to the present charge.*
4. *For serious felony offenses as prescribed by the legislature if the person charged has entered or remained in the United States illegally and if the proof is evident or the presumption great as to the present charge.*

B. The purposes of bail and any conditions of release that are set by a judicial officer include:

Constitución del Estado de Arkansas (1874)

Sección 8. ... Toda persona antes de la convicción, tiene derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto en delitos capitales, cuando la prueba es evidente o la presunción grande; y en ningún caso se requerirán fianzas excesivas.

*Sección 9. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁶³

Constitución del Estado de California (1849)

Sección 6. No se requerirán fianzas excesivas...

*Sección 7. Toda persona tiene derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto en delitos capitales, cuando la prueba es evidente o la presunción grande.*⁷⁶⁴

Constitución del Estado de Colorado (1876)

Sección 19.

1. *Toda persona tiene derecho a la fianza con suficientes garantías pendiente a disposición de los cargos con las siguientes excepciones:*
 - a. *Por crímenes capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande o*
 - b. *Cuando, después de celebrada una vista dentro de las noventa y seis horas después del arresto y con notificación*

-
1. *Assuring the appearance of the accused.*
 2. *Protecting against the intimidation of witnesses.*
 3. *Protecting the safety of the victim, any other person or the community.*

⁷⁶³ **Constitution of the State of Arkansas (1874)**

Section 8. ... All persons shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses, when the proof is evident or the presumption great.

Section 9. Excessive bail shall not be required...

⁷⁶⁴ **Constitution of the State of California (1849)**

Section 6. Excessive bail shall not be required...

Section 7. All persons shall be bailable, by sufficient sureties: unless for capital offences, when the proof is evident or the presumption great.

razonable, la corte encuentra que la prueba es evidente o la presunción grande en el crimen que se alega que fue cometido y determina que el público sería puesto en peligro significativo si el acusado fuese liberado bajo fianza y que dicha persona esté acusada en los siguientes casos:

- i. Un crimen de violencia, como lo defina la asamblea general, que alegadamente se haya cometido estando bajo probatoria o libertad condicional como resultado de una condena por un crimen de violencia.*
- ii. Un crimen de violencia como lo defina la asamblea general, que se haya cometido alegadamente durante fianza y pendiente a la disposición de un crimen de violencia previo donde se ha encontrado causa probable.*
- iii. Un crimen de violencia, como lo defina la asamblea general, que se alegue se haya sido cometido después de dos condenas por crímenes graves o una condena previa si esa condena fuese por un crimen violento por cargos traídos separadamente y juzgados bajo las leyes de este estado o bajo las leyes de los Estados Unidos, que, si fuesen cometidos en este estado, serian delitos graves o:*

2. Excepto en el caso de un delito capital, si a la persona se le deniega la fianza bajo esta sección, el juicio se celebrará no más de noventa días después que la fianza fuese denegada. Si el juicio no se celebra dentro de los noventa días y la demora no es atribuible a la defensa, la corte establecerá, inmediatamente, una vista para fianza y establecerá la cuantía de fianza para la persona.

(2.5)

- a. La corte puede otorgar derecho a la fianza luego de la persona ser condenada, pendiente a sentencia o apelación, solamente como previsto por estatuto promulgado por la asamblea general excepto a personas condenadas por:*

- i. Asesinato
 - ii. Cualquier delito serio de agresión sexual con el uso de un arma mortal;
 - iii. Cualquier delito serio de agresión contra un menor de quince años;
 - iv. Un crimen de violencia, definido por estatuto, promulgado por la asamblea general;
 - v. Cualquier delito serio cometido con un arma de fuego.
- a. La corte no fijará fianza que pudiese ser otorgada según esta subsección (2.5) a menos que la corte encuentre que:
- i. La persona probablemente no huirá y no representa un peligro a la seguridad de ninguna persona o a la comunidad y;
 - ii. La apelación no es frívola y no se persigue para propósitos de demora.

...

Sección 20. No se requerirán fianzas excesivas...⁷⁶⁵

⁷⁶⁵ Constitution of the State of Colorado (1876)

Section 19.

(1) All persons shall be bailable by sufficient sureties pending disposition of charges except:

(a) For capital offenses when proof is evident or presumption is great; or
 (b) When, after a hearing held within ninety-six hours of arrest and upon reasonable notice, the court finds that proof is evident or presumption is great as to the crime alleged to have been committed and finds that the public would be placed in significant peril if the accused were released on bail and such person is accused in any of the following cases:

(I) A crime of violence, as may be defined by the general assembly, alleged to have been committed while on probation or parole resulting from the conviction of a crime of violence;
 (II) A crime of violence, as may be defined by the general assembly, alleged to have been committed while on bail pending the disposition of a previous crime of violence charge for which probable cause has been found;
 (III) A crime of violence, as may be defined by the general assembly, alleged to have been committed after two previous felony convictions, or one such previous felony conviction if such conviction was for a crime of violence, upon charges separately brought and tried under the laws of this state or under the laws of any other state, the United States, or any territory subject to the jurisdiction of the United States which, if committed in this state, would be a felony; or

(2) Except in the case of a capital offense, if a person is denied bail under this section, the trial of the person shall be commenced not more than ninety days after the date on which bail is denied. If the trial is not commenced within ninety days and the delay is not attributable to the defense,

Constitución del Estado de Connecticut (1965)

*Sección 8. En todo enjuiciamiento criminal, el acusado tendrá el derecho de... ser liberado bajo fianza con garantías suficientes, excepto en delitos capitales donde la prueba es evidente o la presunción grande... Ninguna persona será obligada... tampoco se requerirán fianzas excesivas.*⁷⁶⁶

Constitución del Estado de Delaware (1897)

Sección 11. No se requerirán fianzas excesivas...

*Sección 12. Todo prisionero tiene derecho a libertad bajo fianza con garantías suficientes, a menos que sea por ofensas capitales donde la prueba es positiva o la presunción grande y cuando las personas estén confinadas por acusaciones relacionadas a estas ofensas sus amigos y su abogado pueden en momentos adecuados tener acceso a ellos.*⁷⁶⁷

the court shall immediately schedule a bail hearing and shall set the amount of the bail for the person.

(2.5)

(a) The court may grant bail after a person is convicted, pending sentencing or appeal, only as provided by statute as enacted by the general assembly; except that no bail is allowed for persons convicted of:

(I) Murder;

(II) Any felony sexual assault involving the use of a deadly weapon;

(III) Any felony sexual assault committed against a child who is under fifteen years of age;

(IV) A crime of violence, as defined by statute enacted by the general assembly; or

(V) Any felony during the commission of which the person used a firearm.

(b) The court shall not set bail that is otherwise allowed pursuant to this subsection (2.5) unless the court finds that:

(I) The person is unlikely to flee and does not pose a danger to the safety of any person or the community; and

(II) The appeal is not frivolous or is not pursued for the purpose of delay.

...

Section 20. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

⁷⁶⁶ Constitution of the State of Connecticut (1965)

Section 8. In all criminal prosecutions, the accused shall have a right to... be released on bail upon sufficient security, except in capital offenses, where the proof is evident or the presumption great;...

⁷⁶⁷ Constitution of the State of Delaware (1897)

Section 11. Excessive bail shall not be required...

Constitución del Estado de Florida (1968)

*Sección 14. A menos que haya una acusación de crimen capital o una ofensa castigable por cadena perpetua y la prueba de culpabilidad es evidente, cada persona acusada de un crimen o violación de ordenanza municipal o condado será intitulado a ser liberada antes de juicio bajo condiciones razonables. Si ninguna condición de liberación puede razonablemente proteger la comunidad del riesgo de daño a personas, asegurar la presencia del acusado (a) o asegurar la integridad del proceso judicial, el acusado (a) puede ser detenido (a).*⁷⁶⁸

Constitución del Estado de Georgia (1982)

*Párrafo XVII; No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁶⁹

Constitución de Hawái (1978)

*Sección 12. No se requerirán fianzas excesivas... La corte puede dispensar de fianza si está razonablemente satisfecha de que el acusado o los testigos se presentarán como les sea ordenado excepto si la persona está acusada con una ofensa castigable por cadena perpetua.*⁷⁷⁰

Section 12. All prisoners shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offenses when the proof is positive or the presumption great; and when persons are confined on accusation for such offenses their friends and counsel may at proper seasons have access to them.

⁷⁶⁸ **Constitution of the State of Florida (1968)**

Section 14. Unless charged with a capital offense or an offense punishable by life imprisonment and the proof of guilt is evident or the presumption is great, every person charged with a crime or violation of municipal or county ordinance shall be entitled to pretrial release on reasonable conditions. If no conditions of release can reasonably protect the community from risk of physical harm to persons, assure the presence of the accused at trial, or assure the integrity of the judicial process, the accused may be detained.

⁷⁶⁹ **Constitution of the State of Georgia (1982)**

Paragraph XVII. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed...

⁷⁷⁰ **Hawaii Constitution (1978)**

Constitución del Estado de Idaho (1890)

*Sección 6. Toda persona tiene derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por ofensas capitales, donde la prueba es evidente o la presunción grande. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁷¹

Constitución del Estado de Illinois (1970)

Sección 8.1 Derechos de las Víctimas de Crimen

(a) Víctimas de crímenes, como definido por ley, tienen los siguientes derechos:

...

(9) El derecho a que la seguridad de la víctima y de su familia sea considerada cuando se deniega o se fija la cantidad de la fianza, determinando si se debe liberar el acusado y estableciendo condiciones para la liberación después de arresto y convicción.

*Sección 9. Toda persona tiene derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por las siguientes ofensas cuando la prueba es evidente o la presunción grande; ofensas capitales, ofensas por las cuales se pueda imponer la sentencia de cadena perpetua como consecuencia de convicción o delitos graves por los cuales una sentencia de cárcel sin libertad condicional o revocable será impuesta por la ley como consecuencia de convicción, cuando la corte, después de una vista, determina que la liberación del ofensor representaría un peligro presente y real a la seguridad de cualquier persona.*⁷⁷²

Section 12. Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed...The court may dispense with bail if reasonably satisfied that the defendant or witness will appear when directed, except for a defendant charged with an offense punishable by life imprisonment.

⁷⁷¹ **Constitution of the State of Idaho (1890)**

Section 6. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses, where the proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required...

⁷⁷² **Constitution of the State of Illinois (1970)**

Constitución del Estado de Indiana (1851)

Sección 16. No se requerirán fianzas excesivas.

Sección 17. Ofensas, que no sean asesinato o traición, tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías. Asesinato o traición no tiene derecho a la fianza cuando la prueba es evidente o la presunción fuerte.⁷⁷³

Constitución del Estado de Iowa (1857)

Sección 12. ... personas serán, antes de convicción, tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por ofensas capitales donde la prueba es evidente o la presunción grande.

Sección 17. No se requerirán fianzas excesivas.⁷⁷⁴

Section 8.1. Crime Victims' Rights.

(a) Crime victims, as defined by law, shall have the following rights:

...

(9) The right to have the safety of the victim and the victim's family considered in denying or fixing the amount of bail, determining whether to release the defendant, and setting conditions of release after arrest and conviction.

Section 9. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for the following offenses where the proof is evident or the presumption great: capital offenses; offenses for which a sentence of life imprisonment may be imposed as a consequence of conviction; and felony offenses for which a sentence of imprisonment, without conditional and revocable release, shall be imposed by law as a consequence of conviction, when the court, after a hearing, determines that release of the offender would pose a real and present threat to the physical safety of any person.

⁷⁷³ **Constitution of the State of Indiana (1851)**

Section 16. Excessive bail shall not be required. ...

Section 17. Offenses, other than murder or treason, shall be bailable by sufficient sureties. Murder or treason shall not be bailable, when the proof is evident, or the presumption strong.

⁷⁷⁴ **Constitution of the State of Iowa (1857)**

Section 12. ... A persons shall, before conviction, be bailable, by sufficient sureties, except for capital offences where the proof is evident, or the resumption great.

Section 17. Excessive bail shall not be required;...

Constitución del Estado de Kansas (1859)

*Sección 9. Toda persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por crímenes capitales donde la prueba es evidente y la presunción grande. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁷⁵

Constitución de Kentucky (1891)

Sección 16. Todos los prisioneros tienen derecho a la fianza con suficientes garantías, a menos que sea por ofensas capitales donde la prueba es evidente o la presunción grande...

*Sección 17. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁷⁶

Constitución de Luisiana (1974)

Sección 18.

(A) No se requerirán fianzas excesivas. Antes y durante un juicio, una persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto cuando esté acusada de un crimen capital y la prueba es evidente y la presunción de culpabilidad grande. Después de convicción y antes de pronunciarse sentencia, una persona tendrá derecho a fianza si el máximo de la sentencia es cinco años o menos.

⁷⁷⁵ **Constitution of the State of Kansas (1859)**

Section 9. All persons shall be bailable by sufficient sureties except for capital offenses, where proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required...

⁷⁷⁶ **Kentucky Constitution (1891)**

Section 16. All prisoners shall be bailable by sufficient securities, unless for capital offenses when the proof is evident or the presumption great; ...

Section 17. Excessive bail shall not be required, ...

(B) Sin embargo, una persona acusada de un crimen de violencia, como lo define la ley, o con la producción, manufactura, distribución o dispensación o posesión con la intención de producir, manufacturar, distribuir o dispensar sustancias controladas peligrosas como lo define la Ley de Sustancias Controladas Peligrosas de Luisiana y la prueba es evidente y la presunción de culpabilidad grande, no tendrá derecho a fianza si después de una vista contradictoria el juez o magistrado determina por evidencia clara y convincente que hay un riesgo sustancial que la persona pueda huirse o representa un peligro para cualquier otra persona o para la comunidad.⁷⁷⁷

Constitución del Estado de Maine (1820)

Sección 9. ... no se requerirán fianzas excesivas...

Sección 10. Ninguna persona, antes de la convicción, tendrá derecho a la fianza por cualquier crimen que ahora es o ha sido denominado ofensa

⁷⁷⁷ **Louisiana Constitution (1974)**

Section 18.

(A) Excessive bail shall not be required. Before and during a trial, a person shall be bailable by sufficient surety, except when he is charged with a capital offense and the proof is evident and the presumption of guilt is great. After conviction and before sentencing, a person shall be bailable if the maximum sentence which may be imposed is imprisonment for five years or less; and the judge may grant bail if the maximum sentence which may be imposed is imprisonment exceeding five years. After sentencing and until final judgment, a person shall be bailable if the sentence actually imposed is five years or less; and the judge may grant bail if the sentence actually imposed exceeds imprisonment for five years.

(B) However, a person charged with a crime of violence as defined by law or with production, manufacture, distribution, or dispensing or possession with intent to produce, manufacture, distribute, or dispense a controlled dangerous substance as defined by the Louisiana Controlled Dangerous Substances Law, and the proof is evident and the presumption of guilt is great, shall not be bailable if, after a contradictory hearing, the judge or magistrate finds by clear and convincing evidence that there is a substantial risk that the person may flee or poses an imminent danger to any other person or the community.

*capital desde la adopción de la Constitución cuando la prueba es evidente o la presunción grande, no importa cuál sea el castigo por el crimen.*⁷⁷⁸

Constitucion de Maryland (1867)

*Artículo 25. Fianzas excesivas no deberían ser requeridas, ...por las Cortes de Ley.*⁷⁷⁹

Constitución del Mancomunidad de Massachusetts (1780)

*Artículo XXVI. Ningún magistrado o corte de ley exigirá fianzas o garantías excesivas...*⁷⁸⁰

Constitución de Michigan (1963)

Sección 15. ... Toda persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías, antes de la convicción, excepto los siguientes acusados cuando la prueba es evidente o la presunción grande:

(a) Una persona, que inmediatamente dentro de los primeros 15 años que preceden la moción para fianza pendiente a la disposición de acusación por un delito violento o una acusación bajo orden de un delito violento haya sido convicto de 2 o más delitos violentos bajo las leyes de este estado o bajo leyes

⁷⁷⁸ **Constitution of the State of Maine (1820)**

Section 9. ...excessive bail shall not be required...

Section 10. No person before conviction shall be bailable for any of the crimes which now are or have been denominated capital offenses since the adoption of the Constitution, when the proof is evident or the presumption great, whatever the punishment of the crimes may be. ...

⁷⁷⁹ **Constitution of Maryland (1867)**

Article 25. That excessive bail ought not to be required,...

⁷⁸⁰ **Constitution of the Commonwealth of Massachusetts (1780)**

Article XXVI. No magistrate or court of law, shall demand excessive bail or sureties...

substancialmente similares de los Estados Unidos o de otro estado de alguna combinación de estos solamente si las convicciones previas surgieron de por lo menos 2 incidentes, eventos o transacciones separadas.

(b) Una persona que es acusada o acusada mediante orden por asesinato o traición.

(c) Una persona es acusada o acusada mediante orden por comportamiento sexual criminal en primer grado, robo a mano armada o secuestro con intención de extorsionar dinero u otra cosa de valor a menos que la corte determine por evidencia convincente que el acusado probablemente no huirá o representa un peligro para cualquier otra persona.

(d) Una persona que es acusada o acusada mediante orden de un delito violento que alegadamente se cometió mientras la persona estaba bajo fianza pendiente a la disposición de un cargo de ofensa violenta previa o mientras la persona estaba en probatoria o en libertad bajo palabra como resultado de una convicción previa por delito violento.

Si a una persona le es denegada la fianza bajo esta sección, el juicio comenzará no más tarde de 90 días después de la denegación de admisión a fianza. Si el juicio no se lleva a cabo dentro de los 90 días después de la fecha en que se deniega admisión de fianza y la demora no es atribuible a la defensa, la corte programará inmediatamente una vista para fianza y determinará la cuantía de la fianza para la persona.

“Delito grave”, como utilizado en esta sección significa un delito, un elemento que conlleva un acto violento o una amenaza de acto violento contra otra persona.

*Sección 16. No se exigirán fianzas excesivas.*⁷⁸¹

Constitución del Estado de Minnesota (1857)

Sección 5. No se exigirán fianzas excesivas...

*Sección 7. ... Toda persona, antes de ser condena tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por crímenes capitales donde la prueba es evidente y la presunción grande.*⁷⁸²

⁷⁸¹ **Constitution of Michigan (1963)**

Section 15. No person shall be subject for the same offense to be twice put in jeopardy. All persons shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, except that bail may be denied for the following persons when the proof is evident or the presumption great:

(a) A person who, within the 15 years immediately preceding a motion for bail pending the disposition of an indictment for a violent felony or of an arraignment on a warrant charging a violent felony, has been convicted of 2 or more violent felonies under the laws of this state or under substantially similar laws of the United States or another state, or a combination thereof, only if the prior felony convictions arose out of at least 2 separate incidents, events, or transactions.

(b) A person who is indicted for, or arraigned on a warrant charging, murder or treason.

(c) A person who is indicted for, or arraigned on a warrant charging, criminal sexual conduct in the first degree, armed robbery, or kidnapping with intent to extort money or other valuable thing thereby, unless the court finds by clear and convincing evidence that the defendant is not likely to flee or present a danger to any other person.

(d) A person who is indicted for, or arraigned on a warrant charging, a violent felony which is alleged to have been committed while the person was on bail, pending the disposition of a prior violent felony charge or while the person was on probation or parole as a result of a prior conviction for a violent felony.

If a person is denied admission to bail under this section, the trial of the person shall be commenced not more than 90 days after the date on which admission to bail is denied. If the trial is not commenced within 90 days after the date on which admission to bail is denied and the delay is not attributable to the defense, the court shall immediately schedule a bail hearing and shall set the amount of bail for the person.

As used in this section, "violent felony" means a felony, an element of which involves a violent act or threat of a violent act against any other person.

Section 16. Excessive bail shall not be required;...

⁷⁸² **Constitution of the State of Minnesota (1857)**

Section 5. Excessive bail shall not be required,...

Section 7. ... All persons before conviction shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses when the proof is evident or the presumption great. ...

Constitución del Estado de Mississippi (1890)

Sección 29.

(1) No se requerirán fianzas excesivas y toda persona tendrá, antes de ser condenada, derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por crímenes capitales (a) donde la prueba sea evidente y la presunción grande; o (b) cuando la persona haya sido previamente convicta por un delito capital o cualquier otra ofensa castigable por encarcelamiento por un máximo de veinte (20) años o más.

(2) Si una persona acusada de haber cometido cualquier delito castigable con la muerte, cadena perpetua o encarcelamiento por un (1) año o más en la penitenciaría o en cualquier otra facilidad correccional del estado se le concederá fianza y (a) si esa persona es acusada por un delito cometido mientras esta bajo fianza o (b) si la corte, durante una vista, encuentra causa probable de que la persona ha cometido un delito grave estando bajo fianza, entonces la corte revocará la fianza y ordenará que la persona sea detenida sin fianza pendiente al juicio de la acusación por la cual la fianza fue revocada.

Para propósitos de la subsección (2) solamente el término “delito” significa cualquier ofensa castigable con muerte, cadena perpetua o encarcelamiento por más de cinco (5) años bajo las leyes de jurisdicción bajo las cuales el crimen es cometido. Además, el hurto agravado será considerado un delito grave para propósitos de esta subsección.

(3) En el caso de ofensas castigables con encarcelamiento por un máximo de veinte (20) años o más o por cadena perpetua, un juez de un condado o un circuito puede denegar la fianza por dichas ofensas cuando la prueba es evidente o la presunción grande, cuando se determine que la libertad de la persona o de las personas arrestadas por dicha ofensa constituiría un peligro especial para cualquier otra persona o para la comunidad o que ninguna condición o combinación de condiciones razonablemente asegurará la aparición de la persona cuando sea requerido.

*(4) En cualquier caso donde la fianza sea denegada antes de la convicción, el juez establecerá en el registro sus razones para denegar fianza. Cualquier persona acusada de una ofensa castigable por un máximo de veinte (20) años o más o por cadena perpetua y que es deniega la fianza ante de la convicción tendrá derecho a una vista de emergencia ante un juez de la Corte Suprema de Mississippi. Las provisiones de esta subsección (4) no aplican a ordenes de revocación de fianza.*⁷⁸³

Constitución de Missouri (1945)

Sección 20. Toda persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por ofensas capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande.

*Sección 21. No se requerirán fianzas excesivas.*⁷⁸⁴

⁷⁸³ **Constitution of the State of Mississippi (1890)**

Section 29.

- (1) Excessive bail shall not be required, and all persons shall, before conviction, be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses (a) when the proof is evident or presumption great; or (b) when the person has previously been convicted of a capital offense or any other offense punishable by imprisonment for a maximum of twenty (20) years or more.*
- (2) If a person charged with committing any offense that is punishable by death, life imprisonment or imprisonment for one (1) year or more in the penitentiary or any other state correctional facility is granted bail and (a) if that person is indicted for a felony committed while on bail; or (b) if the court, upon hearing, finds probable cause that the person has committed a felony while on bail, then the court shall revoke bail and shall order that the person be detained, without further bail, pending trial of the charge for which bail was revoked. For the purposes of this subsection (2) only, the term "felony" means any offense punishable by death, life imprisonment or imprisonment for more than five (5) years under the laws of the jurisdiction in which the crime is committed. In addition, grand larceny shall be considered a felony for the purposes of this subsection. (3) In the case of offenses punishable by imprisonment for a maximum of twenty (20) years or more or by life imprisonment, a county or circuit court judge may deny bail for such offenses when the proof is evident or the presumption great upon making a determination that the release of the person or persons arrested for such offense would constitute a special danger to any other person or to the community or that no condition or combination of conditions will reasonably assure the appearance of the person as required. (4) In any case where bail is denied before conviction, the judge shall place in the record his reasons for denying bail. Any person who is charged with an offense punishable by imprisonment for a maximum of twenty (20) years or more or by life imprisonment and who is denied bail prior to conviction shall be entitled to an emergency hearing before a justice of the Mississippi Supreme Court. The provisions of this subsection (4) do not apply to bail revocation orders.*

⁷⁸⁴ **Missouri Constitution (1945)**

Constitución del Estado de Montana (1972)

Sección 21. Toda persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por ofensas capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande.

*Sección 22. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁸⁵

Constitución de Nebraska (1875)

*Sección 9. Toda persona tendrá derecho a la fianza con suficientes garantías excepto por traición, delitos sexuales que impliquen penetración por la fuerza o contra la voluntad de la víctima, y asesinato, donde la prueba es evidente o la presunción grande. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁸⁶

Constitución del Estado de Nevada (1864)

Sección 6. No se requerirán fianzas excesivas...

Section 20. That all persons shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses, when the proof is evident or the presumption great.

Section 21. That excessive bail shall not be required, ...

⁷⁸⁵ **Constitution of the State of Montana (1972)**

Section 21. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses, when the proof is evident or the presumption great.

Section 22. Excessive bail shall not be required,...

⁷⁸⁶ **Nebraska Constitution (1875)**

Section 9. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for treason, sexual offenses involving penetration by force or against the will of the victim, and murder, where the proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required, ...

*Sección 7. Todas las personas tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías; excepto por delitos capitales o asesinatos punibles con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando la prueba es evidente o la presunción grande.*⁷⁸⁷

Constitucion del Estado de Nuevo Hampshire (1784)

*Artículo 33. Ningún magistrado o tribunal de justicia exigirá fianzas o garantías excesivas...*⁷⁸⁸

Constitución del Estado de Nueva Jersey (1947)

11. ... Todas las personas deberán, antes de la condena, ser elegibles para la libertad antes de juicio. La libertad antes de juicio puede ser denegada a una persona si el tribunal encuentra que no hay cuantía de fianza monetaria, condiciones no monetarias de liberación previa al juicio, o la combinación de la fianza monetaria y las condiciones no monetarias, que aseguren razonablemente la comparecencia de la persona ante un tribunal cuando sea necesario, o proteger la seguridad de cualquier otra persona o la comunidad, o evitar que la persona obstruya o intente obstruir el proceso de justicia penal. Será lícito que la legislatura establezca por ley los procedimientos, términos y condiciones aplicables a la libertad antes de juicio y la denegación de la misma queda autorizada en virtud de esta disposición.

*12. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁸⁹

⁷⁸⁷ **Constitution of the State of Nevada (1864)**

Section 6. Excessive bail shall not be required, ...

Section 7. All persons shall be bailable by sufficient sureties; unless for Capital Offenses or murders punishable by life imprisonment without possibility of parole when the proof is evident or the presumption great.

⁷⁸⁸ **New Hampshire State Constitution (1784)**

Article 33. No Magistrate, or Court of Law, shall demand excessive bail or sureties, ...

⁷⁸⁹ **New Jersey State Constitution (1947)**

Constitución del Estado de Nuevo México (1911)

Sección 13. Todas las personas tendrán, antes de la condena, derecho a la fianza con suficientes garantías, exceptuando a los delitos capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande y en situaciones en las que la fianza está específicamente prohibida por esta sección. No será necesaria una fianza excesiva, La fianza puede ser denegada por el tribunal de distrito por un período de 60 días después de la encarcelación del acusado por una orden ingresada dentro de los siete días después de la encarcelación, en los siguientes casos:

- a. el acusado es imputado de un delito grave y ha sido condenado previamente por dos o más delitos graves, dentro del estado, cuyos delitos no se deriven de la misma transacción o una transacción común con el caso pendiente;*
- b. el acusado es imputado de un delito grave que involucre el uso de un arma mortal y tiene una condena por delito grave previa, dentro del estado. El período de encarcelamiento sin fianza puede extenderse por cualquier período de tiempo por el cual el juicio se retrasará por una moción de continuidad hecha por o en nombre del acusado. A una apelación de una orden que niegue la fianza se le dará preferencia sobre todos los demás asuntos.⁷⁹⁰*

11. No person shall, after acquittal, be tried for the same offense. All persons shall, before conviction, be eligible for pretrial release. Pretrial release may be denied to a person if the court finds that no amount of monetary bail, non-monetary conditions of pretrial release, or combination of monetary bail and non-monetary conditions would reasonably assure the person's appearance in court when required, or protect the safety of any other person or the community, or prevent the person from obstructing or attempting to obstruct the criminal justice process. It shall be lawful for the Legislature to establish by law procedures, terms, and conditions applicable to pretrial release and the denial thereof authorized under this provision.

12. Excessive bail shall not be required, ...

⁷⁹⁰ Constitution of the State of New Mexico (1911)

Section 13. All persons shall, before conviction be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses when the proof is evident or the presumption great and in situations in which bail is specifically prohibited by this section. Excessive bail shall not be required, Bail may be denied by the district court for a period of sixty days after the incarceration of the defendant by an order entered within seven days after the incarceration, in the following instances: A. the defendant is accused of a felony and has previously been convicted of two or more felonies, within the state, which felonies did not arise from the same transaction or a common transaction with the case at

Constitución del Estado de Nueva York (1938)

*Sección 5. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁹¹

Constitución del Estado de Carolina del Norte (1971)

*Sec.27. No se requerirán fianzas excesivas...*⁷⁹²

Constitución de Dakota del Norte (1889)

Sección 11. Todas las personas tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande. No se requerirán fianzas excesivas...

Sección 25.

1. Para preservar y proteger el derecho de las víctimas de delito ante la justicia, para asegurar a las víctimas de delitos un papel significativo en todos los sistemas de justicia penales y juveniles, y para garantizar que se respeten los derechos e intereses de las víctimas del delito y protegerlos legalmente de una manera no menos vigorosa que las protecciones otorgadas a los acusados criminales y a los delincuentes juveniles, todas las víctimas tendrán derecho a los siguientes derechos, en el momento de su victimización:

...

bar; B. the defendant is accused of a felony involving the use of a deadly weapon and has a prior felony conviction, within the state. The period for incarceration without bail may be extended by any period of time by which trial is delayed by a motion for a continuance made by or on behalf of the defendant. An appeal from an order denying bail shall be given preference over all other matters.

⁷⁹¹ **Constitution of the State of New York (1938)**

Section 5. Excessive bail shall not be required...

⁷⁹² **North Carolina State Constitution (1971)**

Sec. 27. Excessive bail shall not be required, ...

*d. El derecho a que se tenga en consideración la seguridad y el bienestar de la víctima y su familia al fijar la fianza o tomar decisiones de liberación.*⁷⁹³

Constitución de Ohio (1851)

*Sección 9. Todas las personas tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto en el caso en que una persona sea acusada de un delito capital donde la prueba es evidente o la presunción grande y a excepción de una persona que es acusada de una felonía en que la prueba es evidente o la presunción grande y cuando la persona representa un riesgo sustancial de daño físico grave a cualquier persona o comunidad. Cuando una persona sea acusada de cualquier delito por el cual pueda ser encarcelada, el tribunal puede determinar en cualquier momento el tipo, la cantidad y las condiciones de la fianza. No se requerirá una fianza excesiva, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales. La Asamblea General fijará por ley las normas para determinar si una persona que es acusada de un delito grave, en el que la prueba es evidente o la presunción grande, plantea un riesgo sustancial de daño físico grave a cualquier persona o a la comunidad. Procedimientos para establecer el monto y las condiciones de la fianza se establecerán de conformidad con el Artículo IV, Sección 5(b) de la Constitución del Estado de Ohio.*⁷⁹⁴

⁷⁹³ **North Dakota Constitution (1889)**

Section 11. All persons shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offenses when the proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required, ...

Section 25.

1. To preserve and protect the right of crime victims to justice, to ensure crime victims a meaningful role throughout the criminal and juvenile justice systems, and to ensure that crime victims' rights and interests are respected and protected by law in a manner no less vigorous than the protections afforded to criminal defendants and delinquent children, all victims shall be entitled to the following rights, beginning at the time of their victimization:

...

d. The right to have the safety and welfare of the victim and the victim's family considered when setting bail or making release decisions.

...

⁷⁹⁴ **Ohio Constitution (1851)**

Constitución del Estado de Oklahoma (1907)

Sección 8.

A. *Todas las personas tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto que se le deniegue la fianza por:*

- 1. delitos capitales cuando la prueba de culpabilidad es evidente, o su presunción es grande;*
- 2. delitos violentos;*
- 3. delitos en los que la pena máxima puede ser cadena perpetua o cadena perpetua sin libertad condicional;*
- 4. delitos graves cuando la persona acusada del delito ha sido condenada por dos o más delitos que surjan de diferentes transacciones; y*
- 5. delitos de sustancias controladas peligrosas cuando la pena máxima pueda ser de al menos diez (10) años de prisión.*

En todos los delitos especificados en los párrafos 2 a 5 de esta sección, la prueba de culpabilidad debe ser evidente, o la presunción debe ser grande, y debe ser con el argumento de que ninguna condición de liberación aseguraría la seguridad de la comunidad o de cualquier persona.

Section 9. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for a person who is charged with a capital offense where the proof is evident or the presumption great and except for a person who is charged with a felony where the proof is evident or the presumption great and who where the person poses a substantial risk of serious physical harm to any person or to the community. Where a person is charged with any offense for which the person may be incarcerated, the court may determine at any time the type, amount, and conditions of bail. Excessive bail shall not be required; nor excessive fines imposed; nor cruel and unusual punishments inflicted. The General Assembly shall fix by law standards to determine whether a person who is charged with a felony where the proof is evident or the presumption great poses a substantial risk of serious physical harm to any person or to the community. Procedures for establishing the amount and conditions of bail shall be established pursuant to Article IV, Section 5(b) of the Constitution of the State of Ohio.

Article IV, Section 5.

...

(B) The Supreme Court shall prescribe rules governing practice and procedure in all courts of the state, which rules shall not abridge, enlarge, or modify any substantive right.

...

Sección 9: No se requerirán fianzas excesivas...⁷⁹⁵

Constitución de Oregón (1857)

Sección 14. Tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías los acusados de delito, excepto el asesinato y la traición. El asesinato o la traición no tendrán derecho a la fianza cuando la prueba sea evidente, o la presunción fuerte.

Sección 16. No se exigirá una fianza excesiva...⁷⁹⁶

Constitución de la Mancomunidad de Pensilvania (1968)

Sección 13. No se exigirán fianzas excesivas...

Sección 14. Todos los presos tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, a menos que sea por delitos capitales o por delitos que la pena

⁷⁹⁵ **Constitution of the State of Oklahoma (1907)**

Section 8.

A. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except that bail may be denied for:

- 1. capital offenses when the proof of guilt is evident, or the presumption thereof is great;*
- 2. violent offenses;*
- 3. offenses where the maximum sentence may be life imprisonment or life imprisonment without parole;'*
- 4. felony offenses where the person charged with the offense has been convicted of two or more felony offenses arising out of different transactions; and*
- 5. controlled dangerous substances offenses where the maximum sentence may be at least ten (10) years imprisonment.*

On all offenses specified in paragraphs 2 through 5 of this section, the proof of guilt must be evident, or the presumption must be great, and it must be on the grounds that no condition of release would assure the safety of the community or any person.

...

Section 9: Excessive bail shall not be required,...

⁷⁹⁶ **Constitution of Oregon (1857)**

Section 14. Offences, except murder, and treason, shall be bailable by sufficient sureties. Murder or treason, shall not be bailable, when the proof is evident, or the presumption strong.

Section 16. Excessive bail shall not be required, ...

*máxima sea cadena perpetua o a menos que ninguna condición o combinación de condiciones que no sean prisión asegure razonablemente la seguridad de cualquier persona y la comunidad cuando la prueba es evidente o la presunción grande...*⁷⁹⁷

Constitución del Estado de Rhode Island y Plantaciones de Providence (1987)

Sección 8. No se exigirán fianzas excesivas

*Sección 9. Todas las personas encarceladas deben tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por delitos castigados con prisión de por vida, o por delitos relacionados con el uso o la amenaza del uso de un arma peligrosa por uno ya condenado por tal delito o ya condenado por un delito castigado con prisión de por vida, o por delitos relacionados con la venta, distribución, fabricación, entrega, o posesión con la intención de fabricar, vender, distribuir o entregar cualquier sustancia controlada o por posesión de una sustancia controlada castigada con prisión de diez (10) años o más, cuando la prueba de culpabilidad es evidente o la presunción grande. Nada de lo contenido en esta sección se interpretará en el sentido de conferir el derecho a la libertad bajo fianza, a la espera de la apelación de una condena. ...*⁷⁹⁸

⁷⁹⁷ **Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania (1968)**

Section 13. Excessive bail shall not be required, ...

Section 14. All prisoners shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offenses or for offenses for which the maximum sentence is life imprisonment or unless no condition or combination of conditions other than imprisonment will reasonably assure the safety of any person and the community when the proof is evident or presumption great; ...

⁷⁹⁸ **Constitution of the State of Rhode Island and Providence Plantations (1987)**

Section 8. Excessive bail shall not be required, ...

Section 9. All persons imprisoned ought to be bailed by sufficient surety, unless for offenses punishable by imprisonment for life, or for offenses involving the use or threat of use of a dangerous weapon by one already convicted of such offense or already convicted of an offense punishable by imprisonment for life, or for offenses involving the unlawful sale, distribution, manufacture, delivery, or possession with intent to manufacture, sell, distribute or deliver any controlled substance or by possession of a controlled substance punishable by imprisonment for

Constitución del Estado de Carolina del Sur (1895)

Sección 15. Todas las personas serán, antes de la condena, liberados bajo fianza con garantías suficientes, pero la fianza puede ser denegada a las personas acusadas de delitos capitales o delitos castigados con cadena perpetua, o con delitos violentos definidos por la Asamblea General, dando el debido peso a las pruebas y a la naturaleza y circunstancias del evento. No se exigirá una fianza excesiva...

Sección 24. (A) Para preservar y proteger los derechos a la justicia de las víctimas y al debido proceso independientemente de su raza, sexo, edad, religión o condición económica, víctimas de delitos tienen derecho a:

...

(4) estar razonablemente informado y se le permita presentar ya sea una declaración escrita u oral en todas las audiencias que afecten la fianza;

...⁷⁹⁹

Constitución del Estado de Dakota del Sur (1889)

Sección 8. Todas las personas tendrán derecho a la fianza con garantías suficientes, excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande. ...

ten (10) years or more, when the proof of guilt is evident or the presumption great. Nothing in this section shall be construed to confer a right to bail, pending appeal of a conviction. ...

⁷⁹⁹ Constitution of the State of South Carolina (1895)

Section 15. All persons shall be, before conviction, bailable by sufficient sureties, but bail may be denied to persons charged with capital offenses or offenses punishable by life imprisonment, or with violent offenses defined by the General Assembly, giving due weight to the evidence and to the nature and circumstances of the event. Excessive bail shall not be required, nor shall excessive fines be imposed, nor shall cruel, nor corporal, nor unusual punishment be inflicted, nor shall witnesses be unreasonably detained.

Section 24. (A) To preserve and protect victims' rights to justice and due process regardless of race, sex, age, religion, or economic status, victims of crime have the right to:

...

(4) be reasonably informed of and be allowed to submit either a written or oral statement at all hearings affecting bond or bail;

...

*Sección 23. No se exigirán fianzas excesivas...*⁸⁰⁰

Constitución del Estado de Tennessee (1870)

Sección 15. Que todos los prisioneros tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto en casos de delitos capitales, cuando la prueba es evidente, o la presunción grande.

*Sección 16. No se requerirán fianzas excesivas...*⁸⁰¹

Constitución del Estado de Texas (1876)

Sección 11. Todos los presos tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por delitos capitales, cuando la prueba sea evidente; pero esta disposición no se interpretará de tal manera que se evite la libertad bajo fianza después de la acusación encontrada en el examen de las pruebas, de tal manera según lo prescrito por la ley.

Sección 11a. (a) Toda persona (1) acusada de una felonía, pero no de pena de muerte, en este Estado, que haya sido hasta entonces condenado dos veces por felonías, la segunda condena siguiendo a la primera, tanto en el momento de la comisión de la ofensa como de la condena por ello, (2) acusado de un delito que no conlleve la pena de muerte en este Estado, cometido mientras estaba bajo fianza por una felonía anterior por el que ha sido acusado formalmente, (3) acusado de

⁸⁰⁰ **The South Dakota State Constitution (1889)**

Section 8. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses when proof is evident or presumption great. ...

Section 23. Excessive bail shall not be required, ...

⁸⁰¹ **Tennessee State Constitution (1870)**

Section 15. That all prisoners shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offences, when the proof is evident, or the presumption great. ...

Section 16. That excessive bail shall not be required, ...

una felonía menor que capital en este Estado que implique el uso de un arma mortal después de haber sido condenado por un delito anterior, o (4) acusado de un delito violento o sexual cometido bajo la supervisión de una agencia de justicia penal del Estado o una subdivisión política del Estado por una felonía anterior, después de una audiencia, y sobre pruebas que muestren sustancialmente la culpabilidad del acusado del delito en (1) o (3) arriba, del delito cometido durante la fianza en (2) arriba, o del delito en (4) arriba, cometido mientras estaba bajo la supervisión de un organismo de justicia penal del Estado o una subdivisión política del Estado por una felonía anterior, se le puede negar la libertad bajo fianza pendiente al juicio, por un juez de distrito en este Estado, si dicha orden de denegación de fianza pendiente al juicio se emite dentro de siete días calendario después del momento de encarcelamiento del acusado; siempre, sin embargo, que si el acusado no recibe un juicio sobre la acusación en el apartado 1) o (3) arriba, la acusación y acta de acusación utilizadas en el apartado 2) arriba, o la acusación o acusación utilizada en el apartado 4) arriba, en un plazo de sesenta (60) días desde el momento de su encarcelamiento por la acusación, la orden de denegación de la fianza se anulará automáticamente, a menos que se obtenga una continuación en la moción o solicitud del acusado; además, que el derecho de apelación ante el Tribunal de Apelaciones Penales de este Estado se concede expresamente al acusado para una revisión de cualquier juicio u orden hecha en virtud de lo presente, y dicha apelación se le dará preferencia por el Tribunal de Apelaciones Penales.

(b) En esta sección:

1) "Ofensa violenta" significa:

(A) asesinato;

(B) agresión agravada, si el acusado utilizó o exhibió un arma mortal durante la comisión del asalto;

(C) secuestro agravado; o

(D) robo agravado.

2) "Ofensa sexual" significa:

- (A) *agresión sexual agravada;*
- (B) *agresión sexual; o*
- (C) *indecencia con un niño.*

11b. Cualquier persona que sea acusada en este estado de una felonía o un delito relacionado con la violencia familiar, que es puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio, y cuya fianza se revoca posteriormente o se pierde por una violación de una condición de liberación, puede ser denegada la fianza a la espera de juicio si un juez o magistrado en este estado determina por preponderancia de las pruebas en una audiencia posterior que la persona violó una condición de liberación relacionada con la seguridad de una víctima del presunto delito o a la seguridad de la comunidad.

11c. La legislatura, por ley general, puede proporcionar que cualquier persona que viole una orden de protección de emergencia emitida por un juez o magistrado después de un arresto por un delito que involucre violencia familiar o que viole una orden de protección activa dictada por un tribunal en un caso de violencia familiar, incluyendo una orden ex parte temporal que se le haya entregado a la persona, o que se dedica a una conducta que constituya un delito que implique la violación de una orden descrita por esta sección pueden ser detenidos y, a la espera de juicio u otros procedimientos judiciales, denegada la libertad bajo fianza si, después de una audiencia de un juez o magistrado en este estado, se determina por una preponderancia de la evidencia que la persona violó la orden o participó en el tipo de conducta que constituye la ofensa.⁸⁰²

⁸⁰² **Constitution of the State of Texas (1876)**

Section 11. All prisoners shall be bailable by sufficient sureties, unless for capital offenses, when the proof is evident; but this provision shall not be so construed as to prevent bail after indictment found upon examination of the evidence, in such manner as may be prescribed by law.

Section 11a. (a) Any person (1) accused of a felony less than capital in this State, who has been theretofore twice convicted of a felony, the second conviction being subsequent to the first, both in point of time of commission of the offense and conviction therefor, (2) accused of a felony less than capital in this State, committed while on bail for a prior felony for which he has been indicted, (3) accused of a felony less than capital in this State involving the use of a deadly weapon after

Constitución del Estado de Utah (1896)

Sección 8. (1) Todas las personas acusadas de un delito podrán ser liberados bajo fianza excepto: (a) las personas acusadas de un delito capital cuando existan pruebas sustanciales que respalden el cargo; o (b) personas acusadas de una felonía mientras estén en libertad condicional, o mientras estaban libre bajo fianza a la espera de juicio por un cargo de

being convicted of a prior felony, or (4) accused of a violent or sexual offense committed while under the supervision of a criminal justice agency of the State or a political subdivision of the State for a prior felony, after a hearing, and upon evidence substantially showing the guilt of the accused of the offense in (1) or (3) above, of the offense committed while on bail in (2) above, or of the offense in (4) above committed while under the supervision of a criminal justice agency of the State or a political subdivision of the State for a prior felony, may be denied bail pending trial, by a district judge in this State, if said order denying bail pending trial is issued within seven calendar days subsequent to the time of incarceration of the accused; provided, however, that if the accused is not accorded a trial upon the accusation under (1) or (3) above, the accusation and indictment used under (2) above, or the accusation or indictment used under (4) above within sixty (60) days from the time of his incarceration upon the accusation, the order denying bail shall be automatically set aside, unless a continuance is obtained upon the motion or request of the accused; provided, further, that the right of appeal to the Court of Criminal Appeals of this State is expressly accorded the accused for a review of any judgment or order made hereunder, and said appeal shall be given preference by the Court of Criminal Appeals.

(b) In this section:

(1) "Violent offense" means:

- (A) murder;*
- (B) aggravated assault, if the accused used or exhibited a deadly weapon during the commission of the assault;*
- (C) aggravated kidnapping; or*
- (D) aggravated robbery.*

(2) "Sexual offense" means:

- (A) aggravated sexual assault;*
- (B) sexual assault; or*
- (C) indecency with a child.*

Sec. 11b. Any person who is accused in this state of a felony or an offense involving family violence, who is released on bail pending trial, and whose bail is subsequently revoked or forfeited for a violation of a condition of release may be denied bail pending trial if a judge or magistrate in this state determines by a preponderance of the evidence at a subsequent hearing that the person violated a condition of release related to the safety of a victim of the alleged offense or to the safety of the community.

Sec. 11c. The legislature by general law may provide that any person who violates an order for emergency protection issued by a judge or magistrate after an arrest for an offense involving family violence or who violates an active protective order rendered by a court in a family violence case, including a temporary ex parte order that has been served on the person, or who engages in conduct that constitutes an offense involving the violation of an order described by this section may be taken into custody and, pending trial or other court proceedings, denied release on bail if following a hearing a judge or magistrate in this state determines by a preponderance of the evidence that the person violated the order or engaged in the conduct constituting the offense.

felonía anterior, cuando hay pruebas sustanciales que respalden el nuevo cargo de felonía; o (c) las personas acusadas por cualquier otro delito, designadas por ley como una persona a la cual se le puede denegar la fianza, si hay pruebas sustanciales que respalden la acusación y el tribunal encuentra pruebas claras y convincentes que la persona constituiría un peligro sustancial para cualquier otra persona o para la comunidad o es probable que huya de la jurisdicción del tribunal si se libera bajo fianza.

(2) Las personas condenadas por un delito pueden ser liberadas bajo fianza mientras esperan la apelación sólo según lo prescrito por la ley.

*Sección 9. No se requerirá una fianza excesiva; ...*⁸⁰³

Constitución del Estado de Vermont (1793)

Sección 40. No se exigirán fianzas excesivas por delitos por los que se puede estar en libertad bajo fianza. Todas las personas tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza con garantías suficientes, excepto de los siguientes:

- 1. Una persona acusada de un delito castigable con pena de muerte o cadena perpetua puede ser retenido sin fianza cuando la evidencia de culpabilidad es grande.*
- 2. Una persona acusada de una felonía, cuyos elementos implican un acto de violencia contra otra persona, puede ser retenido sin fianza*

⁸⁰³ **Constitution of the State of Utah (1896)**

Section 8. (1) All persons charged with a crime shall be bailable except: (a) persons charged with a capital offense when there is substantial evidence to support the charge; or (b) persons charged with a felony while on probation or parole, or while free on bail awaiting trial on a previous felony charge, when there is substantial evidence to support the new felony charge; or (c) persons charged with any other crime, designated by statute as one for which bail may be denied, if there is substantial evidence to support the charge and the court finds by clear and convincing evidence that the person would constitute a substantial danger to any other person or to the community or is likely to flee the jurisdiction of the court if released on bail. (2) Persons convicted of a crime are bailable pending appeal only as prescribed by law.

Section 9 .Excessive bail shall not be required; ...

cuando la evidencia de culpabilidad es grande y el tribunal encuentra, basado en pruebas claras y convincentes, que la liberación de la persona representa una amenaza sustancial de violencia física a alguna persona y que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación evitará razonablemente la violencia física. Una persona retenida sin fianza antes del juicio en virtud de este párrafo tendrá derecho a la revisión de novo por cualquier juez de la Corte Suprema.

3. *Una persona que espera sentencia, o sentenciada a la espera de apelación, puede ser retenido sin fianza por cualquier delito.*

Una persona retenida sin fianza antes del juicio tendrá derecho a que se revise esa determinación por un panel de tres jueces de la Corte Suprema dentro de los siete días después de que se deniegue la fianza.

Excepto en el caso de una ofensa castigable con la pena de muerte o cadena perpetua, si una persona está retenida sin fianza antes del juicio, el juicio de la persona se iniciará no más de 60 días después de que se le deniegue la fianza. Si el juicio no ha comenzado dentro de esos 60 días, y el retraso no es atribuible a la defensa, la Corte deberá inmediatamente crear una audiencia de fianza y fijará la fianza apropiada para esa persona.⁸⁰⁴

⁸⁰⁴ **Constitution of the State of Vermont (1793)**

Section 40. Excessive bail shall not be exacted for bailable offenses. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except as follows:

(1) A person accused of an offense punishable by death or life imprisonment may be held without bail when the evidence of guilt is great.

(2) A person accused of a felony, an element of which involves an act of violence against another person, may be held without bail when the evidence of guilt is great and the court finds, based upon clear and convincing evidence, that the person's release poses a substantial threat of physical violence to any person and that no condition or combination of conditions of release will reasonably prevent the physical violence. A person held without bail prior to trial under this paragraph shall be entitled to review de novo by a single justice of the Supreme Court forthwith.

(3) A person awaiting sentence, or sentenced pending appeal, may be held without bail for any offense.

A person held without bail prior to trial shall be entitled to review of that determination by a panel of three Supreme Court Justices within seven days after bail is denied.

Constitución de la Mancomunidad de Virginia (1971)

Sección 8-A. Que en los procesos penales, a la víctima se le concederá imparcialidad, dignidad y respeto por los oficiales, empleados y agentes de la Mancomunidad y sus subdivisiones políticas y funcionarios de los tribunales y, según la Asamblea General pueda definir y proporcionar bajo ley, se les pueda conceder derechos a una notificación razonable y apropiada, información, restitución, protección y acceso a tener un papel significativo en el proceso de justicia penal. Estos derechos pueden incluir, y no ser limitados a, lo siguiente:

- 1. El derecho a la protección contra nuevos daños o represalias mediante la imposición de fianzas apropiadas y las condiciones para ser puesto en libertad;*

*Sección 9. No se requerirán fianzas excesivas...*⁸⁰⁵

Except in the case of an offense punishable by death or life imprisonment, if a person is held without bail prior to trial, the trial of the person shall be commenced not more than 60 days after bail is denied. If the trial is not commenced within 60 days and the delay is not attributable to the defense, the court shall immediately schedule a bail hearing and shall set bail for the person.

⁸⁰⁵ Constitution of the Commonwealth of Virginia (1971)

Section 9. Prohibition of excessive bail and fines, cruel and unusual punishment, suspension of habeas corpus, bills of attainder, and ex post facto laws.

That excessive bail ought not to be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted; that the privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended unless when, in cases of invasion or rebellion, the public safety may require; and that the General Assembly shall not pass any bill of attainder, or any ex post facto law.

Section 8-A. That in criminal prosecutions, the victim shall be accorded fairness, dignity and respect by the officers, employees and agents of the Commonwealth and its political subdivisions and officers of the courts and, as the General Assembly may define and provide by law, may be accorded rights to reasonable and appropriate notice, information, restitution, protection, and access to a meaningful role in the criminal justice process. These rights may include, but not be limited to, the following:

- 1. The right to protection from further harm or reprisal through the imposition of appropriate bail and conditions of release;*

...

Constitución del Estado de Washington (1889)

Sección 14. No se requerirán fianzas excesivas

Sección 20. Todos los acusados tendrán derecho a la fianza con suficientes garantías, excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente, o la presunción grande. La fianza puede ser denegada por ofensas castigables con la posibilidad de la vida en prisión, en una demostración de evidencia clara y convincente de una propensión a la violencia que cree una probabilidad sustancial de peligro para la comunidad o cualquier persona, sujeto a las limitaciones que determine la legislatura.⁸⁰⁶

Constitución de Virginia Occidental (1872)

*Sección 5: No se requerirán fianzas excesivas...*⁸⁰⁷

Constitución de Wisconsin (1848)

Sección 6. No se exigirán fianzas excesivas...

Sección 8.

...

2. Todas las personas, antes de la condena, serán elegibles para la liberación bajo condiciones razonables diseñadas para asegurar su

⁸⁰⁶ **Constitution of the State of Washington (1889)**

Section 14. Excessive bail shall not be required,...

Section 20. All persons charged with crime shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses when the proof is evident, or the presumption great. Bail may be denied for offenses punishable by the possibility of life in prison upon a showing by clear and convincing evidence of a propensity for violence that creates a substantial likelihood of danger to the community or any persons, subject to such limitations as shall be determined by the legislature.

⁸⁰⁷ **Constitution of West Virginia (1872)**

Section 5: Excessive bail shall not be required, ...

comparecencia en la corte, proteger a los miembros de la comunidad de daños corporales graves o evitar la intimidación de testigos. Las condiciones monetarias de liberación pueden imponerse en o después de la aparición inicial sólo después de un hallazgo de que hay una base razonable para creer que las condiciones son necesarias para asegurar la comparecencia en la corte. La legislatura puede autorizar, por ley, tribunales para revocar la liberación de una persona por la violación de una condición de liberación.

- 3. La legislatura puede autorizar, pero no puede exigir, tribunales de circuito para denegar la libertad por un período a no exceder de 10 días antes de la audiencia requerida en virtud de esta subsección, a una persona acusada de cometer un asesinato castigable con cadena perpetua o una agresión sexual castigable con una pena máxima de 20 años de prisión, o que es acusado de cometer, o intentar cometer, un delito grave que conlleve graves daños corporales a otro o la amenaza de graves daños corporales a otro, y que tiene una condena previa por cometer o intentar cometer un delito grave que conlleve graves daños corporales a otro o la amenaza de graves daños corporales a otro.*
- 4. La legislatura puede autorizar por ley, pero puede que no requieran, tribunales de circuito para seguir negando la liberación a los acusados por un período adicional no superior a 60 días después de la audiencia requerida en virtud de esta subsección, si hay un requisito de que haya una constatación por parte del tribunal, sobre la base de pruebas claras y convincentes presentadas en una audiencia, que el acusado cometió el delito y el requisito de que haya una constatación por parte del tribunal que las condiciones de liberación disponibles no protegerán adecuadamente a los miembros de la comunidad contra daños corporales graves o evitar la intimidación de testigos. Cualquier ley promulgada bajo esta subsección será específica, limitada y razonable. Al determinar los períodos de 10 y 60 días, el tribunal omitirá cualquier período de tiempo que el tribunal determine como*

*resultado de un retraso causado por el demandado o una continuación concedida que fue iniciada por el demandado.*⁸⁰⁸

Constitución de Wyoming (1889)

*Sección 14. Todas las personas tendrán derecho a quedar en libertad bajo fianza con garantías suficientes, excepto por delitos capitales cuando la prueba es evidente o la presunción grande. No se exigirán fianzas excesivas...*⁸⁰⁹

⁸⁰⁸ **Wisconsin Constitution (1848)**

Section 6. Excessive bail shall not be required, ...

Section 8.

...

(2) All persons, before conviction, shall be eligible for release under reasonable conditions designed to assure their appearance in court, protect members of the community from serious bodily harm or prevent the intimidation of witnesses. Monetary conditions of release may be imposed at or after the initial appearance only upon a finding that there is a reasonable basis to believe that the conditions are necessary to assure appearance in court. The legislature may authorize, by law, courts to revoke a person's release for a violation of a condition of release.

(3) The legislature may by law authorize, but may not require, circuit courts to deny release for a period not to exceed 10 days prior to the hearing required under this subsection to a person who is accused of committing a murder punishable by life imprisonment or a sexual assault punishable by a maximum imprisonment of 20 years, or who is accused of committing or attempting to commit a felony involving serious bodily harm to another or the threat of serious bodily harm to another and who has a previous conviction for committing or attempting to commit a felony involving serious bodily harm to another or the threat of serious bodily harm to another. The legislature may authorize by law, but may not require, circuit courts to continue to deny release to those accused persons for an additional period not to exceed 60 days following the hearing required under this subsection, if there is a requirement that there be a finding by the court based on clear and convincing evidence presented at a hearing that the accused committed the felony and a requirement that there be a finding by the court that available conditions of release will not adequately protect members of the community from serious bodily harm or prevent intimidation of witnesses. Any law enacted under this subsection shall be specific, limited and reasonable. In determining the 10-day and 60-day periods, the court shall omit any period of time found by the court to result from a delay caused by the defendant or a continuance granted which was initiated by the defendant.

(4) ...

⁸⁰⁹ **Wyoming Constitution (1889)**

Section 14. All persons shall be bailable by sufficient sureties, except for capital offenses when the proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required, ...

**ANEXO: DISPOSICIONES DE LOS TERRITORIOS NO
INCORPORADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LA
FIANZA Y LA DETENCIÓN
(traducción nuestra)**

Ley Orgánica de Guam (1950)

*(h) No se requerirán fianzas excesivas...*⁸¹⁰

Constitución de la Mancomunidad de las Marianas (1978)

*(f) No se requerirán fianzas excesivas...*⁸¹¹

Ley Orgánica Revisada de las Islas Vírgenes (1954)

*Toda persona tendrá derecho a la fianza con garantías suficientes en casos criminales, excepto en casos de asesinato en primer grado o en delitos capitales cuando la prueba es evidente y la presunción grande. No se requerirán fianzas excesivas.*⁸¹²

⁸¹⁰ **Guam Organic Act of 1950**

(h) Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

⁸¹¹ **Commonwealth Constitution of the Northern Mariana Islands (1978)**

f) Excessive bail shall not be required.

⁸¹² **Revised Organic Act of the Virgin Islands (1954)**

All persons shall be bailable by sufficient sureties in the case of criminal offenses, except for first-degree murder or any capital offense when the proof is evident or the presumption great. Excessive bail shall not be required, ...

**ANEXO: PAPELETA MODELO DEL REFERÉNDUM DE 1994 PARA
ELIMINAR EL DERECHO ABSOLUTO A LA FIANZA EN PUERTO RICO.**

**PAPELETA
MODELO**



**REFERENDUM
6 de NOVIEMBRE de 1994**

Referéndum para la ratificación o rechazo del Pueblo de Puerto Rico de la enmienda al Párrafo Quinto de la Sección 11 del Artículo II y la enmienda a la Sección 3 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

CONSULTA SOBRE LA FIANZA

La Carta de Derechos, Sección 11, Párrafo 5to. del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado, referente al derecho a la fianza, establece que:

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio".

Mediante este Referéndum se propone enmendar dicho párrafo para que lea:

"Todo acusado tendrá derecho a permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio, excepto cuando haya sido previamente convicto por delito grave, se le impute la comisión de uno o más delitos graves serios y represente amenaza para la comunidad."



SI

NO

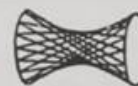
CONSULTA SOBRE JUECES DEL SUPREMO

La Sección 3 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, referente a la composición del Tribunal Supremo, establece que:

"El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo."

Mediante el Referéndum se propone enmendar esta Sección para que lea:

"El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un juez presidente y ocho jueces asociados." Se deroga la oración que dispone que: "El número de los jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo".



SI

NO

INSTRUCCIONES SOBRE COMO VOTAR:

Esta papeleta contiene 2 enmiendas distintas. Usted tiene derecho a votar separadamente a favor o en contra de cada una de las enmiendas propuestas, y tiene la opción de votar a favor o en contra de ambas o de sólo una de las propuestas. Si está a favor de la enmienda, haga una marca (X) debajo del SI, y si está en contra, haga una marca (X) debajo del NO.

REFERÉNDUM REFERENDUM

REFERENDUM ON THE CONSTITUTION AMENDMENT ABOUT BAIL

REFERENDUM ON THE CONSTITUTION AMENDMENT ABOUT BAIL

Se aplicaron estas entrevistas a escala nacional después a quienes se quedaron en sus hogares al menos un año, considerando o no su participación en el conflicto armado. Los resultados de las entrevistas a quienes se quedaron en sus hogares al menos un año, considerando o no su participación en el conflicto armado, se presentan en el capítulo 4. Los resultados de las entrevistas a quienes se quedaron en sus hogares al menos un año, considerando o no su participación en el conflicto armado, se presentan en el capítulo 4. Los resultados de las entrevistas a quienes se quedaron en sus hogares al menos un año, considerando o no su participación en el conflicto armado, se presentan en el capítulo 4.

Sí / Yes	No/No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The corresponding act to the action that would be attended if the proposed amendment is approved, pursuant to the Senate's Concurrent Resolution No. 60 in

Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico
Article II, Section 11

Section II. Criminal provisions. Any trial, jury trial, self-incrimination, double jeopardy, bail, imprisonment

Every participant received a letter explaining the purpose of the study and the procedures to be followed. All participants gave their informed consent before participating in the study. The study was approved by the Institutional Review Boards of the University of Illinois at Chicago and the University of Illinois at Urbana-Champaign.

As an action plan to itself, what are created are results, not half-bred or plans for actions. No person would be required to do anything, but only resulting if the command is left alone, with a risk of becoming confused in passing the message to other people of the consistency of tasks.

10

INSTRUCCIONES AL ELECTOR / INSTRUCTIONS TO VOTER

Marque una sola opción (Si o No) en esta propuesta de enmienda para que su voto sea válidamente contabilizado.
Select only one option (Yes or No) in this proposed amendment for your vote to be validly counted.

ANEXO: ESTADÍSTICAS SOBRE ACUSADOS DETENIDOS POR NO PRESTAR LA FIANZA IMPUESTA O LIBERADOS EN PUERTO RICO A NIVEL ESTATAL

Datos preliminares*
Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales, Dirección de Operaciones, Oficina de Estadística

SEDES JUDICIALES	NÚM. PERSONAS CON FIANZA IMPUESTA POR AÑO FISCAL																SEDES JUDICIALES																		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
AGUADILLA	26	49	21	24	15	25	13	30	20	22	30	32	24	25	0	0	0	AGUADILLA	3	15	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AGUAS BUENAS	277	210	562	471	279	279	195	241	192	381	414	361	381	381	0	0	0	AGUAS BUENAS	81	57	175	170	800	805	909	618	542	101	91	110	118	102	67	0	0
AGUAS BUENAS	1044	1835	1717	1948	1554	1532	1849	1930	1798	1532	1849	1812	2014	1712	1416	1981	1981	AGUAS BUENAS	646	891	630	790	800	805	909	618	542	101	91	110	118	102	67	0	
AGUAS BUENAS	805	724	601	600	7	38	1127	924	1031	1894	1275	1419	1260	1515	977	1077	807	AGUAS BUENAS	500	292	690	481	2	11	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279	179	146	522	579	482	0
AMARCO	117	103	229	187	14	94	95	28	21	42	3	0	0	0	0	0	0	AMARCO	18	24	46	32	14	28	33	10	4	1	1	1	1	1	1	1	
AMARCO	2182	2944	3851	4739	1849	3942	1842	2146	1604	1413	699	1279	2053	1873	1706	1718	1718	AMARCO	412	614	896	1395	1000	1007	799	609	782	460	279						

ANEXO: ESTADÍSTICAS SOBRE ACUSADOS DETENIDOS POR NO PRESTAR LA FIANZA IMPUESTA O LIBERADOS EN PUERTO RICO EN LA REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN																
NÚM. PERSONAS CON FIANZAS IMPUESTAS POR AÑO FISCAL																
2001	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2014	2015	2016	2017
14,184	11,136	11,950	10,464	8,897	5,958	6,231	2,568	5,914	5,461	7,149	6,114	4,753	4,815	4,391	3,875	1,890
NÚM. PERSONAS CON FIANZAS ADMITIDAS POR AÑO FISCAL																
4,615	4,104	3,921	3,144	2,650	2,007	1,667	1,180	2,288	2,215	1,658	1,456	1,196	1,633	1,056	978	460
NÚM. PERSONAS QUE QUEDARON EN DETENCIÓN PREVENTIVA																
9,569	7,032	8,029	7,320	6,247	3,951	4,564	1,388	3,626	3,246	5,491	4,658	3,557	3,182	3,335	2,897	1,430
PORCIENTO DE ACUSADOS QUE QUEDAN EN DETENCIÓN PREVENTIVA																
67.16	63.15	67.19	69.95	70.21	66.31	73.25	54.05	61.31	59.44	76.81	76.19	74.84	66.09	75.95	74.76	75.66

2008 – 2009			
Fiscalías de Distritos	Acusados en libertad bajo fianza que fueron arrestados	Total de acusados en libertad bajo fianza	Porciento de acusados en libertad bajo fianza que fueron arrestados
Aguadilla	17	1,180	1.44%
Aibonito	30	905	3.31%
Arecibo	6	1,391	0.43%
Caguas	1	937	0.11%
Fajardo	25	955	2.62%
Guayama	18	789	2.28%
Humacao	57	1,214	4.70%
Ponce	3	2,943	0.10%
Utua	6	577	1.04%
Mayagüez	25	1,851	1.35%
Carolina	1	685	0.15%
Totales	189	13,427	1.41%

Antes de la aprobación de la Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009:

NÚM. PERSONAS CON FIANZAS IMPUESTAS POR AÑO FISCAL								
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totales	41866	42872	40454	37266	31514	39116	27080	31495

NÚM. PERSONAS CON FIANZAS ADMITIDAS POR AÑO FISCAL								
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totales	15467	14981	13987	14369	13557	15147	11494	11733

NÚM. PERSONAS DETENIDAS								
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totales	26399	27891	26,467	22897	17957	23,969	15586	19762

% PERSONAS DETENIDAS								
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totales	63.06	65.06	65.42	61.44	56.98	61.28	57.56	62.75

Luego de la aprobación de la Ley Núm. 190 del 22 de diciembre de 2009:

NÚM. PERSONAS CON FIANZAS IMPUESTAS POR AÑO FISCAL								
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totales	29751	33413	28171	28152	28692	24226	21600	15321

NÚM. PERSONAS CON FIANZAS ADMITIDAS POR AÑO FISCAL								
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totales	11111	9531	8506	7638	8226	6719	5694	4343

NÚM. PERSONAS DETENIDAS								
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totales	18,640	23,882	19,665	20,514	20,466	17,507	15,906	10,978

% PERSONAS DETENIDAS								
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totales	62.65	71.48	69.81	72.87	71.33	72.27	73.64	71.65

813

⁸¹³ Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales, Directoría de Operaciones, Oficina de Estadísticas.

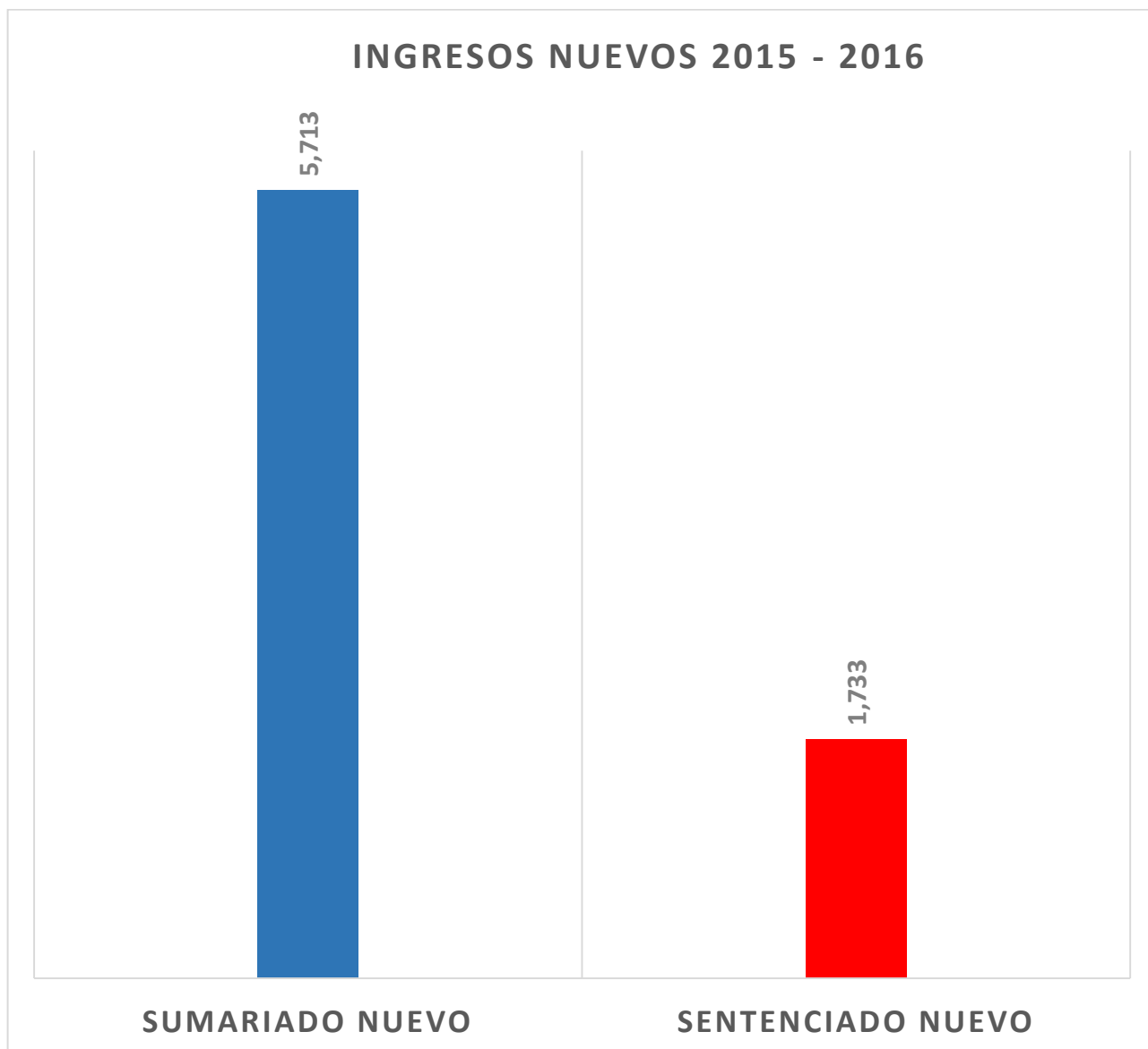
ANEXO: ESTADÍSTICAS SOBRE LOS ACUSADOS DETENIDOS O PUESTOS EN LIBERTAD EN EL TRIBUNAL FEDERAL PARA EL DISTRITO DE PUERTO RICO

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico ⁸¹⁴					
Años	Casos	Detenidos y nunca liberados		Liberados	
		Total	Por ciento	Total	Por ciento
2017	1,161	842	72.5	319	27.5
2016	1,420	973	68.5	447	31.5
2015	1,330	928	69.8	402	30.2
2014	1,498	1,067	71.2	431	28.8
2013	1,865	1,178	63.2	687	36.8
2012	1,732	1,342	77.5	390	22.5
2011	1,730	827	47.8	903	52.2
2010	1,251	821	65.6	430	34.4
2009	878	689	78.5	189	21.5
2008	1,303	855	65.6	448	34.4
2007	1,094	680	62.2	414	37.8
2006	801	589	73.5	212	26.5

⁸¹⁴ U.S. Courts, Caseload Statistics Data Tables:

<http://www.uscourts.gov/statistics-reports/caseload-statistics-data-tables?tn=H-14+&pn=All&t=71&m%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&y%5Bvalue%5D%5Byear%5D=>

ANEXO: INFORME ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES EN PUERTO RICO (2015 - 2016) ⁸¹⁵



Sumariado: *confinado recluido en una institución en virtud de orden judicial en espera de que se concluya el proceso criminal iniciado en su contra.*⁸¹⁶

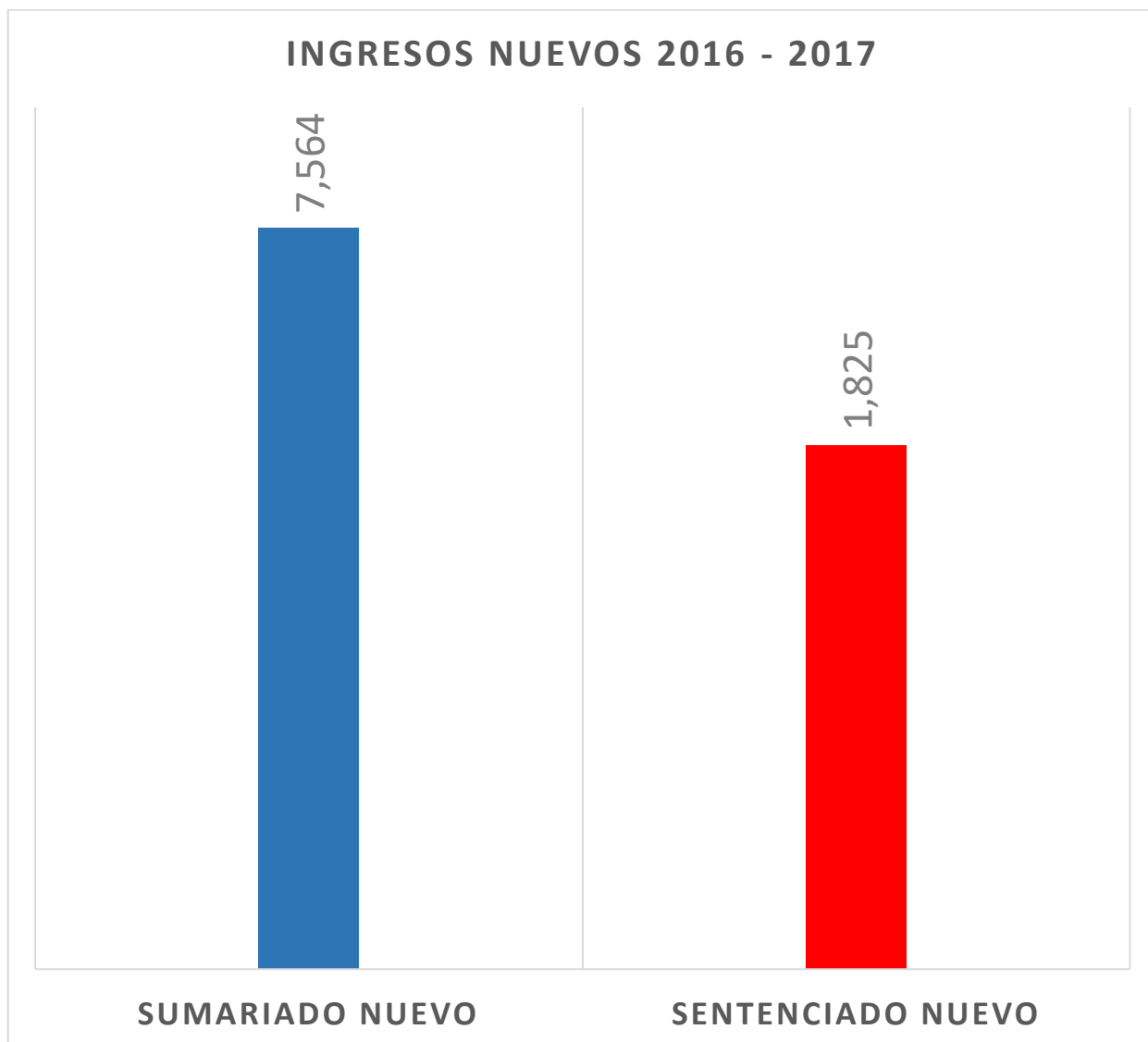
Sentenciado: *se refiere a un individuo que ha sido convicto de delito y sentenciado por un tribunal o que ha sido encarcelado por desacato civil.*⁸¹⁷

⁸¹⁵ Informe anual de ingresos y egresos en las instituciones correccionales en Puerto Rico, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina de Desarrollo Programático, 2015 – 2016.

⁸¹⁶ *Id.*

⁸¹⁷ *Id.*

ANEXO: INFORME ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS EN LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES EN PUERTO RICO (2016 - 2017) ⁸¹⁸



Sumariado: *confinado recluido en una institución en virtud de orden judicial en espera de que se concluya el proceso criminal iniciado en su contra.*⁸¹⁹

Sentenciado: *se refiere a un individuo que ha sido convicto de delito y sentenciado por un tribunal o que ha sido encarcelado por desacato civil.*⁸²⁰

⁸¹⁸ Informe anual de ingresos y egresos en las instituciones correccionales en Puerto Rico, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina de Desarrollo Programático, 2016 – 2017.

⁸¹⁹ *Id.*

⁸²⁰ *Id.*

